

TESIS DE DOCTORADO

**EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL
PATRIMONIO CULTURAL
SUBACUÁTICO. ESPECIAL
REFERENCIA AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL**

Rubén Miranda Gonçalves

ESCUELA DE DOCTORADO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2018



DECLARACIÓN DEL AUTOR DE LA TESIS

El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Especial referencia al ordenamiento jurídico español.

D. Rubén Miranda Gonçalves

Presento mi tesis, siguiendo el procedimiento adecuado al Reglamento, y declaro que:

- 1) *La tesis abarca los resultados de la elaboración de mi trabajo.*
- 2) *En su caso, en la tesis se hace referencia a las colaboraciones que tuvo este trabajo.*
- 3) *La tesis es la versión definitiva presentada para su defensa y coincide con la versión enviada en formato electrónico.*
- 4) *Confirmando que la tesis no incurre en ningún tipo de plagio de otros autores ni de trabajos presentados por mí para la obtención de otros títulos.*

En Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2018

Fdo. Rubén Miranda Gonçalves

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR / TUTOR DE LA TESIS

**El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Especial referencia al
ordenamiento jurídico español.**

D. Luis Míguez Macho

INFORMA:

*Que la presente tesis, corresponde con el trabajo realizado por D. **Rubén Miranda Gonçalves**, bajo mi dirección, y autorizo su presentación, considerando que reúne los requisitos exigidos en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC, y que como director de ésta no incurre en las causas de abstención establecidas en Ley 40/2015.*

En Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2018

Fdo. Luis Míguez Macho

A mi padre, que, lamentablemente, no ha podido ver el final de este arduo trabajo de investigación pero que seguro estaría orgulloso.

A mi madre, hermanas y sobrinos, quienes, de una forma totalmente desinteresada y comprensiva, han sabido apoyarme y darme fuerzas durante todos estos años de investigación y trabajo.

A mi novia, quien me ha apoyado y entendido y a la que espero compensar todo el tiempo dedicado en esta investigación.

A mis amigos y compañeros de viaje académico, quienes conocen el esfuerzo que conlleva un trabajo de investigación de esta magnitud. Gracias Fábio Veiga, Eduardo Amorim, João Proença, Rui Miguel, Gilberto Atencio, Delfín Martínez, Cristopher da Silva, Pablo Armero, Pepe Martínez y Cristian Carbajales.

A mi maestro, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, el Doctor Luis Míguez Macho, quien me ha transmitido sus conocimientos y asumió desinteresadamente la dirección de esta tesis de doctorado.

A todos los que faltan y que por razón de espacio no puedo reflejar en estos agradecimientos.



ÍNDICE

RESUMEN (ESPAÑOL):	17
RESUMO (PORTUGUÊS)	17
TABLA DE ABREVIATURAS	19
INTRODUCCIÓN.....	25
<u>I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL PATRIMONIO</u>	
<u>CULTURAL SUBACUÁTICO</u>	<u>31</u>
1. CONCEPTO DOCTRINAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO.....	31
2. BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO.....	36
<u>II. LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL</u>	
<u>PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO DE 2001.....</u>	<u>43</u>
1. INTRODUCCIÓN	44
2. NACIMIENTO Y CREACIÓN	53
3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVENCIÓN DE 2001.....	57
4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN LOS DISTINTOS ESPACIOS MARINOS SEGÚN LA CONVENCIÓN DE 2001	60
<i>A. La división jurídica del espacio marino.....</i>	<i>60</i>
<i>B. El patrimonio cultural subacuático situado en las aguas interiores, archipelágicas y mar territorial</i>	<i>65</i>
<i>C. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona Contigua.....</i>	<i>67</i>
<i>D. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental.....</i>	<i>69</i>
<i>E. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona de fondos marinos y oceánicos.....</i>	<i>72</i>
5. ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCIÓN DE 2001	74

6. NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO.....	76
---	----

III. DERECHO COMPARADO85

1. INTRODUCCIÓN.....	85
2. DERECHO CONTINENTAL EUROPEO	87
<i>A. Italia</i>	87
<i>B. Francia</i>	99
<i>C. Portugal</i>	105
3. COMMON LAW	122
<i>A. Reino Unido</i>	124
<i>B. Estados Unidos</i>	129
a) Introducción.....	129
b) Legislación aplicable sobre patrimonio cultural subacuático.....	131
1. RMS Titanic Maritime Memorial Act	132
2. Abandoned Shipwreck Act	133
3. National Marine Sanctuaries Act	134
4. Sunken Military Craft Act, de 2004.....	135
c) Conclusiones.....	136
4. LATINOAMÉRICA	137
<i>A. Colombia</i>	137
a) Preliminar	137
b) Regulación.....	140
c) Galeón San José.....	150
<i>B. Brasil</i>	162
a) Preliminar	162
b) Regulación.....	166
<i>C. Argentina</i>	171

IV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN ESPAÑA 175

1. ORÍGENES DE LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	175
2. LAS BASES CONSTITUCIONALES	179
A. <i>Marco sustantivo: artículo 46 CE</i>	181
B. <i>Dominio público: artículo 132.2 CE</i>	184
C. <i>Reparto competencial</i>	186
a) Parte general: articulación competencial entre Estado y Comunidades Autónomas	187
b) Parte especial: peculiaridades competenciales del patrimonio cultural subacuático	203
c) Competencias locales.....	211
3. LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	214
A. <i>Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español</i>	214
B. <i>El patrimonio cultural subacuático como régimen especial dentro del Patrimonio Histórico Español</i>	226
C. <i>Protección del patrimonio cultural subacuático: declaración del patrimonio cultural subacuático como Bien de Interés Cultural</i>	232
D. <i>Otra legislación: la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, de régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos</i>	242
4. LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA VIGENTE.....	244
A) Introducción.....	244
Comunidades Autónomas con costa	246
B) Especial referencia a Galicia y a la nueva Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia	246
C) Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	257
a) Preliminar	257

b)	Bienes declarados de Interés Cultural	260
c)	Bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias	265
d)	Régimen jurídico de protección	268
e)	Espacios Arqueológicos	273
f)	Medidas de difusión y fomento	277
g)	Protección de la legalidad y régimen sancionador	279
D)	Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria	283
a)	Preliminar	283
b)	Distribución competencial de la gestión y protección del Patrimonio Cultural Cántabro	286
c)	Bienes de interés cultural	290
d)	Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria	292
e)	Bienes Culturales Catalogados o de Interés Local	294
f)	Los restantes bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. El Inventario General	296
g)	Régimen de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria	297
h)	Régimen de protección de los Bienes de Interés Cultural	298
i)	Régimen del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	303
j)	Inventario Arqueológico Regional	317
k)	Medidas de fomento	319
l)	Régimen sancionador	320
E)	Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco	324
a)	Preliminar	324
b)	Arqueología vasca	327
c)	Régimen sancionador	331
F)	Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán	334
a)	Preliminar	334
b)	Reglas de protección	337
c)	Patrimonio arqueológico	340
G)	Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano	344
a)	Preliminar	344
b)	Normas generales de protección	348

c)	Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y régimen de protección de los bienes inventariados	349
d)	Bienes de Interés Cultural Valenciano	353
e)	Régimen de protección urbanístico valenciano	359
f)	Régimen de protección de los bienes muebles de interés cultural.....	366
g)	Los demás bienes del Inventario General.	367
h)	Patrimonio arqueológico	369
i)	Medidas de fomento del patrimonio cultural	375
j)	Régimen sancionador	377
H)	Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares	381
a)	Preliminar	381
b)	Bienes de interés cultural	383
c)	Régimen de protección del patrimonio arqueológico.....	386
I)	Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz	390
a)	Preliminar	390
b)	Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz	394
c)	Formas de conservación y restauración	397
d)	Patrimonio Arqueológico	399
e)	Tipos de actividades arqueológicas	409
f)	Autorización	412
g)	Proyectos Generales de Investigación	416
h)	Inspección del Patrimonio Histórico	418
i)	Régimen sancionador	419
J)	Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia....	423
a)	Preliminar	423
b)	Normas generales de protección del patrimonio cultural en la Región de Murcia	426
c)	Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia	427
d)	Bienes de Interés cultural	428
e)	Régimen especial de los conjuntos históricos, zonas arqueológicas y sitios históricos	431
f)	Régimen arqueológico	433
g)	Régimen sancionador	438

K) Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias	441
a) Preliminar	441
b) Patrimonio Cultural Canario	443
c) Régimen Arqueológico	445
Comunidades Autónomas sin costa	448
L) Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra	448
a) Preliminar	448
b) Protección cultural y distribución competencial	450
c) Clasificación de los bienes del Patrimonio Cultural de Navarra	452
d) Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra	455
e) Régimen de protección de los bienes que forman el patrimonio cultural navarro	455
f) Patrimonio Arqueológico	459
g) Fomento y divulgación del Patrimonio Cultural	465
h) Régimen sancionador navarro	467
M) Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.....	469
a) Preliminar	469
b) Bienes que integran el patrimonio cultural aragonés	471
c) Protección del patrimonio arqueológico aragonés	475
d) Régimen sancionador	479
N) Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja	483
a) Preliminar	483
b) Tipos de bienes protegidos y protección del patrimonio cultural subacuático	485
c) Régimen de protección general	490
d) Régimen de protección del patrimonio arqueológico	490
Ñ) Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León	495
a) Preliminar	495
b) Bienes de interés cultural	497
c) Patrimonio arqueológico	501
O) Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.	
Especial referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014, de 17 de julio	

sobre la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.....	504
P) Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	526
a) Preliminar	526
b) Bienes de interés cultural	528
c) Patrimonio arqueológico	530
Q) Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.....	534
a) Preliminar	534
b) Bienes de interés cultural	536
c) Patrimonio arqueológico	541

V. CASOS INTERNACIONALES..... 545

1. PRELIMINAR	545
2. CASOS DESTACADOS	546
A. <i>Nuestra Señora de Atocha</i>	546
B. <i>La “Juno” y la “Galga”</i>	549
C. <i>Caso “Odyssey” o fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”</i>	551
D. <i>“España vs San Vicente y las Granadinas”</i>	558
CONCLUSÕES.....	563
BIBLIOGRAFÍA.....	575



Resumen (español):

El patrimonio cultural subacuático es un tipo de patrimonio poco abordado en el área jurídica, por eso su protección representa un tema de acentuada novedad y, por tanto, de actualidad. Desde el punto de vista internacional, no hubo hasta el año 2001 un texto normativo volcado a proteger el patrimonio cultural subacuático. Es España todavía no existe legislación nacional que aborde de manera específica la tutela del patrimonio cultural subacuático, siendo protegido, por tanto, a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). Tal protección es hecha a través del patrimonio arqueológico. La presente tesis de doctorado se lleva a cabo basándose en un método hipotético deductivo, y se analiza la tutela jurídica del patrimonio cultural subacuático, desde el prisma del Derecho Administrativo español, trayendo a colación otros países para comparar el Derecho vigente en ellos.

Resumo (português)

O Patrimônio Cultural Subaquático é um tipo de patrimônio pouco abordado na área jurídica, por isso sua proteção jurídica representa um tema de acentuada novidade e, portanto, atualidade. Do ponto de vista internacional, não havia até o ano de 2001 texto normativo voltado a

proteger o patrimônio cultural subaquático. Na Espanha, não há ainda legislação nacional que aborde de maneira específica a tutela do patrimônio cultural subaquático, sendo ele protegido, no entanto, por meio da Lei 16, de 25 de junho de 1985, do Patrimônio Histórico Espanhol (LPHE). Tal proteção é feita de modo reflexo por meio da tutela do patrimônio arqueológico. A presente tese de doutoramento desenvolve-se, a partir do emprego do método hipotético-dedutivo, e nela analisa-se a tutela jurídica do patrimônio cultural subaquático, do prisma do Direito Administrativo espanhol, trazendo a colação outros países para comparar o Direito vigente neles.

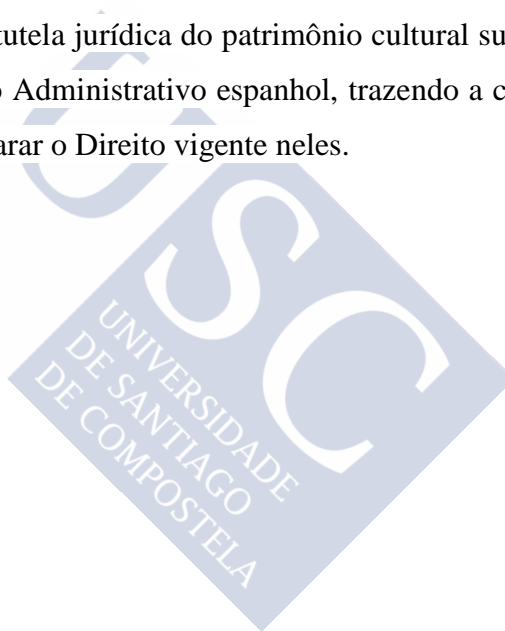
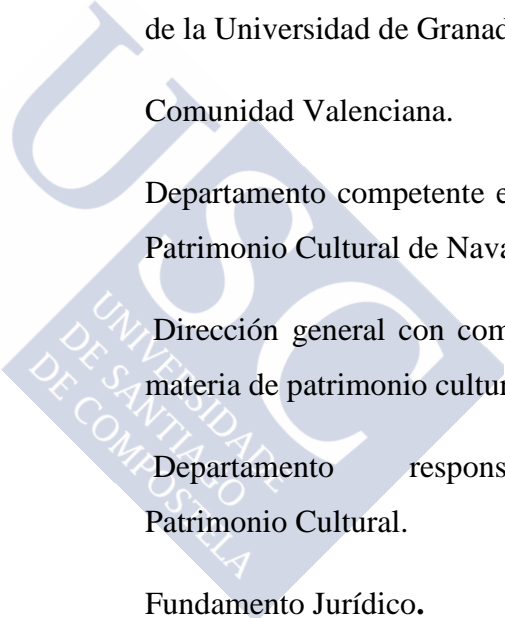


TABLA DE ABREVIATURAS

AAPP:	Administraciones Públicas.
AP:	Administración Pública.
ASA:	Abandoned Shipwreck Act de 1987.
BCG:	Bienes de Catalogación General.
BIC:	Bienes de Interés Cultural.
BOE:	Boletín Oficial del Estado.
BOJA:	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
CA:	Comunidad Autónoma.
CC:	Código Civil.
CCPC:	Consejería Competente en materia de Patrimonio Cultural.
CCPH:	Consejería Competente en materia de Patrimonio Histórico.
CGPHA:	Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
CE:	Constitución Española.
CNUDM:	Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar



Code:	Code du patrimoine.
Convención de 2001:	Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
CP:	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
CPAG:	Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.
CV:	Comunidad Valenciana.
DCPCN:	Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural de Navarra.
DGCMPC:	Dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural.
DRPC:	Departamento responsable del Patrimonio Cultural.
FJ:	Fundamento Jurídico.
ICOMOS:	Convención de 23 de noviembre 1972. Instrumento de 18 de marzo 1982. Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

IGBMPHE:	Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
IGPCV:	Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
INAPL:	Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
LEF:	Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
LFPCN:	Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra.
LO:	Ley Orgánica.
LPCA:	Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
LPCat:	Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán.
LPCC:	Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
LPCHALR:	Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

LPCPA:	Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
LPCV:	Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano.
LPCRM:	Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
LPHA:	Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
LPHE:	Ley de Patrimonio Histórico Español.
LPHCE:	Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
NEPAM/UNICAMP:	Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais de la Universidad Estadual de Campinas.
PC:	Plataforma Continental.
PCA:	Patrimonio Cultural Asturiano.
PCN:	Patrimonio Cultural Navarro.
PROAS:	Programa de Arqueología Subacuática.

RABIC:	Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
RBPCN:	Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra.
RM:	Región de Murcia.
RGBICC:	Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.
RDL	Real Decreto Ley.
STC:	Sentencia del Tribunal Constitucional.
STS:	Sentencia del Tribunal Supremo.
STSJ:	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
TC:	Tribunal Constitucional.
TRLCSP:	Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
TS:	Tribunal Supremo.
TSJ:	Tribunal Superior de Justicia.
UE:	Unión Europea.

UNR: Universidad Nacional de Rosario.

ZEE: Zona Económica Exclusiva.



INTRODUCCIÓN

La protección del patrimonio cultural subacuático es una de las mayores novedades en la actualidad. A nivel internacional hasta el año 2001 no existía ninguna norma que lo regulase. A su vez, a nivel nacional tampoco existe ninguna ley que lo proteja de manera específica, sino que nos tenemos que remitir a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), que lo incluye dentro del patrimonio arqueológico. Tanto la ley nacional como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, ratificada por España en el 2009, son, sin duda alguna, las dos normas más importantes con las que contamos en nuestro país para brindar protección a tan preciado patrimonio.

Creemos que al ser algo de reciente novedad es fundamental hacer un estudio sobre esta materia, ya que han sido pocos los que se han dedicado a analizarlo y, por ello, a lo largo de esta tesis de doctorado, estructurada en cinco capítulos, trataremos los aspectos más relevantes sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional.

La metodología que se ha seguido para la realización de esta tesis de doctorado se centra en el método hipotético deductivo, buscando construir o reafirmar hipótesis sobre la protección del patrimonio cultural subacuático en España. Para conseguirlo, además del examen de aspectos de carácter histórico, se ha centrado parte de la

investigación en el estudio de textos legales como, por ejemplo, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, la Ley de Patrimonio Histórico Español y las diferentes leyes de patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas españolas, entre otros.

No obstante, esta tesis se ha completado con una amplia bibliografía, tanto nacional como internacional, y el estudio de casos jurisprudenciales muy importantes en materia de patrimonio cultural subacuático para España. Con todo, consideramos que, para mejorar el derecho nacional, éste debe ser complementado con el derecho de otros países, por eso nos pareció oportuno hacer una referencia al derecho de otros Estados. Por proximidad al Estado español, decidimos investigar cómo se protege el patrimonio cultural subacuático en Portugal, Italia y Francia; para poder comparar y conocer cómo es esta protección en países de *commom law*, resultaba obligatorio investigar el derecho anglosajón, por eso recurrimos al Reino Unido y a los Estados Unidos.

En esta línea instrumental, y debido al elevado número de casos internacionales en los que se ha visto involucrado el Estado español, y a la influencia histórica española en Latinoamérica, nos ha parecido pertinente hacer mención al derecho de países latinoamericanos, entre los que se escogieron Colombia en base al conflicto que todavía tiene pendiente de resolver con España; Argentina, por ser uno de los países latinoamericanos pioneros en aprobar un Programa de Arqueología Subacuática en Latinoamérica y

Brasil, por la vinculación que ha tenido y tiene con Portugal y, por ende, con la Península Ibérica.

Dado que no existe un único concepto de patrimonio cultural subacuático, es preciso hacer un seguimiento sobre el mismo en la doctrina más importante de nuestro país y compararlo con el concepto que nos facilita la propia Convención de 2001, en el que se van a detallar cuáles son los bienes que integran este tipo de patrimonio. A esta cuestión se le ha querido dedicar el primer capítulo de la presente tesis de doctorado.

En el segundo capítulo se analizará la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 para entender que era necesaria la aprobación de un texto internacional que solventase los problemas existentes en los Estados. Éstos carecían de normativa específica y lo único que se conseguía era que la protección del patrimonio cultural subacuático no se hiciera correctamente. Con ello, empresas *cazatesoros* aprovechaban la laguna jurídica existente y se hacían con este patrimonio y lo comercializaban en el mercado negro.

En este segundo capítulo se hará un breve recorrido para saber cómo y cuándo nace esta Convención y cuáles son sus objetivos y principios generales. Asimismo, teniendo en cuenta que es la norma pionera que intenta resolver la protección jurídica del patrimonio cultural subacuático a nivel internacional, se dedicarán unas páginas a explicar la protección de este tipo de patrimonio en los distintos

espacios marinos, cuándo entra en vigor y cuántos Estados son parte de la misma.

El tercer capítulo se ha querido dedicarlo al estudio del Derecho comparado, seleccionando países del continente europeo próximos a España con normativa en materia de patrimonio cultural subacuático como son Italia, Francia, Portugal y Reino Unido y también países iberoamericanos con los que hacer una comparación. En este sentido, se ha querido investigar sobre la protección del patrimonio cultural subacuático en Colombia, una vez que España se encuentra inmersa en un proceso judicial con este país por los restos del Galeón “San José”, Brasil, por la política de dejadez administrativa y gubernamental en la protección de este patrimonio y también con Argentina, pues resulta interesante que, a diferencia de la gran mayoría de países, Argentina tiene una Ley a nivel nacional que protege el patrimonio arqueológico y la arqueología subacuática argentina no está centrada solamente en los fondos marinos, realizándose proyectos también en ríos y lagos en el interior del territorio argentino.

Dejando a un lado el ámbito internacional, y ya inmersos en el capítulo cuarto de nuestra tesis de doctorado, se analizará la protección del patrimonio cultural en nuestro país, España, empezando por los orígenes de la regulación del patrimonio cultural subacuático en España, pues, aunque nunca existió ninguna norma que lo regulase expresamente, sí han existido normas que de manera indirecta hicieron algún tipo de mención.

Además, se examinarán las bases constitucionales relativas al régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático, cobrando especial relevancia la distribución competencial, dedicándose los apartados tercero y cuarto al análisis de la regulación del patrimonio cultural subacuático en el ámbito estatal y el estudio exhaustivo de la legislación en materia de patrimonio cultural que han aprobado las Comunidades Autónomas en España.

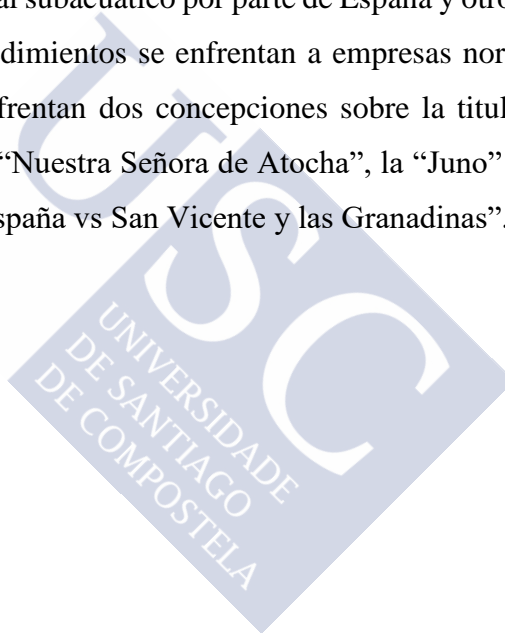
No podemos olvidarnos que estamos ante un tipo de patrimonio que, diferenciado de todos los demás, como por ejemplo el artístico o el monumental, no se encuentra en tierra, sino en el agua y, por tanto, merece un tipo de protección diferente. Nos encontramos ante un patrimonio especial con un régimen especial.

El hecho de que se encuentre bajo el agua y, casi siempre, en el mar nos obliga a determinar quién es el titular de la competencia sobre el mismo. Las opiniones doctrinales son dispares y están divididas entre los que consideran que sólo el Estado tiene competencia sobre el mar territorial y aquellos que consideran que son las Comunidades Autónomas las competentes.

Para poner solución a ese problema se analizarán dos sentencias clave en la materia, STC 17/1991, de 31 de enero, y STC 122/2014, de 17 de julio, en las que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre quién es el titular de la competencia sobre el mar territorial.

Analizada la cuestión competencial, nos centraremos en el contenido de la LPHE y de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre el régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.

El último capítulo está dedicado a los diferentes y más importantes procedimientos internacionales de recuperación de patrimonio cultural subacuático por parte de España y otros Estados. La mayoría de procedimientos se enfrentan a empresas norteamericanas, puesto que se enfrentan dos concepciones sobre la titularidad de los bienes como son “Nuestra Señora de Atocha”, la “Juno” y la “Galga”, “Oddyssey” y “España vs San Vicente y las Granadinas”.



CAPÍTULO I

I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

1. Concepto doctrinal de patrimonio cultural subacuático

En España no existe ninguna ley que, como tal, defina lo que debemos entender como patrimonio cultural subacuático. Tenemos que recurrir a otros textos legales que, de manera indirecta, elaboran un concepto del mismo. Para ello debe analizarse la LPHE, la cual, en el apartado segundo de su artículo 1, hace referencia al conjunto de inmuebles y objetos muebles que lo integran. Así, según este artículo, “integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico y antropológico”. Aun así, puede resultar llamativo que en toda esa relación de elementos no figure el patrimonio cultural subacuático. En este sentido, es necesario bucear un poco más en la ley hasta llegar al artículo 40 en su apartado primero, cuando, en relación con lo dispuesto en el artículo 1, nos indica que

“forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”.

Aunque ya se ha avanzado un poco más en el concepto, éste sigue resultando complicado. La doctrina tampoco se ha puesto de acuerdo para proporcionar un concepto unívoco.

Entre los expertos sobre la materia, destacan los conceptos sobre el patrimonio cultural subacuático que nos aporta la doctrina. Por ejemplo, AZNAR GÓMEZ nos indica que el patrimonio cultural subacuático “acoge en su seno dos grupos de restos de trazas humanas sumergidos total o parcialmente, y tanto actual como pretéritamente: los lugares sumergidos y los pecios”¹. Concepto que, a nuestro juicio no está completo, porque consideramos que no sólo los lugares sumergidos y los pecios deben considerarse como patrimonio cultural subacuático, sino cualquier objeto que reúna un valor cultural merecedor de tal consideración y que, por razones obvias, se encuentre sumergido.

¹ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 221.

Para AZNAR GÓMEZ, el concepto de patrimonio cultural “sea éste subacuático o no, no es un concepto jurídico unívoco toda vez que tanto distintas legislaciones nacionales como diferentes instrumentos jurídicos internacionales hacen mención a los bienes culturales atribuyéndoles un sentido distinto. Además, no todos los bienes de una misma cultura o civilización son considerados bienes culturales desde un punto de vista jurídico. La noción jurídica de bien cultural proviene, dice éste, de un ámbito extra-jurídico que le otorga la consideración de bien susceptible de ser tutelado jurídicamente por unas consideraciones, ellas mismas, extra-jurídicas”². El mismo autor cree que son dos las consideraciones conceptuales que deben ser evaluadas para reconocer en el bien un interés digno de tutela jurídica: por un lado, el criterio temporal, que, como bien apunta este jurista, no debe identificarse con la antigüedad, y por otro lado estaría la importancia, el valor intrínseco del objeto, un interés cultural, en suma, que recoja el aspecto artístico, histórico, científico, religioso, etnográfico que un bien requiera para entrar a formar parte de la familia de “bienes culturales” dignos de protección jurídica³.

En el mismo sentido, MARTÍN BUENO opina que “la arqueología submarina se ocuparía de la investigación de los restos materiales del pasado, estructuras terrestres sumergidas por causas

² M. J. AZNAR GÓMEZ, “La definición del patrimonio cultural subacuático en la Convención UNESCO de 2001”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 67, agosto 2008, p. 102.

³ M. J. AZNAR GÓMEZ, “La definición del patrimonio cultural subacuático en la Convención UNESCO de 2001”, cit., p. 102.

diversas, embarcaciones de todo tipo, objetos materiales aislados arrojados o perdidos en los fondos de mares, ríos o lagos, estructuras de ingeniería, obras portuarias, depósitos rituales en pozos sagrados como los cenotes, zonas de fondeo, astilleros y tantos otros que constituyen la base de estudio principal, junto con todos los elementos anejos que permiten su comprensión total. Todo ello y su contexto, el medio en el que reposan y las modificaciones y alteraciones del mismo, etc. Constituye lo que en términos modernos entendemos como Patrimonio Cultural Sumergido”⁴. Como vemos, este concepto ya abarca muchos más elementos que los que comentaba el autor anterior, y parece estar más completo.

Desde el Derecho administrativo también se han aportado contribuciones a este concepto. BARCELONA LLOP opta por denominar al patrimonio cultural subacuático como “arqueología submarina”⁵, coincidiendo en el contenido que hasta ahora hemos señalado. En la misma línea, ÁLVAREZ GONZALEZ, refiriéndose al ámbito español, señala que “el patrimonio cultural subacuático español puede definirse como aquel que, reuniendo las características del patrimonio histórico arqueológico previstas en la legislación vigente, se encuentra bien en las aguas interiores y continentales españolas bien en las aguas marinas sobre las que España ejerce soberanía o jurisdicción,

⁴ M. MARTÍN BUENO, “Patrimonio Cultural Sumergido: Investigar y conservar para el futuro”, *Monte Buciero*, nº. 9, 2003, p. 28.

⁵ J. BARCELONA LLOP, “Notas sobre el régimen internacional de las intervenciones arqueológicas submarinas”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, nº. 6, 2002, p. 47.

debiendo extenderse tal consideración al patrimonio de iguales características sobre el que nuestro país pueda ejercer alguna acción reivindicatoria o invocar algún derecho en virtud de las leyes nacionales y del Derecho Internacional”⁶.

Las dificultades que ha tenido la doctrina para encontrar un concepto concreto también las tuvo la UNESCO cuando en el año 2001 aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, norma internacional que vincula a los Estados que la han ratificado y única que regula por primera vez la materia. Hasta la fecha, carecíamos de normativa internacional (e incluso nacional en relación con España) que protegiese el patrimonio cultural subacuático, tal y como veremos más adelante. Aunque la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM) protege a los objetos de carácter arqueológico y/o histórico, nada dice del carácter cultural.

⁶ M. P. CASTRO LÓPEZ, “Reseña Bibliográfica: E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, La protección jurídica del Patrimonio Cultural Subacuático en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012”, *Revista sobre Patrimonio Cultural: Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial*, nº. 2, 2013, pp. 189 -197.

2. Bienes que integran el patrimonio cultural subacuático

Analizadas las diferentes posturas doctrinales, podría pensarse que cualquier bien mueble o inmueble sumergido bajo el agua tenga la categoría de patrimonio cultural subacuático. En realidad, la cuestión no es tan sencilla y no todos los bienes sumergidos bajo el agua son considerados como patrimonio cultural subacuático.

La Convención de 2001, teniendo en cuenta todas las dificultades que llevaron a buscar un concepto de patrimonio cultural subacuático o sumergido, se decantó por establecer en su artículo primero lo siguiente:

“1. (a) Por patrimonio cultural subacuático se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;

(ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y

(iii) los objetos de carácter prehistórico.

2. (b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar.

(c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso”.

Conviene desgranar este artículo para entender bien que es lo que nos está diciendo la UNESCO. En primer lugar, para que un bien sea considerado como patrimonio cultural subacuático debe ser uno de los que figuran en la lista que recoge el propio artículo. Tanto en el apartado a) como en el apartado b) no hay dudas. La Convención es clara cuando cita bienes concretos. En relación con el caso del apartado (iii), y en especial, de los objetos prehistóricos, el profesor NOVAK apunta que “se está haciendo alusión a aquellos objetos existentes desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, hace más de 5000 años”⁷.

En segundo lugar, para que un bien sea considerado patrimonio cultural subacuático debe permanecer sumergido como mínimo 100 años. Este límite temporal tampoco plantea dudas. Cualquier bien que no reúna como mínimo ese criterio quedaría descartado automáticamente para la Convención como patrimonio cultural subacuático.

Por último, dicho objeto puede haber permanecido sumergido de manera total o parcial y de forma periódica o continua. La

⁷ F. NOVAK, “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención de la UNESCO de 2001”, *Organization of American States*, p. 398, (<http://www.oas.org/dil/esp/13%20-%20novak.391-424.pdf>, Consultado el día 22 de marzo de 2016).

Convención hace este matiz porque un bien puede encontrarse sumergido en su totalidad o de forma parcial, quedando parte de él descubierta. También puede darse el caso que el objeto se encuentre sumergido en su totalidad desde que se produjo el hundimiento o bien que ese mismo objeto esté hundido de forma parcial, es decir, quedando descubierto en alguna ocasión y cubierto en otras, de ahí que se hable de forma parcial y periódica o continua.

En relación con el matiz temporal, coincidimos con la opinión de la profesora ÁLVAREZ GONZÁLEZ cuando señala que “si partimos exclusivamente de la definición de patrimonio cultural subacuático recogida en la Convención de la UNESCO, [...], implicaría dejar sin protección numerosos elementos históricos y culturales que no cumplen dicha antigüedad. Es el caso, por ejemplo, de los pecios hundidos de la guerra civil española, [...], o los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial [...]”⁸, objetos que aunque ahora no cumplen los requisitos de los 100 años, si los cumplirán en un futuro y reunirían todos los requisitos necesarios para encuadrarlos como patrimonio cultural subacuático. En este sentido, creemos que el concepto no está bien definido. Debería matizarse y buscarse solución a esta problemática.

Asimismo, la Convención de 2001 optó por la cifra de los 100 años con base en las diferentes convenciones internacionales que hacían

⁸ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 39.

referencia a ciertos aspectos del patrimonio cultural. Como apunta el profesor AZNAR GÓMEZ, “el análisis de los textos internacionales muestra asimismo una preferencia por el límite de los 100 años cuando datan temporalmente la antigüedad de un objeto digno de tutela jurídica. Así, además de la Resolución 848 del Consejo de Europa [...], la *European Convention on offences relating to Cultural Property* de 1985, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1979 [...], hacen suyo el criterio temporal de los 100 años”⁹.

En relación con la sumersión total o parcial o de manera periódica o continua, AZNAR GÓMEZ señala que ese matiz era necesario “para cubrir supuestos que, en otro caso, perdería la protección ofrecida por la Convención: así, en 2041, cuando el *USS Arizona*, hundido en el ataque japonés a Pearl Harbour, lleve 100 años bajo el agua “parcialmente” podría llegar a formar parte del patrimonio cultural subacuático. De igual modo el *Amsterdam*, navío de la Compañía de Indias orientales holandesa [...] por el hecho de quedar en la superficie periódicamente (durante la bajamar) no pierde su condición de patrimonio cultural subacuático)”¹⁰.

⁹ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., pp. 224-225.

¹⁰ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., pp. 231-232.

Por último, tal y como apunta la profesora ÁLVAREZ GONZÁLEZ, debemos destacar que el artículo 1 de la Convención de 2001, en su apartado segundo, pasa a regular un concepto negativo del patrimonio cultural subacuático y no incluye como tal a los “cables y tuberías tendidos en el fondo del mar” y “las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso”¹¹. A nuestro juicio, y coincidiendo con lo que apunta el profesor AZNAR GÓMEZ, esto es un error. No se estaría protegiendo, por ejemplo, algunas artes de pesca sumergidas que siguen usándose en la actualidad en la Polinesia sobre estructuras usadas desde tiempo inmemorial y que son antiquísimas, superando con creces los 100 años sumergidas de manera continua¹².

¹¹ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, cit., pp. 36 y ss.

¹² M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., pp. 233-234.

En el momento de la aprobación de la Convención de 2001, países como Italia, Gran Bretaña, Grecia o incluso Estados Unidos intentaron convencer de la importancia que tendría que en la definición se incluyese que los bienes deberían tener una *importancia significativa* o, como bien como apunta AZNAR GÓMEZ, que esos bienes fuesen significativos para la historia, estéticamente importantes o de universal importancia¹³.

No se tuvieron en cuenta esas expresiones, tal y como señala AZNAR GÓMEZ, “porque la arqueología no podía de modo taxativo decir unánimemente qué era importante (y por lo tanto digno de protección) y qué no lo era; además, y en segundo lugar, para poder evacuar dicho juicio se requería, primero, proteger todo el patrimonio cultural subacuático y, luego, proceder a la evaluación”¹⁴.

La UNESCO, al fijar este concepto en el artículo 1 de la Convención de 2001, tuvo en consideración lo que establecían diversos textos internacionales que en su momento hicieron propuestas para fijar un concepto sobre patrimonio cultural subacuático y que nunca llegaron a consolidarse. Así, la propuesta por la *International Law Association* en su Proyecto de Convención de 1994¹⁵ o incluso la definición que

¹³ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 226.

¹⁴ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 227.

¹⁵ F. NOVAK, “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención de la UNESCO de 2001”, *Organization of American States*, p. 397, (<http://www.oas.org/dil/esp/13%20-%20novak.391-424.pdf>, Consultado el día 22 de marzo de 2016).

aparecía en el Proyecto del Consejo de Europa de 1985, como señala FORREST¹⁶.

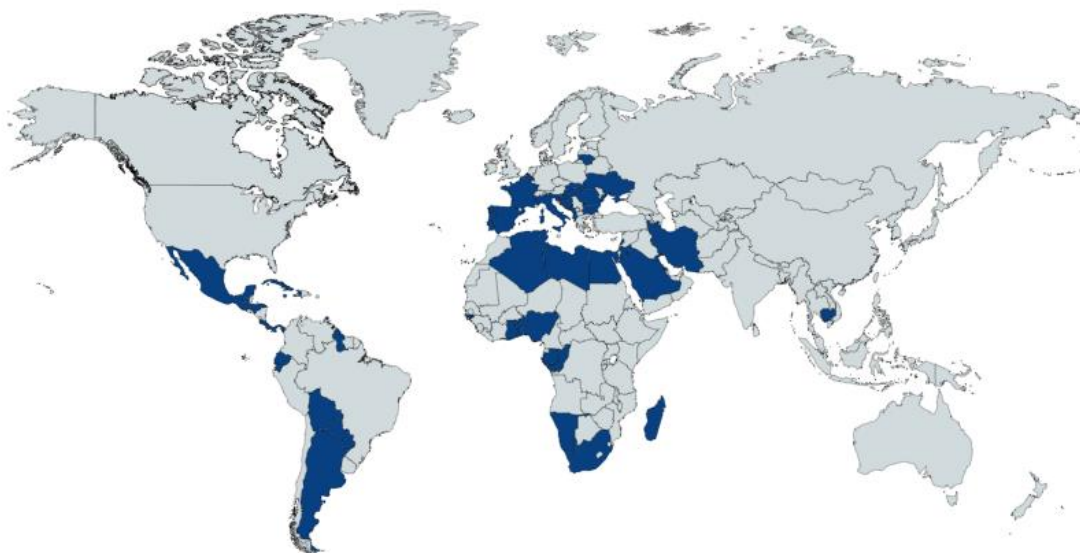
En conclusión, podemos destacar que la norma que fija el concepto es la Convención de 2001 y que por patrimonio cultural subacuático debemos entender todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

¹⁶ C. FORREST, “A New International Regime for the Protection of Underwater Cultural Heritage”, *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 51, 2002, p. 523.

CAPÍTULO II

II. LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO DE 2001

TABLA: Países firmantes de la Convención.



Fuente: Elaboración propia a partir de los países que actualmente han ratificado o se han adherido a la Convención. Actualizado a 29 de agosto de 2018.

1. Introducción

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París el 3 de noviembre de 2001, reconoce la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y un elemento de gran importancia en la historia de los pueblos y naciones a través de Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001¹⁷. Se trata de la primera norma internacional que protege de forma completa y unitaria el patrimonio

¹⁷ M. R. LEÑERO BOHÓRQUEZ, “El patrimonio cultural subacuático de la gestión en espacios marítimos bajo jurisdicción española”, *Estudios jurídicos sobre el litoral*, NÚÑEZ LOZANO M, D, C. (Dir.), Tirant Lo Blanch, 2016, Valencia, p. 16; J. RODRIGO DE LARRUCEA, “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, n.º. 6964, Sección Tribuna, 10 de junio de 2008, año XXIX, pp. 1-12; M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 189-197; C. ALONSO VILLALOBOS, “Una nueva Convención de la Unesco para la protección del patrimonio cultural subacuático”, *Arqueología subacuática. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, n.º. 38, pp. 116-129; E. PORTELA VÁZQUEZ, “La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, (octubre 2011), vol. 3, n.º. 2, pp. 317-337; X. NIETO PRIETO, “La Convención 2001 de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural subacuático y el supuesto hallazgo en Haití de la nao Santa María de Cristóbal Colón”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, n.º. 88, pp. 24-25; R. UREÑA ÁLVAREZ, “La protección del patrimonio cultural en tiempo de guerra y de paz”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, 2004, n.º. 14, pp. 245-260; A. MARTÍN LÓPEZ, “Defensa de las naves de Estado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Las definiciones históricas de buque de guerra”, *Saldvie, Estudios de prehistoria y arqueología*, n.º. 6, 2006, pp. 271-287; R. MIRANDA GONÇALVES, “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001”, *Derecho Público Iberoamericano*, n.º. 9, octubre de 2016, pp. 81-96.

cultural subacuático, aunque ya existían, con anterioridad, un conjunto de reglas y principios básicos generales relativos a la protección cultural en general, elaborados por la UNESCO, el Consejo de Europa o, de forma genérica, por el Derecho Internacional del Mar.

Actualmente son 60 los Estados que la han ratificado y en los que ha entrado en vigor. La Convención de 2001 está compuesta por 35 artículos y un anexo de 36 de normas. Entre sus objetivos se encuentran garantizar y proteger el patrimonio subacuático, colaborando entre los diferentes Estados, en beneficio de la humanidad¹⁸.

La Convención define el patrimonio cultural como “los rastros de existencia humana que tengan un carácter, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años”¹⁹.

De acuerdo con PORTELA VÁZQUEZ “la intervención del hombre, la tipología de los vestigios, el medio en el que se encuentran y el espacio temporal son los atributos elegidos por la UNESCO para definir el concepto de patrimonio cultural subacuático.

¹⁸ R. MIRANDA GONÇALVES, “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001”, *Derecho Público Iberoamericano*, n°. 9, octubre de 2016, pp. 81-96.

¹⁹ Art.1 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001.

Su elección procede de la exclusión de otras características, como la importan para la arqueología o el interés estético, cuya utilización sería más compleja y controvertida en la práctica”²⁰.

Las formas de protección tendrán que basarse de forma prioritaria en un acceso no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático *in situ* y siempre con fines de observación o documentación²¹. Esta protección viene dada por un régimen jurídico que distingue los derechos y obligaciones de los Estados sobre las diferentes zonas marinas (aguas interiores, aguas archipelágicas, mar territorial, en adelante MT, zona contigua, zona económica exclusiva, en adelante ZEE, plataforma continental, en adelante PC, y la Zona, los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional²²), en atención a la posición jurídica que éstos tengan sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, posición que deriva del hecho de ser Estado ribereño, Estado de pabellón, Estado de hallazgo o Estado interesado²³.

²⁰ E. PORTELA VÁZQUEZ, “La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, (octubre 2011), vol. 3, nº. 2, pp. 317-337.

²¹ Art. 2.10 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001.

²² Art.1.5 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001.

²³ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, cit., p. 85.

Ninguna actividad de las que se enumeran en las definiciones o a lo largo del texto que abarcan el patrimonio cultural subacuático está sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, salvo que lo autoricen las autoridades competentes, se realice conforme a esta convención o se asegure que toda operación de recuperación de patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección de este²⁴.

Está previsto en el contenido de la Convención que las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se realicen a través de técnicas y métodos de exploración no destructivos²⁵.

En el hipotético caso en el que fuese necesario realizar alguna exploración o estudio científico, o incluso la protección definitiva del patrimonio, debe hacerse de la forma menos dañina posible y contribuir a su preservación para evitar que se perturben de forma innecesaria los restos o lugares²⁶. Por último, para llevar a cabo una verdadera preservación y cumplimiento de este mandato y propósito, se prohíbe la explotación comercial del patrimonio cultural subacuático que tenga por finalidad la realización de transacciones, especulación o dispersión de forma irremediable.

²⁴ Art. 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001.

²⁵ R. MIRANDA GONÇALVES, *La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001*, cit., p.85.

²⁶ R. MIRANDA GONÇALVES, *La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001*, cit., p 86.

Como ya se indicó con anterioridad, cada Estado tendría una serie de derechos dependiendo de la zona territorial de que se tratase. En principio, la protección sobre las zonas consideradas como aguas interiores o archipelágicas no tiene mayor incidencia²⁷, pues son zonas en las que estos derechos están limitados solamente por los que tiene el Estado del pabellón sobre sus buques y aeronaves²⁸.

En la zona contigua, la falta de claridad en lo que se refiere a los derechos de los Estados puede generar diversas interpretaciones que provocan, según los autores, que en esta zona el Estado ribereño puede disponer de la potestad de regular y autorizar estas actividades, aunque hay excepciones²⁹.

²⁷ E. PORTELA VÁZQUEZ, *La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales*, cit., p. 321.

²⁸ Art. 1.8 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001:

“Por “buques y aeronaves de Estado” se entiende los buques de guerra y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que, en el momento de su hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio público no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la definición de patrimonio cultural subacuático”.

²⁹ Art. 8 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 303 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas”.

Existen numerosas interpretaciones sobre cuáles son los derechos que afectan a tanto a la ZEE como a la PC. En la zona³⁰, que es el área que va más allá de la jurisdicción de los Estados, la equiparación de derechos elimina fricciones, aunque no de forma absoluta. Los Estados se ven obligados a proteger conjuntamente el patrimonio, al ser considerado como perteneciente a toda la Humanidad. Los inconvenientes se producen por la indeterminación de los privilegios que poseen Estados con vínculos verificables sobre los restos encontrados³¹.

La cooperación entre los Estados como medida de protección de los bienes es una de las grandes recomendaciones y finalidades de esta Convención³². La Convención aclara la responsabilidad de los Estados y les obliga a proteger su ZEE y la PC. Cada Estado parte debe exigir que cuando uno de sus nacionales o buques descubra patrimonio cultural, o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, informe al Estado que tenga competencia en la zona. Además, se les impone un sistema de colaboración de obligado cumplimiento basado en la cooperación y el intercambio de información.

³⁰ Entiéndase por Zona los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

³¹ E. PORTELA VÁZQUEZ, *La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales*, cit., p. 322.

³² E. PORTELA VÁZQUEZ, *La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales*, cit., p. 325.

En el espacio marítimo en el que los Estados disponen de soberanía y exclusividad, la cooperación se limita a los casos en los que se localizan buques y navíos con bandera de otro Estado. Al Estado ribereño se le da la opción de informar a dicho Estado o al que posea un vínculo histórico, cultural o arqueológico con el vestigio, acerca del descubrimiento. La mayor crítica en este sentido es la falta de comunicación en el caso de que el hallazgo lo hiciera un tercer Estado que no es ni el ribereño ni el de que podría tener lazos históricos con el patrimonio subacuático³³. Esta crítica es compartida por autores como PORTELA VÁZQUEZ, puesto que puede ser que en las primeras averiguaciones sobre el pecio no sea posible determinar un posible Estado sucesor de los derechos debido a que diferentes Estados se consideran sucesores de ese Estado inicial o que el Estado del cual proviene el buque y los restos sean difíciles de clasificar³⁴.

En el resto de las zonas, a excepción de la Zona, la Convención atribuye la protección del patrimonio de forma conjunta y coordinada, como “Estado Coordinador”, al Estado ribereño atribuyéndosele, aunque no de forma plena, la figura de coordinador que conlleva una serie de privilegios sobre la protección del patrimonio. Entre ellos se encuentran la potestad de prohibir o autorizar cualquier actividad cuyo

³³ E. PORTELA VÁZQUEZ, *La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales*, cit., p. 325.

³⁴ M. ORTÍZ SÁNCHEZ y M. A. ALBERT MUÑOZ, “La protección del patrimonio arqueológico subacuático, competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Caso Odyssey”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 79, pp. 157-170.

objetivo sea el patrimonio subacuático y que se encuentre en su ZEE y PC, puesto que supone una intromisión en sus derechos como Estado, es decir, no se pueden entrometer en una zona que está amparada por su soberanía o jurisdicción de acuerdo con las normas de Derecho Internacional.

En la Zona, los Estados Partes que hayan mostrado un interés³⁵ serán invitados, en este caso por el Director General de la UNESCO, a formar parte del sistema de consultas y cooperación del que surgirá el “Estado Coordinador”.

Entre las competencias del “Estado Coordinador” se encuentra la puesta en práctica de las medidas de protección, expedir las autorizaciones necesarias en referencia a las medidas, desarrollar toda la investigación preliminar y transmitir sin demora los resultados al Director General. Todas estas medidas y potestades se deben realizar poniendo especial interés en los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio que se trate.

La Convención carece de una regulación positiva completa pues no se establecen los tiempos precisos para el desarrollo de las acciones previstas. Tampoco se menciona el plazo del que disponen los Estados

³⁵ Dicho interés consiste de acuerdo al art. 11.4 en una declaración deberá fundamentada en un vínculo verificable con ese patrimonio cultural subacuático, habida cuenta en particular de los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico.

parte para notificar su interés por un vestigio encontrado, la duración del tiempo de consultas, ni el plazo durante el que el Estado ribereño puede realizar acciones sobre un vestigio localizado en la ZEE sin necesidad de consultar con el resto de Estados. Es decir, cualquiera de ellas podría prolongarse de forma indefinida, pudiendo inducir a enfrentamientos o daños en los vestigios objeto de protección³⁶.

La Convención no se pronuncia acerca del modo de optar por una u otra iniciativa ni qué ocurrirá en caso de discrepancias entre las expuestas por los Estados. No queda claro cómo debería procederse si por razones científicas o de conservación del vestigio, la opción de extracción fuese la más idónea o en quién recaería la responsabilidad de custodiar los bienes y el derecho a disfrutar de ellos.

La única referencia que contempla acerca de la resolución de conflictos es que debe llevarse a cabo de forma pacífica, mediante una negociación de buena fe o cualquier otro medio. En el caso de no resolverse en un plazo razonable, los Estados partes pueden someterse de común acuerdo a la mediación de la UNESCO. En el caso de que no se sometan se aplicará *mutatis mutandis* la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En la otra cara de la moneda, la comunicación y el intercambio de la información sobre las que se basa el sistema también presentan

³⁶ E. PORTELA VÁZQUEZ, *La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales*, cit., p. 326.

complicaciones. Tan relevante como que se produzca la transferencia de datos es decidir con qué procedimientos se van a transmitir y cuál será el modo más eficaz de garantizar su seguridad.

2. Nacimiento y creación

Antes de entrar de lleno en el análisis de la Convención de 2001, parece necesario explicar cómo se llegó hasta ella y el porqué de su nacimiento y creación.

Como se ha señalado anteriormente, no había ninguna norma en el ámbito internacional que se ocupase de esta materia, aunque fueron varias las ocasiones en que se intentó hacerlo, sin que se llegase a formalizar nada en concreto. Sí existían algunas recomendaciones pero, como bien apunta CASTILLO BELINCHÓN, “se carecía de un instrumento jurídico internacional que regulara esta materia”³⁷.

Sin duda alguna, el patrimonio cultural subacuático es un claro atractivo para el saqueo y el expolio, ya que en el fondo marino se pueden encontrar piezas de valor incalculable que, de no existir una normativa que lo proteja, incentivaría a mucha gente e incluso a muchas empresas a buscar provecho de las mismas. Como dato curioso, FUENTES CAMACHO indica que el perfil del expoliador no es igual

³⁷ R. CASTILLO BELINCHÓN, “El patrimonio cultural subacuático”, *ARQVA, Museo Nacional de Arqueología Subacuática: catálogo*, Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica, Madrid, 2008, p. 40.

en todos los casos y señala que pueden distinguirse tres grandes grupos de sujetos: expoliadores, intermediarios y adquirentes finales³⁸.

Ello condujo a una realidad incuestionable y es que, como bien apunta BOU FRANCH, “todo el patrimonio cultural subacuático se encuentra en la actualidad [...] amenazado de muerte”³⁹. Esto se debe a numerosos factores, entre los que se pueden destacar el saqueo y la expoliación por parte de la población y también “la difusión generalizada de las bombonas de oxígeno comprimido y de las escafandras autónomas entre los submarinistas (...) y la utilización y difusión de instrumentos de detección remota, sobre todo el uso de detectores de objetos metálicos”⁴⁰, que llevan al propio saqueo y expolio de los bienes que se encuentran sumergidos⁴¹.

³⁸ V. FUENTES CAMACHO, *El tráfico ilícito internacional de bienes culturales*, Beramar, Madrid, 1993, pp. 33 y ss.

³⁹ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, *La protección jurídico internacional del patrimonio cultural. Especial referencia a España*, dirigido por: C. R. Fernández Liesa, y J. Prieto de Pedro, Colex, Madrid, 2009, p. 192.

⁴⁰ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., p. 192.

⁴¹ Puede traerse a colación el caso Odyssey y la fragata de guerra española “Nuestra Señora de las Mercedes”, que supuso uno de los mayores expolios de patrimonio cultural subacuático. Esta empresa, Odyssey, expolió 17 toneladas de plata acuñada en 594.000 monedas, entre otras reliquias. Tras el correspondiente litigio, se reconoció que todo lo sustraído correspondía a España y fue devuelto al Estado Español todo el patrimonio. Puede consultarse más información en G. P. ÁLVAREZ RUBIAL, “Proceso judicial del caso Odyssey en Estados Unidos” (<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4745-el-proceso-judicial-del-caso-odyssey-en-estados-unidos/> Consultado el día 20 de marzo de 2016).

Como consecuencia de todo lo anterior, la UNESCO fue consciente de que tenía que buscar una solución. Todo el patrimonio cultural sumergido se encontraba en un verdadero peligro y, aunque existían normas internacionales que hacían ciertas referencias, como puede ser la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – que no es un instrumento que proteja al patrimonio cultural subacuático–, desde la UNESCO se acordó que había que crear una norma concreta que regulase la materia.

El origen de esta Convención hay que buscarlo, según indica AZNAR GÓMEZ, en un foro de la *International Law Association* “que en 1988 ya había establecido en su seno un Comité sobre el derecho del patrimonio cultural y que un año más tarde nombre a los profesores Patrick O’KEEFE y James NAFZIGER como presidente y relator, respectivamente, del comité que empezaría a redactar un Proyecto de convención sobre el patrimonio cultural subacuático”⁴².

Se presentó a la UNESCO para que ésta lo sometiese a su análisis y, tras la adopción de la Decisión 5.5.1 que aprobó el Consejo Ejecutivo en la 146ª sesión, se decidió nombrar a un grupo de expertos sobre la materia para estudiarlo. Después de varias reuniones de expertos –se llegaron a hacer hasta cuatro reuniones de expertos

⁴² M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 209.

gubernamentales⁴³—, no se llegó a ningún acuerdo en concreto, debido a que había puntos con consenso y otros con discrepancias.

El asunto sobre el que no hubo discrepancias fue el relativo a la protección de todo el patrimonio cultural subacuático sin entrar en cuestiones de título o derechos de propiedad⁴⁴.

Caso contrario, y objeto de duras discrepancias, fueron “la exclusión o no de los pecios de los buques de guerra [...], los asuntos jurisdiccionales, es decir, sobre todo el régimen jurídico de los objetos arqueológicos e históricos que se encontrasen más allá de la zona contigua pero antes de entrar en la Zona internacional de fondos marinos, [...] y el reconocimiento o no de competencias o derechos al Estado ribereño y, en su caso, si ello suponía o no una derogación del régimen de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982”⁴⁵, entre otras.

Como ya hemos señalado, tras varias reuniones de expertos gubernamentales durante los años 1996, 1998, 1999 y 2001, finalmente, en esta última, y en el seno de la 31ª Conferencia General, se aprobó la Convención el día 2 de noviembre de 2001, recibiendo 87 votos a favor,

⁴³ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., p. 196.

⁴⁴ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., p. 196, nota al pie nº. 13.

⁴⁵ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., pp. 196 y ss.

4 en contra y 22 abstenciones⁴⁶, aunque, como veremos, ésta sólo entró en vigor el día 2 de enero de 2009.

Por lo que afecta a España, hay que destacar que fue uno de los primeros países que la ratificó, concretamente el día 6 de junio de 2005, y con ello, como señala AZNAR GÓMEZ, “lanzaba un mensaje político «queremos proteger el patrimonio cultural subacuático en el marco cooperativo de la Convención» al resto de Estados”⁴⁷.

3. Objetivos y principios generales de la Convención de 2001

La Convención de 2001 se compone de 35 artículos y un anexo con 36 normas que el artículo 33 de la Convención califica como “parte integrante de ella”⁴⁸.

En el artículo 2 de la misma nos encontramos con los objetivos, entre los que se destacan “garantizar y fortalecer la

⁴⁶ Puede verse el acta en el siguiente enlace, concretamente en lo que nos afecta, p. 561 *in fine*, cuando interviene la Secretaría: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001289/128966m.pdf>. Consultado el 4 de abril de 2016. Los cuatro votos negativos se corresponden a Rusia, Noruega, Turquía y Venezuela. Las abstenciones corresponden a Alemania, Brasil, Colombia, Francia, Grecia, Gineá-Bissau, Islandia, Israel, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Uruguay.

⁴⁷ M. J. AZNAR GÓMEZ, “Protección en el espacio iberoamericano del patrimonio subacuático y convenios de la UNESCO”, *La UNESCO y la protección internacional de la cultura en el espacio iberoamericano*, dirs. C. M. Díaz Barrado y C. R. Fernández Liesa, Thomson Reuters, Madrid, 2011, p. 139.

⁴⁸ Artículo 33 Convención de 2001.

protección del patrimonio cultural subacuático” y preservarlo en “beneficio de la humanidad”.

Los principios generales que aparecen en el artículo 2 de la Convención están desarrollados, a su vez, en las normas que se encuentran en el anexo de la misma. La primera norma nos indica que la prioridad para proteger el patrimonio cultural será la conservación *in situ*⁴⁹. Además, en este principio se hace referencia a las “actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático”, que, a su vez, son definidas en el artículo 1.6 de la Convención como aquellas “cuyo objeto primordial sea el patrimonio cultural subacuático y que puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño”.

En relación con estas actividades, la norma tres de la Convención nos indica que “no deberán perjudicarlo más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto”. Esta norma tiene sentido, ya que, como bien apunta LUNA ERREGUERENA, cuando se realiza cualquier trabajo arqueológico en un sitio, es inevitable causar algún tipo de daño⁵⁰. En la norma cuatro se prevé que las actividades dirigidas

⁴⁹ “La conservación *in situ* será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce de ese patrimonio”.

⁵⁰ P. LUNA ERREGUERENA, “A importância do anexo da convenção do patrimônio cultural subaquático”, *Patrimônio Cultural e Ambiental. Questões legais e conceituais*, Annablume, São Paulo, 2009, p. 50.

al patrimonio cultural subacuático “deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no destructivos”. Como dice la autora citada anteriormente, “esto, evidentemente, permitirá que el sitio conserve el contenido cultural original que mantuvo celosamente guardado durante tanto tiempo e incrementará las posibilidades de investigarlo de manera científica”⁵¹.

En el caso de que fuese necesario la realización de ciertos estudios científicos o la protección definitiva del patrimonio cultural subacuático, la misma norma cuatro nos indica que “las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios”. En relación con ella estaría la norma número cinco, que indirectamente nos remite a las anteriores y nos indica que dichas actividades “evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados”.

Al mismo tiempo, el artículo 2, apartado séptimo, establece que el patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial y la norma número dos lo desarrolla estipulando que no está permitida la “explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable”. Respecto de esta cuestión, BOU FRANCH apunta que “sin embargo, esta afirmación de principio no prohíbe la prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios

⁵¹ P. LUNA ERREGUERENA, “A importância do anexo, da convenção do patrimônio cultural subaquático”, cit., p. 51.

conexos necesarios cuya índole y finalidad sean plenamente conformes con la Convención de la UNESCO, y tengan la autorización de las autoridades competentes. Tampoco prohíbe el depósito del patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco de un proyecto de investigación ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito cumpla una amplia serie de condiciones”⁵².

Para finalizar, conviene hacer mención al artículo 2 en su apartado segundo, que nos indica que “los Estados Partes cooperarán en la protección del patrimonio cultural subacuático”.

4. Protección del patrimonio cultural subacuático en los distintos espacios marinos según la Convención de 2001

A. La división jurídica del espacio marino

Antes de entrar en el análisis de la protección del patrimonio cultural subacuático en los distintos espacios marinos que aparece en la Convención de 2001, conviene hacer unas anotaciones previas para aclarar algunos conceptos que pueden resultar complejos si no se efectúan unas precisiones previas. No explicaremos con profundidad la clasificación del espacio marítimo, porque no es objeto de nuestro estudio, pero sí daremos unas pinceladas muy breves para poder ubicarse.

⁵² V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., p. 200.

En el espacio marino se pueden encontrar varias partes: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva y alta mar.

Las aguas interiores, según el artículo 8.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y el artículo 5 de la Convención de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua, son aquellas que están situadas “en el interior de la línea de base del mar territorial”⁵³. En palabras de DIEZ DE VELASCO, “se concibe como una extensión del territorio, afectando a las aguas de puertos, bahías y estuarios, es decir, a aguas estrechamente ligadas y subordinadas al dominio terrestre”⁵⁴. Su límite exterior coincide con el límite interior del mar territorial y su límite interior coincide con tierra firme.

Por su parte, el mar territorial, cuya anchura aparece recogida en el artículo 3 de la CNUDM, es aquel que se extiende hasta un máximo de doce millas marinas contadas desde las líneas de base. DIEZ DE VELASCO afirma que “la línea de base normal desde donde se ha medido generalmente el mar territorial es la «la línea de baja mar a lo largo de la costa» (art. 3 del Convenio de 1958), es decir, aquella que sigue el trazado actual de la costa en marea baja”⁵⁵. Además, al igual

⁵³ Las líneas de base son aquellas desde las cuales se mide el mar territorial y las demás zonas marítimas. (Artículo 3 de la Convención de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua). La línea de base normal, “es la línea de bajamar a lo largo de la costa” (artículo 5 CNUDM).

⁵⁴ M. DIEZ DE VELASCO, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 2013, 18ª edición, p. 492.

⁵⁵ M. DIEZ DE VELASCO, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, cit., p. 499.

que en las aguas interiores, el Estado ejerce plena soberanía en él⁵⁶. En el caso español, nuestra Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial, cumple con lo dispuesto en la normativa internacional y fija una anchura de 12 millas náuticas desde las líneas de base.

Posteriormente se encuentra la zona contigua, que es el espacio marino que sigue inmediatamente al mar territorial y abarca otras doce millas marinas desde el mar territorial y veinticuatro desde las líneas de base, institución recogida en el artículo 33 de la CNUDM y el artículo 24 de la Convención de Ginebra citada anteriormente, que la define como la “zona de alta mar contigua a su mar territorial”. PASTOR RIDRUEJO, citando a G. GIDEL, señala que se trata del “espacio marítimo que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una cierta anchura y en la cual el Estado ribereño ejerce sobre buques extranjeros competencias rigurosamente limitadas a ciertos fines”⁵⁷.

Otra de las partes del espacio marítimo es la plataforma continental, que aparece regulada en el artículo 76 de la CNUDM a cuyo tenor “la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su

⁵⁶ C. JIMÉNEZ PIERNAS, “Régimen jurídico de los espacios marinos (I): aguas interiores, mar territorial y zona contigua”, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Dir. M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 2013, p. 490.

⁵⁷ J. A. PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 15ª edición, p. 371.

territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.

En España, según afirma PASTOR RIDRUEJO, “la extensión de la plataforma continental es sentido geológico es muy pequeña. Tomando como límite máximo de ella el determinado por la línea isobática de los doscientos metros, que es el comúnmente admitido por los geólogos y uno de los reconocidos por la Convención de Ginebra de 1958, resulta que en los litorales del Norte y del Sur la plataforma oscila entre cuatro y quince millas de extensión; en el llamado Saco Gaditano entre las quince y treinta millas; en las costas levantinas entre treinta y cincuenta; en las Islas Baleares llega hasta las quince millas y en el Archipiélago Canario fluctúa entre las cinco y diez millas”⁵⁸.

También forma parte del espacio marino la zona económica exclusiva o ZEE que, según el artículo 55 de la CNUDM, “es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste”. Además, el artículo 57 del mismo texto legal nos indica que su anchura es de “200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”. En esta zona, el Estado ribereño tiene, entre otros, “derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales,

⁵⁸ J. A. PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, cit., p. 377.

tanto vivos como no vivos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes”⁵⁹. Sin embargo, tal y como apunta PUEYO LOSA, los “poderes del Estado ribereño no afectan a las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendidos de cables y tuberías submarinas ni a otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades a que tienen derecho todos los Estados de conformidad con la Convención”⁶⁰.

Por último, se encontraría la alta mar, cuya definición podemos encontrar en el artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de 29 de abril de 1958, a cuyo tenor “se entenderá por «alta mar» la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado”, concepto que fue ampliado en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar excluyéndose además del mar territorial y las aguas interiores, la zona económica exclusiva y las aguas archipelágicas.

Explicados estos conceptos básicos, procedemos a continuación al análisis de la protección del patrimonio cultural subacuático que se recoge en la Convención de 2001.

⁵⁹ J. A. PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, cit., p. 380.

⁶⁰ J. A. PUEYO LOSA, “La libertad de navegación por la zona económica exclusiva”, *Revista Española de Derecho Internacional*, nº. 2-3, vol. XXX, 1977, pp. 265.

B. El patrimonio cultural subacuático situado en las aguas interiores, archipelágicas y mar territorial

La Convención de 2001, siguiendo lo recogido en los textos internacionales sobre Derecho del Mar, nos indica en su artículo 7 que los Estados, con base en su soberanía, “tienen derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, archipelágicas⁶¹ y mar territorial”.

Es tan importante la soberanía de los Estados que la propia Convención establece en su artículo 29 que “al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial e indicará en esa declaración las razones que la motivan”.

Cualquier objeto arqueológico que forme parte del patrimonio cultural subacuático situado tanto en las aguas interiores, archipelágicas o mar territorial español estará bajo soberanía del Estado parte, en nuestro caso, el Estado Español. En este sentido, sería España quien reglamentaría y autorizaría las actividades dirigidas a su

⁶¹ Según el artículo 49.1 de la CNUDM, “la soberanía de un Estado archipelágico se extiende a las aguas encerradas por las líneas de base archipelágicas trazadas de conformidad con el artículo 47, denominadas aguas archipelágicas, independientemente de su profundidad o de su distancia de la costa”.

patrimonio cultural subacuático para protegerlo, impidiendo cualquier tipo de intromisión por parte de otro Estado.

Además, el artículo 18 de la Convención indica que cada Estado Parte tiene la obligación de adoptar “medidas destinadas a la incautación de elementos del patrimonio cultural subacuático situado en su territorio, que haya sido recuperado de una manera no conforme” a la Convención de 2001. En este sentido, España estaría legitimada para interceptar a un buque en su mar territorial si le constasen indicios racionales de que lleva, abordo del mismo, objetos que formen parte del patrimonio cultural subacuático español y hacerse con ellos. Aunque en un principio podría colisionar con lo dispuesto en la CNUDM en cuanto al derecho de paso inocente⁶² del que gozan los buques en el mar territorial, la Convención de 2001 lo permite en su artículo 18 apartado primero, ya que ese objeto sería “recuperado de una manera no conforme con la presente Convención”. Ese patrimonio cultural incautado deberá ser registrado y protegido por el Estado parte según el artículo 18.2. Asimismo, para seguir protegiéndolo, el Estado parte, además de velar por darle una disposición acorde con el bien general (artículo 18.4), tiene que notificar la incautación del patrimonio cultural subacuático al Director General de la UNESCO y “a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural,

⁶² Derecho que gozan los buques en el mar territorial. Según la CNUDM, ese paso inocente debe reunir una serie de características (artículos 17 y siguientes de la CNUDM). Para considerar que hay paso inocente, éste deberá ser rápido e ininterrumpido. El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.

histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se trate” (artículo 18.3). Se establece, además, la obligación de los Estados partes de velar por la aplicación de las normas contenidas en el anexo de la Convención en sus aguas interiores, archipelágicas y el mar territorial⁶³. Estas últimas disposiciones serían aplicables a todo el patrimonio cultural subacuático, independientemente de la zona en la que se hallare.

C. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona Contigua

Al igual que en las aguas interiores, archipelágicas o mar territorial, la Convención de 2001 también prevé que el patrimonio hallado en la Zona Contigua sea protegido. Esta referencia aparece recogida en el artículo 8 de la misma, cuando dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 303⁶⁴ de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas”. Lo que nos quiere decir

⁶³ G. CARDUCCI, “The expanding protection of the underwater cultural heritage: The new UNESCO Convention versus existing international law”, *The protection of the Underwater Cultural Heritage*, Giuffré, Milán, 2002, p. 188.

⁶⁴ Según el artículo 303.2 CNUDM, “a fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33, podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo”.

el artículo 303.2 de la CNUDM es que cualquiera eliminación del patrimonio cultural subacuático que se realice en la Zona Contigua y no lleve aparejada la autorización del Estado ribereño, puede entenderse como una infracción⁶⁵. Los Estados parte pueden proclamar una Zona Contigua a su mar territorial, siempre que ésta no supere las 24 millas náuticas desde las líneas de base y, por tanto, tendrían potestad para sancionar⁶⁶.

Resulta curioso como en este precepto se hace uso del término “podrán”, de carácter potestativo, mientras que cuando nos referíamos a las aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial hablábamos de un derecho exclusivo (artículo 7). Con base en esa potestad, el Estado parte podrá reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su Zona Contigua de forma similar a las aguas interiores, archipelágicas y mar territorial, aunque, como bien se desprende del tenor literal de este artículo 8, esa reglamentación y autorización tiene que ser acorde con el artículo 303.2 de la CNUDM y, en consecuencia, con los artículos 9 y 10 de la Convención. En este artículo, apunta BOU FRANCH, “está implícita la idea de que la autorización de la remoción de los objetos arqueológicos e históricos en la Zona Contigua es una competencia exclusiva del

⁶⁵ Así lo considera también A. STRATI, *The protection of the Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objecting of the Contemporary Law of the Sea*, Kluwer Law International, La Haya, 1995, p. 165.

⁶⁶ M. RAU, “The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage and the International Law of the Sea”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 6, Max Planck Foundation, Netherlands, 2002, p. 413.

Estado ribereño, siempre que este Estado haya previsto tal posibilidad en su legislación interna”⁶⁷. Por tanto, vemos que hay cierta similitud con lo que indicamos en relación con las aguas interiores, archipelágicas y mar territorial, salvando el verbo “podrán”, teniendo en cuenta que en un caso hablamos de una obligación y, en este caso, de una potestad, siempre que se incluya en la legislación interna del Estado en cuestión.

D. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental

La Convención de 2001 también quiere proteger el patrimonio cultural subacuático que se encuentre en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental, siendo las dos zonas en donde más cantidad de patrimonio cultural sumergido se puede encontrar y en donde los derechos y obligaciones no estaban resueltos claramente por el Derecho en vigor⁶⁸, y lo hace en sus artículos 9 y 10. En ellos se establece la obligación que tienen todos los Estados Partes de proteger el patrimonio cultural subacuático en dichas zonas. El artículo 9 se centra en la información y notificación del patrimonio cultural subacuático hallado en la ZEE y en la PC y el artículo 10 se centra más en la protección del mismo.

⁶⁷ V. BOU FRANCH, “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, cit., p. 213.

⁶⁸ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 249.

En este último se establece que “no se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la Zona Económica Exclusiva o en la Plataforma Continental”, a lo que sigue “salvo lo dispuesto en el presente artículo”. Lo que a primera vista parece una prohibición no lo es, porque en su apartado segundo se señala que ese Estado parte “tiene derecho a prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio”, cuando con ello se impida cualquier intromisión en sus derechos soberanos o de jurisdicción en la ZEE o la PC.

El único derecho que se le reconoce al Estado Parte o ribereño es el de prohibir o autorizar esas actividades sobre su patrimonio cultural sumergido, siempre que se dé el requisito de “impedir cualquier intromisión en sus derechos soberanos o jurisdicción”.

Otra manera de proteger el patrimonio cultural subacuático en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental es prohibiendo o autorizando cualquier actividad dirigida a él para impedir una intromisión en sus derechos soberanos o jurisdicción, tal como consta en el artículo 10.2 de la Convención.

Continúa señalando el artículo 10 en su apartado tercero que, en el caso de descubrirse patrimonio cultural subacuático en la Zona Económica Exclusiva o en la Plataforma Continental de un Estado Parte, o bien cuando se tenga intención de llevar a cabo una actividad dirigida a ese patrimonio cultural sumergido, el Estado parte tiene que

consultar a los demás Estados parte que hubiesen mostrado interés en consultar cómo asegurar esa protección. Además, este Estado parte en donde se halla el patrimonio cultural sumergido en cuestión, salvo que renuncie a ello, será el que va a coordinar las consultas.

El Estado coordinador, como indica el artículo 10 en su apartado 4, para proteger el patrimonio cultural sumergido puede adoptar todas las medidas viables conformes al Derecho internacional y/o conceder cualquier autorización para impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, incluido el saqueo. JUSTE RUÍZ apunta que es una de las disposiciones clave del convenio, ya que “sería ilusorio esperar que dichas medidas fueran adoptadas por el Estado del pabellón”⁶⁹. Además, al Estado coordinador se le encomienda que ponga en práctica las medidas de protección acordadas por los Estados que participen en la consulta, expida todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas que se acuerden y realice toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático (artículo 10.5).

Como hemos podido observar, en aguas interiores, archipelágicas o mar territorial la protección del patrimonio cultural sumergido no plantea mayores problemas. Cuando se trata de objetos que se encuentran en la Zona Económica Exclusiva o en la Plataforma Continental ya no resulta tan sencillo. Se necesita negociación y

⁶⁹ J. JUSTE RUIZ, “La protección internacional de los hallazgos marítimos de interés histórico y cultural”, cit., p. 63.

colaboración entre todos los Estados que resultan afectados, aunque con la coordinación del Estado ribereño en cuestión.

E. El patrimonio cultural subacuático situado en la Zona de fondos marinos y oceánicos

Aunque nada se dice en la Convención de 2001 sobre la alta mar, sí aparecen referencias a la Zona, entendida ésta como los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional⁷⁰, en los artículos 11 y 12.

El régimen es similar al que hemos explicado en el apartado anterior. Una vez más, todos los Estados partes tienen que proteger el patrimonio cultural subacuático en la Zona, pero ahora ciñéndose a la Convención y al artículo 149 de la CNUDM, según el cual esos bienes culturales sumergidos que fueron localizados en la Zona van a pertenecer y deberán ser aprovechados en beneficio de la humanidad en su conjunto. Cuando se encuentre patrimonio cultural sumergido o cuando se quiera efectuar una actividad dirigida al mismo, habrá que informar al Director General y al Secretario de la UNESCO del descubrimiento o de las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, mientras que en la ZEE y en la PC no era así, porque había que notificarlo al Estado ribereño (artículo 11.2 Convención).

⁷⁰ Artículo 1.5 Convención de 2001.

Una vez que se ha informado de la existencia de ese patrimonio cultural subacuático, el Estado Parte pondrá en marcha todos los mecanismos para garantizar su protección. Mientras en la ZEE y la PC era el Estado ribereño quien invitaba a los Estados con vínculos a efectuar consultas y a designar al Estado coordinador, aquí será el Director General de la UNESCO quien asuma esa función (artículo 12.2).

Se vuelve a establecer que no se concederán autorizaciones para actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, salvo que dicha autorización sea el resultado del mecanismo previsto de consultas, tal y como se desprende del mismo artículo 12.

Para concluir, debemos señalar que también se ha previsto, al igual que en la ZEE y en la PC, la adopción de medidas viables, de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático. Ahora bien, mientras en la ZEE y la PC las adoptaba el Estado coordinador, aquí se produce un cambio de gran calado y las pueden adoptar todos los Estados (artículo 12.3).

En caso de no cumplirse lo dispuesto en la Convención de 2001, la misma regula en su artículo 17 que los Estados Parte impondrán sanciones en relación a las infracciones que puedan cometerse. No nos detalla ningún elenco de sanciones, sino que se indica que deberán ser lo “suficientemente severas” para hacer efectivo el cumplimiento de la Convención y que éstas deberán privar a los

infractores de los beneficios derivados de las actividades ilícitas, para así evitar que se cometan infracciones.

5. Entrada en vigor de la Convención de 2001

Tal y como apuntamos al inicio de este capítulo, debemos destacar que, aunque la Convención fue aprobada por 87 votos a favor, no todos los Estados que votaron favorablemente el día en que se adoptó la han ratificado⁷¹, aprobado⁷² o aceptado⁷³.

El artículo 26 de la Convención de 2001 dispone, por un lado, que debe ser ratificada, aceptada o aprobada por los Estados miembros de la UNESCO y, por otro, que estará sujeta a la adhesión⁷⁴ “(a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte

⁷¹ La ratificación aparece reflejada en los artículos 2.1b, 14.1 y 16 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y por la misma se puede entender que designa el acto internacional a través del cual un Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por un Tratado.

⁷² La aprobación, según el artículo 2.1b y 14.2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), expresa el consentimiento de un Estado en obligarse por un Tratado. Tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación.

⁷³ Al igual que la aprobación, con la aceptación un Estado se obliga por un Tratado.

⁷⁴ Debe entenderse que la adhesión es un acto mediante el cual un Estado acepta la posibilidad de formar parte de un tratado que ya fue negociado y firmado por otros Estados. Además, posee los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Vid. NACIONES UNIDAS, *Manual de Tratados*, preparado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 2001, p. 9.

Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente Convención” y “(b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas”. En todo caso, esos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión tienen que ser depositados ante el Director General.

Asimismo, en consonancia con lo anterior, la Convención comenzó a surtir efectos el día 2 de enero de 2009, ya que en el artículo 27 se hacía mención a que la misma entraría en vigor pasados tres meses desde que se depositase el “vigésimo instrumento a que se refiere el Artículo 26”. Es decir, hubo que esperar a que veinte Estados depositasen su instrumento de ratificación o aceptación.

Aun aprobándose en el año 2001, tuvieron que pasar casi dos años más para que el primer país, Panamá, ratificase dicho instrumento el día 20 de mayo de 2003. Según pasaba el tiempo y no se llegaba al mínimo de veinte Estados, algunos autores no se mostraban muy partidarios de que entrase en vigor, al menos a corto plazo⁷⁵. A día de hoy siguen sumándose nuevos Estados, tales como los Estados

⁷⁵ F. J. CARRERA HERNÁNDEZ, *Protección internacional del patrimonio cultural submarino*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005, p. 80.

Federados de Micronesia y Costa Rica que ratificaron la Convención en 2018. Hasta la fecha, sólo sesenta Estados forman parte de esta Convención. Cincuenta y cuatro de ellos la han ratificado⁷⁶ y otros seis la han aceptado⁷⁷.

6. Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático

La Convención, en su Anexo de normas, establece como prioridad la conservación in situ. Por ello que las acciones y actividades que se autoricen deben ser compatibles con su protección en su localización y estado original⁷⁸.

La explotación comercial del patrimonio subacuático está prohibida si se realiza por transacciones (venta, compra o trueque), especulaciones o se dispersa de forma irremediable y absoluta el

⁷⁶ Panamá, Bulgaria, Croacia, España, Libia, Nigeria, Lituania, México, Paraguay, Portugal, Ecuador, Ucrania, Santa Lucía, Camboya, Cuba, Montenegro, Eslovenia, Granada, Túnez, Eslovaquia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Irán, Haití, Jordania, Saint Kitts y Nevis, Italia, Argentina, Honduras, Trinidad y Tobago, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Namibia, Marruecos, Benin, Jamaica, Palestina, Francia, Antigua y Barbuda, Togo, Bélgica, Baréin, Hungría, Guyana, Madagascar, Argelia, Guatemala, Arabia Saudita, Ghana, Bolivia, Kuwait, Egipto, Estados Federados de Micronesia y Costa Rica.

⁷⁷ Líbano, Rumanía, Barbados, Gabón, Sudáfrica y Guinea Bissau. Consultado en la página web oficial de la UNESCO:

<http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language=S> el día 04 de agosto de 2018.

⁷⁸ E. PORTELA VÁZQUEZ, “La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático. Principios generales”, cit., pp. 317-337.

patrimonio sin contribuir a su protección. Con dicha prohibición se da mayor prioridad a esta norma frente a las normas de la CNUDM, al ser una norma específica, es decir, la protección del patrimonio cultural subacuático no puede vincularse a motivos o beneficios económicos o comerciales y, desde esta visión, es incompatible con la institución del salvamento marítimo (y también con los hallazgos)⁷⁹.

No se consideran dentro de esta prohibición aquellos servicios arqueológicos profesionales que no contradigan los principios de la Convención, ni cuando se realice el depósito de patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco de un proyecto de investigación que se haya ejecutado de acuerdo con lo establecido en la Convención, siempre y cuando el depósito no suponga perjuicio científico o cultural. Se procura potenciar las actividades dirigidas al público en general *in situ*, salvo que afecten al patrimonio cultural subacuático.

Todas las actividades que se realicen no pueden perjudicar al patrimonio cultural subacuático más allá de lo estrictamente necesario. Para ello deben aplicarse las técnicas y métodos de exploración no destructivos frente a los de recuperación de objetos. En el caso de

⁷⁹ “(...) Pues bien, el artículo 4 de la Convención de 2001 11 constituye un cambio de rumbo, y el enfoque e interpretación que dábamos al artículo 303.3 de la CNUDM queda ahora relegado y sin aplicación posible. Conforme a la Convención de 2001, las normas sobre salvamento y hallazgos no se aplican a ninguna actividad que tenga que ver con el PCS, y el motivo de esta tajante separación no es otro que la afirmación que se contiene en el artículo 2.7 de la Convención, de que este patrimonio no debe ser objeto de explotación comercial (...)” R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, n°. 25, 2015, p. 56.

utilizarse estos últimos, siempre se debe, en la manera de lo posible, preservar los vestigios. Toda actividad ha de quedar registrada para poder analizar la información cultural, histórica y arqueológica del pecio.

Debe evitarse que se lleven a cabo actividades en las que se vean afectados restos humanos o sitios venerados. La antigüedad y la magnitud del desastre son los factores para delimitar cuándo se puede determinar que el patrimonio cultural subacuático se encuentra en esta categoría y cuándo el Estado correspondiente no ha hecho ninguna manifestación al respecto⁸⁰.

Antes de iniciar cualquier actividad debe elaborarse un plan del proyecto. Este plan debe incluir: una evaluación de los estudios previos o preliminares⁸¹, el enunciado y los objetivos que persigue la actividad, la metodología y las técnicas que se van a utilizar, el plan de

⁸⁰ El MS Estonia o el MS Lusitania, buques hundidos en enfrentamientos bélicos, han sido considerado como lugares donde descansan los caídos en el enfrentamiento bélico.

⁸¹ Por estudios previos se entiende una evaluación del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural y de su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes del proyecto previsto, así como de las posibilidades de obtener datos que correspondan a los objetivos del proyecto. Dicha evaluación debe incluir estudios previos de los datos históricos y arqueológicos disponibles, las características arqueológicas y ambientales del sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión en la estabilidad a largo plazo del patrimonio cultural subacuático objeto de las actividades.

financiación⁸², el calendario previsto⁸³, la composición del equipo y sus funciones, los planes de análisis, el programa de conservación⁸⁴, la política de gestión, un programa de seguridad⁸⁵ y otro de documentación⁸⁶, un programa respecto al medio ambiente que rodea

⁸² Salvo en los casos en que la protección del patrimonio cultural subacuático revista carácter de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo se deberá contar con la financiación suficiente para cumplir todas las fases previstas en el plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del material recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

En el plan del proyecto se demostrará la capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una garantía.

El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrumpirse la financiación prevista.

⁸³ Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se preparará el calendario correspondiente para garantizar de antemano el cumplimiento de todas las fases del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del patrimonio cultural subacuático recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrupción o conclusión del proyecto.

⁸⁴ En el programa de conservación estarán previstos el tratamiento de los restos arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, en el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se efectuará de conformidad con las normas profesionales vigentes. En el programa de gestión del sitio estarán previstas la protección y la gestión in situ del patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de campo y una vez que éste haya concluido. El programa abarcará actividades de información pública, medidas adecuadas para la estabilización del sitio, su control sistemático y su protección de las intrusiones.

⁸⁵ Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con las normativas legales y profesionales en vigor.

⁸⁶ La documentación incluirá como mínimo un inventario detallado del sitio, con indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el trabajo de campo, planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.

al lugar, acuerdos de colaboración con museos, el depósito de los materiales y archivos y un programa de publicaciones.

Los informes que se realicen deben incluir una descripción de los objetivos, de las técnicas y los métodos utilizados, de los resultados obtenidos, documentación gráfica y fotográfica imprescindible sobre todas las fases de la actividad, las recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y del patrimonio que no se ha extraído y aquellas recomendaciones para futuras actividades de investigación.

Las actividades cuyo objeto sea el patrimonio cultural subacuático han de realizarse conforme a este plan del proyecto. Si se produjeran descubrimientos no contemplados, el plan tendrá que ser actualizado. En caso de urgencia, las actividades podrán comenzar sin que sea necesario el plan de proyecto puesto que prevalece la protección del patrimonio cultural subacuático.

La conservación de los archivos del proyecto debe acordarse antes de comenzar cualquier actividad y debe constar en el proyecto. Conviene incluir una copia documentada de apoyo de todo lo extraído para su conservación. Deben de instarse conservar de manera unida en forma de colección para que los especialistas y público puedan acceder a ellos. La conservación de los archivos habría de hacerse lo más rápido posible sin que pueda pasar más de 10 años.

La Convención establece que, en aquellos proyectos en los que se prevean actividades educativas y de difusión al público de los resultados, se difundirá una síntesis final de cada proyecto. Esta síntesis tiene que publicarse en el tiempo más breve posible, dependiendo del proyecto en cuestión, y debe depositarse en el registro público correspondiente.

En el orden internacional hay diversas Convenciones y Cartas Internacionales que dan regulación a la materia⁸⁷. En octubre de 1996 en la ciudad de Sofía se ratificó por la 11ª Asamblea General del ICOMOS, la Carta Internacional sobre protección y gestión del patrimonio cultural subacuático. Su objeto principal es la regulación de este en aguas interiores y cercanas a la costa, por la falta de normativa en la mayoría de Estados. Define al patrimonio cultural subacuático como un recurso internacional y la arqueología como actividad pública.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar o UNCLOS es una de las más reconocidas. Firmada en Montego Bay en el 1982, en sus artículos 149 y 303 reconoce la soberanía en el mar e insta a las naciones a proteger el patrimonio cultural subacuático⁸⁸.

⁸⁷ S. AMOROSINO, *I beni culturali sunùbacquei: profili giuridici*, RG, Ed., Roma, 1995, p. 76.

⁸⁸ M. MARCHESINI, “Strumenti per la protezione e la valorizzazione turística del patrimonio culturale marino nel mediterraneo”, *Trasporti-diritto, economia, política*, n°. 84, 2001, pp. 215-230.

Una particularidad de la Convención de 2001 es que un Estado puede ser parte de ella sin necesidad de pertenecer o no a la UNCLOS u otros tratados. Esta convención está estrechamente relacionada con la de Montego Bay, tanto que se puede decir que tenga una relación de *lex generalis* (la del 1982) y *lex specialis* (la de París)⁸⁹; eso porque la más reciente de la dos permite regular de manera más específica algunos aspectos que la primera había si previsto pero no definido sustantivamente.

El art. 1 de la Convención de 2001 establece que la preservación *in situ* será prioritaria siempre que pueda llevarse a cabo. Después se articula una metodología para elaborar, seguir y preservar el proyecto, indicándose en el art. 9 que se elaborará el proyecto correspondiente antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático.

Por último, en el artículo 15 la Carta se pretende sensibilizar a los Estados y a la ciudadanía sobre la necesidad de una cooperación internacional para que arqueólogos y otros profesionales puedan ayudarse y servirse de investigaciones previas, a través del fomento de programas de intercambio de profesionales.

⁸⁹ G. CAMARDA, “Legislazioni nazionali , diritto comunitario e problematiche di «adattamento» in tema di protezione del patrimonio culturale sommerso”, *Nuove autonomie*, 2001, p. 200.

Como precedente a la Convención de 2001, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, uno de los Tratados Internacionales más reconocidos⁹⁰. Este Tratado viene a reforzar la regulación existente en materia internacional, en esta etapa se suceden una serie de declaraciones y adhesiones por parte de los Estados. En este sentido, se establece un límite alto de protección, dejando la posibilidad a la autoridad estatal de limitar aún más.

Como pilares fundamentales del Tratado está, al igual que la Carta de 1996, la preservación *in situ*, subrayando la importancia del contexto histórico y la necesidad de respeto y conservación. También el principio de no explotación comercial con fines de lucro o especulativos, indicando que no se sujetarán a las normas de salvamento o hallazgo, salvo que esté previamente autorizada. (Norma 2 Anexo Convención de 2001).

Un aspecto problemático en el derecho internacional privado y, más aún, en el derecho del mar es el relativo a la reglamentación de la propiedad del patrimonio. Aunque el Tratado no entra en este aspecto, se debe acudir a la legislación italiana para dirimir cuestiones de esta índole⁹¹.

⁹⁰ M. MARCHESINI, “Strumenti per la protezione e la valorizzazione turistica del patrimonio culturale marino nel mediterraneo”, cit., p. 215.

⁹¹ G. CARDUCCI, “Beni culturali. Diritto internazionale pubblico e privato”, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. 3, 1999, p. 54.

Con ánimo de garantizar siempre el derecho a la soberanía nacional, el art. 29 recoge la potestad de las partes para declarar si la Convención se aplicará a la totalidad del territorio o bien a alguna zona en concreto, según lo articulen las leyes nacionales de ratificación del Tratado.



CAPÍTULO III

III. DERECHO COMPARADO

1. Introducción

Más allá de las normas de derecho internacional, no debe olvidarse en el derecho comparado la existencia de países con legislación específica en la materia como son los supuestos de Francia e Italia. Países integrantes del sistema jurídico romano-germánico o también denominado *Civil Law*⁹². No obstante, la protección del patrimonio subacuático no es objeto de análisis únicamente en los países cuyo sistema jurídico es el de *Civil Law*, sino que los países del mundo anglosajón o de *Common Law* también poseen una legislación propia para proteger los espacios.

La casuística varía entre aquellos países que han establecido normas de protección y regulación especiales para la materia y aquellos que incluyen este tipo de patrimonio histórico-cultural dentro de una legislación general. Por ello podemos encontrar diferentes grados de

⁹²R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, nº. 25, 2015, pp. 49-72; J. RODRIGO DE LARRUCEA, “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, nº. 6964, Sección Tribuna, 10 de junio de 2008, Año XXIX, Ref. D-182, pp. 5-12.

protección, desde aquellos países en los que ni siquiera se contempla una protección del patrimonio cultural más allá de determinados supuestos, a aquellos otros en los que se protege este tipo de patrimonio, pero dentro de las fórmulas de proteger el patrimonio arqueológico general análogas a los que han establecido una normativa específica.

También habría que diferenciar aquellos países cuyas normas de protección están basadas en la Carta de ICOMOS de 1996, cuya denominación completa es Carta Internacional sobre la protección y la gestión del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por la 11ª Asamblea General de ICOMOS en Sofía en octubre de 1996, de los que han actualizado o basado su legislación interna en la Convención de 2001.

La propia Convención de 2001 establece que las sanciones deberán imponerse por incumplimiento de la norma interna de los diferentes países⁹³. Por ello a continuación se expone la regulación de diversos Estados.

⁹³ Art. 17. “Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto de las infracciones de las medidas que haya adoptado para poner en práctica la presente Convención. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Convención y desalentar la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilícitas. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del presente artículo”.

2. Derecho continental europeo

A. Italia

Italia es pionera en cuanto a legislación sobre patrimonio subacuático por el pasado histórico tan relevante que posee y, junto a ello, por la necesidad de protegerlo y regularlo. Sus precoces iniciativas legales han servido como modelo para otros países, como España, aunque en muchas ocasiones nuestro país estuvo a la cola de los postulados italianos en esta materia⁹⁴.

El concepto de patrimonio cultural subacuático ha ido cambiando, como puede observarse al hilo de las legislaciones que se han promulgado. Durante el siglo XX se daba prioridad a la titularidad y posesión de quien encontraba el hallazgo o se lo adjudicaba, mientras que desde finales del siglo XX hasta la actualidad se da un giro y ahora el fin primordial es la conservación y protección por parte del Estado y la comunidad internacional del patrimonio subacuático, como puede verse desde la Convención de 2001, ratificada por Italia, hecho que motivó que ajustase su normativa nacional en este sentido. Se deja a un lado el principio de propiedad privada más propio de etapas anteriores, para dar primacía al bien general y sobre todo público, en cuanto deber del Estado de generar y promover acciones que fomenten el cuidado y

⁹⁴ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, pp. 18-21.

pongan en valor el patrimonio común de la nación y no de propietarios individuales.

La Constitución Italiana del 1947 recoge en el art. 9 que “la República salvaguarda el patrimonio histórico y artístico de la Nación” y en el art. 117 otorga al Estado italiano “la facultad exclusiva sobre la protección de los bienes culturales”. Estas competencias se desarrollan en los artículos 85 a 90 del *Testo Unico sui beni culturali*, aprobado por el Decreto Legislativo de 29 octubre de 1999, n°. 490, y el Código de los bienes culturales y del paisaje, aprobado por Decreto Legislativo de 22 de enero de 2004, que contiene un artículo titulado *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*⁹⁵.

Italia, al igual que otros Estados, está involucrada en el tema por dos razones: en primer lugar, por ser un país interesado en buscar y tutelar los bienes hundidos en aguas no territoriales, y como Estado parte de la Convención de 2001, y en segundo lugar, por ser un Estado que conserva y esconde en sus mares un gran patrimonio⁹⁶.

La Constitución considera la cultura como valor y hace de él y de su promoción y tutela un principio fundamental⁹⁷. La importancia que la cultura tiene en el Estado italiano comporta que a menudo la

⁹⁵ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, n°. 25, 2015, p. 61.

⁹⁶ A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova, Cedam, 1998, p. 128.

⁹⁷ F.S. MARINI, “Profili costituzionali della tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano”, *Manuale dei beni culturali*, Padova, Cedam, 2000, p. 60.

doctrina considere a Italia como “Estado de la cultura”, debido a que el Estado y todos los entes tienen un rol muy importante en la valorización y la promoción de las expresiones artísticas del presente y del pasado⁹⁸.

En el Derecho italiano, el *Codice della Navigazione* de 1942 distingue entre las figuras de la asistencia (*assistenza*), el salvamento (*salvataggio*) y la recuperación de restos (*ricupero*)⁹⁹. Esta última figura aparece regulada en los arts. 501 y ss. del *Codice della Navigazione*.

La autoridad competente para las operaciones de inventario, protección, conservación y gestión del patrimonio cultural subacuático es el *Ministero dei Beni e della Attività Culturale*. Debe actuar de manera conjunta con el Ministerio de Defensa, si la actividad trata sobre buques de guerra o de Estado, al ser *la Direzione Generale per le Antichità* la competente para elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático y garantizar eficazmente la protección, la conservación, la presentación y la gestión del

⁹⁸ V. CERULLI IRELLI, “Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica”, *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 135 y ss.

⁹⁹ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, cit., p. 61; J. RODRIGO DE LARRUCEA, “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, nº. 6964, Sección Tribuna, 10 de junio de 2008, Año XXIX, Ref. D-182, Editorial LA LEY, pp. 5-6.

patrimonio cultural subacuático, así como la investigación y educación¹⁰⁰.

Por su parte, el art. 85 del *Testo Unico* trata de la búsqueda de los bienes culturales presentes “en todo el territorio del País”, sin referirse precisamente a los bienes subacuáticos. Aunque falte la referencia a ellos, se les extiende la normativa de los bienes culturales en general. Esta extensión necesaria no resulta suficiente, debido a que por la naturaleza peculiar que tienen las búsquedas de este tipo de bienes se necesitarían disposiciones más precisas. Objeto de la búsqueda subacuática son los bienes culturales muebles o inmuebles, arqueológicos o históricos.

La ley atribuye la entera tarea de tutelar la búsqueda al Estado. Esto significa que debe identificar el bien y, si se considera de interés cultural, deberá protegerlo en todas las fases desde su localización. Es decir, debe poner las bases para la recuperación e impedir la destrucción y sustracción, además de asegurarse de que el uso que se haga del bien se realice de acuerdo con su naturaleza y de que el mayor número de personas posible pueda disfrutar de los mismos¹⁰¹.

El contenido del art. 85 del *Testo Unico* no significa que el Estado deba ocuparse necesaria y directamente de todas las fases. De

¹⁰⁰ R. RUIZ MANTECA, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio*, cit., p. 62.

¹⁰¹ R. RUIZ MANTECA, “*La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio*”, cit., p. 62.

hecho, se establece que el Estado puede delegar a entidades y particulares para que se ocupen de la búsqueda y de la recuperación de los bienes. Para ello, debe establecer una serie de instrucciones tanto para la fase previa como para las operaciones que se realicen en materia de patrimonio cultural subacuático. Al mismo tiempo, los particulares y entidades privadas pueden solicitar autorizaciones para realizar actividades por su propia iniciativa en materia de patrimonio cultural subacuático.

El *Testo Unico* también regula el hallazgo fortuito. El art. 87 obliga a quien encuentre algún elemento que pueda ser integrante de patrimonio cultural subacuático, a no mover el bien del sitio donde se encontró, a menos que esto no perjudique su conservación, y avisar a las autoridades, en este caso el alcalde del municipio costero o ribereño más próximo. El descubridor tiene derecho a recibir una gratificación por el Ministerio de Cultura, que varía dependiendo del bien encontrado.

La propiedad del bien descubierto, según el artículo 88, que cumpla los requisitos que se encuentran en el art. 2 del *Testo Unico*, pertenece *ipso iure* al Estado, y se puede pensar que lo mismo vale para los bienes que se hayan encontrado en el mar. Todos esos bienes van a formar parte del *Patrimonio Indisponibile dello Stato*, siempre que se encuentren en aguas territoriales italianas o que, encontrados en aguas

internacionales, hayan luego sido transportados a las aguas territoriales del país¹⁰².

Son también propiedad del Estado los bienes inmuebles, que tienen consideración como parte del “*Demanio*”. Esto comporta que se les atribuyan todas las características típicas de los bienes demaniales, como son la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y el ejercicio por parte de la administración de actos de autotutela.

Si no se discute sobre la atribución de la propiedad al Estado de los bienes arqueológicos es porque a un bien cultural subacuático se le aplican también las disposiciones del *Codice della Navigazione*.

En realidad, el *Testo Unico* y el *Codice della Navigazione* resultan de difícil integración, sobre todo en materia de hallazgo fortuito. Se puede incluso afirmar que las dos fuentes se contradicen, y que el intérprete deberá establecer cuál es la normativa aplicable al caso. Ello se debe a que el *Codice della Navigazione* trata de bienes relictos, y solo en el art. 511 se refiere a los bienes culturales, estableciendo que éstos son de propiedad del Estado si el dueño de lo que se encontró no reclama su propiedad.

Comparando las disciplinas del *Testo Unico* y del *Código*, se encuentran cuatro aspectos controvertidos, que son los siguientes:

¹⁰² Un ejemplo es la sentencia del Tribunal de Sciacca, una ciudad italiana, que decidió sobre la propiedad de una estatua en bronce descubierta en las redes de un barco únicamente al llegar a puerto.

- 1) Los premios previstos para el descubridor. Este tiene derecho a, como máximo, un tercio del valor del bien descubierto en el mar, mientras que, si se descubrió en tierra, el premio es de un cuarto, y si el descubridor coincide con el dueño de la tierra en la que se encontró el bien, el premio se dobla.
- 2) Plazo de tiempo que el descubridor tiene para avisar las autoridades. Es de un día para los descubrimientos en tierra y de tres días desde la llegada a tierra en el caso de un bien hundido.
- 3) Sanciones penales previstas. Son diferentes las sanciones pecuniarias, siendo doble la suma ex *art. 1146 del Codice* respecto a la que se establece ex art. 125 del *Testo Unico*.
- 4) La forma en la que se atribuye la propiedad al Estado. Según el *Testo Unico*, ésta es automáticamente atribuida al Estado y según establece el *Codice* el bien pasa al Estado al terminar el plazo a disposición del dueño para reclamar su propiedad.

La fundamentación de estas diferencias es la de evitar que un bien que se encuentra en el mar, si es de interés cultural, sea de propiedad de quien lo encuentra, por el valor de patrimonio cultural que tiene.

Como resulta evidente, de los cuatro aspectos polémicos es este último el más interesante, porque supone la base del privilegio de adjudicación de los bienes privados por parte del Estado. Es decir, en ambos casos se reconoce al Estado como sujeto privilegiado en la adjudicación de los bienes, pero en el *Codice della Navigazione* se da la oportunidad a quien los pierde de reclamarlos y, transcurrido el tiempo sin que este los haya recuperado o al menos iniciado este tipo de actividad, pasan a ser de dominio público.

Aunque no lo parezca, en esta norma con la regla de “si no te das prisa se lo queda el Estado”, se intentan conciliar los intereses públicos y privados, dado que en muchas ocasiones los bienes relictos son considerados como chatarra o basura y por tanto quien los pierde no ve ningún inconveniente en que se los quede el Estado. Al menos esta regla tiene sentido a corto plazo, dado que, si el propietario pudiera reclamar lo perdido siempre, podría dejar en herencia bienes que ahora mismo no valen nada, pero que, en un futuro, después de su muerte, podrían haberse revalorizado mucho. Si ahora se puede recuperar el patrimonio cultural subacuático a través de simples anotaciones en registros históricos, con las técnicas modernas de geolocalización será incluso más fácil.

La relevancia de los bienes culturales como expresión de civilización, ha producido un creciente interés en ámbito extra-estatal,

de manera que su tutela se considera actualmente como un interés, no solo de los Estados, sino de la humanidad entera.

El Codice dei beni culturali e del paesaggio le dedica un artículo específico, el 94, a la Convención de 2001 de la UNESCO, que entró en vigor en enero de 2009, donde indica que los objetos arqueológicos e históricos hallados en las profundidades de la zona contigua (12 millas a partir del límite externo del mar territorial), están protegidos por la Convención de 2001.

El Codice articula una serie de mecanismos en un intento de dar regulación a la situación de expolio y comercio ilegal existente con el patrimonio subacuático. En el art. 95 y siguientes dispone taxativamente que será el Ministerio de bienes y actividades culturales¹⁰³ el único con potestad para expropiar bajo unos supuestos determinados.

En el ámbito nacional, se promulga en 2009 la Ley 157 de 23 de octubre que ratifica y da plena vigencia a la Convención de 2001. Su entrada en vigor se produce el 8 de abril de 2010 y viene a regular las lagunas de la misma a nivel estatal.

¹⁰³ Ministero per i beni e le attività culturali.

En el art. 3 se delimita el sistema de cooperación internacional dispuesto en la Convención, regulando que, en caso de disputa por una zona sin delimitar, Italia no se extenderá más allá de la línea medida.

Continúa con el sistema de comunicación e información de quien encuentre elementos que puedan ser patrimonio cultural subacuático, estableciendo el plazo máximo de tres días y designando a la Secretaría de Patrimonio Nacional y Cultura como autoridad competente para expedir la autorización pertinente en caso de participar en alguna intervención sobre el patrimonio cultural subacuático.

Para operaciones de inventario, protección, conservación y gestión será competente el Ministerio de bienes Nacionales y Cultura, exceptuando a los buques integrantes del patrimonio del Estado o de guerra, en cuyo caso dichas operaciones se llevarán a cabo en conjunto con el Ministerio de Defensa.

Se establece un mecanismo por el que aquella persona que no comunique el descubrimiento en áreas de protección ecológica o en la plataforma continental podrá ser castigada con pena de prisión y con la multa correspondiente.

La misma previsión se hace para el caso de nacionales o capitanes de buques en la ZEE o en la plataforma continental de otro

Estado parte o la zona internacional de los fondos marinos y subsuelo, lo que elimina una de las grandes lagunas la Convención¹⁰⁴.

Vamos a centrarnos ahora en una cuestión que atañe a varios Estados y en concreto a Italia, como es la regulación del patrimonio del Mediterráneo¹⁰⁵. En la Convención sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay en 1982, existe una laguna al respecto relativa a las normas que son de aplicación a los objetos de relevancia arqueológica e histórica que se encuentren en la plataforma continental y la ZEE. Si este vacío normativo no se cubre puede dar lugar a una consecuencia inaceptable, esto es, el riesgo de que se deje gran patrimonio cultural sin protección alguna. Todo ello sin que esta necesidad de regulación constituya un detrimento del principio de libertad del mar existente.

Es lógico pensar que los Estados con un mayor patrimonio cultural subacuático y, en este caso, Italia por su bagaje histórico, son los encargados y mayores beneficiados de que exista una regulación plena en cuanto a su herencia y ello ha de redundar en una eficaz

¹⁰⁴ I. PAPANICOLOPULI, “La zona contigua archeologica e la sua delimitazione”, *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, Giuffrè editore, 2004, pp. 44-79.

¹⁰⁵ G. CAMARDA, “La normativa nazionale ed internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Considerazioni introduttive ad un recente convegno”, *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003/1, 2003, p.3. y M. MARCHESINI, “Strumenti per la protezione e la volarizzazione turistica del patrimonio culturale marino nel mediterraneo”, *Trasporti-diritto, economia, politica*, 2001, n°. 84, pp. 215-230.

protección de los bienes arqueológicos sumergidos y garantizar así los intereses de la comunidad internacional.

En consonancia con lo anterior, ya declaraba LA PIRA que “el hombre, la civilización, espiritualidad y cultura mediterráneos, a lo largo de los siglos han echado raíces y tienen y tendrán una función duradera en la construcción de la nueva historia del mundo”¹⁰⁶.

Por último, vamos a ver algunas cuestiones en cuanto a la determinación de las leyes que han de regular la propiedad del bien mueble que se transfiere al extranjero.

Se admite aquí el principio de extender la noción de territorio a las naves que enarbolan la bandera de Italia, es decir, es como si el Estado italiano se ampliara y llegara allá donde se encuentren sus navíos.

Se entiende como derecho personalísimo y potestad exclusiva del Estado las cuestiones relativas a la propiedad, extendiendo su ámbito también a las relativas a la transferencia de la propiedad.

Otra cuestión es pretender que los Estados extranjeros en donde se encuentra el bien en el momento de la adquisición respeten el vínculo de la no comercialidad que se ha impuesto en la legislación italiana sobre el patrimonio subacuático, a no ser que estos Estados formen

¹⁰⁶ G. LA PIRA, *Estudios sobre el hombre mediterráneo*, Túnez, 1968, p. 57.

parte de un Tratado Internacional como la Convención de la Unesco que obligue a la restitución de algunos objetos por formar parte del Patrimonio Cultural de Italia.

En lo relativo al uso de instrumentos de cooperación internacional en materia penal, el art.18 del Tratado dispone que será el Estado (Italia) el encargado de adoptar medidas, velar por su cumplimiento y, en definitiva, el único con potestad para aplicar sanciones y ejecutar sentencias, a falta de la existencia de acuerdos generales entre los Estados en materia penal, pues sólo existen acuerdos bilaterales en materias específicas.

B. Francia

En Francia el patrimonio cultural es entendido de forma extensa, incluyéndose en él: el patrimonio natural como parques, jardines, sitios naturales, entre otros; el patrimonio industrial, científico y técnico; el patrimonio marítimo y fluvial; el patrimonio cultural material; y también el patrimonio arqueológico como enclaves megalíticos o el patrimonio subacuático¹⁰⁷.

Respecto al Derecho francés, en el caso del patrimonio cultural subacuático, la materia aparece regulada en la Ley de 24 de noviembre de 1961 y en legislación complementaria que distingue el salvamento

¹⁰⁷ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, p. 150.

marítimo (*la assistance*) de la recuperación de pecios (*sauvetage des épaves*). Dicha regulación considera que constituyen pecios los buques y aeronaves en el mar en estado de innavegabilidad y sus cargamentos. Se reputa pecio tanto el buque como sus restos¹⁰⁸.

Francia dispone desde hace años de normas específicas sobre Patrimonio Cultural Subacuático, concretamente, de la Ley 90-874, de 1 de diciembre de 1989¹⁰⁹, que derogó otra de 1941¹¹⁰ y que ha venido regulando de manera específica el patrimonio arqueológico submarino. En este sentido, sus normas siguen estando presentes en el ordenamiento jurídico francés a través de los preceptos del *Code du patrimoine*, en adelante Code, en vigor desde 2004. En defecto de aplicación de estas normas, siempre se pueden aplicar las normas relativas a la arqueología contenidas en las Leyes n.º. 2001-44, de 17 de enero, sobre Arqueología Preventiva, o la Ley n.º. 2003-707, de 1 de agosto de 2003, que autoriza a cualquier persona física o jurídica,

¹⁰⁸ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, n.º. 25, 2015, p. 63; F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, pp. 143-154; J. RODRIGO DE LARRUCEA, “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, n.º. 6964, Sección Tribuna, 10 de junio de 2008, Año XXIX, Ref. D-182, Editorial LA LEY, pp. 5-6; S. S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, Publications on Ocean Development, Brill Academic, Leiden, 2007, p. 60.

¹⁰⁹ El nombre original de dicha ley es “*Loi n.º. 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques*”

¹¹⁰ Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

pública o privada, a solicitar una autorización para realizar excavaciones preventivas¹¹¹. Como apunta LÓPEZ RAMÓN al hablar de la regulación gala, “la diversificación no es sólo sinónimo de modernización y de una mejor protección, sino que además acrecienta la complejidad del régimen jurídico aplicable al patrimonio cultural”¹¹².

La pronta regulación de esta materia se debe a la influencia e importancia que tuvo durante el siglo pasado la figura de Jacques-Yves Cousteau, figura emblemática en la investigación de los fondos marinos que, entre otras cosas, fue el coinventor de un método de buceo autónomo que permitió la exploración de los fondos marinos sin requerir de pesadas escafandras (técnica empleada hasta el momento)¹¹³. Francia forma parte de la Convención de 2001 y como tal su propia regulación es influenciada por ésta y comparte rasgos comunes.

De manera resumida, el *Code* dispone que los bienes culturales marítimos son los yacimientos, pecios, vestigios o, en general, todo bien que presente un interés prehistórico, arqueológico o histórico y que se encuentre situado en el dominio público marítimo¹¹⁴ o en el fondo del

¹¹¹ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p. 152.

¹¹² F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p. 152.

¹¹³ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, Publications on Ocean Development, Brill Academic, Leiden, 2007, p. 60.

¹¹⁴ Art. L532-1 del Code.

mar en la zona contigua¹¹⁵, por lo que, a pesar de la amplitud de esa expresión (*biens culturels maritimes*), la misma está reservada exclusivamente a los objetos arqueológicos aparecidos en el dominio público marítimo (aguas interiores y mar territorial) o en la zona contigua francesa. Los objetos sumergidos en otros espacios marinos no son incluibles en dicha expresión, como tampoco lo son, obviamente, los sumergidos en aguas continentales¹¹⁶.

Todo bien que presente un interés de los citados y que esté situado en el dominio público marítimo, cuyo propietario no pueda ser encontrado, pertenece al Estado. Toda persona que descubra un bien cultural marítimo está obligada a dejarlo en su sitio y a exponer el descubrimiento a la autoridad administrativa competente (que es la estatal marítima) como máximo en 48 horas desde el descubrimiento o desde que se produzca la llegada a tierra.

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

¹¹⁵ Art. L532-2 del Code

“Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.

Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat”.

¹¹⁶ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, nº. 25, 2015, p. 63.

El mismo *Code* contiene disposiciones penales destinadas a castigar el expolio de los bienes culturales marinos¹¹⁷. Estas sanciones varían en cuanto a la acción cometida; la mayoría de ellas tiene un contenido económico y buscan rehabilitar la zona o recuperar los efectos sustraídos o deteriorados. Nuestro vecino del norte, hasta no hace mucho, fue un Estado reacio a ratificar la Convención de 2001¹¹⁸, siendo su principal argumento que la regulación podía atentar contra varios principios tradicionales sentados en la CNUDM, pues varios de los artículos de la primera podían entenderse que concedían a los Estados ribereños ciertos derechos inexistentes en la segunda, y, además, que no se respetaba el principio de inmunidad de los restos de buques de guerra y de Estado¹¹⁹.

La ratificación se produjo a través de la Ley 2012-1476, de 28 de diciembre de 2012, llevándose a cabo el 7 de febrero de 2013, puesto que Francia es un Estado con pasado histórico militar y marítimo muy amplio fruto de ser una potencia militar, condición que sigue manteniendo hasta la actualidad. Por ello prevaleció la idea de que al adoptar la Convención de 2001 se protegía los pecios y restos

¹¹⁷ El LIBRO V de Arqueología, en su Título IV, Capítulo 4. Enumera tres secciones sobre disposiciones penales, la primera es relativa a la arqueología terrestre y subacuática, la segunda abarca los bienes culturales marítimos y la tercera trata de disposiciones comunes que afectan a las dos secciones anteriores.

¹¹⁸ I. PAPANICOLOPULI, “La zona contigua archeologica e la sua delimitazione”, *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, Giuffrè editore, 2004, p. 50.

¹¹⁹ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 63.

esparcidos por todo el mundo, dejando a la protección del *Code* como norma interna solamente las zonas de dominio público marítimo francés (aguas interiores, mar territorial, zona contigua)¹²⁰.

En cuanto al fomento de usos alternativos que permitan la conservación de los fondos que constituyen el patrimonio cultural subacuático, Francia está realizando una tarea ardua. En Francia no tienen la filosofía de mantener los territorios costeros en las condiciones actuales como la vía adecuada para su conservación, es decir, permiten la modificación o restauración del mismo y no el mero acotamiento y visita. Por ello, se han establecido zonas de planificación espacial en la que tenga cabida una visión jerárquica de la distribución y la organización espacial del patrimonio marítimo¹²¹. Es decir, se busca que las zonas en las que se encuentra el patrimonio cultural subacuático sea explotado de la mejor forma posible, permitiéndose para ello todo tipo de actividades que consigan desarrollar su mayor difusión y no su mantenimiento estático y restringido al público.

No obstante, hasta el momento, estos proyectos han tenido dificultades para pasar de la teoría a la práctica, dada la crisis económica

¹²⁰ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 62.

¹²¹ VV.AA., “Le patrimoine maritime culturel: de l’inventaire à l’action (exemple des espaces côtiers bretons)”, *UNIV-BREST. Le littoral: subir, dire, agir, Jan 2008*, UNIV-BREST Lille, France. *Thème 2: Identités et Représentations*. 2008, p. 4.

mundial de los últimos años, que ha hecho que no se destinen medios suficientes a este tipo de acciones¹²².

C. Portugal

Portugal ha sido uno de los países pioneros en la protección de patrimonio arqueológico subacuático¹²³. Muchos de los preceptos de la normativa portuguesa sirvieron inspiración en la elaboración de la Convención de 2001¹²⁴.

Desde mediados del siglo pasado, Portugal empezó a proteger el patrimonio arqueológico náutico y subacuático¹²⁵. Aunque la

¹²² VV.AA., *Le patrimoine maritime culturel: de l'inventaire à l'action (exemple des espaces côtiers bretons)*, cit., p. 4.

¹²³ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, pp. 87-119.

¹²⁴ F. J. S. ALVES, "Portugal's Declaration During the Negotiation of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: International Protection and Cooperation versus *Possession*", *Nautical and Underwater Archaeology, Faculty of Social and Human Sciences, Lisbon New University J Mari Arch* (2010) 5, pp.159-162; G. BARCELOS DE FREITAS, "Arqueologia Subaquática: as legislações brasileira e portuguesa a luz da Convenção sobre a proteção do Patrimônio Cultural subaquático de 2001", (<http://www.webartigos.com/artigos/arqueologia-subaquatica-as-legislacoes-brasileira-e-portuguesa-a-luz-da-convencao-sobre-a-protecao-do-patrimonio-cultural-subaquatico-de-2001/92877> consultado el 18 de agosto de 2017).

¹²⁵ L. INFANTINI DA ROSA, *Arqueologia e património subaquático: as relações entre ciência, Estado e sociedade em Portugal*, Dissertação para a Obtenção do Grau de Mestre em Aqueologia, Universidades do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e sociais, p. 129; I. C. BARREIRA PEREIRA, "Protecção e salvaguarda do património cultural subaquático", pp. 180-187; A. A. SILVEIRA MARTINS, *Fontes para o Estudo da Arqueologia Naval em Portugal. Do século XII a meados do século XVI*, Academia Marinha. 1996, Lisboa, pp. 7-51; *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., pp. 97-104.

búsqueda y recuperación de las naves portuguesas puede remontarse hasta los inicios del reino lusitano, quizás influenciado por el pasado romano y la veneración a los antepasados y misticismos del mar¹²⁶, de forma especial este fenómeno se produce entre el final de la reconquista y en la época de los descubrimientos¹²⁷.

Los archivos históricos han permitido documentar dónde se han producido los naufragios, lo que ha incidido en la toponimia, que, junto con el saber popular de los habitantes de la zona, ha permitido que se conozcan multitud de espacios que pueden albergar patrimonio arqueológico subacuático¹²⁸. A modo de ejemplo, se encuentra la pequeña localidad de Buarcos¹²⁹.

La primera norma que estableció algún tipo de referencia al patrimonio cultural subacuático fue el Decreto-Lei nº. 416/70, aunque ya existían normas anteriores como el Decreto de 1 de diciembre de 1892 o el Decreto-Lei nº. 5708 de 10 de mayo de 1919, que estipulaban

¹²⁶ J. VERDUGO SANTOS, “La formación del concepto de tutela del Patrimonio Cultural en la Antigüedad. Monumento y objeto arqueológico en el Derecho Romano”, *Revista General de Derecho Romano*, nº. 25, 2015, pp. 45-53.

¹²⁷ A. A. SILVEIRA MARTINS, *Fontes para o Estudo da Arqueologia Naval em Portugal. Do século XII a meados do século XVI*, Academia Marinha, 1996, Lisboa, pp. 7-51.

¹²⁸ A. A. SILVEIRA MARTINS, “podemos constatar por todo o litoral a existência de diversificados topónimos que poderão indicar vestígios de carácter marítimo e que se deverão tomar como focos de interesse e de partida para novas prospecções”; A. A. SILVEIRA MARTINS, *Fontes para o Estudo da Arqueologia Naval em Portugal. Do século XII a meados do século XVI*, Academia Marinha, 1996, Lisboa, p. 8.

¹²⁹ A. A. SILVEIRA MARTINS, *Fontes para o Estudo da Arqueologia Naval em Portugal. Do século XII a meados do século XVI*, cit., p.44.

las formas de adjudicación de los bienes perdidos en el mar, qué debía entenderse por descubrimientos y algunas otras cuestiones sobre los naufragios y pecios hundidos¹³⁰. En 1959 el *Centro Português de Atividades Subaquáticas* promovió en Troia (Portugal)¹³¹ la primera misión subacuática portuguesa¹³². A partir de los 80 se refuerza el carácter científico con la creación del Museo Nacional de Arqueología que englobaba la arqueología marina, a través de *Arqueonáutica, Centro de Estudos*, siendo este el inicio de la disciplina de la arqueología náutica y subacuática¹³³. En 1997 se crea el Instituto Português de Arqueología, a través del cual se desarrollaron intervenciones preventivas e investigaciones.

El Diário de República I Série A nº. 146 de 27 de junio de 1997, recoge el Decreto-Lei nº. 164/97 de 27 de junio, que tiene como finalidad armonizar el patrimonio y la arqueología subacuática.

La actual norma es la Ley 107/2001, de 8 de septiembre, que establece las bases de la política y el régimen de protección y puesta en

¹³⁰ Exposición de motivos del Decreto-Lei nº 416/70.

¹³¹ Troia es una restinga arenosa con más de 25 km de longitud y 0,5 a 1,5 km de anchura, en el litoral de la freguesía de Carvalhal, en el municipio de Grândola, entre el océano Atlântico (a oeste) y el estuario del río Sado (al este).

¹³² C. PIMENTAL FONSECA, “A Terra Sigillata do Fundeadouro de Tróia”, *Revista portuguesa de arqueologia*, vol. 7, nº. 1, 2004, pp. 421-449.

¹³³ L. MÁRQUEZ CARMONA, “Fuentes de información existentes en Internet sobre el patrimonio cultural marítimo de Portugal”, *PH 38. Arqueología Subacuática*, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pp. 105-116.

valor del patrimonio cultural en el capítulo dedicado al patrimonio arqueológico¹³⁴. Los rasgos más destacados de dicho capítulo son:

Cuando la ley describe los bienes que integran el patrimonio arqueológico, incluye los que se encuentran sumergidos en el mar territorial y en la plataforma continental.

Todos los bienes arqueológicos, incluidos los subacuáticos, constituyen patrimonio nacional, estando bajo la competencia del Estado y de las Regiones Autónomas.

Cualquier tipo de intervención o trabajo arqueológico será dirigido por arqueólogos y deberá obtener la correspondiente autorización que concederá la administración competente en patrimonio cultural.

El régimen de hallazgos casuales es aplicable tanto a descubrimientos terrestres como subacuáticos. El ordenamiento portugués cuenta en la actualidad con normas específicas para el patrimonio cultural subacuático, constituidas por el Decreto Ley nº. 164/97, de 27 de junio, dictado con la finalidad de armonizar la legislación que rige la actividad arqueológica en los medios

¹³⁴ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, nº. 25, 2015, pp. 49-73; F. CLAUDINO, *O que é o património cultural subacuático*, Comissão Nacional da UNESCO – Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2016, pp. 7-12.

subacuáticos con la aplicable a la actividad arqueológica en el medio terrestre¹³⁵.

Esa armonización lo que pretendió realmente es desterrar la práctica hasta entonces existente de la explotación comercial del patrimonio arqueológico subacuático portugués, que venía siendo denunciada y contestada por la doctrina, y reconducir esta actividad a un enfoque estrictamente científico, tal y como venía ocurriendo con la arqueología terrestre. Por lo demás, interesa destacar de esta regulación la amplitud de la definición de patrimonio cultural subacuático, en la que no se exige un plazo de permanencia de los objetos arqueológicos bajo el agua, y en la que no se menciona a la plataforma continental como espacio en donde puede encontrarse este patrimonio; si bien ya se ha visto que la Ley 107/2001 sí menciona dicho espacio marino, junto al mar territorial, como lugar donde puede encontrarse patrimonio cultural subacuático, sujeto por tanto a la normativa portuguesa¹³⁶.

Otras puntualizaciones a destacar son:

Se asigna al Estado la propiedad del Patrimonio Cultural Subacuático siempre que no se pueda acreditar un propietario conocido (artículo 2).

¹³⁵ F. ROEDER, “Património arqueológico subaquático: um mar de oportunidades em Portimão”, *Book on proceedings vol.1 International Conference on Tourism & Management Studies*, Algarve, 2011, p. 789.

¹³⁶ Portugal ratificó la Convención de 2001 a través del Decreto do Presidente da República nº 65/2006 de 16 de julio.

Se promueve el inventario de los objetos subacuáticos a los que se otorgue valor cultural, e igualmente de los sitios arqueológicos subacuáticos (artículos 3 y ss.).

Se regula la utilización de aparatos de detección en los trabajos arqueológicos subacuáticos, que necesita en todo caso autorización de la administración competente, con independencia de la autorización que precise la realización de tales trabajos.

Se regulan específicamente los hallazgos arqueológicos subacuáticos, con normas dedicadas al depósito interino de los descubrimientos y a las recompensas y derechos del hallador¹³⁷.

A pesar de que la normativa portuguesa es una de las más extensas, hay ciertos contenidos que difieren de lo expresado en la Convención de 2001. A modo de ejemplo, hay que indicar que Portugal, a pesar de poseer patrimonio cultural distribuido por todo el mundo derivado de haber sido una potencia colonizadora, exploradora y comercial, renuncia de manera expresa a reclamarlo. Considera que la mejor protección de su patrimonio náutico no es reivindicarlo, sino

¹³⁷ Este decreto-ley no contiene normas específicas de lucha contra el expolio del Patrimonio Cultural Subacuático, pero resultan aplicables las de la Ley 107/2001, que establece como principios generales los de lucha contra la degradación o pérdida de elementos del patrimonio cultural, así como el de responsabilidad ante los actos susceptibles de afectar a la integridad de dichos elementos (artículo 6, letras e y h). Además, esta misma ley tipifica el delito de destrucción de vestigios, bienes u otros indicios arqueológicos, infracción penal al margen de las administrativas también previstas.

cooperar con los países en los que se hallan los restos de estos buques comerciales o de guerra que portaban su pabellón, con los que en la mayoría de los casos mantendrán ciertos lazos culturales o históricos¹³⁸.

La legislación también difiere del contenido de la Convención de 2001 en varios puntos sobre cómo deben interpretarse varios términos. Por ejemplo, por "*país del sitio*" se entiende el país en el que se encuentran el fondo marino o esos restos; por "*país de bandera*" se entiende el país cuya nacionalidad se ha identificado histórica y arqueológicamente; y por "*origen cultural*" se entiende la identificación de terceros Estados que mantengan derechos preferentes por razones de origen cultural, histórico o arqueológico¹³⁹. Declara, como punto de partida, toda su disponibilidad para cooperar con cualquier país en cuyo fondo marino se encuentren restos de un patrimonio histórico y cultural común¹⁴⁰.

La cooperación portuguesa con otros Estados con los que mantiene mayores vínculos culturales o territoriales es constante a lo

¹³⁸ F. J. S. ALVES, *Portugal's Declaration During the Negotiation of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: International Protection and Cooperation versus Possession*, cit., p. 159.

¹³⁹ La traducción se ha realizado de forma literal entre lo que expone las normas portuguesas y la Convención de 2001. Habría que asimilar los conceptos a los que expone la Convención, siendo estos "país del sitio" por Estado parte que tenga jurisdicción sobre ese tipo de agua; "país de bandera" buque que enarbole su pabellón; y "origen cultural" como la identificación de los terceros Estados que mantengan un particular derecho de forma preferente por origen cultural, histórico o arqueológico.

¹⁴⁰ F. J. S. ALVES, *Portugal's Declaration During the Negotiation of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: International Protection and Cooperation versus Possession*, cit., p. 160.

largo de las últimas décadas¹⁴¹. Otro de los puntos en los que es de aplicación la Convención de 2001 en el Estado luso es la compatibilidad y promoción de las actividades económicas y la conservación del patrimonio, de manera que sean compatibles ambas¹⁴², siendo este uno de los principales objetivos de la Convención de 2001.

El fomento del buceo sirve como forma de conservar y dar a conocer el patrimonio que las costas y mares portugueses tienen, lo que puede generar una nueva industria dado el gran potencial económico y cultural. Portugal en este sentido se ha basado más en la Carta del

¹⁴¹ Los casos de Ocean y San Pedro de Alcántara naufragados en el mar territorial portugués y los casos del Galeón portugués Santísimo Sacramento en Brasil o San Antonio en Kenia.

¹⁴² L. INFANTINI DA ROSA, *Arqueologia e património subaquático: as relações entre ciência, Estado e sociedade em Portugal*, Dissertação para a Obtenção do Grau de Mestre em Arqueologia, Universidades do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e sociais, p. 123; F. ROEDER, “Património arqueológico subaquático: um mar de oportunidades em Portimão”, *Book on proceedings vol.1 International Conference on Tourism & Management Studies*, Algarve, 2011, p. 790; C. H. NUNES y F. ROEDER, “Tourism and Algarve’s Underwater Heritage Valorisation. A Case Study”, *Journal of Maritime Research*, vol. XI, nº. 1, 2014, pp. 35-44.

ICOMOS de 1996¹⁴³ que en la Convención de 2001. El fomento del buceo como actividad económica se produce debido al menor impacto

¹⁴³ Esta Carta tiene por objeto estimular la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en aguas interiores y cercanas a la costa, en mares poco profundos y en océanos profundos. Pone su énfasis en los atributos y circunstancias específicas del patrimonio cultural subacuático y debe interpretarse como un suplemento de la Carta del ICOMOS para la Gestión del Patrimonio Arqueológico de 1990. Dicha Carta define el «patrimonio arqueológico» como la parte del patrimonio material sobre el cual los métodos de la arqueología proveen información primaria, comprendiendo todos los vestigios de la existencia humana, los sitios vinculados a todas las manifestaciones de actividades humanas, estructuras abandonadas y vestigios de toda naturaleza, así como todos los objetos culturales muebles asociados con los mismos. Para el propósito de esta Carta, el patrimonio cultural subacuático se entiende como el patrimonio arqueológico que se encuentra en un medio subacuático o que ha sido removido de él. Incluye sitios y estructuras sumergidas, zonas de naufragios, restos de naufragios y su contexto arqueológico y natural.

La exposición de motivos de la misma dice lo siguiente:

“Por su propia naturaleza, el patrimonio cultural subacuático es un recurso internacional. Gran parte del patrimonio cultural subacuático se encuentra en territorio internacional y es resultado del intercambio y de las comunicaciones internacionales en las que los barcos y su contenido se perdieron lejos de sus lugares de origen o destino.

Concierne a la arqueología la conservación del entorno. En el idioma de la gestión de los recursos, el patrimonio cultural subacuático es tanto finito como no renovable. Si el mismo debe contribuir a nuestra apreciación futura del entorno, debemos asumir en el presente la responsabilidad individual y colectiva de asegurar su supervivencia.

La arqueología es una actividad pública; todos tienen el derecho de indagar en el pasado para enriquecer sus propias vidas, y cualquier acción que restrinja ese conocimiento es una violación a la autonomía personal.

El patrimonio cultural subacuático contribuye a la formación de la identidad y puede servir para afirmar el sentido de pertenencia de los miembros de una sociedad. Si se administra con sensibilidad, el patrimonio cultural subacuático puede jugar un papel positivo en la promoción de la recreación y el turismo.

La arqueología está impulsada por la investigación. Enriquece el conocimiento de la diversidad de la cultura humana a través de los tiempos y provee ideas nuevas y desafiantes sobre la vida en el pasado. Este conocimiento y estas ideas contribuyen al entendimiento de la vida de hoy y, de ese modo, anticiparnos a futuros desafíos.

Muchas actividades marinas, que son en sí mismas beneficiosas y deseables, pueden tener consecuencias desafortunadas para el patrimonio cultural subacuático si no se prevén sus efectos (...).”

que tiene sobre el patrimonio subacuático¹⁴⁴, ya que el buceador no interfiere en el entorno al ser en la mayoría de los casos un mero observador. El desarrollo de este sector habrá de analizarse en un futuro no muy lejano dadas las demandas de la sociedad y la doctrina¹⁴⁵.

Otro de los puntos en los que difiere el Convenio y la legislación portuguesa es en los proyectos arqueológicos, no tanto en las formas, pero sí en el contenido al ser más específico la portuguesa. Portugal cuenta con una norma propia en materia de proyectos de investigación y trabajos arqueológicos, *el Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos*.

¹⁴⁴ Pese a que en general la legislación portuguesa es más estricta que lo estipulado en la Convención de 2001, hay entidades gubernativas a nivel inferior al Estado que permiten esta práctica. En las propias legislaciones de ciertos lugares en los que se encuentra regulado el patrimonio cultural subacuático aparece esta contradicción. A modo de ejemplo se muestran los arts. 5 y 6 del Decreto Regulamentar Regional nº 17/2015/A. Cria o Parque Arqueológico Subaquático do Slavonia, na Ilha das Flores, que, en su versión original, dice:

“Artigo 5. Prática do mergulho amador

“No Parque Arqueológico Subaquático do Slavonia é permitida a prática do mergulho amador, cumpridas as normas legais e regulamentares que regulam aquela atividade.

Artigo 6.º Regime contraordenacional”

“As contravenções ao disposto no presente diploma em matéria de arqueologia e visitação constituem contraordenações puníveis nos termos do artigo 36.º -C do Decreto Legislativo Regional nº. 27/2004/A, de 24 de agosto, na redação atual”.

¹⁴⁵ *Património arqueológico subaquático: um mar de oportunidades em Portimão.*, cit., p. 18.

La normativa portuguesa divide los trabajos arqueológicos en cuatro categorías¹⁴⁶:

- Categoría A, acciones de investigación plurianual e integrables en el Plan Nacional de los Trabajos Arqueológicos.
- En la B) estarían las acciones de valoración para desenvolver monumentos o conjuntos con vistas a la sensibilización y a la educación,
- En la Categoría C se encuentran las acciones preventivas de minoración del impacto a través de estudios, planos, proyectos y obras con un impacto sobre el territorio o el medio subacuático y acciones de conservación de valor museográfico o no.
- Y en la Categoría D se encuentran las acciones de emergencia a realizar en los sitios arqueológicos que por acción humana o proceso natural se encuentran en peligro inminente de destrucción total o parcial, siendo esta la causa de una urgente actuación.

Para llevar a cabo los trabajos se requiere que las personas que los realicen cumplan una serie de requisitos. Estos están expuestos en el art. 4. Si bien es cierto que los trabajos arqueológicos no necesitan de

¹⁴⁶ Art. 3 del Decreto-Ley nº. 164/2014 de 4 de noviembre, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

autorización de la *Direção-Geral do Património Cultural*, en adelante DGPC, en situaciones excepcionales y de urgencia justificada, como la que se recoge en el artículo 6, se requiere un permiso especial otorgado por la *Direção-Geral do Património Cultural*¹⁴⁷. Se trata, en este caso, de trabajos de las categorías C y D. Los trabajos de las categorías A y B, según el Decreto Ley anteriormente citado, carecen de previa aprobación de los proyectos de investigación.

En cuanto al plan del proyecto, los elementos y requisitos que debe reunir de acuerdo a la legislación portuguesa son mucho más amplios que los de la Convención¹⁴⁸. Entre los elementos a destacar en ambas legislaciones, tanto en la portuguesa como en la Convención de 2001, encontramos: el extracto de la carta militar 1:25.000 y el extracto de la carta náutica en la escala más aproximada disponible; la indicación de la carta militar, la localización geográfica, administrativa y toponimia del sitio o área a intervenir, la bibliografía de referencia, el estado actual de los conocimientos y la caracterización sumaria del patrimonio histórico-arqueológico en el área envolvente, indicación del lugar donde se van a dejar los objetos encontrados durante el trabajo de campo, las cláusulas técnicas de la hoja de encargo, las medidas aplicables constantes de los documentos vinculados y que sean producidos en el ámbito de los procesos de evaluación del impacto

¹⁴⁷ Art. 6 del Decreto-Ley nº. 164/2014, de 4 de noviembre, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

¹⁴⁸ Art. 10 de la Convención de 2001 frente al art.7 del Decreto-Ley nº. 164/2014 de 4 de noviembre, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

ambiental, las formas en las que se va divulgar la investigación y la declaración de los arqueólogos académicamente habilitados de que su experiencia es superior en trabajo de campo a 120 horas, entre otros. Todos estos nuevos requisitos pueden deberse a una especial concreción de aspectos genéricos que aparecen en el art. 10 del anexo de la Convención de 2001, así como a una especial protección del patrimonio cultural subacuático por parte del Estado vecino.

En el caso de tratarse de Proyectos de la Categoría A, es decir, proyectos de investigación plurianual de hasta un máximo de 4 años, las apreciaciones técnicas y formales son más estrictas.

En cuanto a los informes finales de los trabajos realizados, también están más detallados en la legislación portuguesa que en el contenido del anexo de la Convención de 2001¹⁴⁹. El contenido de la Convención está compuesto de “(a) una descripción de los objetivos; (b) una descripción de las técnicas y los métodos utilizados; (c) una descripción de los resultados obtenidos; (d) documentación gráfica y fotográfica esencial, sobre todas las fases de la actividad; (e) recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y (f) recomendaciones para actividades futuras”. La legislación portuguesa a estos elementos añade o define de forma expresa o detallada el extracto

¹⁴⁹ Arts. 30 y ss. de la Convención de 2001 frente al art.15 del Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de noviembre, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

de la carta militar 1:25.000 y el extracto de la carta náutica en la escala más aproximada, la planta general del sitio y la georreferencias con altimetría, con indicación de las áreas intervenidas y las estructuras implantadas o el contexto identificado, entre otros.

Dentro de la documentación gráfica y fotográfica esencial se podrían incluir las fotografías impresas y en formato digital de las zonas intervenidas, ilustrando las diferentes fases del trabajo y de los vestigios encontrados e identificados, así como los bienes y objetos que se han obtenido del trabajo de campo y su resultado final para exposición en un museo o lugar cultural¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Norma 31 apartado d) del anexo de la Convención de 2001 frente al art.15 apartados i), iii), iv), v) del Decreto-Ley nº. 164/2014 de 4 de noviembre, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

Por último, la especial protección que realiza Portugal se muestra de manera clara en la declaración de yacimientos como parques arqueológicos¹⁵¹, es decir, un sitio o conjunto de sitios arqueológicos de interés nacional, integrado en un territorio envuelto y marcado de forma significativa por la intervención humana pasada. Además, ese territorio debe estar determinado por la necesidad de garantizar la preservación de los testimonios arqueológicos existentes¹⁵².

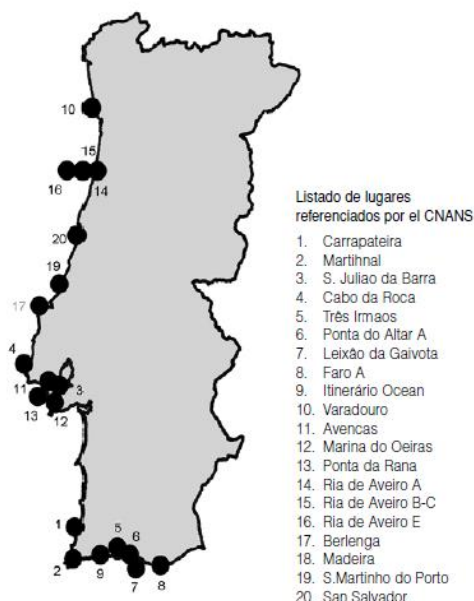
Siempre que se justifique, los parques arqueológicos pueden ser dotados de una zona de especial protección, fijada por el órgano administrativo de protección de patrimonio cultural competente, de forma que se garantice la ejecución futura de trabajos de investigación arqueológica en esa área o zona concreta. Por ello, desde el Estado se establece un plan de especial ordenación del territorio, que incluye los parques arqueológicos, estando las investigaciones que quieran desarrollarse dentro de ellos en la Categoría A. En el plan especial se

¹⁵¹ La definición enunciada en el texto está sacada de la Ley nº 107/2001 de 8 de septiembre por la que se establecen las bases de la política y del régimen de protección y valorización del patrimonio cultural. No obstante, en la exposición de motivos del Decreto Regulamentar Regional nº 17/2015/A se crea el Parque Arqueológico Subacuático do Slavonia, na Ilha das Flores, que es definido en portugués como *“espaços privilegiados de conservação do património arqueológico que, quando localizados em áreas adequadas, propiciam locais de visita que aliam o valor intrínseco dos bens arqueológicos neles presentes às características dos fundos e da biodiversidade marinha existente no mar dos Açores”*. En esta definición se puede ver cómo se adapta la legislación general al caso concreto de la legislación territorial, en este caso las Islas Azores, por lo que la definición varía al completar tanto los fondos como la biodiversidad, junto con la característica de lugar de visita.

¹⁵² Art. 74.3 de la Ley nº 107/2001 de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases de la política y del régimen de protección y valorización del patrimonio cultural.

deberán detallar cuáles son los objetivos y el contenido material documental para su desenvolvimiento práctico, tanto para su protección y conservación como para las tareas investigativas a través de trabajos de campo¹⁵³.

PORTUGAL. CARTA ARQUEOLÓGICA DE YACIMIENTOS SUBACUÁTICOS



Fuente: CNANS a través de L. MÁRQUEZ CARMONA. “Fuentes de información existentes en Internet sobre el patrimonio cultural marítimo de Portugal” *Arqueología Subacuática*, PH Boletín 38. La imagen sólo refleja los yacimientos subacuáticos del Portugal continental, dejando fuera de este mapa aquellos yacimientos que se

¹⁵³ Art. 75 de la Ley nº 107/2001 de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases de la política y del régimen de protección y valorización del patrimonio cultural.

encuentran en los archipiélagos del Atlántico o en otras áreas de jurisdicción portuguesa.

Ejemplos de estos parques arqueológicos los encontramos en el Decreto *Regulamentar Regional* nº 17/2015/A que crea el Parque Arqueológico Subacuático de Slavonia en la Isla de las Flores¹⁵⁴. La fundamentación de la declaración de este parque¹⁵⁵ se debe al navío Slavonia, nave inglesa hundida en dichas aguas y que sirve como recordatorio del pasado colonial y del comercio triangular entre América, Europa y África, en el que se intercambiaban esclavos por productos de las colonias y de la metrópoli. La declaración del Slavonia no se basa solo en el valor histórico y cultural de pecio, sino en el entorno, puesto que en sus restos se han establecido muchas especies dando lugar a una verdadera simbiosis con el entorno natural y con alto valor debido a su biodiversidad¹⁵⁶.

¹⁵⁴ La denominación original de la norma es Decreto Regulamentar Regional nº 17/2015/A. Cria o Parque Arqueológico Subaquático do Slavonia, na Ilha das Flores.

¹⁵⁵ Este parque es uno de los que no aparece en el cuadro situado en el archipiélago de las Azores.

¹⁵⁶ La exposición de motivos del Decreto Regulamentar Regional nº 17/2015/A que crea el Parque Arqueológico Subacuático de Slavonia, en la Ilha das Flores establece: “(...) *Por outro lado, a proteção dos restos afundados do Slavonia permite a conservação e salvaguarda da biodiversidade marinha existente naquela zona, representativa dos ambientes costeiros da região, pois esta estrutura submersa proporciona substrato para a colonização de organismos sésseis, criando um ambiente similar aos recifes naturais costeiros do Mar dos Açores, nos quais se abrigam espécies marinhas de importância ecológica e económica. É de notar que a área onde se encontra o Slavonia está classificada como Área de Proteção e Conservação da Natureza no Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha das Flores, aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional nº. 24/2008/A de 26 de novembro, e está classificada como Área de Reserva para a Gestão de Capturas, nos*

3. Common Law

Diferentes orientaciones han recogido los países del *Common Law*, y de manera particular los Estados Unidos y Reino Unido, que se han inclinado por incluir tales actividades en el concepto de salvamento marítimo. En el primero de ellos los pecios (*wrecked property*) quedan sujetos al salvamento. La Ley de buques naufragados, *Abandoned Shipwreck Act 1987*, excluye del salvamento determinados bienes y atribuye su titularidad al Estado en determinados supuestos, entre ellos que el mismo “*se encuentre en territorio del Estado y pendiente de inclusión en el Registro Nacional-Sección 2105*”¹⁵⁷.

El Derecho inglés sigue igual tratamiento que el ordenamiento americano en relación con su consideración como salvamento. Su regulación aparece recogida en la Sección 510 de la *Mercant Shipping Act* de 1894.

En el sistema jurídico anglosajón aparecen dos instituciones, el *law of salvage* y el *law of finds*. Estas instituciones, aun siendo

termos da Portaria n.º 1/2014 de 10 de janeiro. Assim, este sítio observa cumulativamente o regime definido pelo presente diploma e os regimes estabelecidos pelo decreto regulamentar regional e pela portaria supra referidos, nomeadamente quanto a atos e atividades interditas ou condicionadas (...)”.

¹⁵⁷ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, 25, 2015, pp. 60-66; J. RODRIGO DE LARRUCEA, “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, n.º. 6964, Sección Tribuna, 10 de junio de 2008, Año XXIX, Ref. D-182, Editorial LA LEY, pp. 5-6.

parecidas a nuestros salvamentos, hallazgos y extracciones, resultan radicalmente distintas en lo que se refiere a los títulos de propiedad. El *law of finds* está encaminado a que se declare un derecho de propiedad al hallador sobre los bienes objeto del hallazgo similar a nuestro derecho de ocupación. El *law of finds* es perfectamente compatible con el *law of salvage*, ya que el sistema anglosajón permite solicitar a los tribunales una sentencia declaratoria de la propiedad sobre la cosa (*actio in rem*) en base al *law of finds*, y solicitar igualmente derechos de salvamento para el supuesto de que no se reconozca el derecho de propiedad.

Para que se pueda aplicar este derecho hemos de encontrarnos en el supuesto de bienes culturales subacuáticos abandonados que no gozaran del principio de inmunidad soberana o que no estuvieran afectos a algún Estado. Estas condiciones harían de ellos objeto de comercio y perderían su especial régimen de protección.

Estas figuras, a diferencia de la legislación española en la que considera como un todo unitario tanto la nave como la carga, permiten la explotación privada y comercio de los bienes. Ello ha dado lugar a cierta litigiosidad entre diferentes países¹⁵⁸. Como exponen GOÑI ETCHEVERS y FUENTES CAMACHO “para concluir nuestro análisis, procede detenerlo en la posibilidad de considerar el cargamento como bienes que no merecen la especial protección

¹⁵⁸ Caso Odyssey.

dispensada por la LPHE. Desde este último punto de vista, las monedas tienen la naturaleza de simples bienes muebles, con la única peculiaridad de que al tiempo de su rescate se encontraban situadas en los fondos marinos. Ésta es la calificación de los bienes que nos parece, con diferencia, más acertada en orden a determinar su ley aplicable”¹⁵⁹.

A. Reino Unido

Después de esta breve introducción acerca del derecho del mundo anglosajón o de *Common Law*, analizaremos la situación normativa en el Reino Unido e Irlanda del Norte. El Reino Unido no forma parte de la Convención de 2001 por diversas razones, pese a que, por su gran pasado colonial, y como potencia marítima y mundial, le hubiera beneficiado el adoptar el contenido normativo como al final hizo Francia. Uno de los principales motivos de esta negativa es la definición que establece la Convención sobre el ámbito de protección, ya que se requieren más de 100 años desde que se produjo el incidente que contienen los restos. Esto se debe a que durante el siglo XX se produjeron varios enfrentamientos militares mundiales y otros conflictos menores en los que el Imperio Británico extendía su territorio a lo largo de todo el mundo. Ello implicaría que se dejasen fuera muchos de los posibles yacimientos o pecios que podrían ser objeto de la arqueología subacuática. A continuación, se detallará de forma breve la

¹⁵⁹ J.L. GOÑI ETCHEVERS y V. FUENTES CAMACHO, “Otro punto de vista sobre el caso Odyssey”, *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, nº. 28, 2014, p. 12.

legislación que posee Reino Unido sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.

La primer norma que regula la materia es la “*Protection of Wrecks Act de 1973*”¹⁶⁰ que surge a raíz de los debates y concienciación producidos en los años 60 y 70 del siglo pasado como una medida de protección de los lugares de especial interés histórico o de gran valor arqueológico para evitar su destrucción¹⁶¹.

La ley prevé que los naufragios podrán ser declarados zona de protección debido a su valor histórico, arqueológico o artístico¹⁶². Estos naufragios están marcados en las Cartas del Almirantazgo y su ubicación física se señala con una boya (Wreck Protegida), así como paneles de información se proporcionan a menudo en los puntos cercanos terrestres.

Constituye delito intervenir una zona declarada de este tipo sin licencia, estando solamente permitidas la navegación, la pesca y el baño siempre que no se interfieran en los restos del naufragio. Se requerirá

¹⁶⁰ El título completo de dicha ley es el siguiente: “*An Act to secure the protection of wrecks in territorial waters and the sites of such wrecks, from interference by unauthorised persons; and for connected purposes*”.

¹⁶¹ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, Brill Academic, Leiden, 2007, pp. 314-341.

¹⁶² La Sección 2 de la *Protection of Wrecks Act* de 1973 comprende la declaración de lugares peligrosos.

licencia especial para bucear en sus inmediaciones y lo mismo ocurre con el anclaje en dicha área, pues también requiere autorización¹⁶³.

La autoridad para conceder esa autorización varía dependiendo de la entidad territorial a la que se esté haciendo referencia, es decir, si nos encontramos en aguas de Inglaterra, la entidad competente será la *Historic England*. En aguas de Gales será Cadw (*the Welsh historic monumensts executive agency*). En Irlanda del Norte la entidad responsable es *Envioirement and Heritage Service of the Departament of the Envioronment forn Northern Ireland*, y en el supuesto de tratarse de aguas escocesas la competencia recae en la *Historic Scotland*¹⁶⁴.

La “*Protection of Wrecks Act de 1973*”, ha inspirado a que otras entidades dependientes y con vinculación al Reino Unido desarrollen su propia legislación. Por esta razón las Islas Malvinas, en julio de 1977, aprobaron una ley similar¹⁶⁵.

Posteriormente, el Reino Unido dictó la *Ancient Monuments and Archeological Areas Act 1979*¹⁶⁶ para salvaguardar los monumentos

¹⁶³ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 324.

¹⁶⁴ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 322.

¹⁶⁵ Aunque en el mundo anglosajón se suelen utilizar el término *Falkland*.

¹⁶⁶ El título completo de dicha ley es el siguiente: “*An Act to consolidate and amend the law relating to ancient monuments; to make provision for the investigation, preservation and recording of matters of archaeological or historical interest and (in connection therewith) for the regulation of operations or activities affecting such matters; to provide for the recovery of grants under section 10 of the Town and Country Planning (Amendment) Act 1972 or under section 4 of the Historic Buildings*

arqueológicos. En ella se definen los monumentos antiguos que merecen la protección desde el punto de vista nacional, siendo la traducción empleada de la definición la siguiente: “cualquier edificio, estructura o trabajo por encima o por debajo de la superficie de la tierra, cualquier cueva o excavación; cualquier sitio que comprenda los restos de cualquier edificio, tales como, la estructura o cualquier cueva o excavación; y cualquier sitio que comprenda los restos de cualquier vehículo, buque o aeronave u otra estructura móvil o parte del mismo”¹⁶⁷. La Ley sirvió como cambio para introducir el concepto de áreas de importancia arqueológica (*Areas of Archaeological Importance*), como centros de protección y como lugares de una protección especial.

La siguiente norma que protege el patrimonio en Reino Unido fue la *Protection of Military Remains Act 1986*, cuyo objeto es la protección de los restos de aviones y naufragios. Por ello se busca la creación de lugares de descanso de los muertos en acciones bélicas¹⁶⁸. Esta materia ha sido objeto de conflictos entre la Convención de 2001 y la legislación interna, siendo uno de los principales motivos por los que el Reino Unido no ha ratificado la Convención.

and Ancient Monuments Act 1953 in certain circumstances; and to provide for grants by the Secretary of State to the Architectural Heritage Fund”.

¹⁶⁷ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 326.

¹⁶⁸ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 329.

La ley prevé dos tipos de protección de los sitios (*protected places*) y lugares controlados (*controlled sites*), diferenciando entre aviones militares y barcos. Los primeros se protegen de manera automática y en los segundos se debe indicar de manera específica.

De acuerdo con esta ley, los lugares protegidos serían naufragios y accidentes con un nombre, aunque no se conozca con exactitud la zona donde ocurrió. Los restos de un avión militar son un lugar protegido de manera automática, pero los naufragios deben ser designados como un lugar de protección y abarcan como criterio temporal desde el 4 de agosto de 1914, momento en el que entró Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Los buzos pueden visitar el sitio, pero la regla es investigar sin tocar o sustraer ningún objeto. La ley relativa a los lugares protegidos se aplica en cualquier parte del mundo, pero en la práctica, fuera de Gran Bretaña, las sanciones sólo pueden ser ejecutadas contra ciudadanos británicos, embarcaciones de bandera británica o barcos o buques que desembarcan en el Reino Unido, a no ser que se pueda justificar por otra normativa nacional o por tratados entre diferentes países. La primera y única licencia concedida con respecto a un buque designado un lugar protegido se le concedió a Mike Williams, de la Sociedad de Arqueología Náutica, para un proyecto y así conmemorar el 75 aniversario de la pérdida del submarino M2.

Los sitios controlados (*protected places*), por el contrario, deben ser designados de manera específica por la ubicación en la que se encuentren los restos del barco o avión, siendo ilegal cualquier tipo de

operación en dicha zona y estando prohibido incluso el buceo. Las actividades y concesiones en estos lugares sólo se autorizan siempre que se crea que ya no hay constancia de que sigue habiendo restos humanos. La autoridad responsable de la concesión de estas autorizaciones es el Ministerio de Defensa. Su ubicación se determina por medio de una boya en el lugar donde se encuentran los restos¹⁶⁹.

Actualmente, el número de designaciones en ambas categorías es de 61, correspondiéndose a 49 lugares protegidos y a 12 sitios controlados. Se incluyen entre los barcos y aeronaves hundidos, y que forman patrimonio cultural subacuático, bienes con otro pabellón. En la mayoría de los casos, las naves y aeronaves tenían bandera alemana, dado que fue el principal enemigo del Reino Unido durante la primera mitad del siglo XX.

B. Estados Unidos

a) Introducción

Estados Unidos tiene toda una serie de políticas y normas jurídicas que protege los bienes que forman parte del patrimonio cultural histórico, entre los que se incluyen los bienes integrantes del patrimonio cultural subacuático.

¹⁶⁹ S. DROMGOOLE, *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, cit., p. 333.

No obstante, todas estas políticas y normas jurídicas, regulan principalmente dicho patrimonio cuando éste se encuentra en un terreno de dominio público. Sin embargo, esta situación difiere en relación a aquellos bienes de patrimonio cultural que se hallan sujetos al dominio privado. Esta diferencia se debe a la importante protección que la Constitución de los Estados Unidos, según su quinta enmienda, brinda a la propiedad privada. En relación a ello, la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la ocupación de la propiedad privada para someterla a un uso público, sin la previa indemnización.

Debido a esta situación, el régimen jurídico aplicable a los bienes que forman el patrimonio cultural americano, presentará grandes divergencias dependiendo de su titularidad pública o privada.

En lo referente a los bienes de titularidad privada, tradicionalmente se ha aplicado tanto el *law of finds*, como el *law of salvage*, típicos del derecho anglosajón, tal y como se ha referenciado al abordar esa cuestión en el common law en páginas anteriores. En base a estas disposiciones legales, se incide nuevamente en que, en el derecho anglosajón, el derecho a la propiedad de bienes encontrados cuya propiedad es desconocida, pertenece a aquél que verifique el hallazgo.

Esta situación comenzó a cambiar tras la Sentencia *Klein vs Unidentified, Wrecked and Abandoned Sailing Vessel*¹⁷⁰ (17 de agosto de 1983), la cual otorgó la propiedad de un buque hallado por un particular al Estado americano, basándose en que el buque se hallaba ubicado dentro de las tres millas del límite del mar territorial americano y, además, estaba dentro de una propiedad perteneciente al gobierno americano, tratándose del parque natural Biscayne National Monument¹⁷¹.

Tras esta sentencia, distintos Estados federados solicitaron al Congreso Federal de los USA que aprobaran una legislación para regular estos supuestos, basándose en el contenido de dicha resolución, pues carecían de legislación sobre la protección del patrimonio cultural, algo que provocaba una situación de inseguridad jurídica.

b) Legislación aplicable sobre patrimonio cultural subacuático

Como consecuencia de las diferentes solicitudes por parte de los Estados federados al Congreso Federal, se aprobaron una serie de disposiciones defendiendo el interés público frente al interés de los particulares. Entre ellas se pueden destacar la RMS Titanic Maritime Memorial Act, de 1986, Abandoned Shipwreck Act, de 1987, la

¹⁷⁰ VARMER, O., “United States of America”, *The protection of the underwater cultural heritage*, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, 2006, p. 354.

¹⁷¹ Se trata de un parque natural ubicado en Florida, al sur de la ciudad de Miami. Es un parque que ostenta la segunda categoría dentro de los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y, e 95% de su extensión es acuática.

National Marine Sanctuaries Act, que fue originariamente aprobada en 1972, y posteriormente enmendada en sucesivas ocasiones el sentido de la sentencia *Klein vs Unidentified, Wrecked and Abandoned Sailing Vessel* de 1987, (la última enmienda fue introducida en 2000) y la Sunken Military Craft Act, de 2004.

A continuación, se explicarán cada una de ellas por separado.

1. RMS Titanic Maritime Memorial Act

Tras el hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912, miles de personas se interesaron por conocer la zona del naufragio. Con esta norma jurídica los Estados Unidos buscaron proteger el patrimonio cultural subacuático que se encontrase en esta zona y, en virtud de ello, se aprobaron varias leyes para regular la investigación, exploración y rescate en esta zona marítima.

No obstante, dado que el lugar de colisión se encontraba a más de 350 millas náuticas del territorio estadounidense, Estados Unidos trató de colaborar con otros países para que dicha protección fuese eficaz y propuso celebrar un tratado internacional con Francia, Reino Unido y Canadá, además de cualquier otro país interesado, el cual llevó por nombre “Agreement Concerning the Shipwrecked Vessel R. M. S. Titanic”.

Para que el tratado entrase en vigor era necesario que dos o más países lo ratificasen. A día de hoy, tan sólo han ratificado este tratado

el Reino Unido (2003) y Estados Unidos (2004), por lo que se encuentra en vigor. Francia y Canadá todavía no lo han ratificado y tampoco se conoce otro Estado que haya mostrado interés en su ratificación.

2. Abandoned Shipwreck Act

En esta ley, el Congreso de los Estados Unidos establece que pertenecen al Estado americano todos los barcos naufragados, entendiéndose por tales aquellos en los que se den algunos de los siguientes requisitos¹⁷²:

1. Que esté encallado y sumergido en terreno americano.
2. Que esté encallado en formaciones de coral, y que estas formaciones, estén sumergidas en territorio marítimo protegido por un Estado.
3. Que esté en territorio sumergido de un Estado y que esté incluido o sea susceptible de inclusión en el Registro Nacional.

Con esta ley, el Congreso de los Estados Unidos buscaba acabar con el law of finds y el law of salvage. Algunos cazadores de tesoros demandaron la inconstitucionalidad de esta norma, pues consideraban que se vulneraba el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos,

¹⁷² Contenido original del artículo:

- (1) embedded in submerged lands of a State;
- (2) embedded in coralline formations protected by a State on submerged lands of a State; or
- (3) on submerged lands of a State and is included in or determined eligible for inclusion in the National Register.

el cual en su sección segunda, establece que “el Poder Judicial entenderá de todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad (...) de todas las controversias de la jurisdicción de

almirantazgo y marítima”.

En la opinión de los demandantes, es decir, los *cazatesoros*, la ASA permitía al Estado Federal declararse propietario de unos bienes sin tener que acudir a los tribunales. En contra de su petición, los tribunales declararon que la ley no era inconstitucional.

3. National Marine Sanctuaries Act

Esta ley autoriza al Secretario de comercio a declarar zonas marítimas de especial protección y a regular los usos recreacionales, ecológicos y de conservación, que puedan hacerse de los recursos de esta área.

En concreto, en base a ella, queda totalmente prohibido, dentro de las zonas marítimas de especial protección, llevar a cabo cualquier actividad que pueda destruir, dañar o causar la pérdida de sus recursos. Además, esta ley establece una responsabilidad civil de carácter objetivo, dado que se originará con el simple hecho de probarse que los

cazatesoros llevaron a cabo una actividad, sin que sea necesario comprobar su culpa o negligencia.

La doctrina norteamericana es partidaria del contenido de esta ley, dado que las zonas de protección pueden establecerse fuera de los límites de la jurisdicción y soberanía del Estado, por ejemplo, cabría establecer una zona de protección fuera de la Zona Económica Exclusiva¹⁷³

4. Sunken Military Craft Act, de 2004.

Se trata de una ley de aplicación militar que positiviza una serie de prácticas de derecho internacional en relación al patrimonio cultural subacuático que los Estados Unidos han venido llevado a cabo históricamente.

El objetivo de esta norma es conseguir su aplicación uniforme en toda la jurisdicción de los Estados Unidos y limitar la aplicación del *law of finds* y el *law of salvage*.

Una de las sentencias más importantes en esta materia, que ha influido en la aprobación de esta norma, fue la sentencia relativa a la “Juno y la Galga”. En ella se establece, como se verá más adelante cuando se aborde de forma detallada este caso en concreto, que, como

¹⁷³ VARMER, O., “United States of America”, *The protection of the underwater cultural heritage*, cit., p. 361.

buques del Estado español, estas fragatas, eran de su propiedad y por lo tanto los *cazatesoros* no tendrían derecho a ninguna recompensa.

Por último, cabe destacar que esta ley declara patrimonio nacional americano a todo buque militar naufragado con independencia del lugar en el que se hubiese hundido¹⁷⁴.

c) Conclusiones

Como puede observarse en todo lo expuesto sobre el derecho norteamericano, se puede afirmar que existe una etapa previa a la *Klein vs Unidentified, Wrecked and Abandoned Sailing Vessel* de 1987, que se caracterizaba por una nula protección del patrimonio cultural subacuático, y una segunda etapa, en la que progresivamente se ha ido avanzando en la protección de este tipo de patrimonio, llegándose a aprobar diferentes textos normativos que acercan a Estados Unidos a converger con la legislación internacional sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.

¹⁷⁴ Sección 1046. Relationship to other laws. Sunken Military Craft Act.

c) Law of Finds- The law of finds shall not apply to--

- (1) any United States sunken military craft, wherever located; or
- (2) any foreign sunken military craft located in United States waters.

(d) Law of Salvage- No salvage rights or awards shall be granted with respect to--

- (1) any United States sunken military craft without the express permission of the United States; or
- (2) any foreign sunken military craft located in United States waters without the express permission of the relevant foreign state.

4. Latinoamérica

En este apartado se muestra la legislación de tres Estados sobre el patrimonio cultural subacuático y como cada uno de ellos ha establecido una normativa y características propias. La elección de Argentina, Brasil y Colombia permite analizar la perspectiva y regulación que han adoptado cada uno de ellos y ver cómo reciben influencias de normativas externas internacionales o nacionales o cómo han adaptado los cambios internacionales a la normativa propia.

A. Colombia

a) Preliminar

En Colombia, como en muchos otros países, ha existido una falta de consciencia real acerca de la importancia de este tipo de patrimonio hasta hace no mucho, lo que ha tenido como consecuencia que no haya habido ningún tipo de control sobre estos sitios, permitiéndose la pérdida, saqueo, actividades de dragado y destrucción de cualquier resto de patrimonio histórico o cultural que se encontrase sumergido en las aguas colombianas¹⁷⁵.

¹⁷⁵ O. DELGADILLO-GARZÓN y P. ZAPATA-RAMÍREZ, “Contexto natural del patrimonio cultural subacuático en la bahía de Cartagena: perspectivas de estudios interdisciplinarios y potencial de utilización”, *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, n°. 7, 2007, p. 67.

Durante varios años se ha buscado aprobar una regulación sobre el patrimonio cultural subacuático¹⁷⁶, siendo el primer antecedente al respecto la legislación sobre especies náufragas, donde se ponía énfasis en el valor histórico de los bienes, de forma que quedaba contenido en el Decreto 655 de 1968 como un elemento integrante del patrimonio histórico de la nación¹⁷⁷. Durante mucho tiempo no se llevó a cabo una verdadera protección debido a diversos motivos, aunque la doctrina ha considerado que la razón principal era que el rescate de los naufragios era una tarea complicada y por tanto no merecían protección estos bienes¹⁷⁸. Con la aprobación de la nueva Constitución Colombiana de 1991 se dedica un lugar especial a la protección de los valores culturales como elementos principales de la identidad nacional¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Colombia utiliza en su regulación el término “patrimonio cultural sumergido”, por lo que en este punto se utiliza de forma reiterada.

¹⁷⁷ R. VÉLEZ OCHOA, *Las especies náufragas*, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2003, p. 14 y I. J. RODRÍGUEZ AGUILA, “¿Especies náufragas: patrimonio cultural y factor de desarrollo económico y social?”, *Memorias: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, N°. 12, 2010, pp. 223-245.

¹⁷⁸ M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2013, p. 20; R. VÉLEZ OCHOA, *Las especies náufragas*, cit., p. 18.

¹⁷⁹ Art. 7 de la Ley 1675 de 2013, de 30 de julio, Reglamentada por el Decreto Nacional 1698 de 2014, por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.

Los artículos citados de la Constitución Política de Colombia expresan lo siguiente: Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación

Con la Ley 397 de 1997 se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política. A su vez, se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. También establece el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación Colombiana conformado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los Consejos Departamentales y Distritos de Patrimonio Cultural y general por las entidades que desarrollen financien, fomenten o ejecuten actividades con el patrimonio cultural de la nación.

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Dado que el patrimonio cultural sumergido pertenece a la Nación colombiana, será el Ministerio de Cultura quien ejerza la mayoría de competencias al respecto¹⁸⁰.

b) Regulación

Tras un largo proceso de elaboración, se aprueba la Ley 1675 de 2013, de 30 de julio dedicada al patrimonio cultural sumergido¹⁸¹. Como expresa LÓPEZ RAMÓN, “la norma se compone de tres pilares que convergen para el cumplimiento del mismo fin: a) la existencia de una declaración administrativa, b) un régimen de gestión y c) un régimen de protección, judicial y sancionatorio”¹⁸². Esta norma ha sido ampliamente criticada tanto en el plano interno como internacional. Se le atribuye un enfoque contrario al sustentado por la Convención de la 2001¹⁸³.

Otro criterio en el que discrepan ambas normas es en el espíritu de conservación *in situ* y de no aprovecharse económicamente de los

¹⁸⁰ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, pp. 217-218.

¹⁸¹ El título completo es LEY 1675 de 2013 por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido, en adelante Ley 1675 de 2013.

¹⁸² F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p. 217.

¹⁸³ R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, n°. 25, 2015, pp. 60-66; F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., pp. 201-223; A. MATEUS-RUGELES y I. RODRÍGUEZ VALENZUELA, “Pecios españoles en aguas colombianas entre el

yacimientos. Pese a que la norma colombiana tiene como finalidad la protección y conservación del patrimonio cultural sumergido, esta busca al mismo tiempo la explotación económica de los mismos, tal y como se puede entender de su art.4.3, de forma que permite que se desarrollen actividades bajo una autorización que exige ciertos requisitos.

Esta ley define el patrimonio cultural sumergido como parte del patrimonio arqueológico y que es propiedad de la Nación Colombiana, siempre que los bienes sean representativos de la cultura, que se encuentren sumergidos de forma permanente en aguas internas o marítimas, pudiendo ser restos orgánicos o inorgánicos, y que evidencian una presencia física de grupos humanos desaparecidos constituidos por naves o artefactos, cualquiera que sea su naturaleza o estado y la causa del hundimiento o naufragio. Otro de sus requisitos esenciales es el que se encuentren en el lecho más de 100 años.

Los criterios aplicables al patrimonio cultural sumergidos son de acuerdo al art. 3 los siguientes:

- “Representatividad: cualidad de un bien o conjunto de bienes, por la que resultan significativos para el conocimiento y valoración de particulares trayectorias y

patrimonio cultural subacuático y la inmunidad jurisdiccional de los estados”, *Revista de Derecho Valdivia*, Vol. 29, N° 29, Valdivia, 2016, pp. 253-275.

prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial.

- Singularidad: cualidad de un bien o conjunto de bienes, que los hace únicos o escasos en relación con los demás bienes conocidos, relacionados con la particulares trayectorias y prácticas socioculturales, de las cuales dichos bienes son representativos.
- Repetición: cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto.
- Estado de conservación: grado de integridad de las condiciones físicas de los materiales, formas y contenidos originales que caracterizan a un bien o conjunto de bienes muebles e inmuebles, incluidos los contextos espaciales en los que se encuentran.
- Importancia científica y cultural: potencial que ofrece un bien, o conjunto de bienes muebles o inmuebles, de aportar al mejor conocimiento histórico, científico y cultural de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial.

La propia ley exceptúa de la definición de patrimonio cultural sumergido las cargas constituidas por materiales en su estado bruto, con independencia de su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas, los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, tales como monedas y lingotes, y las cargas industriales.

Como otros países influenciados por la Convención de 2001, la protección del patrimonio cultural subacuático se centra en un difícil equilibrio entre las investigaciones y el fomento de actividades económicas que permitan obtener fondos sin deteriorarlos.

Las actividades que están permitidas son las siguientes:

- Exploración, entendida como toda acción científica debidamente autorizada desarrollada con la finalidad de buscar y localizar patrimonio cultural sumergido a través de cualquier método, pero sin intervenir, alterar o modificar sus condiciones o entorno. El autorizado debe informar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Ministerio de Cultura y a la Dirección General Marítima del resultado de la exploración, haciendo hincapié en la localización y georreferencia, así como las características de los hallazgos, de forma que permita a la Armada Nacional

Colombiana llevar a cabo actuaciones de vigilancia sobre en los pecios.

- Intervención. Es considerada como tal toda acción científica que tenga finalidad el cambio de ubicación de los bienes, su remoción, extracción o cualquier modificación de las condiciones del entorno en que se encuentre el patrimonio cultural sumergido.
- Aprovechamiento económico, entendiendo por tal las actividades debidamente autorizadas que puedan genera ingresos a través de la exhibición o divulgación in situ o en infraestructuras culturales.
- Preservación. Es cualquier actividad que tenga como finalidad preservar el entorno del patrimonio cultural sumergido con la finalidad de garantizar la planimetría de yacimiento, así como un manejo adecuado que permita el máximo aprovechamiento de la información contenida en el mismo, así como su difusión.

Como se puede observar, los usos no son incompatibles entre sí y en muchos casos formarán etapas o partes de un mismo proyecto, dado que son términos jurídicos indeterminados que los órganos del estado se encargaran de aplicar al caso concreto¹⁸⁴.

¹⁸⁴ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p. 212.

El ámbito de aplicación de esta norma abarca tanto la protección y regulación de los hallazgos fortuitos¹⁸⁵ como el régimen de contratas. En cuanto a estas últimas, se regulan en el Capítulo III bajo el título “Autorizaciones y Régimen de Contratación”. Este se basa en conceder al Ministerio de Cultura la potestad para contratar a través de licitación con entidades expertas la realización de actividades de forma que deben cumplir con las disposiciones vigentes para el desarrollo de actividades marítimas en aguas jurisdiccionales colombianas de acuerdo con la norma y procedimiento interno, respetando los métodos regulados en la norma, así como las disposiciones sobre los hallazgos.

El art. 6 señala que “los métodos utilizados para la exploración, recuperación o explotación del patrimonio cultural sumergido deben priorizar la conservación y garantizar el menor deterioro posible para lo cual deberán valerse de las técnicas y procedimientos arqueológicos internacionalmente reconocidos y aceptados”. Pese a la tardanza para aprobar una nueva ley sobre el patrimonio cultural subacuático, las investigaciones y metodología derivadas de la misma, así como su

¹⁸⁵“Art.7. Hallazgo fortuito de bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido. Quien de manera fortuita encuentre bienes que forman parte del patrimonio cultural sumergido, en el curso de las veinticuatro (24) horas siguientes del regreso a tierra deberá dar aviso inmediato a la autoridad civil o marítima más cercana, y estas a su vez deberán dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

Los hallazgos de bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido que se realicen en el curso de las actividades descritas en este artículo, o en cualquiera otra no contemplada en esta ley, se informarán al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, entidad que adoptará las medidas previstas en esta ley con el concurso inmediato, si fuera necesario, de la Fuerza Pública y demás autoridades”.

novedad, la convierten en un factor a tener en cuenta. Estas categorías y su actualidad convergen el siguiente cuadro:

Cuadro de expresiones del patrimonio cultural sumergido y su información acerca del pasado¹⁸⁶.



¹⁸⁶ C. GARCÍA, *El mapa arqueológico e histórico de la bahía de Cartagena: Una propuesta metodológica para la gestión del patrimonio cultural subacuático. Monografía de pregrado para antropología*, Universidad Nacional, Bogotá, 2003.

CLASIFICACIÓN DE LOS SITIOS	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS		INFERENCIAS
N a u f r a g i o s	Estructuras del Barco		Construcción naval (Técnicas y Tecnología) Tipos de embarcación Contrabando Situación del barco durante su hundimiento Causa del naufragio
	A r t e f a c t o s	Mercancía	Objetos de comercio Rutas comerciales Contrabando Procedencia de los bienes
		Artillería	Tamaño, tipo y uso de la embarcación Nacionalidad Fecha (Datación) Estrategias de guerra
		Instrumentos de navegación	Datación Avances en la navegación
		Dotación del navío	Vida a Bordo Datación Nacionalidad
Desechos o basureros	Cañones inservibles, piedras de lastre		Puertos de embarque y desembarque Procedencia de los barcos y de los artefactos
Fuertes o sistemas defensivos	Murallas y fortalezas		Ingeniería naval y portuaria Rutas de navegación Estrategia militar Situación política, económica y social
Sitios de habitación	Costas y yacimientos sumergidos		Cambios costeros Procesos sociales Datación

La propia ley nacional establece un sistema de sanciones a quien no notifique en el plazo de 24 horas desde la llegada a tierra del patrimonio encontrado. Debe avisarse a la autoridad civil o marítima más cercana, que deberán remitir la información al Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

El Ministerio de Cultura, previo informe favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, puede declarar áreas arqueológicas marinas, quedando sujetas a la legislación expuesta en el apartado 1.4 del art. 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1185 de 2008. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura solamente ha declarado la zona de Cartagena de Indias, dado que es un escenario con gran pasado bélico del periodo colonial. En esta zona se encuentran los restos del navío Conquistador¹⁸⁷, echado a pique en 1742 por el propio comandante de la armada española en Cartagena, el almirante Blas de Lezo.

Los bienes culturales son propiedad de la Nación Colombiana. Por ello, de acuerdo a su propia legislación, sólo las Administraciones

¹⁸⁷ M. PATEMAN, “Fundación ARGOS, Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia”, *Patrimonio Cultural Subacuático. América Latina y el Caribe. Underwater Cultural Heritage*, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, pp. 46-48; O. DELGADILLO-GARZÓN y P. ZAPATA-RAMÍREZ, “Contexto natural del patrimonio cultural subacuático en la bahía de Cartagena: perspectivas de estudios interdisciplinarios y potencial de utilización”, *Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, n°. 7, 2007, pp. 60-73.

públicas pueden obtener beneficios de los mismos ¹⁸⁸. En otras legislaciones no aparece entre las actuaciones arqueológicas (prospecciones, exploraciones, sondeos, extracciones, planeamientos, rescates, etc.) la actividad de aprovechamiento económico o similar. A pesar de lo grave que puede parecer esto, se puede establecer en dicho contrato que el adjudicatario de la explotación de los bienes deba observar los procedimientos internacionalmente aceptados para acometer los trabajos arqueológicos (anexo de la Convención UNESCO, Carta de Sofía de ICOMOS) y entregar al Ministerio de Cultura la totalidad de los materiales extraídos. La actuación del contratista será supervisada por instituciones de reconocida trayectoria (en el campo del patrimonio cultural subacuático, se entiende), e incluso la Dirección General Marítima ejercerá una vigilancia y control de las actividades marítimas del contratista.

¹⁸⁸ R. RUIZ MANTECA, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio*, cit., p. 54.

Por último, el expolio del patrimonio cultural subacuático aparece castigado en el Código Penal colombiano¹⁸⁹ (artículo 269-1), en su modalidad de destrucción total o parcial¹⁹⁰.

c) Galeón San José

Colombia es conocida a su vez por haber conseguido recuperar todo el patrimonio que compone el Galeón San José en los tribunales, siendo un caso paradigma de cómo ha ido cambiando la legislación colombiana para adaptarse a las diferentes esferas de protección y así beneficiar a sus propios intereses nacionales, en vez de a la explotación privada y saqueo de bienes que componen el patrimonio cultural sumergido.

Tras el cambio de regulación colombiana, la empresa Sea Search Armada demanda a Colombia tanto en los juzgados colombianos como los americanos. El origen de dicho conflicto está en

¹⁸⁹ Ley 5999 de 2000, de 24 de julio, por la cual se expide el Código Penal.

¹⁹⁰ “TÍTULO VII-ADE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO

Artículo 269-1. Delitos contra el Patrimonio Cultural Sumergido. El que, por cualquier medio o procedimiento, sin autorización de la autoridad competente, explore, intervenga, aproveche económicamente, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de hasta mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En iguales penas incurrirá quien por cualquier medio compre o venda los bienes que conforman el Patrimonio Cultural Sumergido.

Cuando se incurra sucesivamente en cualquiera de los verbos rectores de este delito, la pena prevista se aumentará hasta en las tres cuartas partes”.

el trato que firmó el Gobierno colombiano con la antecesora de dicha sociedad (Glocca Morra Company), para que llevara a cabo el salvamento del tesoro del San José, de forma que se le autorizaba para que buscara en la plataforma continental los restos de un posible naufragio, siendo descubiertos en 1981 los restos de dicho galeón. En dicho acuerdo se establecía que los bienes se repartirían por mitad entre ambos, cediendo en 1984 los derechos de Glocca Morra Company a Sea Search Armada¹⁹¹.

La Dirección General de la Marina Colombiana competente en estos asuntos concedió en 1980 a Glocca Morra Company, con domicilio en Nueva York y organizada según la Ley general de empresas del Estado de Delaware, Estados Unidos de América el 7 de agosto de 1979, y registrada en el condado de Kent el 8 de agosto del mismo año¹⁹². En 1984, ya a la Sea Search Armada, se le conceden otras áreas que también se enmarcan en la latitud 10° N longitud 75° W¹⁹³. En los archivos de la Dirección General de la Marina Colombiana también consta que en 1984 la compañía sueca Nova Ltd. presentó una

¹⁹¹ A. CONTE DE LOS RIOS, “El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)”, *Revista General de Marina*, n°. 270, 2016, pp. 218-222; M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2013, pp. 26-33.

¹⁹² M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, cit., p. 27.

¹⁹³ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 221.

oferta para el rescate del San José en la que solicitaba explorar un área de 514 kilómetros¹⁹⁴.

El 20 de marzo de 1980, el Director General Marítimo y Portuario, vicealmirante Benjamín Álzate Reyes, resolvió con su oficio 00854 1 una consulta realizada a la Dirección General de la Marina Colombiana sobre dicho contrato, de forma que establecía que el “decreto-ley 2349 de 1971, concluye en que los artículos 111 y siguientes del decreto citado, autorizan al Gobierno Nacional para celebrar contratos de recuperación de especies náufragas con las personas naturales o jurídicas que habiendo explorado determinada zona, tengan un denuncia de preferencia sobre algún tesoro; esto es, que sean los primeros en hablar de él. No se puede en estricto derecho, dar la calificación de exclusivo, pues además del denuncia, deben mediar otras circunstancias que deberán ser calificadas posteriormente y ya cuando se pretenda celebrar el contrato. En resumen, para poder contratar con la nación, la recuperación de especies náufragas, debe el solicitante haber obtenido el correspondiente permiso de exploración, denunciar los hallazgos que crea haber hecho, y luego sí, de manera preferencial entrar a negociar los términos del respectivo contrato con arreglo a las leyes”¹⁹⁵.

¹⁹⁴ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 221.

¹⁹⁵ M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, cit., p. 28.

El acuerdo con Sea Search Armada se quebró por los diferentes puntos de vista sobre el destino de los objetos, encargándose de las actividades arqueológicas el propio Gobierno colombiano a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y desde el buque de la Armada Nacional “ARC Malpelo”, que cuenta con la más moderna tecnología sónar y robótica submarina. El Presidente Santos comunicó en 2015 el hallazgo producido, fruto de las actuaciones realizadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia¹⁹⁶.

Desde 1981, ambas sociedades (Glocca Morra Company y Sea Search Armada) han querido quedarse con el tesoro que transportaba el galeón. Mientras tanto, la sociedad colombiana fue cada vez dándole mayor importancia al patrimonio cultural subacuático y comenzó a dictar, aunque de forma deficitaria, una regulación al respecto como la Ley 397 de 1997 o Ley General de la Cultura, en cuyo artículo 9 se establece:

“Del patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o

¹⁹⁶ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 219.

diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas”.

La Corte Constitucional con su sentencia del 10 de junio de 2003, con ponencia del magistrado Edgardo Montealegre Lynnet, resolvió la primera de las demandas que hacía referencia al caso del galeón San José, de la siguiente forma:

“Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión acusada «que será reglamentado por el Gobierno Nacional» contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1999 (sic), tarea que corresponderá únicamente al Congreso de la República.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada «éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas», contenida en el inciso tercero del párrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1999 (sic), en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante, no puede ser pagado total o parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional.

Esta exequibilidad hace casi imposible el rescate de cualquier especie náufraga de gran valor, pues tendría que contar el Estado con dinero para pagar la parte del contratista en su recuperación. Dinero que no podría recuperar pues debería conservar ese patrimonio cultural. No sería inteligente comprar una considerable cantidad de monedas y/o lingotes de oro y plata para exhibirlas.

La única posibilidad viable sería que la propia Nación explorara y rescatara las especies naufragas de sus aguas territoriales”¹⁹⁷.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló en 2007 que las piezas que fueran halladas en el San José y que poseían valor histórico, artístico y arqueológico serían propiedad de Colombia¹⁹⁸.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia colombiana inicialmente estimó la reclamación de la empresa y falló que el 50 por 100 era válido para todo aquello que no fuera patrimonio cultural, histórico, artístico y arqueológico. En octubre del 2011, un tribunal en Washington ratificó esta decisión y declaró el galeón como propiedad del Estado colombiano, rechazando la demanda de Sea Search Armada¹⁹⁹. El 29 de marzo de 2013 se interpone una demanda por parte

¹⁹⁷J. BENDECK OLIVELLA, *El Galeón Perdido. ¿Dónde está el San José?*, Villegas Editores, Bogotá, Colombia, 2003, p. 253; M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, cit., p. 41.

¹⁹⁸ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 220.

¹⁹⁹ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 221

de la empresa Sea Search Armada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, contra la República de Colombia, pidiendo que se obligue al Gobierno colombiano a cumplir los fallos judiciales que le otorgaron derechos a esa empresa norteamericana para rescatar el tesoro del San José, causa que fue desestimada por prescripción, pero que Sea Search Armada apeló a la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia²⁰⁰.

Una vez que se ha abordado las cuestiones más generales sobre el Galeón San José, para no excederse en el procedimiento realizado por Colombia para recuperar los elementos y restos del San José, se expondrá el caso del Galeón San José desde la óptica española. Primeramente, hay que indicar que, hasta la fecha, España no se ha pronunciado ni ha intervenido o mostrado una postura firme al respecto. Lo único que ha emitido el Gobierno español son comunicados de prensa sobre la intención de recuperar dicho patrimonio cultural subacuático.

Existe una contradicción entre la postura ejercida contra otras naciones o empresas, como en los casos de la “Galga” o la “Mercedes”, frente a la inoperancia en este caso para mostrarse parte en los procedimientos y normas que Colombia ha ejercido para atribuirse el

²⁰⁰ A. CONTE DE LOS RIOS, *El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)*, cit., p. 222.

patrimonio cultural subacuático²⁰¹. Esta postura contrasta con la mantenida desde 1997 y los éxitos conseguidos, pues todavía no se ha personado ante los tribunales, aunque haya comunicado en prensa que el San José también fue una nave soberana y que en la misma combatieron y murieron cerca de 600 españoles.

A nuestro juicio, quizás España esté manteniendo una doble política dependiendo de los Estados en dónde se encuentra patrimonio cultural subacuático, las empresas que vayan a llevar la búsqueda, el destino de los bienes o incluso en donde se van a exponer. Es decir, la mayoría de lo que puede considerarse como patrimonio subacuático español se encuentra cerca de los territorios históricos del Imperio Hispano²⁰², en donde ambos países (España y Colombia) pueden considerarse con derechos a los bienes. Son muchos los países y ciudadanos que se consideran legitimados para recuperar el patrimonio

²⁰¹ DELGADILLO-GARZÓN y P. ZAPATA-RAMÍREZ, “Contexto natural del patrimonio cultural subacuático en la bahía de Cartagena: perspectivas de estudios interdisciplinarios y potencial de utilización”, *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, n.º. 7, 2007, p. 67; A. CONTE DE LOS RIOS, “El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)”, *Revista General de Marina*, 2016, pp. 218-222; M. G. ARANA SALAZAR, *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2013, pp. 26-33.

²⁰² R. RUIZ MANTECA, “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, n.º. 25, 2015, pp. 60-66; F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, pp. 201-223; A. MATEUS-RUGELES y I. RODRÍGUEZ VALENZUELA, “Pecios españoles en aguas colombianas entre el patrimonio cultural subacuático y la inmunidad jurisdiccional de los estados”, *Revista de Derecho Valdivia*, vol. 29, n.º 29, Valdivia, 2016, pp. 253-275.

cultural subacuático y que pueden tener tantas o más razones que España para que se les otorgue la posesión y propiedad de los mismos. En este sentido, podemos traer a colación la posición que adoptó Perú en el caso del Odyssey al considerar que las monedas que se habían encontrado formaban parte de su patrimonio al haber sido elaboradas por la Casa de la Moneda de Lima. También la de los herederos o descendientes de los fallecidos o dueños de los bienes encontrados en el pecio de la Mercedes que, en muchos casos, dado que los bienes pertenecían a aristócratas de la época con títulos nobiliarios era fácil identificarlos. Estos últimos son, en la práctica, un problema menor al haber sido ya indemnizados por la pérdida de los bienes o existen formas para convertir automáticamente los bienes encontrados en bienes de derecho público.

La posición de Perú o la de cualquier otro Estado hispano es una concepción diferente sobre la titularidad de los bienes, dado que unos protegen los bienes que se encuentran en sus aguas territoriales, en sentido idéntico al que han establecido las Comunidades Autónomas para autootorgarse e integrar los bienes que se encuentren en su territorio²⁰³ o aguas territoriales, frente a la postura española que esgrime derechos históricos. Es decir, tanto las Comunidades Autónomas como las naciones hispanas poseen rasgos identitarios históricos españoles que podrían por sí mismo justificar la integración

²⁰³ J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n°. 99-100, 2014, pp. 493-512.

de los bienes en su propio patrimonio cultural. No obstante, las regulaciones sectoriales sobre el patrimonio cultural subacuático identifican en la mayoría de los casos como propios los bienes encontrados en su territorio con independencia del origen histórico. A modo de ejemplo, un pecio de un submarino alemán hundido en sus aguas sería considerado como patrimonio cultural subacuático, aunque no revista rasgos históricos con la nación de la bandera de la nave.

De existir una política tácita para permitir que las naciones hispanas se atribuyan el patrimonio cultural subacuático que se encuentre en sus costas, estaría legitimando un reconocimiento pleno y traspaso de bienes a las naciones independizadas. Ahora bien, la protección del patrimonio cultural subacuático es un instrumento jurídico de reciente creación y que aún no está desarrollado o articulado de manera adecuada, ni siquiera en España que cuenta con mejores medios. Muchas naciones siguen viendo los pecios como una fuente para obtener ingresos extras a través de modelos de reparto de las exploraciones y descubrimientos, como sucedía en Colombia hasta la modificación de la ley. Otras ni siquiera lo protegen, sino que basan su normativa en leyes de descubrimientos y tesoros que son contrarios al espíritu de la Convención de 2001.

Lo anterior se refleja en que en muchos países la actividad de los *cazatesoros* se ve como algo relativamente habitual o, en el mejor de los casos, como un precio a pagar para evitar el expolio total de los yacimientos, al no tener los Estados ribereños la capacidad para gestionar los hallazgos. No es infrecuente, en esta época de crisis económica y financiera global con los precios de los metales preciosos disparados en los mercados, escuchar a políticos, empresarios o simples ciudadanos de a pie, ideas peregrinas sobre la oportunidad que pueden representar los metales escondidos en los galeones naufragados para fortalecer las reservas nacionales de oro.

En estos casos, España debe ejercer cierto paternalismo y doble actitud, es decir, debe combatir aquellas actuaciones que supongan un lucro o que se vayan a realizar por normativas contrarias a los ideales y principios de la Convención con independencia del Estado que las autorice o lleve a cabo. En segundo lugar, debe firmar protocolos de colaboración con todas aquellas naciones que por sí solas no puedan llevar a cabo políticas de protección de dicho patrimonio, ya sea destinando fondos para investigación o protección, o bien establecer qué sucede con el destino de los bienes encontrados. En este último caso, lo ideal sería que los bienes se pudiesen exponer de forma itinerante en ambos países.

En cuanto a la postura que España debe adoptar ante el San José no es sencilla, pues estamos ante un problema de difícil solución. En primer lugar, se muestran los rasgos de identidad cultural y pasado entre

los dos Estados como una muestra de herencia compartida. Colombia hasta la fecha no es un Estado firmante de la Convención de 2001²⁰⁴, por lo que las normas de protección o los conflictos que se produzcan entre España y Colombia en esta materia deben resolverse a través de convenios internacionales o en la vía judicial.

Pese a que no es un Estado parte, sí que se puede proteger el patrimonio a través de los Anexos del mismo, es decir, a través de los principios científicos que consagra este instrumento internacional como compendio de normas y buenas prácticas en materia de trabajo arqueológico. Del mismo modo, España debería anticiparse y entablar posiciones protocolarias y convencionales con otros países, pero de forma especial con los países caribeños, sobre el patrimonio cultural subacuático español que se encuentre en sus aguas y las formas de protección de los mismos.

En definitiva, se trataría de impulsar el desarrollo de una estrategia integrada que implique a todas las Administraciones públicas que pueden y deben contribuir a defender este valioso patrimonio frente al expolio como el Museo Nacional de Arqueología ARQUA, los Ministerios de Cultura y Defensa, entre otros. Como expresa BARBARÁ GÓMEZ, “debemos continuar los esfuerzos desarrollados

²⁰⁴ M. J. AZNAR GÓMEZ, “La definición del patrimonio cultural subacuático en la Convención UNESCO de 2001”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 67, 2008, p. 102 y I. J. RODRÍGUEZ AGUILA, “¿Especies náufragas: patrimonio cultural y factor de desarrollo económico y social?”, *Memorias: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, nº. 12, 2010, pp. 223-245.

por las administraciones en los últimos años, y dotarlos de una dimensión exterior, con una auténtica política que garantice la sostenibilidad de este esfuerzo en el tiempo y que establezca acciones de cooperación estables con los países en donde se encuentra este patrimonio que nos permitan protegerlo adecuadamente. Todo ello con el fin último de preservar este legado y de descubrirlo en interés de todos, en beneficio de los españoles, de los iberoamericanos y de la Humanidad en su conjunto”²⁰⁵.

B. Brasil

a) Preliminar

Brasil ha sido uno de los países más afectados por una política de dejadez administrativa y gubernamental, lo que ha dado lugar al expolio de múltiples yacimientos debido a la corrupción sistemática que ha padecido el país a lo largo de amplios periodos de tiempo y a la figura del caza tesoros²⁰⁶. Como dice CASTRO, “el negocio de ellos no es encontrar galeones con tesoros debajo del agua sino inversionistas ricos o suficientemente estúpidos que les paguen las cuentas (...) Desentierran de entre los archivos la historia de un naufragio

²⁰⁵ P. BARBARÁ GÓMEZ, “Protejamos nuestros galeones”: hacia una política de protección del patrimonio subacuático español en el exterior”, *ARI. Real Instituto Elcano*, Área Europa, 148/2011, p. 2011.

²⁰⁶ G. RAMBELLI y P. P. A. FUNARI, “Patrimonio cultural subacuático en Brasil: pensamientos varios”, *Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueológica desde el Caribe*, 4, nº. 7, Barranquilla, (<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85540704>.consultado el 6 de junio de 2017).

cualquiera, con un tesoro, real o imaginario. A veces se inventan una historia y le mezclan elementos de plausibilidad”, se unen junto con los políticos corruptos y la prensa sensacionalista, todo esto con el fin de atraer patrocinadores que se dejan llevar por el “canto de la sirena”²⁰⁷.

La Constitución Brasileña de 1988 en su art. 20.10 reconoce como bienes de la Unión las “cuevas naturales subterráneas y los parajes arqueológicos y prehistóricos”, de forma que el patrimonio cultural subacuático debe de interpretarse englobados en estos términos²⁰⁸. En su defecto podría quedar englobado dentro de otros bienes que forman parte de la Unión al encontrarse el patrimonio cultural subacuático bajo el lecho de diferentes bienes.

²⁰⁷ F.V. CASTRO, “Caçadores de tesouros: proposta de uma taxomia”, *Revista Eletrônica História e-História*, 2004, pp. 51-53.

²⁰⁸ Estos otros bienes son:

- “1. Los que actualmente le pertenecen y los que pudieran serle atribuidos;
2. las tierras desocupadas indispensables para la defensa de las fronteras, de las fortificaciones y construcciones militares, de las vías definidas en la ley;
3. los lagos, los ríos y cualesquiera corrientes de agua en terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, sirvan de límites con otros países, o se extiendan a territorio extranjero o provengan de él, así; como los terrenos marginales y las playas fluviales;
4. las islas fluviales y lacustres en las zonas limítrofes con otros países; las playas marítimas, las islas oceánicas y las costeras, excluidas de éstas las áreas referidas en el artículo 26 II.
5. los recursos naturales de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva;
6. el mar territorial;
7. los terrenos de marina y sus aumentos;
- (...) 9. los recursos minerales, incluso los del subsuelo; (...)
11. las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios”.

A pesar de no ser uno de los países signatarios de la Convención de 2001, el patrimonio cultural subacuático está protegido por la Ley nº 7542, de 26 de septiembre de 1986, a través de la modificación que se produjo con la Ley nº 10.166, de 27 de diciembre de 2000, que trata sobre la búsqueda, exploración, remoción y demolición de los bienes hundidos bajo el mar, encallados o perdidos en aguas brasileñas o de su competencia²⁰⁹. Debido a la influencia anglosajona, en Brasil se utiliza el término arqueología pública como sinónimo de destinada al público en general, y no en el sentido de que sean bienes de dominio público o patrocinados por una entidad con personalidad pública²¹⁰.

Desde 2010, la Marina brasileña viene realizando esfuerzos para proteger de la manera más eficaz el patrimonio cultural subacuático. Tal esfuerzo ha provocado la elaboración del *Atlas dos Sítios de Naufrágio da Costa do Brasil*²¹¹.

²⁰⁹ G. RAMBELLI y D. MARTINS GUSMÃO, “Estratégias para produção de um inventário nacional do patrimônio cultural subaquático”, *Revista Navigator*, nº. 20, 2014, pp. 119-215; G. RAMBELLI y P. P. A. FUNARI, “Patrimônio cultural subacuático en Brasil: pensamientos varios” *Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueológica desde el Caribe*. año 4, nº. 7, Barranquilla (<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85540704>. consultado el 6 de junio de 2017) y D. MARTINS GUSMÃO, “Patrimônio cultural subaquático: preservação por meio da conscientização”, *IV Seminario de Preservação de Patrimônio Arqueológico*, pp. 84-96.

²¹⁰ G. RAMBELLI, “A arqueologia subaquática no Brasil, *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Anais da 1 Semana de Arqueologia, Suplemento*, 8, 2009, pp. 53-62; G. RAMBELLI y P. P. A. FUNARI, *Patrimônio cultural subacuático en Brasil: pensamentos varios*, cit., p. 41.

²¹¹ D. MARTINS GUSMÃO, “Patrimônio cultural subaquático: preservação por meio da conscientização”, cit., p.86.

Otro de los logros del país es el centro de Estudios de Arqueología Náutica y Subacuática, en adelante CEANS, en el Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais de la Universidad Estadual de Campinas, en adelante NEPAM/UNICAMP²¹².

La influencia de la Convención de 2001 se ha hecho notar en Brasil, ya que ha supuesto un cambio en el régimen de concesiones de exploraciones y en los rescates y recuperación de objetos. De esta forma, Brasil convocó el I Simposio Internacional de Arqueología Marítima de las Américas en 2007, con sede en Itaparica, en el Estado de Bahía, y al que acudieron no sólo países americanos, sino también europeos y de Oceanía. Las principales conclusiones de dicho Simposio fueron las siguientes²¹³:

- Son cada vez más los países que reconocen los beneficios sociales, económicos y culturales de la protección del patrimonio cultural subacuático, de la ratificación de la Convención de 2001 e se invita Brasil a ratificarla. Se recuerda que la ICOMOS siempre está disponible para

²¹² G. RAMBELLI y P. P. A. FUNARI, *Patrimonio cultural subacuático en Brasil: pensamientos varios*, cit., p. 39.

²¹³ C. EUGÊNIA AMARANTE y P. F. BAVA DE CAMARGO, “Arqueologia Subaquática Brasileira: por que o país aproveita mal sua capacidade científica? ”, *Cadernos do Lepaarq*, vol. XIV, nº. 27, 2017, pp. 252-279.

prestar cualquier ayuda e información sobre el patrimonio cultural subacuático²¹⁴.

La doctrina también está haciendo esfuerzo por concienciar e intentar crear una legislación acorde con la Convención de 2001, o que al menos permita disfrutar de dicho patrimonio a las generaciones venideras²¹⁵.

b) Regulación

La Ley N° 10.166, de 27 de diciembre de 2000, en su versión actual acerca de la investigación, exploración, remoción y demolición de cosas o bienes hundidos, sumergidos, encallados y perdidos en aguas bajo jurisdicción nacional y en terrenos marginales, como consecuencia de siniestro, aligeramiento o fortuna del mar, es la norma aplicable en Brasil a la protección del patrimonio cultural subacuático²¹⁶. Por la

²¹⁴ C. EUGÊNIA AMARANTE y P. F. BAVA DE CAMARGO, *Arqueologia Subaquática Brasileira: por que o país aproveita mal sua capacidade científica?*, cit., p. 262.

²¹⁵ En este sentido podemos encontrar a BARCELOS DE FREITAS, que explica dicha tesis con estas palabras: “(...) engatinha na direção do zelo para com o patrimônio cultural submerso em suas águas, mas com suas portas escancaradas aos piratas atuais, não obstante o empenho da classe dos arqueólogos para mudar a posição oficial”. “Arqueologia Subaquática: as legislações brasileira e portuguesa a luz da Convenção sobre a proteção do Patrimônio Cultural subaquático de 2001” (<http://www.webartigos.com/artigos/arqueologia-subaquatica-as-legislacoes-brasileira-e-portuguesa-a-luz-da-convencao-sobre-a-protecao-do-patrimonio-cultural-subaquatico-de-2001/92877>, consultado el 18 de agosto de 2017).

²¹⁶ C. EUGÊNIA AMARANTE y P. F. BAVA DE CAMARGO, “Arqueologia Subaquática Brasileira: ¿Por quê o país aproveita mal sua capacidade científica? ”, cit., pp. 252-279.

descripción del enunciado de la propia ley se puede dar a entender que no está pensada en sí misma para proteger los bienes que componen el patrimonio cultural subacuático, sino más bien para rescatar y proteger bienes derivados de accidentes o extraviados de embarcaciones o naves.

Por ello, en sus capítulos iniciales se dedica a definir lo que se debe considerar como bienes perdidos y no lo que es el patrimonio subacuático como realizan otras normas²¹⁷. No es hasta el art. 20 cuando

²¹⁷ Los primeros artículos de la norma detallan cuando se consideran bienes perdidos y cómo estos pasan a ser de “dominio público”:

“Art. 3º As coisas ou bens referidos no art. 1º desta lei serão considerados como perdidos quando o seu responsável:

I - declarar à Autoridade Naval que o considera perdido;

II - não for conhecido, estiver ausente ou não manifestar sua disposição de providenciar, de imediato, a flutuação ou recuperação da coisa ou bem, mediante operação de assistência e salvamento”.

“Art. 4º O responsável por coisas ou bens referidos no art. 1º desta lei poderá solicitar à Autoridade Naval licença para pesquisá-los, explorá-los, removê-los ou demoli-los, no todo ou em parte”.

“Art. 5º A Autoridade Naval, a seu exclusivo critério, poderá determinar ao responsável por coisas ou bens, referidos no art. 1º desta lei, sua remoção ou demolição, no todo ou em parte, quando constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de danos a terceiros ou ao meio ambiente.

Parágrafo único. A Autoridade Naval fixará prazos para início e término da remoção ou demolição, que poderão ser alterados, a seu critério”.

“Art. 6º O direito estabelecido no art. 4º desta lei prescreverá em 5 (cinco) anos, a contar da data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo ficará suspenso quando:

I - o responsável iniciar a remoção ou demolição;

II - a Autoridade Naval determinar a remoção ou demolição;

III - a remoção ou demolição for interrompida mediante protesto judicial”.

“Art. 7º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar, sem que o responsável pelas coisas ou bens referidos no art. 1º desta lei tenha solicitado licença para sua remoção ou demolição, será considerado como presunção legal de renúncia à propriedade, passando as coisas ou os bens ao domínio da União”.

se empieza hablar de bienes con valor artístico, histórico o arqueológico y que no pueden ser objeto de apropiación directa o a través de licitación. Es destacable el contenido del art. 32.1, que, pese a no hablar de patrimonio subacuático, protege de manera explícita y clara ciertos bienes con un pasado histórico y con determinados rasgos, al indicar que “los restos de buques de casco de madera hundidos en los siglos XVI, XVII y XVIII se incorporan automáticamente en el dominio de la Unión, independientemente del lapso de tiempo de un año”, siendo por tanto objeto de protección y de “dominio público”. No obstante, dicha protección podría extenderse a épocas anteriores y no sólo al periodo colonial, pudiendo ser objeto de protección genérica tanto el siglo XIX como las épocas precolombinas.

En primer lugar, se otorga la potestad al Ministerio de Marina para coordinar el control y la fiscalización de las operaciones y actividades investigación, explotación, remoción y demolición de cosas o bienes hundidos, sumergidos, encallados y perdidos en aguas bajo jurisdicción nacional, en terrenos de marina, así como en aquellos casos producidos como consecuencia de un siniestro, pudiendo el Ministro delegar la ejecución de tales servicios a otros órganos.

Será esta entidad la que autorice a que se celebre un contrato. En él se puede establecer un pago o recompensa por la remoción y

“Art. 8º O responsável pelas coisas ou pelos bens referidos no art.1º desta lei poderá ceder a terceiros seus direitos de disposição sobre os mesmos”.

extracción de los bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, no pudiendo ser superior al 40% del total del valor que se atribuya a los bienes. También se puede establecer una fianza, así como un sistema de responsabilidad subsidiaria por las acciones que se lleven a cabo.

Las cosas rescatadas deben ser evaluadas por una comisión de peritos convocada por la Autoridad Naval o por el Ministerio de Cultura, que decidirá si tienen valor artístico, histórico y arqueológico, teniendo además que detallar el valor de los mismos de acuerdo al mercado internacional. El Estado siempre se reservará la potestad de elegir y adjudicar los bienes rescatados o encontrados, así como las formas de adjudicación de los mismos.

Al mismo tiempo, la ley establece cómo se deberá pagar este 40% sobre el valor de los bienes encontrados y rescatados, ya sea en dinero en efectivo o con valores. Con independencia del pago, todos los bienes recuperados deben ser entregados a la Autoridad Naval para llevar a cabo el análisis. El autorizado está obligado a asegurar los bienes y la conservación de los mismos hasta que se efectúe la entrega.

La Autoridad puede cancelar y retirar la autorización siempre que el autorizado no realice las operaciones en el plazo establecido de inicio, cuando estas no sean acordes a lo establecido o cuando se haya verificado que se han producido riesgos inaceptables para la seguridad de la navegación, daños a terceros, al medio ambiente o acciones

declaradas ilícitas de acuerdo a otra normativa. En este sentido, la Autoridad Naval también está autorizada para obligar al autorizado a terminar las obras que venía realizando. En estos casos no se hará efectivo ningún pago al afectado por el incumplimiento de lo autorizado.

Hay que destacar cómo esta ley cumple con la función de difusión cultural, puesto que, en el caso de submarinismo en las zonas con gran valor en patrimonio cultural subacuático, basta con la comunicación al Ministerio de Marina o al Instituto Brasileiro de Turismo. La única condición es que no represente ningún riesgo inaceptable para la seguridad de la navegación, para terceros o para el medio ambiente. Dado que el submarinismo es la forma más fácil de acceder a los lugares con valor patrimonio cultural subacuático y la poca protección que reciben este tipo de bienes de forma legal, ha sido utilizado por la doctrina para fomentar el uso de los arqueólogos submarinistas, de forma que se consiga no solo un reconocimiento al patrimonio cultural subacuático sino que se amplíe a los pecios y lugares de las aguas interiores de Brasil y no sólo a las costeras²¹⁸.

²¹⁸ G. RAMBELLI, “A arqueologia subaquática no Brasil”, *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Anais da 1 Semana de Arqueologia*, Suplemento 8, 2009, pp. 53-62.

C. Argentina

En Argentina se creó, a mediados de los años 90 del siglo pasado, el Programa de Arqueología Subacuática, en adelante PROAS, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en adelante INAPL, y el Área de Arqueología Subacuática de la Universidad Nacional de Rosario, en adelante UNR²¹⁹. La arqueología subacuática, a diferencia de otros países, no está centrada solamente en los fondos marinos, realizándose proyectos también en ríos y lagos en el interior del territorio argentino. La norma que protege el patrimonio arqueológico subacuático es la Ley Nacional 25.743 sobre Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Los PROAS se han centrado en la búsqueda y conservación del patrimonio de diferentes tiempos históricos en los que se encuentran pecios, tanto con un pasado nacional como internacional, dado el extenso litoral argentino ²²⁰, obteniendo en las investigaciones

²¹⁹ D. ELKIN, "Arqueología subacuática en Argentina", en F. J. LACAYO PARAJÓN, *Patrimonio Cultural Subacuático. América Latina y el Caribe. Underwater Cultural Heritage*, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, pp. 27-34; N.C. CIARLO, *La arqueología subacuática en Argentina. Reseña histórica de los antecedentes, desarrollo de la especialidad y estado actual de las investigaciones*, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Argentina, pp. 43-69 y N.C. CIARLO, "Una revisión de la arqueología subacuática en Argentina", *La Zaranda de Ideas: Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología*, nº. 5, 2009, p. 23.

²²⁰ N.C. CIARLO, *La arqueología subacuática en Argentina. Reseña histórica de los antecedentes, desarrollo de la especialidad y estado actual de las investigaciones*, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Argentina, p. 43.

numerosos resultados positivos. Uno de los objetivos de los PROAS, y reforzados desde la Convención de 2001, es la protección del patrimonio subacuático. Casi todos los trabajos realizados en arqueología subacuática corresponden a sitios históricos, siendo minoritarias las intervenciones en lugares prehispánicos²²¹.

A modo de ejemplo sobre los buenos resultados de los PROAS, exponemos las prospecciones realizadas en la Ría Deseado (Santa Cruz, Argentina), cuyo objetivo era principalmente la localización e identificación de los restos del Hoorn, un navío neerlandés del siglo XVII²²².

Los resultados de la investigación permitieron identificar un sector de depósitos de materiales formado por fragmentos de la destrucción del barco, tales como clavos y pernos. También se encontraron restos de cerámicas en los que aparecen inscripciones de escudos identificados como loza de Raeren y de Westrwald.

Junto a estos restos se también encontraron restos de semillas y fragmentos de carbón del plomo fundido, siendo posteriormente

²²¹ N.C. CIARLO, *La arqueología subacuática en Argentina. Reseña histórica de los antecedentes, desarrollo de la especialidad y estado actual de las investigaciones*, cit. p. 58.

²²² VV.AA., “El naufragio del Hoorn -1615- Prospecciones costeras y subacuáticas en la ría Deseado” en F. MORELIO, M. MARINIC, A. PRIETO y G. BAHAMONDE, *Arqueología de Fuego-Patagonia: levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos*, CEQUA, Punta Arenas, Chile, Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 343-350.

catalogados entre aquellos que se podían encontrar en los Países Bajos de la época²²³.

En el área en donde se encontraron se observaron una serie de acumulaciones de guijarros, que permitieron establecer la hipótesis de que se trataba de la estructura del casco del barco. La ausencia de restos de madera podría deberse a la reutilización de los restos por los nativos o colonos o a los procesos naturales de transformación.



²²³ VV.AA., *Arqueología de Fuego-Patagonia: levantando piedras, desenterrando huesos... y desvelando arcanos*. cit., p. 354.



CAPÍTULO IV

IV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN ESPAÑA

1. Orígenes de la regulación del patrimonio cultural subacuático en la legislación española

Como se ha señalado anteriormente, en España, hasta la ratificación de la Convención de 2001, no existía ninguna norma que regulase el patrimonio cultural subacuático de manera concreta y específica. Ahora bien, sí tuvimos algunas normas que, de manera indirecta o de forma muy concreta, hicieron alguna alusión o referencia al respecto. A lo largo de este apartado se hará referencia a todas y cada una de las normas que ha habido en España hasta la actualidad y que, en mayor o menor medida, han regulado aspectos relativos a la materia objeto de nuestro estudio, es decir, el patrimonio cultural subacuático.

La primera norma que podemos traer a colación es la Real Orden de 8 de abril de 1782, sobre la protección y conservación de antigüedades que se hallaren al hacer obras en puertos. En ella se puede apreciar por primera vez aspectos relativos a la arqueología subacuática

tal y como lo apuntan RUIZ MANTECA ²²⁴ y SARMIENTO DUEÑAS²²⁵.

Tras un largo periodo sin aprobarse ninguna ley sobre la materia o que hiciera alguna referencia al patrimonio cultural subacuático, en 1911 nos encontramos con la Ley de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones arqueológicas ²²⁶ y el Reglamento para su aplicación de 1 de marzo de 1912²²⁷. Tal y como señala BARRERO RODRÍGUEZ²²⁸ en relación con este último, de manera muy sucinta y casi de pasada, hacía referencia a posibles excavaciones de carácter submarino²²⁹.

La siguiente norma que alude al objeto de nuestro estudio es la Orden Ministerial de 9 de julio de 1947, sobre hallazgos arqueológicos submarinos, que obligaba a los comandantes militares de la Marina a poner en conocimiento de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas todos los hallazgos arqueológicos

²²⁴ R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, Ministerio de Defensa, 2012, p. 559.

²²⁵ Este autor, citando esta Orden, apunta que “fue la primera vez que aquellos que ostentaban el gobierno advirtieron de la importancia de los restos de barcos antiguos”. (L. SARMIENTO DUEÑAS, “Tesoros Sumergidos”, *Ars Medica. Revista de Humanidades*, 2007, nº. 2, p. 197.)

²²⁶ Gaceta de 8 de julio de 1911.

²²⁷ Gaceta de 5 de marzo de 1912.

²²⁸ C. BARRERO RODRÍGUEZ, *La ordenación jurídica del patrimonio histórico*, Civitas, Madrid, 1990, p. 51 y ss.

²²⁹ Artículo 1 del Reglamento de 1 de marzo de 1912, a cuyo tenor “igualmente se entenderá por excavaciones los trabajos de rebusca arqueológica que tengan carácter espeleológico o submarino, y otros similares”.

submarinos de los que tuvieran conocimiento, con la finalidad de que los objetos descubiertos fuesen depositados, si el interés del hallazgo lo aconsejaba, en el museo más próximo. La gran aportación de esta norma es que, por primera vez, se le está dando un papel cuanto menos relevante al patrimonio arqueológico submarino, pero aun así no logra protegerlo. Lo único que encontramos son pequeñas referencias al mismo.

Quince años más tarde volvemos a encontrarnos con una nueva norma, vigente en la actualidad, que es la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, que dedica una parte de su regulación a los hallazgos producidos en el mar.

Siguiendo con el eje cronológico, en la derogada Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre costas, también se hacía referencia al patrimonio subacuático cuando en su artículo 12 se establecía que “en las extracciones submarinas de restos u objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, intervendrá los Ministerios de Educación y Ciencia Marina, conforme a la Ley sesenta/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre”.

Posteriormente, el Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre, que establece el régimen de las actividades subacuáticas, también haría alusiones al patrimonio cultural subacuático. RUIZ MANTECA apunta que esta norma, en su artículo 20, “vuelve a insistir, tal y como lo hacía la Ley de Costas de 1969, en la simultaneidad de las competencias de

los ministerios de Marina y de Educación y Ciencia, y además resulta destacable en cuanto que constituye la primera disposición en España que prevé que las actividades subacuáticas relacionadas con la arqueología pueden tener lugar en aguas continentales, es decir, no marinas”²³⁰. El artículo 20 del Decreto mencionado establecía que “sin perjuicio de los derechos establecidos en el Código Civil, todo buceador o buzo que encuentre objetos sumergidos de presunto valor artístico, arqueológico, científico o material estará obligado a dar cuenta de ello a la autoridad local de marina, la cual, si se tratara de objetos artísticos o arqueológicos, comunicará inmediatamente el hallazgo a la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y le hará entrega de los objetos hallados a los efectos oportunos. De igual manera, y a los efectos expresados, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades militares o civiles, de acuerdo con sus competencias respectivas, cuando el hallazgo tuviere lugar como consecuencia de actividades subacuáticas en embalses, ríos o cursos de agua del interior”.

Con esta norma ponemos fin a la legislación nacional “histórica”. En el siguiente apartado trataremos de explicar cuál es la legislación actual y si en ella hay algún aspecto que pueda afectarnos.

²³⁰ R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, cit., p. 563.

2. Las bases constitucionales

En nuestra Constitución existen diversos preceptos que afectan, de una manera u otra, a la materia que estamos analizando. Por ello, debemos analizarlos uno por uno para ver cuáles son y cuál es su contenido.

La primera referencia que se hace al término cultura la podemos encontrar en el Preámbulo, cuando se señala que “la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” y “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.

Es evidente que en España existe una pluralidad de culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Con el contenido del Preámbulo de nuestra Constitución se ha querido recoger la voluntad de protegerlos.

Esta protección, que corresponde a los poderes públicos en general, se fundamenta en la existencia de otros preceptos recogidos en la Constitución, que analizaremos en las siguientes líneas.

La Constitución española contempla en su artículo 44 que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la

que todos tienen derecho”. Esto implica que la misma reconoce el derecho a la cultura dentro de los principios rectores de la política social y económica. Además, como veremos posteriormente, los poderes públicos deben promover este derecho a la cultura y deben facilitar el acceso de los ciudadanos a la misma. En términos similares se pronunciaba GARCÍA DE ENTERRÍA, cuando subrayaba que el hecho de haber incluido en la Constitución estos derechos ya garantizaban que existiesen en una norma jurídica vinculante con una aplicación jurídica inmediata²³¹.

No obstante, no sólo el artículo 44 CE se refiere a los poderes públicos. A continuación, nos adentraremos en el núcleo del análisis constitucional, con referencias al término cultura y, por extensión, al patrimonio cultural.

²³¹ A. PREDIERI, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Dir.), *La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático*, Cívitas, Madrid, 1980, pp. 27 y ss.

A. Marco sustantivo: artículo 46 CE

Otro de los preceptos importantes es, sin lugar a dudas, el artículo 46 CE. En él se contempla que corresponde a los poderes públicos garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Nada se dice, expresamente, del patrimonio cultural subacuático, aunque, de acuerdo con BARRERO RODRÍGUEZ, el patrimonio subacuático, en tanto en cuanto es patrimonio arqueológico y está vinculado a los términos histórico y cultural, podemos incluirlo como patrimonio histórico y patrimonio cultural y, por tanto, estaría contemplado como un tipo más de patrimonio en nuestra Carta Magna²³². En esa misma línea, AZNAR GÓMEZ opina que “corresponde, pues, a todos los poderes públicos la protección del patrimonio, incluido el patrimonio cultural subacuático”²³³.

También afirma el catedrático de Derecho Constitucional ALZAGA VILLAAMIL que, al no determinarse de qué poderes públicos se trata, se encuentran implicados todas las Administraciones públicas, es decir, estatal, autonómica y local²³⁴.

²³² C. BARRERO RODRÍGUEZ, *La ordenación jurídica del patrimonio histórico*, cit., pp. 160 y ss.

²³³ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 385.

²³⁴ O. ALZAGA VILLAAMIL, *Comentario Sistemático a la Constitución Española*, Ediciones del Foro, Madrid, 1978, p. 328.

No podemos olvidarnos de que el artículo 46 fue redactado con anterioridad a la vigente LPHE, que es la que explica qué debemos entender por patrimonio histórico y patrimonio cultural, pero aun así, gran parte de la doctrina más relevante en España entiende que aun siendo la ley del año 1985, cuando el artículo 46 de la Constitución habla de patrimonio histórico y patrimonio cultural, se está englobando al patrimonio cultural sumergido, frente a otros autores que consideraran que es necesaria una mención expresa²³⁵.

A nuestro juicio, consideramos que aun interpretando que el patrimonio cultural subacuático podría estar incluido en los diferentes tipos de patrimonio que aparecen en la Constitución, no estaría de más una mención expresa, para evitar todo tipo de confusiones o interpretaciones que pudieran perjudicarlo. Con todo ello, parecen acertadas y concordamos con las opiniones de los autores que consideran que el patrimonio cultural subacuático tendría encaje en el artículo 1 de la LPHE, como veremos más adelante cuando se expliquen los aspectos más relevantes de dicha ley.

El contenido del artículo 46 CE cobra especial sentido cuando se pone en relación con otros artículos de la Constitución que hacen referencia expresa al término cultural. No nos olvidemos que la

²³⁵ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, p 21.

LPHE se fundamenta en el artículo 46 CE, artículo recogido dentro del Capítulo III de la Sección segunda del Título Primero²³⁶.

Siguiendo el orden de los preceptos constitucionales, el primer artículo que nos encontramos y que debe ponerse en relación al artículo 46 CE es el 9.2 CE, según el cual “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

También los artículos 48 CE y 50 CE, aunque con un contenido de una importancia menor para el objeto de nuestro estudio, deben ser traídos a colación, porque en ellos se hace mención expresa al término cultura como parte de los principios rectores de la política social y económica. Así, el artículo 48 CE establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”, y el artículo 50 CE establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

²³⁶ Artículo que no es susceptible de Recurso de Amparo (Art. 53.2 CE), sino que se le aplicaría el artículo 53.3 CE, a cuyo tenor “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

B. Dominio público: artículo 132.2 CE

Siguiendo con el análisis constitucional, además del artículo 46 de la Constitución y los demás relacionados, hay otro precepto al que debemos referirnos, como es el artículo 132, en su apartado segundo, cuando establece la condición de bienes de dominio público²³⁷. Este nos indica que “son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. En él se regula, entre otras cosas, que el mar territorial será un bien de dominio público, pero nada se comenta sobre la zona contigua o zona económica exclusiva²³⁸. La referencia que se hace a la plataforma continental y a la zona económica se refiere únicamente a

²³⁷ En relación con el dominio público como institución jurídica, puede consultarse A. MENÉNDEZ REXACH, “El dominio público como institución jurídica: configuración histórica y significado actual en el derecho público español”, *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, nº. 10, 2004, pp. 209 y ss. También, del mismo autor: “Principios generales de utilización del dominio público marítimo terrestre: uso común, usos especiales (con previa autorización; con previa concesión); adscripción; reserva”, *El derecho de costas en España*, (Coord. por Enrique Sánchez Goyanes), La Ley, Madrid, 2010, pp. 725 y ss.

²³⁸ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 386.

los recursos naturales y no a los objetos que sean o puedan ser patrimonio cultural y que se encuentren en esa zona²³⁹.

Hay otro aspecto que conviene resaltar y es el relativo al mar territorial como bien de dominio público estatal, en relación con el alcance territorial. Esto se relaciona, en cierta medida, con las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado, ya que las primeras, como bien señala AZNAR GÓMEZ, “extienden el ejercicio de sus competencias a su ámbito territorial del que se excluyen las aguas territoriales españolas que bañan sus respectivas costas”²⁴⁰.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en varias sentencias, en las que señala que “aparte de que la condición de dominio público no es un criterio utilizado en nuestra Constitución [...] para delimitar competencias es lo cierto que el concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción de territorio de su entorno, y considerarlo como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que las ostenten”²⁴¹. En otra sentencia, el máximo intérprete de la Constitución indica que “puede afirmarse que, con base en el texto de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, las normas que distribuyen competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre

²³⁹ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 386.

²⁴⁰ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 389.

²⁴¹ STC 77/1984, de 3 de julio, Fundamento Jurídico nº. 3.

bienes de dominio público no prejuzga necesariamente que la titularidad del mismo corresponde a éste o a aquéllas”²⁴².

Desde otra óptica, el Tribunal Constitucional, siguiendo su jurisprudencia, nos indica que “la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es competencia propia del Estado la determinación de aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural y que atribuyen al Estado la titularidad del mismo”²⁴³. Por todo lo expuesto, se puede deducir que, aunque el Estado sea titular del dominio público, no implica que sea un criterio que delimite la competencia que pueda corresponder a otros entes públicos.

C. Reparto competencial

En lo que nos afecta, al existir normativa estatal y autonómica en España, debemos hacer un breve recorrido por ambas y analizarlas, ya que, como bien señala BARCELONA LLOP, “en el caso español, el único punto serio de debate estriba en si la competencia para

²⁴² STC 227/1988, de 29 de noviembre, Fundamento Jurídico nº. 14.

²⁴³ STC 149/1991, de 4 de julio, Fundamento Jurídico nº. 1.

gestionar el patrimonio sumergido allí es de las Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado”²⁴⁴ y, al mismo tiempo, como apunta PÉREZ LUÑO “plantea una serie de problemas cuya interpretación y adecuada solución no siempre va a ser fácil”²⁴⁵.

a) Parte general: articulación competencial entre Estado y Comunidades Autónomas

i) La Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero

En 1987 el catedrático de Derecho Administrativo BASSOLS COMA ya ponía de manifiesto que el reparto competencial sobre el patrimonio histórico-artístico no era una novedad para Constitución de 1978: “la asunción de competencias en materia de patrimonio histórico-artístico por parte de instancias regionales había tenido ya importantes antecedentes en el régimen republicano y en particular a cargo de la Generalidad de Cataluña, primero mediante el Decreto de 30 de noviembre de 1933, de traspaso de competencias, y, en un segundo

²⁴⁴ “Recensión Bibliográfica: M. J. AZNAR GÓMEZ, La protección internacional del patrimonio cultural subacuático. Con especial referencia al caso de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 431”, *Revista de Administración Pública*, nº. 170, Madrid, 2006.

²⁴⁵ *Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978*, VV.AA. Edersa, Madrid, 1984, p. 304.

estadio, con la promulgación de la Ley catalana de 3 de julio de 1934”²⁴⁶.

Teniendo claro que corresponde a los poderes públicos la protección del patrimonio objeto de nuestro estudio, y que no se especifica de quiénes se trata, como hemos señalado anteriormente, se puede defender que corresponde tanto al Estado, como a las Comunidades Autónomas e incluso a los entes locales.

En España, como Estado descentralizado que es, hay una serie de competencias que le corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas e incluso a los municipios, algo distinto a lo que pasa en otros Estados que no son descentralizados como puede ser el caso de Francia. Esto es importante en el sentido de que estamos hablando de bienes que en la mayor parte de las ocasiones no se encuentran en tierra, sino en el mar, y surge el problema de la titularidad de la competencia sobre la materia.

Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas y las competencias exclusivas del Estado aparecen reguladas en los artículos 148 y 149 de nuestra Constitución respectivamente. Aunque no hacen una referencia concreta al patrimonio cultural subacuático, materia de nuestro análisis, sí son interesantes, ya que en esos artículos se regulan las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas y las competencias que

²⁴⁶ “El patrimonio histórico español: aspectos de su régimen jurídico”, *Revista de Administración Pública*, nº. 114, 1987, pp. 94-95.

son exclusivas del Estado respectivamente, en cuanto a cuestiones relativas al patrimonio histórico y cultural.

Por todo el conflicto competencial que provoca esta materia, el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a pronunciarse y así lo ha hecho con la sentencia 17/1991, de 31 de enero que ha supuesto un antes y un después y que analizaremos en las líneas siguientes.

Si hay una sentencia relevante en la materia que estamos analizando, es ésta. Esta sentencia trató de asentar, seis años después, el reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas debido a que fue un punto fuerte de discusión entre ellos. No obstante, nos atrevemos a anunciar que, aun siendo una sentencia clave y pionera para entender el reparto competencial entre ambos entes, veinte años más tarde el Tribunal Constitucional tuvo que volver a pronunciarse de nuevo al invadir la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva que posee el Estado en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación.

Aunque esta sentencia ha supuesto un importante hito en la materia, la doctrina más importante entiende que el fallo y la argumentación del Tribunal Constitucional no han sido del todo correcta. En palabras de ALONSO IBÁÑEZ, “El Tribunal (...) no acierta a encontrar el punto de inflexión sobre el que debía haber girado el debate. Es por ello una sentencia con una fundamentación jurídica

muy pobre, que no ha respondido a las expectativas que había despertado”²⁴⁷.

En un sentido similar, también se muestra crítico con la sentencia el profesor ALEGRE ÁVILA. Según el autor, no se hace ninguna referencia en ella al artículo 148.1.16 CE y ello “supone que el Tribunal Constitucional haya de amparar la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos impugnados en los conceptos de «exportación» y «expoliación» a que alude el 149.1.28, lo cual a su vez le lleva a forzar el sentido de otra serie de preceptos [...] para salvar su constitucionalidad a la vista del imposible encaje de los mismos en los más arriba citados conceptos de exportación y expoliación. Esta interpretación, a su vez, supone, en nuestra opinión, la mayor quiebra en la fundamentación de la Sentencia, por cuanto lleva a conclusiones difícilmente aceptables desde la lógica de la LPHE”²⁴⁸.

²⁴⁷ M. R. ALONSO IBÁÑEZ, *El patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural*, Civitas, Madrid, 1992, p. 91.

²⁴⁸ J. M. ALEGRE ÁVILA, *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, Ministerio de Cultura, tomo II, Madrid, 1994, p. 756.

Si bien es cierto que en la actualidad todavía sigue existiendo un conflicto evidente en la determinación de la titularidad de la competencia en materia de patrimonio histórico y cultural, la sentencia de 17/1991 supuso un avance en cuanto a la interpretación tanto del artículo 149.1.28 CE como del 149.2 CE²⁴⁹. En nuestra opinión, si el problema todavía no se ha resuelto, puede ser por el afán de extralimitación competencial que tienen algunas Comunidades Autónomas que, ignorando la legislación vigente, tratan de retorcerla para ampliar su poder competencial.

No obstante, lo que señala el profesor ALEGRE ÁVILA tiene especial sentido. De la lectura de la sentencia, se desprende un claro interés de la defensa de la ley estatal en detrimento de lo alegado por las Comunidades Autónomas. El Tribunal trata de reconducir todos los argumentos al artículo 149.1.28 CE, para poder sostener la constitucionalidad de los preceptos impugnados sin entrar, en ningún caso, a valorar el artículo 148.1.16, el cual reconoce la competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio monumental de su interés.

Centrándonos en el fondo de la sentencia, debemos señalar que, aprobada la LPHE en 1985, determinadas Comunidades Autónomas entendieron que la misma entraba en conflicto con la competencia que recogían sus respectivos Estatutos de Autonomía.

²⁴⁹ F. RAMÓN LÓPEZ, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p. 20.

Así las cosas, se presentaron cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Consejo ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Gobierno del País Vasco y el Parlamento Catalán²⁵⁰.

Aunque coinciden en varios puntos, no todos recurren los mismos artículos. No obstante, los artículos principales fueron objeto de impugnación por todos los recurrentes, buscando el mismo propósito: denunciar que la citada LPHE invade las competencias de las Comunidades Autónomas.

En respuesta a las impugnaciones, el Tribunal Constitucional falló que los artículos 2.3, 9.1, 9.2, párrafo final del artículo 9.5, la disposición transitoria sexta, y el artículo 49.5 no contradecían lo dispuesto en la Constitución y, desestimó en todo lo restante los

²⁵⁰ Recursos de inconstitucionalidad número 830/1985, 847/1985, 850/1985 y 858/1985.

El recurso 830/1985 del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña impugna los artículos: 1.3, 2.3, 4, 9 (y por conexión con él, el artículo 18 y la disposición adicional sexta), 12, 13, 26, 28.2, 30 apartado h) y apartado i), 32.3, 33, 38, 49.5, 51, 56, 69.2 y la disposición transitoria segunda.

El recurso 847/1985 de la Xunta de Galicia impugna los artículos: 1.3, 2.2, 3, 9, 12.1, 13, 18, 26.1, 26.5, 32.3, 33, 38.4, 49.5, 51.1, 53 y la disposición transitoria sexta apartado primero.

El recurso 850/1985 del Gobierno del País Vasco impugna los artículos: 4, 6 apartado b, 7, 9, 12, 13.1, 18, 28.2, 32, 33, 49.5, 69.2, disposición adicional cuarta y la disposición transitoria sexta apartado primero.

El recurso 858/1985 del Parlamento de Cataluña impugna los siguientes preceptos: 1.3, 2.3, 9, 12, 18, 26, 33, 38, 49.5, 51, 69, disposición transitoria segunda y disposición transitoria séptima.

recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los demás preceptos.

Del conjunto de la sentencia, el profesor ABAD LICERAS extrae los postulados más relevantes que fija el Tribunal para tratar de entender su oposición a los cuatro recursos interpuestos.

En primer lugar, “existe una competencia concurrente del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de cultura, ya que como el propio Tribunal señala en sus sentencias 49/1984, 157/1985 y 106/1987, «la cultura es algo de la competencia propia e institucional, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas» (FJ. 3º)”²⁵¹.

En segundo lugar, “el Estado tiene potestad para legislar en la materia relativa al patrimonio histórico-artístico, materia integrada en el concepto de cultura (...). Esta competencia puede materializarse en los siguientes supuestos:

- Con relación a los bienes de titularidad estatal (entre los que cabe incluir los pertenecientes al Patrimonio Nacional).
- Cuando se precise adoptar tratamientos generales, «específicamente aquellos principios institucionales que reclaman una

²⁵¹ J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, *Revista española de derecho constitucional*, nº. 55, año 1999, p. 166.

definición unitaria, puesto que se trata del Patrimonio Histórico Español en general (Preámbulo y art. 1.1º)»

- «Cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias»
- «Cuando se trate de materias que no hayan sido estatutariamente asumidas por cada una de las Comunidades Autónomas»
- Con relación a los bienes y situaciones descritas en el artículo 149.1.28ª, supone que «el Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación, y las Comunidades Autónomas recurrentes, en lo restante, según sus respectivos Estatutos»²⁵².

En tercer lugar, “dado que «no cabe extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del Patrimonio histórico-artístico en el término cultura, pues por esta vía se dejarían vacíos de contenidos los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan a regular una posición definida del amplio espectro de la misma» el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que, salvo en los supuestos que hemos mencionado en el apartado anterior, «las Comunidades Autónomas

²⁵² J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., p. 167.

ostentan la competencia en lo restante, según sus respectivos Estatutos»²⁵³.

En cuarto lugar, apunta ABAD LICERAS que “la competencia autonómica deberá respetar las potestades atribuidas al Estado «sin que ello implique que la eventual afectación de intereses generales o la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado en materia determinada no deban también tenerse presentes como límites que habrá de ponderar en cada caso concreto»”²⁵⁴.

Como quinto rasgo característico de esta sentencia, destaca el autor que “en todo caso, «existe un deber general de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas que no es preciso justificar mediante preceptos concretos porque es de esencia al modelo de organización territorial del Estado por la Constitución»”²⁵⁵.

²⁵³J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., p. 169.

²⁵⁴J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., p. 169.

²⁵⁵J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., p. 169.

Vistos los postulados que de manera muy acertada señala el profesor ABAD LICERAS, conviene dilucidar cómo fija el Tribunal Constitucional el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en su argumentación para determinar que los artículos impugnados son acordes con la Carta Magna.

Como primera anotación, estamos ante una competencia compartida. Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen competencia en la materia. Ahora bien, tal y como se desprende de la sentencia 17/1991, de 31 de enero, y así lo defiende ABAD LICERAS, “se aplicará la legislación estatal en los siguientes casos:

- a) Desde una perspectiva subjetiva, con relación a los bienes de titularidad estatal o adscritos a un servicio público gestionado por la Administración Central; y respecto a los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Nacional, independientemente del ámbito geográfico en que se encuentren enclavados.
- b) En los supuestos de defensa del patrimonio histórico de la Nación contra la exportación y expoliación de bienes integrantes del mismo (con independencia de su titularidad y localización espacial), tomando como referencia el artículo 149.1.28.a de la Constitución.
- c) Cuando se precise señalar una serie de principios generales, de naturaleza institucional, que pretendan conseguir una definición unitaria de la materia.

d) Cuando se trate de materias que no hayan sido estatutariamente asumidas por cada una de las Comunidades Autónomas”²⁵⁶.

Sigue añadiendo el autor que “con carácter supletorio se aplicará la legislación estatal en un doble sentido:

a) En defecto de una normativa autonómica de carácter general aplicable respecto a los bienes culturales existentes en una Comunidad Autónoma, sobre los que el Estado no ostente, en principio, ninguna titularidad.

b) Cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias, ya sea por carencia de una legislación autonómica aplicable al supuesto enjuiciado; o porque los bienes culturales se encontrasen en una situación de riesgo o peligro de daño, menoscabo o destrucción, ocasionada por una inactividad consciente o inconsciente de la Comunidad Autónoma en ese sentido, o derivada de situaciones análogas. En ambos casos, la legitimación del Estado, traducida en la aplicación de su legislación, viene dada por un doble motivo: Por una parte, porque el bien cultural autonómico también pertenece a la categoría genérica del Patrimonio Histórico Español, al participar de una naturaleza doble o ambivalente [...] y por otra parte, porque al Estado se encomienda en última instancia la defensa del patrimonio cultural frente a cualquier tipo de actividad expoliatoria [...],

²⁵⁶ “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., pp. 178-179.

atendiendo al interés general inmanente en su defensa y conservación, al tratarse de un patrimonio colectivo de toda la sociedad que ha de transmitirse a las generaciones futuras”²⁵⁷.

En relación con la opinión del Tribunal Constitucional, ALEGRE ÁVILA defiende que “la difusión internacional del conocimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, corresponde indistintamente al Estado y a las Comunidades Autónomas. No obstante, la competencia autonómica en este ámbito halla un límite inexcusable y relativamente claro: la asunción de responsabilidades internacionales, políticas o económicas, por el Estado español, en cuyo caso la competencia recae en las instancias estatales”²⁵⁸.

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, el profesor ABAD LICERAS indica que “tendrán una potestad originaria y prevalente para dictar la legislación reguladora del patrimonio histórico situado en su ámbito territorial con base en el artículo 148.1.16 de la Constitución.

²⁵⁷ J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., pp. 180-181.

²⁵⁸ J. M. ALEGRE ÁVILA, *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, tomo II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1994, p. 783.

Partiendo de esta afirmación [...], se excluiría la aplicación de la correspondiente legislación autonómica respecto a dos categorías de supuestos:

- a) En primer lugar, los bienes culturales pertenecientes a la Administración del Estado o al Patrimonio Nacional (siguiendo un criterio subjetivo o relativo a su titularidad).
- b) En segundo lugar, las situaciones subsumidas bajo los conceptos de «exportación» y «explotación» (siguiendo un criterio objetivo derivado del artículo 149.1.28.a de la Constitución).

En aquellas Comunidades Autónomas en que todavía no exista promulgada una norma que regule con carácter general la materia relativa al patrimonio histórico será de aplicación la legislación estatal, representada por la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español”²⁵⁹.

También corresponde a las Comunidades Autónomas, según ALEGRE ÁVILA, “la competencia primaria para efectuar las declaraciones de Bienes de Interés Cultural [...] salvo que se trate de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional, en cuyo caso la competencia para proceder a la oportuna declaración [...] ha de recaer en los órganos estatales. Tal es, en efecto, la conclusión que puede

²⁵⁹ J. M. ABAD LICERAS, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales”, cit., p. 183.

extraerse a la vista de la interpretación que de los art. 6,b) y 9,2 LPHE efectúa el Tribunal Constitucional”²⁶⁰.

En esta línea, “las Comunidades Autónomas pueden efectuar la declaración a que se refiere el art. 49,5 LPHE, esto es, podrán declarar que los documentos que no alcanzan la antigüedad indicada en los números 2, 3 y 4 del citado art. 49 merecen la consideración de constitutivos del Patrimonio Documental. En consecuencia, por tanto, nada impide que la Administración del Estado pueda efectuar idéntica declaración de pertenencia”²⁶¹.

Las Comunidades Autónomas juegan un papel relevante en este sentido. Sin perjuicio de las competencias del artículo 149.1 y 149.2 CE, el Tribunal Constitucional señala que éstas pueden ejercer competencias sobre el mar territorial que bordea su litoral siempre y cuando esas competencias fuesen asumidas en los Estatutos de Autonomía correspondientes o cuando se prevea en la legislación estatal²⁶².

²⁶⁰ J. M. ALEGRE ÁVILA, *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, tomo II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1994, p. 784.

²⁶¹ J. M. ALEGRE ÁVILA, *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, cit., p. 784.

²⁶² La STC 38/2002 señala que “en el mar territorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento estatutario [...] bien de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la interpretación del bloque de la constitucionalidad”.

Vemos, por tanto, como las Comunidades Autónomas no sólo disponen de competencias de gestión, sino que también tienen competencias legislativas y ejecutivas.

Como apuntamos a lo largo de este estudio, no habría problema en considerar al patrimonio sumergido como un tipo de patrimonio histórico y cultural y, por tanto, tendría encaje en lo regulado en los artículos 148.1.16 y 149.1.28 de nuestra Carta Magna.

Así, podemos decir que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de “patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma”, y que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación [...]”. Por ello, el patrimonio cultural subacuático entraría en ese patrimonio histórico, cultural, artístico y monumental español a los que hacen referencia los artículos anteriores. Así lo consideran autores como RUIZ MANTECA²⁶³ y AZNAR GÓMEZ²⁶⁴.

En la misma dirección, VAQUER CABALLERÍA defiende el criterio de la territorialidad cuando señala que “no puede seguir afirmándose [...] que al Estado le corresponde en exclusiva el ejercicio

²⁶³ R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado* Ministerio de Defensa, 2012, pp. 566 y ss.

²⁶⁴ “España y el patrimonio cultural subacuático: algunos problemas jurídicos”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, nº. 10, 2007, p. 206.

de todas las potestades (legislativas, reglamentarias y ejecutivas) en lo necesario para la consecución de un fin (la defensa contra la exportación y la expoliación del patrimonio), del mismo modo que las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia plena (y por tanto también las funciones legislativa, reglamentaria y ejecutiva) para los restantes fines de interés general en la conservación y promoción del patrimonio cultural; sino que el Estado ostenta una competencia legislativa básica general en la materia, que se completa con una competencia ejecutiva, sólo parcialmente exclusiva, para el fin mencionado y concurrente para el de promoción de la cultura”²⁶⁵.

Por tanto, si las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de patrimonio monumental que radique en su territorio, como bien apuntan MENÉNDEZ GARCÍA y ARJONES GIRÁLDEZ, “se infiere que las Comunidades Autónomas no sólo tendrán competencias ejecutivas o de gestión sobre el patrimonio cultural «común», sino también competencias propias –esto es, legislativas y ejecutivas, sobre el patrimonio cultural autonómico”²⁶⁶.

²⁶⁵ *Estado y cultura: La función cultural de los poderes públicos en la Constitución Española*, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1998, p. 325.

²⁶⁶ P. MENÉNDEZ GARCÍA y D. ARJONES GIRÁLDEZ, “La protección del patrimonio cultural subacuático en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras”, *El camino de Santiago y otros itinerarios. Cultura, historia, patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 337.

b) Parte especial: peculiaridades competenciales del patrimonio cultural subacuático

Analizadas las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en la parte general, donde se ha visto que se trata de una competencia compartida, hay que aplicarlo ahora al patrimonio cultural subacuático.

En un principio, puede pensarse que el reparto competencial de este tipo de patrimonio –que es especial– es el mismo. No obstante, comprobaremos que depende de la ubicación del mismo y que no siempre estaremos ante una competencia compartida.

Cuando se trata de patrimonio arqueológico que está radicado dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, es evidente que la competencia –tal y como se ha visto– depende de ella. Pongamos por ejemplo un castro al lado de un embalse situado en la provincia de Ourense que fue inundado por el mismo. No cabe duda que la Comunidad Autónoma en donde se encuentre ese embalse tiene competencias sobre el territorio. En ese sentido, tampoco habría dudas en afirmar, como sostiene BARCELONA LLOP, que “el dominio público arqueológico de titularidad autonómica se circunscribe a los

bienes ubicados en el territorio de la comunidad autónoma de que se trate”²⁶⁷.

Lo más frecuente no es encontrar patrimonio cultural en ríos, embalses o lagunas, sino que lo habitual es que este tipo de patrimonio se encuentra en el mar y, en especial, en el mar territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, etc., espacios marinos que no forman parte del territorio de una Comunidad Autónoma.

Cuando se llevó a cabo la división del territorio estatal en municipios y en Comunidades Autónomas, se hizo en base a la naturaleza “terrestre” del territorio, sin tener en cuenta la zona marítima adyacente al territorio del municipio²⁶⁸.

La cuestión de determinar a quién corresponde la competencia sobre el mar territorial en España no resulta sencillo, porque no hay una postura unánime al respecto. Podemos resaltar dos posturas:

a) Por un lado, la teoría de BARCELONA LLOP, que se decanta por la postura de que el mar territorial no forma parte del

²⁶⁷ J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n.º. 99-100, 2014, p. 502.

²⁶⁸ S. MUÑOZ MACHADO, *Derecho Público de las Comunidades Autónomas*, Vol. 1, 2ª, Iustel, Madrid, 2007, pp. 228 y ss.

territorio autonómico basándose en la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto²⁶⁹.

b) Por otro lado, la teoría defendida por MENÉNDEZ GARCÍA y ARJONES GIRÁLDEZ, que defienden que “si bien la Constitución nada señala sobre un reconocimiento expreso de competencias de las Comunidades Autónomas sobre el patrimonio cultural hallado en el mar territorial, tampoco lo niega, siendo así que la división de competencias operada por la misma y recogida posteriormente en los diferentes Estatutos de Autonomía ha de entenderse proyectada sobre todo el espacio soberano español”²⁷⁰.

c) Y por último, una postura intermedia entre las dos anteriores, defendida por ALCOCEBA GALLEGO, la cual no discute que el mar territorial no forme parte del territorio de la Comunidad Autónoma, pero, a diferencia de los anteriores, sostiene que “ha de tenerse en cuenta que tanto la propia Constitución como algunos estatutos de autonomía recogen la posibilidad de que las Comunidades Autónomas ejerzan competencias sobre el mar territorial”²⁷¹.

²⁶⁹ J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n.º. 99-100, 2014, p. 503.

²⁷⁰ P. MENÉNDEZ GARCÍA, y D. ARJONES GIRÁLDEZ, cit. p. 348.

²⁷¹ M. A. ALCOCEBA GALLEGO, “Algunas consideraciones sobre los aspectos competenciales del caso Odyssey y el régimen de protección del Patrimonio Subacuático Español”, *La protección jurídico internacional del patrimonio cultural: especial referencia a España*, C. R. Fernández de Liesa y J. Prieto de Pedro (Dirs.), Colex, Madrid, 2009, p. 462.

Para fundamentar la primera de las teorías señaladas anteriormente, BARCELONA LLOP hace alusión a varias sentencias del Tribunal Constitucional. La primera de ellas es la 8/2013, de 17 de enero, que viene a marcar la pauta en la que el Tribunal Constitucional defiende que el territorio autonómico se extiende al ámbito de los municipios que integran la correspondiente comunidad y que éstos nunca se han extendido ni tampoco se extienden hoy al mar territorial. Señala BARCELONA LLOP que “el presupuesto del que parte el Tribunal Constitucional es que si el mar territorial no forma parte de los términos municipales tampoco puede hacerlo de un territorio autonómico erigido, precisamente, sobre la base de aquellos”²⁷².

Luego existen otras sentencias en las que el Tribunal Constitucional se ratifica en su postura: STC 87/2013, de 11 de abril, STC 99/2013, de 23 de abril, 3/2014, de 16 de enero, 25/2014, de 13 de febrero, y la última sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en esta materia, la STC 121/2014, de 17 de julio.

En el lado opuesto, según MENÉNDEZ GARCÍA y ARJONES GIRÁLDEZ, “son éstas las encargadas de autorizar y gestionar las prospecciones marinas sobre nuestro patrimonio sumergido, con un grado de facultades igual al que se irradia sobre el

²⁷²M. A. ALCOCEBA GALLEG0, “Algunas consideraciones sobre los aspectos competenciales del caso Odyssey y el régimen de protección del Patrimonio Subacuático Español”, cit., p. 503.

patrimonio cultural ubicado tierra adentro, dentro de los límites de la Comunidad”²⁷³.

La teoría defendida por estos autores, a nuestro juicio, es en parte cierta y en parte incierta. El primero de los argumentos que esgrimen es incorrecto. Si bien es verdad que, como señalan los autores, “la Constitución nada señala sobre un reconocimiento expreso de competencias de las Comunidades Autónomas sobre el patrimonio cultural hallado en el mar territorial”, es evidente que, si el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el mar territorial no forma parte del territorio de una Comunidad Autónoma, el patrimonio cultural subacuático allí encontrado no pertenece a la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, el segundo argumento que dan es parcialmente cierto. Cuando hacen referencia a que son las Comunidades Autónomas “las encargadas de autorizar y gestionar las prospecciones marinas sobre nuestro patrimonio sumergido”, es correcto y puede ponerse en relación con la actividad arqueológica. No obstante, como defiende BARCELONA LLOP, “el hecho de que el mar territorial pertenezca al dominio público del Estado por imperativo constitucional no significa que el Estado sea competente para autorizar las intervenciones arqueológicas a ejecutar allí [...] el Estado carece de competencias de

²⁷³ P. MENÉNDEZ GARCÍA, y D. ARJONES GIRÁLDEZ, “La protección del patrimonio cultural subacuático en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras”, *El camino de Santiago y otros itinerarios. Cultura, historia, patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 343.

ejecución en materia de patrimonio cultural que vayan más allá de las muy magras que le reconoció la STC 17/1991, de 17 de enero”²⁷⁴.

En relación con lo anterior, “las autorizaciones arqueológicas no se refieren a la utilización o disfrute del dominio público sino que habilitan para la investigación y estudio de los vestigios, son actos administrativos distintos de los que permiten aprovechar u ocupar un bien demanial y que sólo pueden ser dictados por la Administración titular del mismo pues únicamente ella puede consentir que sus bienes sean disfrutados por terceros más allá del uso común o general”²⁷⁵.

Por último, se encontraría la teoría intermedia defendida por ALCOCEBA GALLEGO. Es indiscutible que el Tribunal Constitucional no considera al mar territorial como territorio de las Comunidades Autónomas y así lo ha puesto de manifiesto en reiteradas sentencias. Ahora bien, también ha reconocido el Constitucional en la sentencia 8/2013, de 17 de enero, citada anteriormente, que sobre el mar territorial pueden ejercerse ciertas competencias autonómicas atendiendo a su naturaleza, como es el caso de la acuicultura, haciendo referencia a la sentencia 103/1989, de 8 de junio.

Lo mismo se vuelve a traer a colación por parte del Tribunal Constitucional en la STC 38/2002, de 14 de febrero: “en el mar

²⁷⁴ J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, cit., pp. 506 y 507.

²⁷⁵ J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, cit., p. 507.

territorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento estatutario (vertidos industriales o contaminantes en aguas territoriales, salvamento marítimo: arts. 17.6 y 11 EA And) bien de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la interpretación del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 103/1989, de 8 de junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de diciembre; marisqueo: STC 9/2001, de 18 de enero)”.

La teoría que defendemos es, sin lugar a dudas, la de BARCELONA LLOP. Es evidente que el mar territorial no forma parte del territorio de una Comunidad Autónoma y así ha quedado establecido por las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. No obstante, ello no es óbice para reconocer que las Comunidades Autónomas tienen reconocida en el 148.1.16 CE la competencia sobre el patrimonio histórico situado en su ámbito territorial y que sea de su interés. No sólo disponen de competencias de gestión, sino que también tienen competencias legislativas y ejecutivas.

También pueden asumir competencias en materia de “patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma”, y, a su vez, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación”.

Las Comunidades Autónomas tienen competencia para declarar su patrimonio como Bien de Interés Cultural e incluso, tal y como extrae de la STC 17/1991, de 17 enero, ALEGRE ÁVILA, “las Comunidades Autónomas pueden efectuar la declaración a que se refiere el art. 49,5 LPHE, esto es, podrán declarar que los documentos que no alcanzan la antigüedad indicada en los números 2, 3 y 4 del citado art. 49 merecen la consideración de constitutivos del Patrimonio Documental”²⁷⁶.

Concluiremos este apartado citando a LAFUENTE BATANERO, quien hace un resumen sobre esta cuestión que resulta de mucha utilidad al separar, de manera resumida, las competencias de las CC.AA. y del Estado:

“Con carácter general la administración competente para aplicar la ley en materia de patrimonio arqueológico (declaración de BIC, inclusión en el Inventario, autorizaciones administrativas de excavaciones o prospecciones, tasar el precio en el hallazgo casual para el premio, etc.) son las Comunidades Autónomas. El Estado, solamente tiene competencia para los siguientes casos:

-Exportación de bienes arqueológicos.

²⁷⁶ *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, tomo II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1994, p. 784.

-Expoliación, en el sentido estricto que le otorga el R. D. 111/86, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

-Patrimonio arqueológico adscrito a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o pertenecientes al Patrimonio Nacional.

- Realización y firma de Convenios Internacionales sobre la materia.

- Defensa de nuestros intereses arqueológicos fuera de nuestras fronteras. (p.e. pecios españoles hundidos en aguas de terceros países o internacionales)”²⁷⁷.

c) Competencias locales

Siguiendo con el marco competencial del patrimonio histórico y cultural, toca analizar ahora el ámbito competencial sobre esta materia que corresponde a los entes locales.

Sin duda, hay que atender a varias leyes para determinar el papel de los entes locales en este ámbito. Por un lado, se encuentra la LPHE, tantas veces mencionada, que en su artículo 7 prevé la colaboración de los entes locales cuando establece que “los

²⁷⁷ L. LAFUENTE BATANERO, “Líneas de actuación para una eficaz protección del patrimonio arqueológico subacuático”, *Monte Buciero*, nº. 9, 2003, pp. 69-70.

Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley”.

Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, reconocía en su artículo 25.2 a los municipios, antes de su modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, competencia sobre patrimonio histórico-artístico y, por tanto, podían adoptar determinados reglamentos sobre la materia.

Ahora bien, es importante resaltar que, aunque los municipios puedan adoptar determinados reglamentos, no quiere decir que se les dote de la competencia exclusiva y plena sobre el patrimonio cultural subacuático, sino de mera ejecución normativa, y aquélla recae en las CC.AA. en virtud del principio de territorialidad. Al respecto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional cuando señala que “el ejercicio de una competencia atribuida –a una Comunidad Autónoma–, debe tener como soporte y presupuesto el territorio en el cual esa Comunidad ejerza sus potestades, de suerte que éste opera como límite

para aquél, ya que si no se respetara tal ámbito competencial podría invadirse indebidamente el de otra Comunidad con olvido de lo que hemos dado en llamar la territorialidad de las competencias autonómicas”²⁷⁸.

Actualmente es importante traer a colación que la Ley 27/2013 modificó el artículo 25.2 y los municipios carecen de competencia sobre el patrimonio y ésta recae en las Comunidades Autónomas. No obstante, dado que la legislación sectorial de patrimonio tanto estatal como autonómica les reconoce la competencia, y no se han producido modificaciones al respecto, hay que entender que los municipios siguen teniendo la obligación de colaborar en la protección del patrimonio cultural que se halle en su territorio. Hablamos, en este caso, de una competencia de ejecución en el marco de la LPHE y de las leyes autonómicas que lo contemplen. Entre estas competencias podemos destacar la conservación, protección y custodia del patrimonio cultural de su territorio, incluso hasta condicionar el ejercicio de otras competencias como, por ejemplo, la urbanística.

²⁷⁸ STC 195/2001, de 4 de octubre, concretamente en su Fundamento Jurídico nº. 4.

3. La regulación del patrimonio cultural subacuático en el ámbito estatal

A. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Centrándonos ahora en la legislación estatal, la primera ley que conviene traer a colación es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

La LPHE nace como solución al caos legislativo sobre la materia que existía hasta este momento. Sin duda, toda la legislación anterior existente era muy amplia y confusa. Infelizmente, en ninguna normativa anterior se regulaba explícitamente el patrimonio cultural subacuático o materia semejante, salvo en el Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas, al que nos referiremos posteriormente.

Hasta el momento de la aprobación de la ley de 1985, *grosso modo*, el patrimonio histórico-artístico estaba regulado por la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. Ésta constituyó “el verdadero código unitario de los bienes integrantes del patrimonio histórico-artístico”²⁷⁹.

²⁷⁹ J. M. ALEGRE ÁVILA, *Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico*, cit., p. 131.

Esta ley, aprobada por el gobierno de la II República española y que estuvo en vigor más de medio siglo, junto con el Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional, aprobada por el Decreto de 16 de abril de 1936 –derogado expresamente por el Decreto 111/1986) –, fueron dictadas al amparo de la Constitución de 1931. Es importante traer a colación que es en esa Constitución cuando, por primera vez, se hace referencia en una Carta Magna española a la protección del Patrimonio Histórico. Concretamente, en su Capítulo II, rubricado como “familia, economía y cultura”.

En el artículo 45 de la Constitución de 1931 se señalaba lo siguiente: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico”.

Con la redacción de este artículo se fijan las bases de la protección del patrimonio histórico-artístico español y toda la posterior legislación sobre la materia, entre las que se encuentra el patrimonio

arqueológico como uno de los tipos de patrimonio existentes, dentro del cual debemos situar al patrimonio subacuático.

No obstante, conviene señalar que la ley de 1933 no era la única que regulaba el patrimonio histórico-artístico y que existían otras normas vigentes, como por ejemplo la Real Cédula de 6 de junio de 1803, la Cédula de 28 de abril de 1837, la Real Orden de 13 de junio de 1844, la Ley de instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como “Ley Moyano”, y también el Decreto de 16 de diciembre de 1873. En el siglo XX contamos, entre otras, con la Ley de excavaciones de 1911 y su reglamento de 1912, la Ley de 4 de marzo de 1915 relativa a los monumentos nacionales arquitectónicos-artísticos y el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, que crea el Tesoro Artístico Arqueológico Nacional²⁸⁰.

Este elevado volumen legislativo, como bien apunta ÁLVAREZ ÁLVAREZ,—quien tuvo oportunidad de colaborar en la redacción de la LPHE de 1985—, provocaba “una gran dificultad para determinar los preceptos que están derogados, ya que el sistema seguido por casi todas estas normas es el de no derogar las disposiciones anteriores, sino o declararlas vigentes considerando derogados sólo los preceptos contrarios a lo consignado en la disposición que se dicta, o declarar vigentes de forma indiscriminada las normas anteriores [...] Si todo

²⁸⁰ En su artículo 1 define los bienes que van a quedar sujetos a su tutela: “constituyen tesoro artístico nacional el conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos de ser conservados para la Nación por razones de Arte y cultura”.

esto lo vertemos sobre la materia que tratamos, en la que en menos de sesenta años se han dictado más de una disposición anual, no es difícil hacerse idea de la dificultad de moverse en esta legislación, que para mayor inconveniente ha suscitado muy poca jurisprudencia”²⁸¹.

No era de extrañar que, de una vez por todas, se quisiera configurar un nuevo texto legislativo en el que se trataran todas las materias y que dejase sin efecto todas las normas anteriores. En este sentido, a instancias del Ministerio de Cultura se empezó a bosquejar un nuevo texto legal.²⁸²

La situación no era fácil. De hecho, GARCÍA DE ENTERRÍA apuntó en 1983, en el marco de una conferencia impartida en Madrid, que una nueva Ley de Patrimonio Artístico planteaba “grandes problemas”.

Para el catedrático de Derecho Administrativo, el primer problema que había que tener en cuenta era “el de la extensión y el concepto de patrimonio artístico, cultural e histórico [...] La Constitución, como hemos visto, utiliza en su artículo 46 la expresión patrimonio histórico, cultural y artístico. La expresión “cultural” es

²⁸¹ *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, cit., p.251.

²⁸² L. DE MIGUEL RIERA.: “Estrategias actuales en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. El papel del Ministerio de Cultura” *Patrimonio Cultural de España. El Patrimonio Mundial en España: una visión crítica*, nº 2, 2009, p.133.

nueva entre nosotros. ¿Qué es lo que hay que entender por patrimonio cultural?”²⁸³.

En este sentido, señaló que “el concepto de bienes culturales es precisamente uno de los conceptos sobre los que el Derecho italiano ha centrado todo el problema del régimen jurídico de protección últimamente, sobre todo a partir de las conclusiones de [...] la Comisión Franceschini de 1966 que [...] define los bienes culturales de manera un tanto descriptiva, sin gran tecnicismo: «Pertenece al patrimonio cultural de la nación todos los bienes que incorporan una referencia a la historia de la civilización»”²⁸⁴.

Sin duda alguna, dentro de esos bienes se encontraría, entre otros, los bienes de interés arqueológico, en los cuales encajaría perfectamente el patrimonio subacuático. Señala GARCÍA DE ENTERRÍA que es en este momento cuando “comienza enseguida también la construcción jurídico-técnica de este concepto de bienes culturales”²⁸⁵.

²⁸³ E. GARCIA DE ENTERRÍA, “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, *Revista Española de Administración*, nº. 39, 1983, p. 581.

²⁸⁴ E. GARCIA DE ENTERRÍA, “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, cit., p. 582.

²⁸⁵ E. GARCIA DE ENTERRÍA, “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, cit., p. 582.

El segundo problema era la distribución territorial del poder. Sin ningún género de duda, en la actualidad hemos visto cómo lo que el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA preveía como problema acabó siéndolo. Basta con analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la problemática competencial entre Estado y Comunidades Autónomas.

El tercer hándicap que le veía era “el referente a la necesidad de recomponer en una unidad la dispersión de políticas distintas en ese campo” [...] “La política de protección ha sido, hasta la insinuación prácticamente sin desarrollo que se contiene en la Ley de 1933, una política de protección puntual, de edificios y monumentos singulares”²⁸⁶.

Analizada hasta aquí la problemática de una nueva legislación sobre patrimonio histórico, artístico y cultural planteada por GARCÍA DE ENTERRÍA, debemos continuar con el análisis de la situación previa a la aprobación de la LPHE.

Tras varios trabajos en los que se tenía como objetivo la nueva regulación del patrimonio histórico-artístico, apunta ÁLVAREZ ÁLVAREZ que “fueron varios los anteproyectos que culminaron en un nuevo proyecto de ley que presentó el gobierno de UCD y que se publicó en el Boletín del Congreso de los Diputados el 14 de septiembre

²⁸⁰ E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, cit., p. 588.

de 1981, pero que por las circunstancias políticas de 1982 no se llegó ni siquiera a discutir en el Parlamento”²⁸⁷.

A pesar del fracaso legislativo anterior, el nuevo gobierno del PSOE liderado por Felipe González presentó un proyecto de ley que fue publicado en el Boletín Oficial del Congreso el 3 de abril de 1984. Este proyecto fue criticado duramente por la oposición y se llegó a presentar una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Popular y muchas enmiendas a un elevado número de artículos²⁸⁸. Tras varios meses de trabajo se aprobó la ley actual, cumpliéndose así el mandato constitucional del artículo 46 de nuestra actual Constitución.

Tal y como se puede observar en el Preámbulo, “su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexistentes. (...) La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los

²⁸⁷ J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 252.

²⁸⁸ J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, cit., p. 253.

apartados 1 y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial”²⁸⁹.

El objeto de la ley es múltiple. Tal y como se establece en su artículo 1, “son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español”.

Como señala ÁLVAREZ ÁLVAREZ, “este párrafo es una ratificación por la ley de las ideas que latan en el artículo 46 de la Constitución. Esta habla de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento. La conservación exige y encierra la protección y la transmisión, porque se conserva defendiendo y protegiendo ese patrimonio. Y esa función se complementa y actualiza: con la transmisión a las nuevas generaciones; estableciéndose el lazo de continuidad, que es uno de los caracteres del PH, y con el conocimiento y acceso de las generaciones presentes, pero de manera que su disfrute no afecte a su transmisión.

²⁸⁹ Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.

La protección a la conservación es presupuesto necesario para el acrecentamiento o enriquecimiento y para la transmisión y el acceso. Nos parece que en un orden lógico el primer fin u objeto de esta legislación tiene que ser la conservación y protección. Y por ello se refieren en primer lugar tanto la Constitución como la ley”²⁹⁰.

Al no existir una norma específica que ordene tanto la protección del patrimonio cultural subacuático como su régimen jurídico, tenemos que ceñirnos a lo dispuesto en esta ley, ya que es la que se encarga de regular los aspectos del patrimonio arqueológico, entre otros.

La LPHE desarrolló el mandato constitucional de la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural. En el apartado 2 de su artículo 1, aunque no se hace mención expresa al patrimonio cultural subacuático, sí se hace referencia al patrimonio arqueológico. Se señala que “integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y los objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”.

La siguiente referencia que nos afecta es el contenido del artículo 15 en su apartado 5, cuando declara que la Zona Arqueológica es “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan

²⁹⁰ J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, *Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español*, cit., p. 71.

sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas”. Este precepto, en palabras de RUIZ MANTECA, “abre la posibilidad de que determinadas zonas o espacios situados en el lecho del mar territorial, en los que se encuentren objetos y restos sumergidos integrantes del patrimonio cultural subacuático, puedan ser declarados como Zonas Arqueológicas submarinas, con naturaleza de bien inmueble, y con consideración ellas mismas de tal patrimonio cultural subacuático, integrante del patrimonio histórico español”²⁹¹.

La exclusiva mención al mar territorial no es muy afortunada, porque, como señala este autor, resulta una incoherencia que “teniendo consideración de bienes integrantes del patrimonio histórico español los objetos arqueológicos situados en el mar territorial y en la plataforma continental, conforme al artículo 40.1, no quepa considerar Zona Arqueológica la ubicada en este último espacio marino, siempre y cuando exista conocimiento de que en la misma se encuentran esparcidos o diseminados una multiplicidad de tales bienes”²⁹².

En relación con el contenido, en su artículo 40.1 la LPHE indica que “forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser

²⁹¹ R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, cit., p. 584.

²⁹² R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, cit., p. 584.

estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la Plataforma Continental”. Por tanto, todos los bienes muebles o inmuebles arqueológicos terrestres como los subacuáticos forman parte del Patrimonio Histórico Español, siempre que éstos tengan carácter histórico.

De la naturaleza jurídica de estos bienes nos da cuenta el artículo 44 LPHE, al declararlos bienes de dominio público: “son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar”. Hay una titularidad pública que comporta, como apunta BARCELONA LLOP, “la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes que lo componen, así como la atribución a la Administración titular de los mismos de la cohorte de potestades que el ordenamiento arbitra para su defensa”²⁹³, opinión que comparte también PRIETO DE PEDRO²⁹⁴, y que hacen que estos bienes queden protegidos por la Administración poniéndolos fuera del tráfico jurídico.

²⁹³ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, *Revista de Administración Pública* nº. 151, 2000, p. 139.

²⁹⁴ J. PRIETO DE PEDRO, “Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la Constitución”, *Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría*, tomo II, Civitas, Madrid, 1991, pp. 1551 y ss.

En este artículo nada se dice de hallazgos bajo el agua. No obstante, avanzamos que existe en España una ley del año 1962, Ley 60/1962, de 24 de diciembre, de régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, a la que nos vamos a referir más adelante cuando tratemos un apartado específico, y que regula los hallazgos y extracciones marítimas, aunque no sobraría una referencia expresa del precepto al ámbito subacuático.

La LPHE también desarrolla las competencias del Estado que afectaban al artículo que tratamos con anterioridad, el 149.1.28 CE.

Resulta curioso cómo la LPHE declara al patrimonio arqueológico como dominio público, pero nada dice acerca de su titularidad, a diferencia del caso del artículo 132.2 de la CE, que sí hace una mención expresa al dominio público estatal.

Para ir concluyendo con este apartado y en el caso que nos ocupa, esta cuestión trae alguna complicación, puesto que las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía sí declaran la titularidad autonómica de dicho patrimonio y eso dificulta saber qué Administración tiene las competencias sobre el patrimonio arqueológico. AZNAR GÓMEZ defiende que la solución pasa por “ceder a éstas las competencias genéricas sobre el patrimonio cultural reservándose la Administración central determinadas competencias subsidiarias y residuales. En particular, la facultad de autorizar las prospecciones y excavaciones en el mar territorial español correspondería a los organismos pertinentes de cada Comunidad

Autónoma en el ámbito particular de su litoral [...] En todo caso, entendemos que debiera acudir de nuevo al principio de cooperación y colaboración entre administraciones, derivado del principio de lealtad institucional a que se refiere la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”²⁹⁵.

En caso de conflicto, continúa señalando AZNAR GÓMEZ, “dada la no exclusividad autonómica en el ejercicio de estas competencias (al menos las referidas a la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental), debe recurrirse a lo establecido en el artículo 149, párrafos 1.28º y 3, de la Constitución”²⁹⁶.

B. El patrimonio cultural subacuático como régimen especial dentro del Patrimonio Histórico Español

Como bien se ha expuesto hasta ahora, debemos acudir al ordenamiento jurídico existente para que, aunque sea de manera indirecta, el patrimonio cultural subacuático no quede desprotegido.²⁹⁷

Este tipo de patrimonio está sometido a un régimen especial, al igual que también lo está el patrimonio etnográfico y el documental

²⁹⁵ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 412 - 414.

²⁹⁶ M. J. AZNAR GÓMEZ, *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, cit., p. 414.

²⁹⁷ M. E. CASAR FURIO y F. TABERNER PASTOR. “El concepto de entorno y su delimitación en los BIC valencianos”, *Práctica Urbanística*, nº. 99, Sección Perspectivas sectoriales, diciembre 2010, p. 51

y bibliográfico. El legislador contempló unas disposiciones concretas para cada uno de ellos. En el caso que nos ocupa, el legislador quiso dedicarle los artículos 40 a 45 al patrimonio arqueológico.

En el primer apartado del artículo 40 se establece el concepto de patrimonio arqueológico. En él, el legislador establece que serán susceptibles de ser considerados como patrimonio arqueológico “los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental”. Al incluir tanto los bienes muebles como los inmuebles, el legislador hace referencia a cualquier tipo de bien que se halle en el territorio español, por ejemplo, un pecio hundido en el mar.

Este artículo debe estructurarse en tres partes. Integran el patrimonio arqueológico los muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, que hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental.

Suscribimos las palabras de ÁLVAREZ ÁLVAREZ cuando señala que es evidente que, cuando el legislador hace referencia a la palabra “extraídos”, está pensando “en el subsuelo y en la actividad más

típica de la arqueología, que es alumbrar o sacar a la luz lo que está oculto”²⁹⁸.

El legislador hace mención a subsuelo, mar territorial y plataforma continental. La postura que defendemos es que debe considerarse patrimonio cultural subacuático también el patrimonio que pueda hallarse en zonas acuáticas diferentes al mar territorial o la plataforma continental, tales como ríos, lagos, lagunas, aguas interiores, etc. Con la redacción de este artículo parece que sólo son considerados como patrimonio arqueológico los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el mar territorial o la plataforma continental.

Una de las carencias que, a nuestro juicio, tiene este artículo 40 LPHE es que en el mismo no se contempla un criterio temporal, mientras sí se hace en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, que lo fija, como ya se ha visto, en 100 años.

El artículo 41 define lo que la ley entiende por excavación, prospección y hallazgos casuales²⁹⁹ y, a continuación, en los artículos

²⁹⁸ J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, *Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español*, Civitas, Madrid, 1989, p. 736.

²⁹⁹ “1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.
2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.

siguientes se establecen las condiciones y requisitos que han de seguir éstas. Existen Comunidades Autónomas, por ejemplo Cataluña, que ya contemplan en sus ordenamientos jurídicos normas que regulan las excavaciones y las prospecciones³⁰⁰. Entre ellas estarían el Decreto 155/1981, de 27 de febrero, de la Generalidad de Cataluña, que aprueba la normativa sobre excavaciones arqueológicas en la Comunidad.

En primer lugar, “toda excavación o prospección arqueológica, deberá estar autorizada por la Administración competente” (artículo 42). En segundo lugar, esta autorización “obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o Centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”. Por último, como es de esperar, “las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un

3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole”.

³⁰⁰ C. BARRERO RODRÍGUEZ, *La ordenación jurídica del patrimonio histórico*, cit., p. 650.

hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente” serán ilegales de acuerdo con lo dispuesto en la LPHE y sus responsables serán sancionados de acuerdo con la misma ley.

Otra de las notas relevantes que incluye la LPHE en su artículo 43 es que, ante la presunción de existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados, la Administración competente tiene potestad para ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español. En este último caso, y para la determinación de las correspondientes indemnizaciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.

La ley ha querido reconocer como bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. No obstante, establece una condición para la persona que los descubra. Debe comunicársele a la Administración competente tal descubrimiento en un plazo máximo de 30 días, salvo que fuese un hallazgo casual, en cuyo caso deberá comunicársele inmediatamente. En ambos supuestos, tanto descubrimiento casual como no casual, la LPHE dispone que “en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código

Civil”³⁰¹, es decir, jamás se considerará como propiedad del descubridor. Este apartado hay que ponerlo en relación con el tercer apartado del mismo artículo. Aun no aplicándose el artículo 351 del CC, la LPHE prevé un “premio” tanto para el descubridor como para el propietario del lugar en que se hubiere encontrado. A tenor del apartado tercero del artículo 44, “el descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción”.

Continúa señalando la ley en este mismo artículo, apartado segundo, que “una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público”.

Como señala BARCELONA LLOP, “la LPHE crea el dominio público arqueológico. Independientemente de que antes de ella existieran bienes de valor arqueológico de dominio público,

³⁰¹ “El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor. Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado”.

patrimoniales o de propiedad privada, a partir de ella todos los que se descubran y sean susceptibles de estudio con metodología arqueológica son demaniales”³⁰².

La ley no busca flexibilidad y, en caso de incumplimiento de lo dispuesto tanto en el apartado uno como en el apartado dos del artículo en cuestión, establece que “privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan”.

Concluye la LPHE estableciendo en el artículo 45 que “los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cualquier título se depositarán en los Museos o Centros que la Administración adquirente determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apartado 2, de esta Ley”, precepto ya analizado anteriormente.

C. Protección del patrimonio cultural subacuático: declaración del patrimonio cultural subacuático como Bien de Interés Cultural

Con la LPHE, el legislador no quiso proteger de igual forma todo el patrimonio histórico español. Así, se “recurre a un

³⁰² J. BARCELONA LLOP, “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *Revista Vasca de Administración Pública*, nº. 99-100, 2014, p. 497.

planteamiento básico a la hora de determinar su régimen jurídico, pues como resulta enormemente difícil ofrecer el mismo régimen de protección para todos los bienes susceptibles de integrarse en el concepto de patrimonio histórico español, parte a tal fin, como elemento determinante, de que el bien de que se trate sea declarado como bien de interés cultural, inventariado o catalogado, para poder ofrecer a este tipo de bienes un régimen más estricto de protección”³⁰³.

La LPHE establece en el apartado tercero del artículo 1 que “los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”. Con esta disposición, se busca proteger aquellos bienes que por sus características sean de una categoría relevante en relación a otros bienes también considerados como patrimonio histórico. Ello no quiere decir, en ningún caso, que los bienes no considerados como relevantes carezcan de protección alguna.

Como no podía ser de otra manera, el patrimonio subacuático también estaría incluido dentro de esta protección, siempre que, de acuerdo con el artículo 1.3 de la LPHE, se tratase de patrimonio subacuático “más relevante” dentro del Patrimonio Histórico Español y se declarase como bien de interés cultural.

³⁰³ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, cit., p. 162.

En resumen, en la LPHE se aprecian claramente dos claros niveles de protección específicos y uno general para todos los demás bienes que no tengan consideración de “más relevantes”, tal y como hemos dicho en líneas anteriores.

En cuanto a los dos niveles específicos, nos encontraríamos, por una parte, con la declaración de un Bien de Interés Cultural “para aquellos bienes muebles o inmuebles integrantes del patrimonio histórico que por sus valores, singulares características e importancia necesitan de una máxima protección” y, por otra parte, con “el Inventario General de Bienes Muebles para aquellos bienes muebles no declarados bienes de interés cultural pero que posean una singular relevancia”³⁰⁴.

Antes de analizar si el patrimonio cultural subacuático puede ser considerado como Bien de Interés Cultural, debemos señalar que ni la LPHE ni tampoco el Reglamento que la desarrolla contemplan una definición de qué debemos entender por Bien de Interés Cultural.

La referencia más directa que tenemos es lo dispuesto en el artículo 9.1 LPHE, a cuyo tenor “gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada”.

³⁰⁴ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, cit., p. 162.

En este sentido, señala CARRANCHO HERRERO que “en atención a lo dispuesto en el artículo 1.3 y considerando que estamos ante el grado máximo de protección que la ley establece, hay que pensar que para que tenga lugar esta declaración deberá tratarse de un bien de singular relevancia si afecta a inmuebles, y de un bien especial dentro de los que puedan ostentar aquella condición si se trata de muebles”³⁰⁵.

Como se ha avanzado en páginas anteriores, al considerarse el patrimonio cultural subacuático integrante del patrimonio arqueológico, hay que analizar si en la LPHE se contempla que las Zonas Arqueológicas puedan acogerse a esa máxima protección que reconoce la ley y ver si pueden ser objeto de declaración de Bien de Interés Cultural.

En el artículo 14.2 de la LPHE así se establece cuando se dispone que “los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural”.

Será el artículo 15 en su apartado quinto el que defina lo que el legislador entiende como “Zonas Arqueológicas”, señalado que éstas son “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan

³⁰⁵ M^a. T. CARRANCHO HERRERO, *La circulación de bienes culturales muebles*, Dykinson, 2001, p. 37.

sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas”.

La LPHE señala en su artículo 9.2 que, para la declaración de un Bien de Interés Cultural, se “requerirá la previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el Organismo competente [...] En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3 párrafo 2º, o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma”.

Asimismo, se recoge en el artículo 11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que “corresponde al Ministerio de Cultura tramitar los expedientes para declarar de interés cultural los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional” y en su apartado segundo establece que “corresponde a las Comunidades Autónomas la declaración de interés cultural de los restantes bienes del Patrimonio Histórico Español, cuya tramitación se regirá por su propia normativa”.

Continúa apuntando la LPHE que “en el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3 párrafo 2º o que tengan reconocido idéntico

carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma”³⁰⁶. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la declaración de Interés Cultural. Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento interesado.

La profesora ÁLVAREZ GONZÁLEZ señala que “en la práctica, no obstante, la mayoría de procedimientos para la declaración de un BIC son tramitados por las Comunidades Autónomas, pues son éstas las que ejercen el grueso de las funciones de gestión en la materia, sin perjuicio de que sea la Administración General del Estado la que lleve a cabo la posible declaración cuando en el ejercicio de sus competencias resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación y expoliación, o cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio

³⁰⁶ Según el artículo 3.2 LPHE, “sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma, las instituciones por ella reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales”.

Nacional, supuesto en que las funciones ejecutivas están reservadas al Estado”³⁰⁷.

La LPHE establece que “el expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular”. Dependiendo de la Administración competente, dicho expediente se resolverá si es la Administración estatal por Real Decreto, y si fuese la autonómica, por Decreto.

La LPHE contempla que “de oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde, mediante Real Decreto, que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto”.

Además, cualquier ciudadano puede solicitar la incoación de expediente para declarar un Bien de Interés Cultural. Será el organismo competente, tal y como establece el artículo 10 LPHE, el que decida si

³⁰⁷ E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, cit., p. 163.

procede la incoación, siempre notificando la decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del expediente a quien lo instó.

La incoación del expediente para declarar un Bien de Interés Cultural implica que, automáticamente, al bien afectado se le aplica provisionalmente el mismo régimen de protección previsto para cualquier Bien de Interés Cultural. Así se desprende del artículo 11.1 de la LPHE.

En este sentido, dispone el artículo 16 LPHE que “la incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas” y que “las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley”.

De declararse el bien afectado como Bien de Interés Cultural, establece el artículo 11.2 LPHE que la resolución del expediente deberá describirlo claramente. En el caso de los bienes inmuebles, habrá que limitar el entorno afectado por la declaración y, en su caso, deberán definirse y enumerarse las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.

Todos los Bienes de Interés Cultural, según establece el artículo 12.1 LPHE, “serán inscritos en un Registro General dependiente de la Administración del Estado cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. A este Registro se notificará la incoación de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva”.

Si el bien objeto de esa mayor protección fuese un bien inmueble, el apartado segundo del artículo 12 establece que la inscripción se hará por alguno de los conceptos mencionados en el artículo 14.2 LPHE. En nuestro caso serían las “Zonas Arqueológicas”.

Es en este momento cuando, ya declarado como Bien de Interés Cultural, se expedirá un título oficial, tal y como establece el artículo 13 LPHE, a cuyo tenor:

“1. A los bienes declarados de interés cultural se les expedirá por el Registro General un Título oficial que les identifique y en el que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen. Las transmisiones o traslados de dichos bienes se inscribirán en el Registro. Reglamentariamente se establecerá la forma y caracteres de este Título. 2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de

gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.

Llegados a este punto en el que se declara una Zona Arqueológica como Bien de Interés Cultural, nos encontramos en la fase de máxima protección jurídica del bien, no pudiendo ser separado de su entorno ni tampoco procederse a su desplazamiento o remoción, salvo casos de fuerza mayor o interés social y, de ser el caso, siempre cumpliendo todo lo establecido en la ley, tal y como establece el artículo 18 LPHE.

Declarada la Zona Arqueológica como Bien de Interés Cultural, establece el artículo 20.1 de la LPHE que “determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de, otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la existencia previa de planeamiento general”.

Para concluir con este apartado, debemos hacer referencia al artículo 22 LPHE cuando establece que:

“1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley. 2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas”.

D. Otra legislación: la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, de régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos

Otra de las leyes estatales a las que nos tenemos que referir, aunque de manera muy breve porque nos afecta en menor medida, es la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, de régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, que fue desarrollada por el Real Decreto 984/1967, de 20 de abril.

Esta ley es la que regula en España lo relativo al régimen de auxilios, la institución del salvamento marítimo y, sobre todo, los hallazgos producidos en el mar, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico carecía de una norma que lo contemplase. A ella

nos referíamos en el apartado anterior cuando hacíamos mención al artículo 44 de la LPHE, ya que en ésta última no se hacía referencia hallazgos bajo el agua.

Analizándola, nos encontramos con que esta ley distingue dos aspectos relevantes: los hallazgos y las extracciones que tienen lugar en el mar.

Hay hallazgo cuando un individuo encuentre “cosas abandonadas en la mar o arrojadas por ella en la costa, que no sean producto de la misma mar”. Si se llegase a producir, dicho individuo (hallador) debería poner esas *cosas abandonadas* a disposición de la Autoridad de Marina. Además, para extraer esas *cosas*, se necesitaría el permiso de la Autoridad de Marina. RUIZ MANTECA apunta que “los hallazgos son siempre fortuitos o casuales, pues se producen por el descubrimiento de cosas abandonadas en el mar o arrojadas por ella a la costa (...) las extracciones, constituyen (...) actividades encaminadas a recuperar objetos que se sabe que están bajo el agua, previamente localizados, por lo que no tienen ese carácter casual que tienen los hallazgos”³⁰⁸.

No obstante, si aceptamos que el patrimonio cultural subacuático, según el artículo 44 LPHE, como bien arqueológico es un bien de dominio público, nuestra legislación indica cuál es el

³⁰⁸ R. RUIZ MANTECA, *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, cit., p. 755.

procedimiento a seguir y por tanto “el descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales”.

Una vez que ese descubrimiento ha sido comunicado, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, “al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal”, salvo que los bienes sean entregados a un museo público.

Igual que en el Derecho civil, el descubridor que encontrase ese objeto tendría derecho, como señala el artículo 44.3 LPHE, “en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se atribuya”. Este artículo, como es de general aplicación, dispone que el propietario del lugar en el que se encuentre el bien tiene derecho a lo mismo, pero en lo que nos afecta no sería de aplicación, ya que el mar carece de dueño privado y es de titularidad pública estatal.

4. La regulación del patrimonio cultural subacuático en la legislación autonómica vigente

A) Introducción

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, todas fueron dictando sucesivamente normas que afectan al patrimonio histórico y cultural. Aunque en su origen ninguna de ellas hacía referencia al término patrimonio subacuático o patrimonio cultural subacuático, actualmente, las reformas que se están aprobando sí

incluyen esta referencia. Creemos que sería beneficioso para España tener una legislación propia que regulase el patrimonio cultural subacuático cumpliendo con la Convención de 2001³⁰⁹.

Al respecto conviene citar a MAGÁN PERALES, cuando señala que es a mediados de los noventa cuando se muestra una mayor preocupación por el patrimonio subacuático, marginándose la referencia al mismo en las leyes autonómicas que se aprobaron a principios de la década y preocupándose más detalladamente a finales de la misma³¹⁰. Es comprensible, por tanto, que, si esta preocupación viene de mediados de los años noventa, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 no contenga referencias concretas al patrimonio cultural subacuático. No obstante, todas las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en los años noventa, e incluso las más

³⁰⁹ Autores como J. BARCELONA LLOP sostienen que, sin llegar a rechazar una legislación propia, no es necesario que exista una legislación específica sobre patrimonio cultural subacuático. Para este autor, basta con que la legislación “del ramo contemplara la materia en un capítulo o título específico”. (“Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *cit.*, p. 494. Nota al pie nº. 1).

³¹⁰ J. M. A. MAGÁN PERALES, “El patrimonio arqueológico subacuático: situación legislativa española e internacional”, *Patrimonio cultural y Derecho*, 6/2002, pp. 73 y ss.

recientes como veremos posteriormente, sí deberían hacer mención expresa a esta cuestión³¹¹.

El criterio que se ha seguido para explicar cada una de ellas fue el de agruparlas en función de su ubicación geográfica, analizando en primer lugar las Comunidades autónomas que tienen mar y, posteriormente, las que no lo tienen.

Comunidades Autónomas con costa

B) Especial referencia a Galicia y a la nueva Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia

El Estatuto de Autonomía de Galicia en su artículo 27.18 establece que le corresponde competencia exclusiva sobre “patrimonio

³¹¹ Las diferentes legislaciones sobre la materia son: (Galicia) Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia, (Asturias) Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, (Cantabria) Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, (País Vasco) Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural Vasco, (Navarra) Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra, (Aragón) Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, (Cataluña) Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán, (La Rioja) Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, (Castilla y León) Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, (Madrid) Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, (Extremadura) Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, (Castilla-La Mancha) Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, (Comunidad Valenciana) Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, (Islas Baleares) Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares, (Andalucía) Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz, (Murcia) Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y por último (Canarias) Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, de interés de Galicia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149,1, 28ª, de la Constitución; archivos, bibliotecas y museos de interés para la Comunidad Autónoma, y que no sean de titularidad estatal; conservatorios de música y servicios de Bellas Artes de interés para la Comunidad”.

Hasta hace relativamente poco, la ley que regulaba esta materia era la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio cultural de la Comunidad de Galicia, y que ha sido modificada por la Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia. Aunque es una de las Comunidades Autónomas en las que hay un gran número de patrimonio cultural sumergido, las referencias al mismo en la antigua ley eran nulas, hasta el punto de que en ningún momento se nos daba ninguna definición, a diferencia de lo que ocurre con el patrimonio arqueológico, el cual se puede interpretar para equipararlo al patrimonio cultural subacuático.

Para ello debíamos acudir al artículo 55, el cual recogía que “integran el patrimonio arqueológico de Galicia los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, fuesen o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas”.

Otro artículo que puede complementar lo que hemos apuntado es el artículo 8.4. e), cuando definía la Zona Arqueológica como “el lugar o paraje natural en donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología

arqueológica, tanto si se encontrasen en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas territoriales”.

Es importante traer a colación que, en la actualidad, el Parlamento gallego ha aprobado una nueva ley de patrimonio cultural gallego, que vendría a sustituir a la Ley 8/1995, de 30 de octubre. Esta nueva ley deroga las tres normas existentes hasta ese momento: la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, de 1995, la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de Protección de los Caminos de Santiago, y la Ley 12/1991, de 14 de noviembre, de trabajos de dotación artística en las obras públicas y en los caminos de Santiago de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El capítulo IV del Título VII de la nueva ley regula todo lo relativo al patrimonio arqueológico y se divide en tres secciones: la primera que lleva como rúbrica “normas generales”, la segunda “hallazgos” y la tercera, “protección del patrimonio arqueológico subacuático”.

Como se puede apreciar, la nueva ley contempla la referencia expresa al término patrimonio subacuático (artículo 102), algo que supone un avance en la materia y que la convierte en pionera. Es importante señalar el interés en regular la materia y dedicarle una sección específica a este tipo de patrimonio. No obstante, se detectan algunos errores en la redacción de este artículo, porque no se está teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la competencia de las Comunidades Autónomas en el mar territorial y, de nuevo, se incurre en el error de asumir como

propia la competencia sobre el patrimonio cultural subacuático en el mar territorial.

En este sentido, el artículo 102.1 de la nueva ley gallega viene a señalar que “pertenecen al patrimonio arqueológico subacuático todos los rastros de existencia humana que sean bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia, tal como los define el artículo 1, que se hubiesen hundido en su mar territorial y aguas interiores, parcial o totalmente, susceptibles de ser estudiados y conocidos a través de métodos arqueológicos, hayan sido extraídos o no del medio en el que se encuentran”. Como ha quedado demostrado en páginas anteriores, el mar territorial no pertenece al territorio de una Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta al apartado segundo del artículo 102, se establece que “los pecios, los buques, las aeronaves y otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, sus cargamentos, las estructuras y construcciones, los objetos y los restos de actividad o presencia humana y los objetos prehistóricos [...] así como los espacios y lugares en los que se encuentran junto con su contexto arqueológico y natural” que sean de interés para la Comunidad Autónoma de Galicia serán incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, siempre que éstos se hundiesen con anterioridad a 1901. Con esta redacción se tiene en cuenta el límite temporal que marca la Convención de 2001 de “al menos cien años” y se ha querido fijar una antigüedad mayor a los cien años. No obstante, el artículo continúa señalado que, en el caso de hallarse un pecio de antigüedad inferior, “siempre que revista una

especial relevancia cultural y se protejan a través de un procedimiento específico de declaración o inclusión en el Catálogo de forma individualizada”, puede declararse de interés cultural o también incluirse en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

En el apartado tercero de este artículo se señalan una serie de principios para actuar sobre el patrimonio cultural subacuático:

“a) La preservación *in situ* del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades sobre ese patrimonio”. Como se ha visto, también la Convención de 2001 abogaba por la protección *in situ*.

“b) El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo”.

c) Cualquier actuación velará por que se respeten debidamente los restos humanos situados en las aguas marítimas”. En este apartado, creemos que se debería concretar de qué aguas marítimas se está hablando, ya que no son lo mismo las aguas interiores que el mar territorial.

d) “Se propiciará el acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático *in situ*, con fines de observación o documentación para favorecer la sensibilización del público hacia ese patrimonio, así como su reconocimiento y protección”.

Sin perjuicio de lo que se desarrolle reglamentariamente, señala el apartado cuarto que la Xunta de Galicia, “redactará una carta en la que consten los yacimientos subacuáticos”. Y en su apartado quinto se establece que será la consejería competente en esta materia la que “establecerá las medidas necesarias para proteger los yacimientos arqueológicos subacuáticos que se encuentren en las aguas adscritas a los puertos de su titularidad o cuya gestión le corresponda a la Xunta de Galicia, así como para protegerlos de aquellas actividades que los pongan en peligro”.

En los apartados sexto y séptimo se establecen una serie de prohibiciones. Queda prohibido dragar en los yacimientos arqueológicos a los que se refiere el apartado cuarto sin autorización de la consejería competente en la materia y también se prohíbe, según el apartado séptimo, atendiendo a lo dispuesto en la Convención de 2001, “el comercio de bienes que pertenezcan al patrimonio cultural subacuático gallego sea cual sea el lugar del que procedan y que fuesen extraídos con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención de la Unesco sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, así como los restantes que pertenezcan al dominio público”. Esta prohibición también se aplica a “los bienes extraídos de buques de Estado sea cual sea su bandera”.

A la hora de proteger el patrimonio cultural subacuático, la nueva ley establece que es necesario contar con la autorización de la consejería competente en materia de patrimonio cultural para realizar

“actividades turísticas, deportivas, científicas o culturales consistentes en la visita a los pecios hundidos”, referidos en la sección correspondiente (artículo 102.8). Además, cuando se trate de “personal responsable de las inmersiones organizadas por empresas y asociaciones de buceo” que lleven a cabo actividades de visita a los pecios reseñados en el artículo 102, “deberán contar con una habilitación específica”, que tenga como base una mínima formación, y también deberán “ajustar su actividad al calendario, programa y condiciones que establezca en su autorización la consejería competente en la materia” (artículo 102.9).

Por último, este artículo 102 finaliza haciendo referencia a que todas las condiciones y procedimientos para obtener dichas autorizaciones, habilitaciones y formación a los que hacían alusión los apartados anteriores, serán desarrollados reglamentariamente.

El título X regula la actividad inspectora y el régimen sancionador en sus capítulos I y II respectivamente. La potestad de inspección la ejercerá la consejería competente en materia de patrimonio cultural, a través del personal funcionario competente, el cual tendrá condición de agente de autoridad pública con su respectiva acreditación. Este personal habilitado para ello tendrá que llevar a cabo una serie de funciones tal y como establece el artículo 124, como, por ejemplo, vigilar y controlar que se cumple la normativa vigente sobre esta materia, denunciar las posibles infracciones que se cometan en las respectivas actas de inspección que, dicho sea de paso, gozarán de valor

probatorio³¹², emitir los respectivos informes sobre el estado de los bienes integrantes del patrimonio cultural y las intervenciones que se realicen sobre ellos, asesorar e informar sobre el cumplimiento de la normativa que proteja el patrimonio cultural, informar a los ciudadanos sobre sus obligaciones, etc.

Por lo que respecta al régimen sancionador, se regula en la sección primera del capítulo II del título X. La novedad con relación a la ley anterior es que en la nueva ley ya se contemplan sanciones vinculadas al patrimonio cultural subacuático. Estas infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves (artículo 133.2). Dejando de lado el análisis de las infracciones de carácter general que afectan al patrimonio cultural, nos centraremos en estudiar aquellas que afecten al patrimonio cultural subacuático.

La primera infracción que hace referencia a la materia se encuentra en la letra w) del artículo 129, que contempla como infracción leve “la organización de actividades turísticas, deportivas, científicas o culturales consistentes en la visita a los pecios hundidos a los que se refiere el artículo 102 sin la autorización de la consejería competente en materia de patrimonio cultural o incumpliendo los términos de ésta, cuando de dichas actividades no se deriven daños para el patrimonio cultural subacuático”.

³¹² Sin perjuicio de que, como bien se apunta en el artículo 126.1, de las pruebas que puedan aportar las personas administradas en defensa de sus derechos o intereses.

En el apartado x) del artículo 129 se establece como leve cualquier “incumplimiento de cualquier otra obligación de carácter formal contenida en esta ley cuando de su acción u omisión no se deriven daños graves o irreparables”.

En relación con las infracciones graves (artículo 130), nos encontramos con el apartado w) del artículo 130, que sanciona “la organización de actividades turísticas, deportivas, científicas o culturales consistentes en la visita a los pecios hundidos a los que se refiere el artículo 102 sin la autorización de la consejería competente en materia de patrimonio cultural o incumpliendo los términos de ésta, cuando de dichas actividades se deriven daños para el patrimonio cultural subacuático”.

Se considera infracción grave el comercio de bienes que pertenezcan al patrimonio cultural subacuático (prohibición recogida en el artículo 102.7) y también cualquier “incumplimiento de las suspensiones ordenadas en el marco de lo dispuesto en esta ley cuando de eso se derive la destrucción o demolición de los bienes a los que se refieren las suspensiones”.

Por último, se encuentran las infracciones muy graves recogidas en el artículo 131. Como tales cabe señalar “la destrucción o daño generalizado grave e irreparable de un bien declarado de interés cultural o catalogado”, también su demolición total o parcial sin la preceptiva autorización y la destrucción del patrimonio arqueológico, incumpléndose las cautelas señaladas por la administración.

Tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden ser sancionadas si resultan ser responsables de hechos constitutivos de infracción administrativa; así lo regula el artículo 133.2 de la ley. Asimismo, será responsable quien incurra, por acción u omisión, en cualquiera de las conductas de los artículos 123 a 125 relativas a la actividad inspectora (artículo 132), y en todo caso, serán responsables:

“a) Los autores o autoras materiales de las actuaciones infractoras o, en su caso, las entidades o empresas de las que dependan.

b) Los promotores en caso de intervenciones u obras que se realicen sin autorización o incumpliendo los términos de esta.

c) Los técnicos directores de obras en lo que respecta al incumplimiento de la orden de suspenderlas o al incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas para su ejecución.

d) Las corporaciones locales que otorguen licencias o autorizaciones contraviniendo esta ley o que incurran en cualquier otra infracción tipificada en ella”.

Si el daño causado al patrimonio cultural se puede valorar económicamente, señala la ley en su artículo 133.1, que se sancionará con multa del tanto al cuádruple del valor del daño producido o incluso del beneficio obtenido. En los demás casos, las infracciones leves conllevan multa de 300 a 6.000 euros, las graves de 6.000,01 a 150.000 euros y las muy graves de 150.000 euros a 1.000.000 de euros.

Todos los importes recaudados de las multas impuestas en concepto de sanciones, “se destinarán a la investigación del patrimonio cultural de Galicia y a la conservación, restauración y valorización de los bienes de los que sea titular o que gestione la Comunidad Autónoma” (artículo 1335).

Atendiendo al principio de proporcionalidad, la ley establece que las sanciones serán graduadas según “la gravedad de la infracción cometida, la relevancia de los bienes afectados grado de intencionalidad y las circunstancias personales de la persona sancionada, el daño que se le pudo haber causado al patrimonio cultural de Galicia y las demás circunstancias atenuantes o agravantes que concurran”, y cuando de “unos mismos hechos se derive la comisión de dos o más infracciones, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida”.

Ahora bien, en la nueva ley se establecen una serie de circunstancias atenuantes (artículo 134.4), como, por ejemplo, “la paralización de las obras o actividad infractora, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del personal inspector de patrimonio cultural. b) La reposición de la legalidad y reparación total o parcial del daño causado con anterioridad a la conclusión del procedimiento sancionador”, y también una serie de circunstancias agravantes de la responsabilidad de las personas o entidades infractoras (artículo 134.3), como, por ejemplo, la reincidencia, incumplimiento de requerimientos o medidas que haya impuesto la consejería competente, etc.

Por último, cualquier sanción impuesta por alguna de las infracciones tipificadas en la ley conlleva automáticamente la obligación de restituir el bien a su debido estado, o enmendar la alteración producida en su entorno de protección si fuese posible, es decir, existe la obligación de reparación del daño y restitución de las cosas a su debido estado.

Creemos que esta nueva ley supone un avance en la materia para la Comunidad Autónoma gallega. No obstante, no podemos dejar de hacer referencia al error que mantiene el legislador gallego al no tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto al mar territorial.

En este sentido, hay que destacar que pasamos de una ley sobria, que apenas dedicaba un par de artículos al patrimonio arqueológico, sin hacer mención expresa al patrimonio cultural subacuático, a tener en la nueva ley una sección propia que regula esta materia.

C) Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias

a) Preliminar

El Principado de Asturias manifiesta a lo largo de su Estatuto de Autonomía su compromiso con la protección del patrimonio y con la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural.

Al concurrir competencialmente diversas Administraciones, la ley hace especial hincapié en la necesidad de que se ajusten sus relaciones recíprocas a los principios de colaboración y coordinación entre todas ellas. En consecuencia, los instrumentos de protección que establece se han concebido para resultar compatibles con los del Estado, fundamentalmente con los recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de tal manera que puedan sumarse las acciones protectoras de ambos cuerpos legales. Asimismo, se han tomado en cuenta los instrumentos de protección que disponen las Administraciones locales y se les ha proporcionado recursos adicionales para una acción más eficaz dentro de su ámbito.

El objeto de esta ley es la conservación, protección, investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del patrimonio cultural de Asturias, en adelante PCA, de manera que pueda ser disfrutado por los ciudadanos y transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Integran el patrimonio cultural asturiano, en adelante PCA, todos los bienes muebles e inmuebles, elementos geológicos y paleontológicos que estén relacionados con la historia y la cultura de Asturias y que, por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa a través de las diferentes clasificaciones que realiza la LPCPA.

Los principios generales están regulados en el art. 2 y son los siguientes:

1. El primero es el de “colaboración” entre Administraciones públicas para el mantenimiento de la integridad del PCA, tanto en la difusión nacional como internacional, así como en la recuperación de los bienes que hubieran sido ilícitamente exportados, en el intercambio de información cultural, técnica y científica con organismo nacionales y extranjeros y en la conservación, fomento y disfrute del PCA, estimulando la participación de la sociedad en la consecución de estos fines. Según RODRIGUEZ ASECIO, la plasmación de este principio en la ley se debe a la buena labor que han conseguido con anterioridad los entes públicos. El autor indica que “el proyecto Dorada 92 fue el ejemplo perfecto de cómo debería ser la colaboración entre diferentes organismos para la consecución de planes de arqueología subacuática en el mar Cantábrico, contando con la financiación diversificada de la Consejería de Educación y Cultural del Principado, la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón”³¹³.

2. Promoción de las acciones que sean precisas para garantizar una protección eficaz, un conocimiento e investigación adecuada y, si fuera el caso, conseguir que ciertos bienes vuelvan a la Comunidad Autónoma.

3. Fomento del uso y disfrute del patrimonio cultural a través de iniciativas sociales y la implicación de los ciudadanos.

³¹³ J. A. RODRIGUEZ ASECIO, “Prospecciones de arqueología subacuática en Asturias”, *Excavaciones arqueológicas en Asturias: 1991-1994*, Gobierno del Principado de Asturias, 1995, pp. 153-161.

4. Incorporación del patrimonio cultural a las iniciativas y políticas de desarrollo económico-sociales.

5. Estímulo del conocimiento a través de la promoción de la información y difusión, así como de la investigación y publicación de los resultados de esta.

b) Bienes declarados de Interés Cultural

La LPCPA establece una división de los bienes que conforman el PCA en BIC, bienes incluidos en el inventario del PCA y bienes incluidos en los catálogos urbanísticos de protección, así como en los regímenes específicos de las diferentes materias (arqueológico, etnográfico, histórico-industrial, documental y bibliográfico).

Son bienes declarados de interés cultural aquellos “bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Asturias que, por su valor singular, se declaren como tales mediante Decreto del Consejo Gobierno del Principado de Asturias”³¹⁴. A su vez, están divididos en monumentos, conjuntos históricos, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y vía histórica. Como en otras regulaciones, la normativa asturiana no establece una categoría expresa que haga referencia a los bienes que integran el patrimonio arqueológico subacuático. No obstante, en la mayoría de los casos su regulación será la de zona

³¹⁴ Art. 10 de la LPCA.

arqueológica, siendo la que se ha tomado en cuenta en este apartado para analizar en detalle su regulación.

En el art. 11. 1. e) de la ley se define “zona arqueológica” como “los lugares o parajes naturales en que existan bienes muebles o inmuebles susceptibles de aportar datos de interés mediante su estudio con una técnica arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas. La declaración de una zona arqueológica puede incluir áreas en las que se encuentren bienes de interés cultural de cualquier otra naturaleza”.

Las limitaciones a la declaración de BIC sólo se aplican a las obras de arte que constituyan bienes muebles en los que el autor de los mismos aún viva. En cuanto a los inmuebles, solo podrán ser declarados como BIC pasados 30 años desde su construcción, aunque puede exceptuarse para aquellos casos en que resulte suficientemente acreditado o que su propietario lo solicite de forma expresa.

La declaración de BIC requiere que se realice con anterioridad un expediente administrativo que es iniciado de oficio por la Consejería de Educación y Cultura, ya sea por propia iniciativa de la misma o a instancia de parte. Los acuerdos para no desestimar la incoación deben ser motivados y notificados a los solicitantes, entendiéndose desestimados si no recae una resolución en el plazo de 4 meses desde que se haya efectuado la solicitud.

La incoación del expediente debe notificarse a los interesados y al Ministerio de Educación y Cultura y se debe publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el BOE. La incoación debe anotarse en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Asturias. La incoación del procedimiento respecto de un bien inmueble determina la suspensión de las licencias, aunque este precepto está pensado sobre todo para los bienes que se encuentran en tierra. La declaración de una zona arqueológica subacuática puede derivar en la suspensión o modificación de las actividades que se desarrollaban en la zona.

El procedimiento de declaración se encuentra regulado en el art. 16. En él los técnicos son los encargados de elaborar los informes necesarios acerca de la naturaleza del bien y del interés relevante que reviste el mismo, debiendo acompañar el bien de toda la información gráfica que sea relevante para la resolución del procedimiento. Para que un bien sea declarado como BIC, debe tener el informe favorable y motivado del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y al menos dos de las siguientes instituciones: las Reales Academias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Oviedo u otras Universidades españolas o extranjeras, Real Instituto de Estudios Asturianos o la Academia de la Llingua Asturiana. Una vez emitidos los informes que deben componer el expediente, se da traslado a los interesados para que estos puedan plantear las alegaciones que consideren oportunas. Si el expediente se refiere a bienes inmuebles, será necesario un Informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación

del Territorio de Asturias, entendiéndose en sentido negativo pasados 3 meses. El expediente tiene que resolverse en un plazo máximo de 24 meses. En caso de caducidad o resolución denegatoria, no puede volver a iniciarse uno nuevo hasta pasados 3 años, salvo que las Reales Academias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Oviedo u otras Universidades españolas o extranjeras, Real Instituto de Estudios Asturianos o la Academia de la Llingua Asturiana lo soliciten.

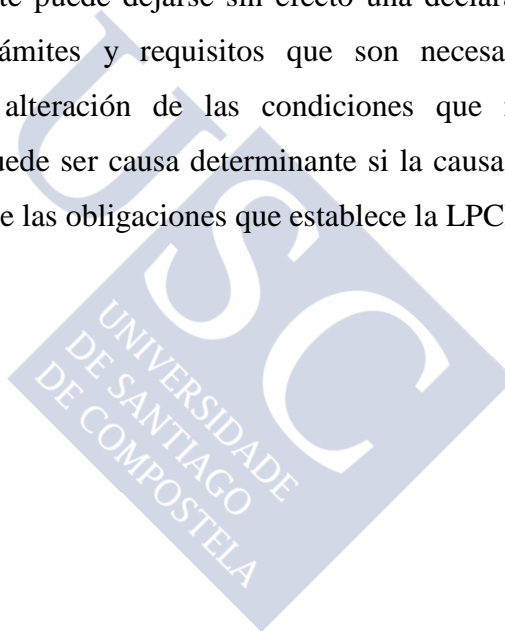
El contenido de la declaración de BIC debe incluir, como mínimo, una descripción detallada y precisa del bien que permita su exacta identificación, en la que se incluyan sus accesorios y pertenencias, en el caso de que los hubiera, así como los bienes muebles vinculados al bien inmueble. También debe contener una delimitación motivada del entorno afectado por la declaración, considerando de manera especial los vínculos con el territorio en que se encuentran. La declaración como BIC también puede conllevar que se demuelan o retiren los elementos o partes de construcciones incluidas en el entorno.

La declaración como BIC debe notificarse a los interesados y a los Ayuntamientos de los concejos donde radica el bien, publicándose al mismo tiempo en el BOE y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Los BIC son inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Asturias, y están gestionados por la Consejería de Educación y Cultura. Los datos que aparecen en este Registro son

públicos, salvo los que estén protegidos por razón de seguridad de los bienes o de los titulares, secretos científicos o comerciales. Las descripciones y anotaciones que figuran en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Asturias son notificadas, a su vez, al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado para que este las inscriba y anote.

Únicamente puede dejarse sin efecto una declaración de BIC siguiendo los trámites y requisitos que son necesarios para su declaración. La alteración de las condiciones que motivaron la declaración no puede ser causa determinante si la causa se debe a un incumplimiento de las obligaciones que establece la LPCPA.



c) Bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

No sólo los bienes inmuebles están protegidos, sino que los objetos que se encuentren y extraigan de un pecio subacuático se deben de integrar en el inventario de Patrimonio Cultural de Asturias. El art. 22 de la LPCPA define como “instrumento para la salvaguarda de los bienes en él incluidos. De él formarán parte los bienes muebles e inmuebles que tengan en grado notable alguno de los valores asturianos”, es decir, aquellos que presentan interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico o de cualquier otra naturaleza cultural merecen conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las categorías de protección y deben ser protegidos y preservados de forma especial, salvo que estén declarados como BIC.

Los bienes muebles pueden ser inventariados de forma individual o por colecciones, bastando para ello que se exprese el interés de manera grupal o individual dependiendo el caso. Las categorías pueden ser las siguientes: Edificio o Construcción Inventariada³¹⁵, Conjunto Arquitectónico Inventariado³¹⁶, Jardín

³¹⁵ El art. 29 del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, define “Edificio o Construcción Inventariada” como “inmuebles que, no siendo declarados de Interés Cultural, tengan un destacado valor patrimonial”.

³¹⁶ El art. 29 del Decreto 20/2015, define “Conjunto Arquitectónico Inventariado” como “agrupaciones continuas o dispersas de construcciones de notable interés, en un medio rural o urbano, que formen una entidad coherente por la homogeneidad de su

Inventariado ³¹⁷ , Sitio Cultural Inventariado ³¹⁸ , Yacimiento Arqueológico Inventariado³¹⁹ y Vía Inventariada³²⁰. Pese a que existe una categoría que podría englobar perfectamente espacios que entrarían en la definición de yacimiento subacuático, hasta la fecha no ha sido inventariado como tal ningún espacio bajo las aguas.

El procedimiento para incluir bienes en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias está regulado en el art. 24 y siguientes de la LPCPA y desarrollado en el Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. El inicio del procedimiento de inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias es siempre de oficio, mediante una resolución de la Consejería Competente en materia de Patrimonio Cultural, en adelante CCPC, bien por propia iniciativa o a instancia de parte.

estilo o por la huella histórica de los grupos humanos que allí vivieron y puedan ser objeto de delimitación topográfica”.

³¹⁷ El art. 29 del Decreto 20/2015, define “Jardín Inventariado” como “espacios resultantes de la ordenación de elementos naturales, que no siendo declarados de Interés Cultural, cuenten con un destacado valor patrimonial”.

³¹⁸ El art. 29 del Decreto 20/2015, define “Sitio Cultural Inventariado” como “parajes o lugares que, no siendo declarados de Interés Cultural, cuenten con un destacado valor patrimonial”.

³¹⁹ El art. 29 del Decreto 20/2015, define “Yacimiento Arqueológico Inventariado” como: “lugares o parajes en que existan bienes muebles o inmuebles susceptibles de aportar datos de interés mediante su estudio con una técnica arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, que no tengan la entidad suficiente para ser declarados de Interés Cultural, pero que tengan un destacado valor patrimonial”.

³²⁰ El art. 29 del Decreto 20/2015, , define “Vía Inventariada” como “vías que no tengan la entidad suficiente para ser declaradas de Interés Cultural, pero que tengan un destacado valor patrimonial”.

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede formular este tipo de petición de inicio de forma razonada, aportando la documentación suficiente para que sea posible calificar dicho bien de manera adecuada e incluyendo planimetría y documentación gráfica. Será la CCPC quien resuelva si procede o no de forma motivada. La Iniciación se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. En el caso de bienes muebles, para que puedan inscribirse, deberán poseer un cierto valor, dependiendo del tipo de bien que se trate.

En el contenido del acuerdo de incoación deberán constar, como mínimo, los elementos que se solicitaron para determinar el valor e identificar los bienes de manera adecuada³²¹. El acuerdo de iniciación puede contener también ciertas limitaciones y cargas para los propietarios de los bienes. Para adoptar la decisión sobre la inclusión o no del bien en el Inventario, la CCPC puede recabar informes de expertos en la materia.

Por último, en el contenido del acuerdo de inclusión debe indicarse la identificación detallada, incluyendo una descripción, datación, promotor o propietario original, autoría y localización. En el caso de bienes inmuebles deben reflejarse las referencias catastrales, cartográficas y coordenadas ETRS89 que sean incluidas dentro de la documentación aportada. Hay que añadir también la información exhaustiva de la evolución histórica del bien, con identificación y

³²¹ Arts. 29-31 del Decreto 20/2015.

datación de los elementos originales, de los añadidos, reformas, restauraciones y otras intervenciones que haya sufrido y de los bienes muebles históricamente vinculados. También debe incluirse un informe detallado sobre el estado actual de conservación del bien y la determinación expresa de la compatibilidad de uso con la exigencia correcta de conservación.

El Decreto 20/2015, establece una serie de elementos para los diferentes tipos de bienes inventariados. En el caso de los Espacios Arqueológicos, aparte de los anteriormente enumerados, destaca la delimitación de estos.

d) Régimen jurídico de protección

La LPCPA establece un régimen jurídico de protección para todos los bienes integrantes del PCA. El primero de los derechos y deberes que componen este régimen es el del deber de conservación y uso. Este deber afecta a todos los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes que formen parte del PCA, estando obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos para evitar su pérdida o deterioro, así como a mantener siempre su conservación al usarse. Tiene que comunicarse de forma periódica a las Administraciones públicas el estado del mismo, estando obligados al examen pericial periódico. El incumplimiento del deber de conservación lleva aparejado una sanción administrativa o penal dependiendo de los hechos.

Las Administraciones públicas pueden obligar o ejecutar acciones para mantener el estado de conservación adecuado, a través de la autotutela administrativa, pudiendo realizar acciones de forma subsidiaria al propietario o poseedor del bien y a cargo de este, ejecutar una expropiación del bien por razones de incumplimiento del deber de conservación e incluso restringir o retirar licencias o derechos anteriormente establecidos.

Otros de los derechos y obligaciones que afectan a los titulares o poseedores son el deber de comunicación sobre la salida de los bienes o su existencia, el acceso a la ciudadanía y los derechos de tanteo o retracto a favor de las Administraciones públicas.

Dado que el régimen aplicable de protección varía dependiendo del tipo de patrimonio, vamos a centrar el análisis en el régimen aplicable al Patrimonio Arqueológico, que, por analogía, es el más parecido al patrimonio arqueológico subacuático.

El Patrimonio Arqueológico se encuentra definido en el art. 61 de la LPCPA. De esta manera, “forman parte del Patrimonio Arqueológico de Asturias todos aquellos bienes, localizados o no, cuyo estudio, mediante el uso de una técnica arqueológica, pueda proporcionar información histórica significativa. A efectos de la presente Ley, se considerarán también como parte del Patrimonio Arqueológico de Asturias los objetos y muestras de interés paleontológico que hayan sido separados de su entorno natural o deban ser conservados fuera de él y los elementos geológicos y

paleontológicos de interés por su relación con la historia del hombre y sus orígenes”.

Por lo que se puede deducir de dicha definición, el concepto debe entenderse en sentido amplio. Es de destacar que, a pesar de no incluir de manera expresa ninguna referencia a términos acuáticos o subacuáticos, sí que se menciona en su apartado tercero al indicarse que “el Principado de Asturias colaborará en la protección y el estudio de aquellos yacimientos arqueológicos situados en el mar territorial o en la plataforma continental” o “bajo las aguas interiores”. La protección podrá llevarse a cabo por medio de su declaración como BIC o a través de la inclusión en el Inventario del PCA³²².

El art. 85 establece los diferentes tipos de intervenciones y actividades arqueológicas que se pueden realizar, siendo compatibles y aplicables varias de ellas al mismo tiempo³²³.

³²² Art. 61 de la LPCPA.

³²³ Cabe destacar las siguientes:

- a) Las excavaciones arqueológicas, en el subsuelo o subacuáticas, entendidas como las remociones de tierra y el análisis de estructuras realizadas con metodología científica, destinadas a descubrir e investigar toda clase de restos históricos, así como los contextos geomorfológicos y paleoambientales relacionados con la historia del hombre y sus orígenes.
- b) Las prospecciones arqueológicas, entendidas como las exploraciones superficiales o subacuáticas, realizadas con metodología científica, dirigidas a la localización y el estudio o examen de datos para la detección de los elementos de las excavaciones arqueológicas.
- c) Los muestreos arqueológicos, entendidos como extracciones de muestras en yacimientos.
- d) Los análisis arqueológicos de estructuras emergentes, entendidos como la actividad dirigida a la documentación e interpretación estratigráficas de las estructuras arquitectónicas alzadas que forman parte de un inmueble.

Para que puedan realizarse actividades arqueológicas sobre estos bienes será necesario obtener una autorización previa y expresa de la Consejería de Educación y Cultura. Estas actividades hay que dividir las entre aquellas que se realizan en el marco de un proyecto de investigación por personas físicas con soporte en un institución científica³²⁴, pública o privada, y las intervenciones no previstas en un proyecto de investigación, pero que tienen funciones preventivas o de urgencia. Hay que destacar que la concesión de proyectos de investigación no otorga un derecho preferente a la persona solicitante

e) Los seguimientos arqueológicos, entendidos como tareas de supervisión de remociones de terreno y de ejecución de obras de conservación, restauración o rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural de Asturias y de vigilancia y coordinación de obras o trabajos, cuando puedan afectar a los elementos de las excavaciones arqueológicas.

f) Los estudios directos de arte rupestre, entendidos como los trabajos destinados a la reproducción del patrimonio arqueológico orientados a la investigación, documentación gráfica y plástica o cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos representados.

g) Las labores de protección, consolidación, restauración y restitución, entendidas como actuaciones que tienen por objeto la conservación y el mantenimiento o la adecuación para la visita pública de los Yacimientos Arqueológicos. Tendrán esta consideración las labores de cerramiento, vallado, dotación de cubiertas, señalización y limpieza de los yacimientos arqueológicos.

h) El empleo de detectores de metales o instrumentos similares de detección de restos culturales en zonas donde se presume la existencia de bienes arqueológicos.

i) Cualesquiera otras que, con remoción del terreno o sin ella, tenga por finalidad descubrir, documentar, investigar o proteger bienes integrantes del patrimonio arqueológico e impliquen su manejo directo o la intervención sobre ellos o en su entorno.

³²⁴ Se considera a estos efectos como institución científica, de acuerdo al art. 84 del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, a quien presta apoyo a una intervención arqueológica cuando la avala científicamente y hace una aportación de medios técnicos e infraestructura que permita garantizar la continuidad del proyecto de investigación del que se trate.

para realizar intervenciones o actividades arqueológicas que hayan de realizarse en el ámbito territorial del mismo.

La petición de autorización debe contener, como mínimo, los datos de la persona solicitante, la titulación y datos personales del equipo que se trate, el presupuesto económico detallado. Para la concesión de este permiso es necesario que junto a la solicitud del mismo se acompañe un proyecto detallado de la intervención que se pretende realizar. En él se debe incluir una justificación de la idoneidad de la actividad que se pretende realizar tanto desde el punto de vista de la gestión del suelo o desde su interés científico.

Se pueden autorizar intervenciones arqueológicas de urgencia siempre que la CCPC determine que existen razones para preservar restos arqueológicos que se descubran en cualquier tipo de obras en lugares donde no hubiera habido indicios de forma previa y siempre que se produzcan hallazgos de forma casual. La resolución de la autorización de dicha actividad tiene que contener, como mínimo, las causas, el lugar de la intervención y el alcance y objetivos de la misma.

La dirección de una actividad arqueológica comporta un seguimiento continuo y directo de los trabajos que se realizan. El director de la actividad es el responsable de que esta se realice de acuerdo a lo establecido en la autorización. Como tal, debe poseer la titulación universitaria en las disciplinas científicas aplicables, de forma que, para llevarlas cabo y utilizando en todo momento las técnicas

adecuadas, permita una conservación de los bienes y terrenos donde se desarrolle la actividad.

Una vez terminada la actividad que se trate, el promotor de la misma debe entregar en el plazo máximo de un año a la CCPC una memoria con los resultados de la actividad y un documento de depósito de los materiales encontrados en el Museo Arqueológico de Asturias³²⁵. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de esta memoria, la CCPC debe resolver sobre la aceptación. En el caso de que se aprecien deficiencias o errores, estos deberán ser subsanados. La memoria debe contener, como mínimo, una introducción y antecedentes de los trabajos realizados así como de las circunstancias, los objetivos de la intervención tanto prácticos como científicos, el contexto histórico del ámbito donde se ubica la intervención, la ubicación planimétrica, la descripción general, la relación y descripción de las unidades estratigráficas documentadas, la documentación gráfica de los trabajos, el inventario de los materiales localizados, plano de situación de los trabajos realizados y, en su caso, con la ubicación de las estructuras que se hubieran documentado, la relación de muestras y las conclusiones e interpretación de la intervención.

e) Espacios Arqueológicos

Los Espacios Arqueológicos están definidos en el art. 65 de la LPCPA como “lugares en los que, por evidencias materiales, por

³²⁵ Art. 96 del Decreto 20/2015.

antecedentes históricos, por la toponimia, por tradiciones orales significativas o por otros indicios físicos, materiales o documentales, se presume la existencia de un yacimiento arqueológico”. Pueden calificarse como Espacios Arqueológicos las zonas que expresamente se califiquen de esta forma o los que con carácter preventivo se declaren como tales por la Consejería de Educación y Cultura.

Pese a que hasta la fecha no existe ninguno declarado de forma oficial que pueda englobar la arqueología subacuática de las múltiples catas y actividades exploratorias, son muchos los lugares que podrían entrar en esta categoría; por ejemplo, las Aguas del Cerro de Santa Catalina, en Gijón; el Pecio de Bañugues en Gozón, en la región de Cabo Peñas, la Zona de Oles, en Tazones, Villaviciosa, las Aguas del Paseo de San Pedro, en Llanes o la Ría del Eo en Castropol-Ribadeo³²⁶.

La Carta Arqueológica de Asturias es un documento constituido por el conjunto de las zonas protegidas, aunque sean con efectos preventivos por su interés arqueológico, de forma que está limitada su extensión y recogidos los usos que se pueden dar en ese suelo a través de normas de protección y cautelas, siendo difundida por la Consejería de Educación y Cultura.

En el caso de que se produzca en una actividad arqueológica el descubrimiento de bienes con valor arqueológico, o por azar, se debe comunicar en las 48 horas a la Consejería de Educación y Cultura, sin

³²⁶ J. A. RODRÍGUEZ ASENCIO, *Prospecciones de arqueología subacuática en Asturias*, cit., p. 154.

que pueda darse conocimiento al público con anterioridad. En el plazo de 48 horas deben entregarse los bienes encontrados por azar, satisfaciendo la Consejería de Educación y Cultura los derechos económicos a los descubridores. Los bienes que se encuentren tienen la consideración de bienes de dominio público de forma que deben ser depositados en el Museo Arqueológico de Asturias. No obstante, después de emitir un informe, el Museo Arqueológico puede autorizar que los descubridores posean por tres años los bienes encontrados.

Los bienes encontrados deben ser depositados en el Museo Arqueológico de Asturias, junto con una copia de la memoria arqueológica. Desde que se recuperen hasta la entrega definitiva, la dirección de la intervención será la responsable del estado de conservación de los mismos, siendo aplicable a estos efectos las normas del depósito civil. El Museo Arqueológico de Asturias debe extender un documento del depósito recibido y velar por el cumplimiento de las garantías en torno al estudio e investigación.

La dirección de la actividad arqueológica puede, a su vez, solicitar que dichos bienes permanezcan de forma temporal o provisional bajo su custodia a efectos de estudio. Durante este lapso temporal, se podrán llevar a cabo funciones de inspección por parte de la Administración pública y los bienes no podrán abandonar territorio asturiano.

En último lugar, el art. 102 del Decreto 20/2015, establece la forma en que deben gestionarse los yacimientos arqueológicos. En

principio, la formula está diseñada para espacios terrestres, dado que se hace referencia en todo momento a la administración local, ya que los considera como “espacios de dotación urbanística pública” y como tales debe aparecer en los Planes Generales de Ordenación. Como expone ÁLVAREZ GONZALEZ, “en efecto, el Tribunal Supremo ha venido manteniendo el principio de que el mar territorial y, en su caso, las aguas interiores, no forman parte del territorio municipal, de modo que las obras que allí se realizan no necesitan licencia municipal por estar fuera del término del municipio, sin perjuicio de que si tales obras dan lugar a ganar terreno al mar, ese terreno se incorpore al municipio y las obras que en el futuro en él se realicen están sometidas a licencia”³²⁷.

Pese a que hasta la fecha se han realizado diversas prospecciones arqueológicas en la costa asturiana, la disposición transitoria cuarta establece que “como resultado de intervenciones arqueológicas autorizadas y no finalizadas a la fecha de entrada en vigor de este reglamento, no se someterán a las prescripciones del presente reglamento”, es decir, el régimen de protección afecta a las prospecciones que se desarrollen y finalicen a partir de la entrada en vigor del mismo.

³²⁷ E. M. ÁLVAREZ GONZALEZ, “Disfuncionalidades de la protección jurídica del Patrimonio cultural subacuático en España. Espacial referencia al caso Odyssey”, *Revista de Administración Pública*, nº. 175, 2008, p. 335.

f) Medidas de difusión y fomento

Las Administraciones públicas deben colaborar con los propietarios, poseedores o titulares de los bienes que integran el PCA, en la conservación, restauración y difusión de los mismos mediante la concesión de subvenciones, ayudas y beneficios fiscales. De esta forma, se crea una colaboración público-privada para el fomento de la cultura. Los modos de apoyo a través de fondos públicos son diversos, dependiendo de la entidad o poseedor que se trate.

Cada tres años se elabora un Plan de Protección del PCA, aprobado por el Consejo de Gobierno, a través de la información que recibe del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, siendo este el instrumento de evaluación de las necesidades de conservación, protección, investigación, fomento y difusión del PCA, así como la forma en que se asignan los recursos para el cumplimiento de los fines y objetivos de la LPCPA³²⁸.

Los poderes públicos, entre otras funciones, tienen que promover el conocimiento del PCA dentro del sistema educativo en sus diferentes niveles. Para ello el Principado de Asturias debe promocionar las enseñanzas profesionales y las actividades de perfeccionamiento que permitan un disfrute público del patrimonio público, así como una

³²⁸ Art. 96 de la LPCPA.

rehabilitación de los bienes para un mantener un buen estado de conservación³²⁹.

El disfrute público es otra de las obligaciones de las Administraciones públicas, de forma que deben velar por el acceso a través de visitas públicas, de forma que estas se realicen en condiciones de conservación, conocimiento y difusión de los bienes. Por ello, se debe promover la prestación de servicios a los ciudadanos y a los investigadores de los bienes integrantes del PCA, para que puedan desarrollarse las técnicas bibliográficas y los catálogos adecuados. Los monumentos y yacimientos arqueológicos abiertos a la visita pública y administrados por la Consejería de Educación y Cultura serán gestionados de acuerdo con directrices comunes que garanticen su coherencia global.

Los objetos y los inventarios de materiales arqueológicos procedentes de actividades arqueológicas son de consulta pública³³⁰. Si las actividades arqueológicas han sido financiadas en parte o totalmente por el Principado de Asturias, la CCPC tiene prioridad en los dos siguientes años para publicar las memorias de las intervenciones. Puede renunciar a esta prioridad si la dirección de las actividades lo solicita de manera expresa. Esta prioridad no impide a los autores de las mismas

³²⁹ Art. 97 de la LPCPA.

³³⁰ Art. 100 del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

que utilicen los datos en otras investigaciones, siempre que no lo hagan con ánimo de lucro.

g) Protección de la legalidad y régimen sancionador

La última de las formas de protección es a través de un régimen sancionador. La LPCPA establece un régimen sancionador que es desarrollado y actualizado por el Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, dado que está pensado para castigar todo tipo de hechos que tienen relación con los diferentes tipos de bienes, aunque en este punto sólo se analizan aquellos que tienen relación con el patrimonio arqueológico subacuático.

En primer lugar, se establece una serie de multas coercitivas por el incumplimiento de obligaciones como el deber conservación y uso, siendo la Administración competente para sancionar la Consejería de Educación y Cultura o los Ayuntamientos. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones. En el caso de que el infractor mantenga el incumplimiento que motivó la multa, esta puede reiterarse hasta el cumplimiento de la obligación, de esta forma se pueden imponer multas de 6.000.00€ de forma sucesiva³³¹.

Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Entre las leves se contemplan el incumplimiento de la obligación de facilitar

³³¹ Art. 104 de la LPCPA.

información sobre el estado de los bienes que forman en el PCA; el traslado sin comunicación de los bienes que forman el PCA fuera de Asturias; la realización de obras o intervenciones no autorizadas sobre bienes o su entorno que no supongan un riesgo grave; el incumplimiento de las obligaciones establecidas sobre disfrute público; el incumplimiento de las obligaciones establecidas sobre disfrute público de los bienes integrantes; el incumplimiento del deber de conservación, incluyendo la protección adecuada de los bienes, siempre que del mismo no se deriven daños graves o destrucción; el incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como resultado de actividades arqueológicas; el incumplimiento de las normas de entrega al Archivo Histórico de documentación que deba ser trasladada al mismo; la dejación de funciones por parte de los directores de actividades arqueológicas, entre otras, teniendo una sanción económica de 90,15 a 3.005,06 euros.

En cuanto a las infracciones graves que podrían afectar al patrimonio arqueológico subacuático encontramos las siguientes³³²: la realización de obras o intervenciones no autorizadas, de cualquier naturaleza, que supongan destrucción de bienes que formen parte del PCA, grave riesgo o pérdida de sus valores culturales; el incumplimiento del deber de conservación, incluyendo las medidas de protección, cuando suponga destrucción o daños graves para bienes que formen parte del PCA; el traslado fuera del Principado de Asturias sin

³³² Art. 108 de la LPCPA.

la correspondiente comunicación de bienes integrantes del PCA, cuando no sea subsanado mediante su retorno; la presentación, de forma maliciosa, de información incompleta o inexacta en los informes técnicos que acompañen a las peticiones de licencias o autorizaciones para obras o intervenciones; la presentación, de forma maliciosa, de información incompleta o inexacta en los informes técnicos que acompañen a las peticiones de licencias o autorizaciones para obras o intervenciones que constituyan PCA; el incumplimiento de la obligación de comunicar los descubrimientos casuales; la realización de actividades arqueológicas no autorizadas, incluyendo el empleo de detectores de metales en zonas en donde se presume la existencia de restos arqueológicos; y la reiteración de las faltas leves, siendo castigadas con una sanción económica que va desde 3.005,06 a 150.253,03 euros.

En cuanto las sanciones muy graves encontramos: la destrucción de BIC de forma intencionada o con irresponsabilidad grave; la destrucción de yacimientos arqueológicos y restos de importancia significativa con intencionalidad o incumplimiento del deber de precaución; y la reiteración de las faltas graves, teniendo cada una de ellas una sanción económica desde 150.253,03 a 901.518,16 euros.

Las sanciones económicas se gradúan a través de criterios como la reincidencia, la intencionalidad, el beneficio económico, la importancia del bien y la repercusión del daño, de forma que deben motivarse cada vez que se imponga una de ellas.

Los sujetos responsables serán quienes tengan responsabilidad directa de la comisión y, en todo caso, los promotores, constructores y técnicos en lo que respecta a la realización de obras con incumplimiento de la suspensión de las mismas, los que según el Código Penal tienen la consideración de autores, cómplices o encubridores para las intervenciones arqueológicas no autorizadas y los empleados y autoridades públicas cuando consientan o encubran un incumplimiento sin perjuicio de que pudiera proceder como delito. Al mismo tiempo se establece como una medida accesoria la prohibición de obtener autorizaciones para realizar actividades arqueológicas en el territorio de Asturias para quien en los 10 años anteriores haya sido responsable de llevar a cabo actividades no autorizadas, de la destrucción de bienes, o del incumplimiento de las obligaciones de presencia directa en los trabajos arqueológicos que haya dirigido o de la obligación de depósito de los materiales en el Museo Arqueológico Asturiano³³³.

Corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural la imposición de sanciones de hasta 150.253,03 euros, y al Consejo de Gobierno las sanciones de más de 150.253,03 euros.

³³³ Art.63.5 de la LPCPA.

D) Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria

a) Preliminar

La Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, en adelante LPCC, es la plasmación de las competencias en materia de patrimonio cultural que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene reconocido en su Estatuto³³⁴. En estos años, la Comunidad Autónoma ha dictado diversas normas de desarrollo de dicha ley, destacando, entre otros, el Decreto 36/2001, de 2 de mayo,

³³⁴ J. M. GARCÍA CALDERON, “Régimen jurídico básico de la arqueología”, *Defensa Penal del Patrimonio Arqueológico*, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 78-108; B. GOMEZ DE VEGA, “Pasado y presente de la Arqueología Subacuática en Cantabria”, *Arqueología Subacuática. PH Boletín* 33, 2000, pp. 173-177; A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, Catedra Cantabria, Cantabria, 2003, pp. 31-39; J. A. SANTOS VELASCO, “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, *Revista Iberia, Revista de la Antigüedad*, vol. 5, 2002, pp.7-21; J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, *Revista de Administración Pública*, n°. 151, 2000, pp. 133-165; F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p 27; J. BARCELONA LLOP, “El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria”, *Altamira: Revista del Centro de Estudios Montañeses*, n°. 68, 2005, pp. 145-178.

de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural³³⁵.

La LPCC data de 1998 y apenas ha sufrido modificaciones en estos años, por lo que no contiene una regulación sobre el patrimonio arqueológico subacuático. No obstante, hace referencia en varias ocasiones a este, y por ello, pese a que no lo contempla de manera diferenciada, sí lo protege como veremos a continuación³³⁶.

La LPCC establece una serie de directrices para proteger las particularidades cántabras, preservándolas y promoviéndolas como “aportaciones de su tierra y de sus gentes a las culturas española, europea y universal”. Esta norma quiere desarrollar y ampliar aquellos elementos en los que la LPHE estaba limitada o que apenas había contemplado. La Ley prefiere utilizar el término “Patrimonio Cultural” frente a Patrimonio Histórico de la LPHE, dado que el primero engloba una tipología más amplia. Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria, de acuerdo con el art. 3.2 de la LPCC, “los bienes muebles, inmuebles

³³⁵ Las otras normas que desarrollan la LPCC son la Orden núm. ECD/129/2016, de 15 de noviembre, que establece las condiciones para la gestión del patrimonio histórico educativo de los centros educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria; la Resolución CVE 2010-8510, por la que se aprueba el Plan Regional de Arqueología; el Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación de los Planes Especiales en materia de Protección del Patrimonio Cultural; el Decreto 22/2001, de 12 de marzo del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria y el Decreto 59/2000, de 26 de julio, por el que se regula el voluntariado cultural en Cantabria.

³³⁶ B. GOMEZ DE VEGA, “Pasado y presente de la Arqueología Subacuática en Cantabria”, *Arqueología Subacuática. PH Boletín* 33, 2000, pp. 173-177.

e inmateriales de interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico y paisajístico”.

La LPCC reconoce la situación previa y como a lo largo del tiempo las entidades locales han colaborado con la población local para mantener el patrimonio. En este sentido, también clasifica el patrimonio de acuerdo con unos conceptos establecidos en la propia ley. La división de los bienes culturales en Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados y Bienes Inventariados persigue la triple finalidad de definir con más precisión el verdadero interés de todos los componentes del patrimonio, involucrar a todas las Administraciones en su protección y gestión y avanzar un paso más en el propio concepto de Patrimonio Cultural.

La protección del Patrimonio Cultural de Cantabria lleva aparejadas otro tipo de medidas, como las de fomento o las sancionadoras que persiguen el objetivo, aparentemente contradictorio, de defender y acrecentar dicho patrimonio. Para ello, se articula toda una serie de medidas que tienen un denominador común: lograr el respeto por todos los ciudadanos de Cantabria del patrimonio heredado de otras épocas e imbuirles la obligación de transmitirlo en el mejor

estado posible. Y así, junto a medidas de carácter corrector y sancionador, se ofrecen otras de cariz auxiliador y promotor³³⁷.

b) Distribución competencial de la gestión y protección del Patrimonio Cultural Cántabro

Es evidente, no obstante, que el éxito de cualquier acción de conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de Cantabria depende tanto de ese tipo de medidas como de la capacidad de los propios órganos gestores para movilizar y concienciar a los ciudadanos en defensa y promoción de esa herencia recibida. Para ello, es inexcusable potenciar el conocimiento de ésta. Los inventarios, los catálogos, la implicación de los medios de comunicación y la introducción de este tipo de conocimiento en el sistema de enseñanza serán piezas fundamentales para conseguir los objetivos inicialmente propuestos. No debe olvidarse, entre las medidas de fomento, la racionalización de recursos dedicados a la conservación y potenciación del Patrimonio Cultural de Cantabria.

³³⁷ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 31-39.

Entre los deberes que tiene la Comunidad de Cantabria se encuentran:

- Crear y mantener órganos y unidades administrativas encargadas de la gestión.
- Proceder a documentar de forma detallada y exhaustiva los bienes inmuebles, muebles e inmateriales que integran el patrimonio cántabro y a través de registros, inventarios, catálogos y demás instrumentos ponerlos a disposición de la ciudadanía para que realice investigaciones al respecto.
- Promover la investigación a través del desarrollo nuevas metodologías que aseguren un tratamiento adecuado.
- Integrar estas investigaciones y conocimientos en los programas educativos.
- Fomentar el respeto y aprecio por los valores históricos del Patrimonio Cultural de Cantabria, promoviendo su disfrute como bien social y compatibilizándolo con un mayor grado de preservación.
- Garantizar la protección del mismo, evitando que se produzcan daños de manera intencionada y sancionar a aquellos que causen daños.
- Desarrollar iniciativas en búsqueda del retorno de los elementos de interés cultural que por diversas razones se encuentren fuera de la Comunidad Autónoma.

La LPCC establece un régimen de colaboración entre las diferentes Administraciones públicas para difundir y proteger el patrimonio cultural cántabro. Establece las formas en que debe colaborar la Comunidad Autónoma de Cantabria con los particulares, con los otros poderes públicos, con la Iglesia Católica, con las Corporaciones Locales y con otros organismos públicos.

En cuanto al organigrama que establece la LPCC, se estructura en órganos de administrativos de gestión y coordinación, órganos asesores y organismos y entes instrumentales de gestión de los bienes culturales. Los primeros están regulados en la Orden ECD/129/2016, de 15 de noviembre, que establece las condiciones para la gestión del patrimonio histórico educativo de los centros educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. A su vez, establece el art. 10.2 de la LPCC que una Comisión Mixta establecerá el marco de cooperación y coordinación en materia de Patrimonio Cultural entre las Administraciones Públicas locales y la autonómica.

En cuanto a los órganos asesores de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Bienes de Interés Cultural, de Bienes de Interés Local y de Patrimonio cultural, son las instituciones que se puedan interesar por el contenido de la LPCC y las que puedan crearse al efecto por el Ejecutivo Cántabro. En este sentido, se crearon la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico; la Comisión Técnica de Patrimonio

Mueble Artístico y Museos; la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado; la Comisión Técnica de Patrimonio Documental y Bibliográfico; la Comisión Mixta Comunidad Autónoma-Iglesia; la Comisión Técnica de Patrimonio Etnográfico y Paisaje y la Comisión Técnica de Patrimonio Científico y Tecnológico.

A efectos de la materia que estamos tratando en esta investigación, tiene especial relevancia la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, dado que será el órgano encargado de asesorar a la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Bienes de Interés Cultural, de Bienes de Interés Local y de Patrimonio cultural.

En tercer y último lugar, encontramos el resto de organismos y entes instrumentales de gestión de los bienes culturales, siendo organismos especializados para determinadas funciones especiales.

En Cantabria, las labores de arqueología subacuática, centradas fundamentalmente en el patrimonio marítimo de época moderna, están ligadas al Museo Marítimo del Cantábrico desde el año 1981. En 1983 se constituyó el Laboratorio para Investigaciones Arqueológicas Subacuática, (LIAS), institución privada con sede en el Museo Marítimo del Cantábrico. Desde 2005 la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria cuenta con una sección de arqueología que incluye personal con formación y experiencia específicas en arqueología subacuática. Desde entonces, todas las actividades institucionales vinculadas con esta especialidad patrimonial se

desarrollan en colaboración entre este Departamento y el Museo Marítimo, ambos dentro de la Dirección General de Cultura del gobierno regional³³⁸.

c) Bienes de interés cultural

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria están protegidos de acuerdo con la LPCC. Los BIC cántabros están clasificados en:

- BIC propiamente dichos e inscritos de esta forma en el Registro General de Interés Cultural de Cantabria, que son “aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que por sus específicas cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado de la cultura de Cantabria”.
- Bienes Catalogados declarados como tales e inscritos en el Catálogo General de los Bienes de Interés Local de Cantabria, entendiéndose por tales los “bienes muebles e inmuebles declarados de Interés Cultural podrán serlo de forma individual o como colección, como obra de autor o como conjunto tipológico”.
- Bienes Inventariados, que abarcan aquellos que se incorporen al Inventario General del Patrimonio de Cantabria.

Cada una de las diferentes clasificaciones puede integrarse por bienes muebles, inmateriales o inmuebles. Estos últimos pueden

³³⁸ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “La fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Patrimonio subacuático recuperado” (<http://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/recursos/centros-arqueologia-subacuatica.html> Consultado el 6 de junio de 2017).

dividirse en las categorías de Monumento, Conjunto Histórico, Lugar Cultural o Zona Arqueológica o Lugar Natural.

En el expediente que se instruya debe constar, como mínimo, el informe favorable de dos de los órganos asesores. La incoación del expediente debe ser notificada a los interesados, así como al órgano de gobierno del municipio en el que se encuentre el bien, en el caso de ser un bien inmueble. Se debe dar audiencia a los propietarios del bien y a los posibles interesados, que podrán conocer la información a través de la publicación del procedimiento en el Boletín Oficial de Cantabria, con un plazo de información mínimo de un mes.

La incoación del expediente conlleva la aplicación inmediata y provisional de la protección que está regulada en la LPCC. El acuerdo de incoación debe dictarse a los tres meses. Sin resolución del procedimiento, deben aplicarse las reglas del silencio administrativo, entendiéndose estimada, y pudiendo presentar un recurso de reposición siempre en caso de disconformidad.

El expediente de declaración debe contener, como mínimo, un informe favorable de los órganos asesores si se trata de un Bien Catalogado y dos, si se trata de otro tipo de bien. Pasados tres meses desde la solicitud del informe sin recibir respuesta, se considera favorable. Además del informe, el expediente debe contener una descripción clara del objeto con sus partes integrantes, pertenencias y accesorios, así como un informe exhaustivo de su estado de

conservación y del entorno afectado por la declaración en el caso de ser un bien inmueble.

En cuanto a la declaración y conclusión del expediente, corresponde al Gobierno de Cantabria, a través del Consejero de Cultura y Deporte, declarar los BIC. En los acuerdos de declaración debe describirse de forma clara, precisa y exhaustiva el bien que es objeto de la declaración. Si se trata de bienes inmuebles, se debe describir su delimitación geográfica y el entorno que se ve afectado, las partes que lo integran, además del régimen de protección aplicable al elemento concreto, teniendo que resolverse el expediente en un año desde que se inició el acuerdo de incoación. Si transcurre el tiempo sin dictarse una resolución, el procedimiento caduca, no pudiendo volver a iniciarse hasta pasados dos años, salvo que lo soliciten tres de los organismos consultivos de la Consejería o el propietario del bien.

La declaración debe ser notificada a los interesados y a los Ayuntamientos en donde se encuentre el bien, además de publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria y en el BOE.

d) Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria

Los BIC deben ser inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria, en adelante RGBICC, correspondiendo su gestión a la Consejería de Cultura y Deportes. El Patrimonio Cultural

de Cantabria debe catalogarse con símbolos iconográficos comunes para cada categoría de los bienes inscritos en el mismo.

En el RGBICC deben anotarse todos los actos y hechos que afecten a la identificación, localización, propiedad y grado de conservación de los BIC. A su vez en el RGBICC se anotan de manera preventiva los bienes que se encuentren en un proceso de declaración como BIC, ya que se quiere identificar y proteger de manera fácil los bienes que componen el Patrimonio Cultural Cántabro. Por ello, los monumentos y lugares culturales están exentos del pago de cualquier tipo de tasa.

El acceso al RGBICC es público, con excepción de la situación jurídica y valor de los bienes, y la localización de los bienes muebles, que requiere autorización del titular del bien para la consulta pública.

A cada uno de los BIC inscritos se les asigna una denominación oficial junto con un código de identificación. El expediente registral debe contener el acuerdo de resolución de la declaración o de incoación si aún está en proceso de declaración o se resolvió a través de silencio; la categoría en la que está clasificado; una descripción detallada del bien de forma gráfica, escrita, cartográfica y fotográfica, para facilitar su correcta identificación y las partes que lo integran; si se trata de bienes inmuebles, debe detallarse el entorno de los mismos, los usos y transmisiones, traslados transitorios y subvenciones que ha recibido y todas las relaciones que haya con la zona donde esté situado, así como el régimen urbanístico aplicable. En el expediente habrán de figurar

también los usos adecuados y correctos, así como el estado de conservación del bien y las posibles intervenciones que se deban realizar en el futuro. En último lugar, debe contener también una copia de los informes que se hayan elaborado en la tramitación, el régimen de visitas y cualquier otro documento que la Consejería de Cultura y Deporte quiera incluir.

La denominación debe de facilitarse a las Corporaciones Locales del lugar donde se encuentre el bien. A estas debe remitírsele información suficiente para poder darle un uso turístico y particular, si fuera posible, para cumplir con el objetivo de mayor difusión de la cultura y patrimonio cultural cántabro.

La denominación debe resumirse a través de una “gula”³³⁹ que contenga el objeto de visita, consulta o investigación. La señalización de los BIC cántabros debe hacerse mediante carteles, atendiendo a las circunstancias del bien que se trate, donde se describan las características más relevantes y las condiciones de su visita.

e) Bienes Culturales Catalogados o de Interés Local

Estos Bienes son definidos como aquellos inmuebles, muebles o inmateriales que, sin gozar de la relevancia que tienen los BIC, posean un aspecto destacado en la identidad cultural de la localidad o municipio

³³⁹ Artículo 34.4 LPCC: “El contenido de dicha denominación resumido servirá para confeccionar una gula que deberá exponerse de forma visible en aquellos Bienes de Interés Cultural que puedan ser objeto de visita, consulta o investigación. Asimismo, se proveerá a las oficinas locales de información turística y a cuantos particulares o asociaciones civiles lo soliciten”

donde se sitúen³⁴⁰. Los Bienes Culturales de interés local son aquellos bienes muebles que expresamente se señalen como integrantes de un bien inmueble catalogado de interés Local. Este tipo de bienes se incluyen en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Cantabria.

Los Bienes Muebles Catalogados o de Interés Local pueden catalogarse de manera individual o como una colección, y a su vez como una obra de autor o como un conjunto tipológico. La norma es que no se pueden declarar obras de autores vivos dentro de esta categoría, aunque la Consejería de Cultura y Deporte puede hacer excepciones, cuando se emita un informe favorable, la obra tenga una antigüedad mayor a 50 años y se autorice de manera expresa por el titular de la propiedad.

Pese a que la norma no hace referencia al patrimonio cultural subacuático, se puede interpretar que en el caso de que algún autor quisiera realizar una exposición permanente bajo el agua, como las que ya existen en otros lugares, podría quedar protegida a través de esta vía.

La competencia para declarar como Bienes de Interés Local corresponde, como se ha mencionado con anterioridad, al Consejero de Cultura y Deportes. Tras la propuesta del Director general de Cultura e informe del Ayuntamiento del Municipio afectado, se aprobará esta declaración, que se inscribirá en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.

³⁴⁰ F. LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, cit., p 27.

La resolución debe contener una descripción clara y exhaustiva del bien, incluyéndolo en alguna de las categorías de bienes muebles, inmuebles o inmaterial, además de la delimitación gráfica del entorno³⁴¹, sus elementos, la vinculación que tenga con el territorio, así como el régimen urbanístico de protección para los inmuebles.

El procedimiento para su declaración se asemeja al de los BIC, existiendo pocas diferencias entre ambos y derivadas sobre todo de la relevancia y especial protección de los BIC frente a los bienes catalogados. La diferencia de mayor relevancia es la inscripción de los bienes catalogados en el Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria.

El Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria se asemeja en su regulación al RGBICC, siendo las funciones y objeto idéntico, excepto en los bienes que deben incluirse en el mismo. Su regulación se remite a la del RGBICC en diversas ocasiones, por lo que no se va a reiterar el análisis de la misma.

f) Los restantes bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. El Inventario General

El art. 33 de la LPCC define los restantes bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria como “aquellos bienes muebles,

³⁴¹ M. E. CASAR FURIÓ, “Las diversas categorías de bienes inmuebles de interés cultural, con especial referencia a la nueva ley de patrimonio cultural valenciano de 2007 (La Ley 864/2007)”, *Práctica Urbanística*, nº. 73, Sección Estudios, 2008, p. 28.

inmuebles e inmateriales que constituyen puntos de referencia de la cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los BIC o los catalogados”. La Consejería de Cultura y Deporte es la encargada de proteger este tipo de bienes, ya sean públicos o privados.

Estos bienes están incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, a través de una resolución motivada del Dirección General de Cultura tras finalizar un procedimiento.

El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria es una figura análoga al RGBICC y al Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria para proteger los bienes que no entren en las otras categorías. Sus funciones y regulación son similares a la de las otras formas de clasificación los bienes.

g) Régimen de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria

El art. 38 de la LPCC establece que “todos los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de las medidas de protección establecidas por esta Ley”, es decir, la LPCC protege tanto a los BIC y los bienes catalogados, como el resto de bienes. El deber de protección y conservación afecta a las Administraciones públicas en diferente grado, existiendo un deber general de conservación³⁴².

³⁴² A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 36.

Este deber de conservación obliga a los propietarios, titulares y poseedores de los bienes a conservarlos y protegerlos, aunque estos no hayan sido inventariados en su registro correspondiente. La obligación de conservación se muestra como un deber inherente al bien que se trate, aunque los propietarios del mismo no conozcan las cualidades que lo harían integrante del conjunto del Patrimonio Cultural de Cantabria.

La Comunidad autónoma de Cantabria está facultada para adoptar las medidas de inspección que considere oportunas y los afectados deberán colaborar con ella en las actuaciones que emprenda. Al mismo tiempo, se reconoce acción pública para que los ciudadanos puedan defender el patrimonio cántabro y la Comunidad autónoma colabora con ellos en todo lo posible.

Si tras realizar la inspección se descubre que por cualquier acción u omisión puede peligrar el bien, la Comunidad autónoma adoptará las medidas que considere oportunas para evitar el deterioro. Si se trata de bienes que no están inventariados, se realiza la incoación de oficio para declarar el bien.

h) Régimen de protección de los Bienes de Interés Cultural

El régimen de protección de los BIC está diferenciado dependiendo del tipo de bien del que se trate (inmueble, mueble o inmaterial). Puesto que las zonas arqueológicas que componen el patrimonio cultural subacuático son bienes inmuebles, se va a desarrollar a continuación la protección que reciben estas desde dicha

visión, aunque de manera expresa la LPCC no señale un régimen específico.

El art. 48 de la LPCC define los bienes inmuebles a través de la definición contemplada en el art. 334 del Código Civil, a los que añade “cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que están formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito cultural, histórico o artístico del inmueble al que estén asociados”. Establece unos criterios abiertos donde tiene cabida el patrimonio arqueológico subacuático.

Estos bienes inmuebles son divididos en el art. 49 de la LPCC³⁴³, en cinco categorías³⁴⁴.

³⁴³ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, Cátedra Cantabria, 2000, p. 33.

³⁴⁴ Monumento: “la construcción u obra de la actividad humana, de relevante interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico tanto de antecedentes inmediatos de la raza humana como de los seres vivos en general, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad singular”.

- Conjunto Histórico: “las agrupaciones de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física”.

- Lugar Cultural: “los lugares relacionados con hechos históricos, actividades, asentamientos humanos y transformaciones del territorio o con un edificio o una estructura, independientemente de que se hallen en estado de ruina o hayan desaparecido, donde la localización por sí mismo posee los valores históricos, arqueológicos, técnicos o culturales. Además, pueden ser cuando se produzca una

En general, el patrimonio arqueológico subacuático estará protegido como Zona Arqueológica. No obstante, los Lugares Culturales pueden dividirse en varios tipos (jardín histórico, sitios históricos, lugares de interés etnográfico, paisaje cultural, rutas culturales, museos, archivos y bibliotecas). En especial, podrían incluirse los sitios históricos, pues son paisajes evocadores de un acontecimiento memorable, o las rutas culturales, al ser una sucesión de paisajes, lugares, estructuras e infraestructuras ligadas a un itinerario cultural.

El régimen general de protección de los bienes inmuebles se entiende aplicable tanto al propio bien como a su entorno, y así permitirse la adecuada percepción y comprensión de su evolución histórica, que le da apoyo ambiental al mismo y que permite que sea percibido y comprendido, de forma que si se altera se puede perjudicar su contemplación y/o los valores inherentes al mismo. El entorno puede incluir los edificios o conjuntos de edificios, lo que no sería aplicable en el caso del patrimonio cultural subacuático en la mayoría de los

concentración, sucesión o proximidad de estos lugares formando una entidad cultural significativa y topológicamente definible estamos ante un paisaje cultural o una ruta histórica”.

- Zona Arqueológica: “todo aquel lugar o paraje natural en donde se hallen bienes muebles e inmuebles, independientemente de si se hallaren en superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales. Los yacimientos arqueológicos que conformen la zona arqueológica deberán presentar una unidad en función de su cronología, tipología, situación o relación con otros valores de carácter cultural o natural”.

- Lugar Natural: “es aquel paraje natural que, por sus características geológicas o biológicas y por su relación con el Patrimonio Cultural, se considere conveniente proteger y no tenga la consideración de Parque Natural o Nacional”.

casos, así como los accidentes geográficos y elementos naturales o paisajísticos, sin perjuicios de que estos estén más o menos distantes del bien o que constituyan un ámbito continuo o discontinuo³⁴⁵.

La protección del patrimonio cultural subacuático no se ve afectada por los planes urbanísticos, dada su situación, por lo que se diferencia en este sentido del resto de bienes inmuebles. No obstante, pueden existir delimitaciones y protecciones de otro tipo derivadas de la declaración como zona arqueológica o lugar cultural, como puede ser la prohibición de la pesca de arrastre, el vertido de ciertos residuos no contaminantes o la instalación y modificación de puntos fijos de control. Por ello, todas las actuaciones e intervenciones sobre los bienes inmuebles irán encaminadas a la conservación, consolidación, rehabilitación y mejora atendiendo a los siguientes criterios:

- Se deben respetar las características del inmueble y cualquier cambio de uso debe tener en cuenta su estructura original y su relación con el entorno. En el caso de que se autoricen usos de los elementos diferentes a los originales, estos deben adecuarse a las técnicas y materiales actuales para poder adaptarse bien al uso.
- La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del bien, así como su mejora y utilización, respetará o acrecentará los valores

³⁴⁵ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 35.

del mismo, sin perjuicio de que puedan utilizarse técnicas, formas y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para conseguir la mejor adaptación del bien a su uso o la valoración cultural del mismo. Especialmente, se conservarán las características topológicas, morfológicas, espaciales y volumétricas más significativas.

- En el caso en el que se añadan materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las partes nuevas deben ser reconocibles, con el objetivo de evitar que se den falsedades históricas por confusiones miméticas, aunque las partes nuevas deben integrarse de forma armónica tanto con el bien como con el entorno.
- Se deben respetar las aportaciones de todas las épocas. Sólo se pueden eliminar en casos excepcionales y siempre que los elementos supongan una degradación del bien y su eliminación sea necesaria para una mejor integración del bien.
- Queda prohibida la colocación de publicidad y la instalación aparente de antenas, cables o rótulos, de forma que estos alteren los valores culturales del bien, sus relaciones con el entorno o la contemplación del conjunto.

Para las zonas arqueológicas no se establecen criterios especiales. Aun así, como ya se ha indicado con anterioridad, el patrimonio cultural subacuático puede englobar también la categoría de lugar cultural o se pueden proteger los entornos de los bienes, por lo que en estos casos se deben seguir los siguientes criterios:

- Se debe mantener la estructura, las características ambientales y la silueta paisajística de los componentes del lugar.
- El volumen, la forma, las texturas y color de las nuevas intervenciones no deben alterar el carácter arquitectónico o paisajístico del lugar, ni perturban como se perciba el bien.
 - La colocación de rótulos publicitarios y comerciales, canalizaciones y demás infraestructuras deben ordenarse mediante un reglamento, con la finalidad de evitar que se altere la percepción del bien y se degrade el conjunto.
- Está prohibida la acumulación de materiales y de las actividades que degraden la contemplación o el acceso al bien.

La LPCC establece unas reglas sobre protección de los bienes análogos a las contempladas en la LPHE, sobre el estado de ruina, traslados, demolición, tanteo y retracto, así como la expropiación de los bienes.

i) Régimen del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Entre los regímenes específicos de protección de los bienes inmuebles existen varios (Monumentos declarados BIC, Régimen de

Conjuntos Históricos, lugares declarados de Interés Cultural, bienes muebles...)³⁴⁶ pero sólo nos vamos a centrar en el de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, regulado en el Capítulo I del Título IV³⁴⁷.

El art. 75 de la LPCC especifica que integran el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria los “bienes muebles, inmuebles y emplazamientos de interés histórico, así como toda la información medioambiental relacionada con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados con la aplicación de las técnicas propias de la arqueología, hayan sido descubiertos o no, estén enterrados o en superficie, en aguas litorales o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y minera”.

El art. 89 de la LPCC establece de forma detallada las diferentes figuras de protección³⁴⁸:

- “Yacimiento Arqueológico. Lugar en que se conservan vestigios materiales o latentes de actividad humana o de su contexto natural”.
- “Zona Arqueológica. Conjunto de yacimientos arqueológicos que presentan unidad en función de su

³⁴⁶ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 33.

³⁴⁷ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, cit., pp. 133-165.

³⁴⁸ J. A. SANTOS VELASCO, “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, cit., pp. 7-21; J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p. 164.

cronología, tipología, ubicación o relación con otros valores de carácter cultural o natural”.

- “Parque Arqueológico. Yacimiento, conjunto de yacimientos o zona arqueológica en que confluyan elementos relevantes que permitan su rentabilidad social como espacio visitable con fines de educación y disfrute”. SANTOS VELASCO define esta figura como “espacios arqueológicos musealizados que combinan la protección y difusión del Patrimonio”³⁴⁹.
- “Área de Protección Arqueológica. Lugar donde por evidencias materiales, antecedentes históricos o por otros indicios, se presume la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos”.

Todos los Yacimientos Arqueológicos que estén incluidos en el Inventario Arqueológico Regional reciben la protección de los BIC, aunque formalmente estén encuadrados en otro tipo de bien o no hayan sido catalogados todavía, siendo esta una protección preventiva con independencia de su estatus o declaración. Además, deben contar con una zona de protección y, en el caso de ser declarados como zonas arqueológicas, se debe redactar un Plan Especial y un Plan Director que

³⁴⁹ J. A. SANTOS VELASCO, “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, cit. p. 15.

regule las iniciativas e inversiones que se pueden realizar en la Zona Arqueológica.

Como expresa MOURE ROMANILLO, “el plan regional de excavaciones debe establecer ante todo las líneas prioritarias de investigación a medio y largo plazo, atendiendo de forma muy especial a las áreas, época o tipos de yacimientos que constituyen auténticas lagunas en el conocimiento del pasado de Cantabria. Como ejemplo, baste recordar cómo las exploraciones se han concentrado de manera casi exclusiva en la franja costera, o la ausencia de excavaciones sobre estructuras megalíticas que pueden dar una información significativa, por no mencionar el desconocimiento casi absoluto de la cultura material de las poblaciones de la Segunda Edad del Hierro a las que la región debe, entre otras cosas, su nombre”³⁵⁰, no habiéndose realizado hasta la fecha ninguno en materia de patrimonio subacuático, y siendo una de las omisiones que declara de manera expresa la Resolución CVE 2010-8510, por la que se aprueba el Plan Regional de Arqueología.

Las áreas de protección arqueológica deben ser declaradas a través de una resolución del Consejero de Cultura y Deporte, previa audiencia de los interesados y del Ayuntamiento afectado, junto con un informe de la Comisión Técnica competente en la materia que se trate. La declaración de las mismas debe publicarse en el Boletín Oficial de

³⁵⁰ A. MOURE ROMANILLO, “Prehistoria de Cantabria. Historia de las investigaciones y problemática actual”, *Prehistoria de Cantabria*, Universidad de Santander, Santander, 1985, pp. 23-37.

Cantabria y las áreas deben ser inscritas en el registro correspondiente y en el Inventario Arqueológico Regional.

La documentación arqueológica compone la segunda parte de la definición contemplada en el art. 75 de la LPCC, siendo de acuerdo con el art.91 de la misma ley “toda la documentación inédita o publicada de actuaciones realizadas, el inventario arqueológico, la base de datos bibliográfica y los bienes muebles depositados en los Museos y otros centros de titularidad pública dependientes de la Administración regional”. La Consejería de Cultura y Deporte debe propiciar la recopilación de la documentación arqueológica que permita disponer de un conocimiento amplio de Cantabria, en cuanto a su realidad y potencia arqueológico y en especial a los trabajos de investigación que se desarrollen a través de actuaciones arqueológicas.

Se consideran actuaciones arqueológicas³⁵¹ “aquellas que tengan como finalidad descubrir, documentar o investigar restos

³⁵¹ Las actuaciones arqueológicas que tienen un carácter preventivo son las siguientes:
- realizar inventarios de los yacimientos que requieren una prospección en el territorio. Es decir, la relación y catálogo de yacimientos, hallazgos aislados y las áreas de prospección arqueológica con expresa indicación de la tipología, cronología y localización geográfica de los mismos.

- Los controles y seguimientos arqueológicos consistentes en la supervisión de obras en proceso de ejecución en las que podría verse afectado el patrimonio cultural subacuático, así como el establecimiento de medidas de conservación o documentación de las evidencias o elementos de interés arqueológico que aparezcan mientras estas se estén llevando a cabo.

- Los estudios de evaluación del impacto ambiental consistentes en documentos técnicos en los que se debe incluir la incidencia que un posible deterioro del proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los elementos que componen el patrimonio arqueológico.

arqueológicos o paleontológicos, o la información cronológica y medioambiental relacionada con los mismos”. Las actividades arqueológicas pueden dividirse entre preventivas, de salvamento y de investigación³⁵².

La LPCC hace un reconocimiento expreso al patrimonio cultural subacuático al expresar que “en la prospección subacuática sólo podrán realizarse desplazamientos moderados de arena sin extracción ni remoción de material arqueológico alguno, siempre que se haga constar expresamente en el permiso administrativo”.

- La consolidación, restauración, actuaciones de cerramiento, vallado o cubrición de restos arqueológicos.

Entre las actividades que se consideran actuaciones arqueológicas de investigaciones encontramos:

- Las excavaciones arqueológicas, entendiéndose como las remociones sistemáticas de terreno y recogida de materiales de la superficie, subsuelo o medio subacuático con la finalidad de descubrir o investigar cualquier clase de restos históricos. La ley también incluye dentro de este tipo de iniciativas aquellas que toman muestras paleontológicas, cronológicas, medioambientales o de otro tipo.

- Las prospecciones arqueológicas son las exploraciones sistemáticas y delimitadas en la superficie. En el caso del patrimonio cultural subacuático será la detección de vestigios arqueológicos visibles o no. Las prospecciones arqueológicas incluyen la observación y reconocimiento de forma sistemática de la superficie y de las técnicas de teledetección.

Por último, se incluyen entre las actuaciones de investigación los estudios de arte rupestre. “Se entiende por estudio de arte rupestre al conjunto de tareas de campo orientadas al conocimiento, registro, documentación gráfica y reproducción de manifestaciones rupestres y de su contexto. A los efectos de la presente Ley, tendrá esta consideración cualquier toma de muestras sobre las evidencias parietales o sus soportes, la cual tendrá que ser autorizada explícitamente”. Este tipo actuaciones en este Capítulo se debe a que la LPCC reconoce y engloba los regímenes arqueológicos y paleontológicos de forma unitaria (J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p. 160).

³⁵² J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p. 154.

En cuanto a intervenciones de salvamento, serán aquellas que tengan como objetivo adoptar las medidas necesarias para evitar la destrucción o pérdida de los bienes cuando exista un peligro concreto.

Para llevar a cabo cualquiera de las actuaciones comentadas anteriormente es necesario una autorización de la Consejería de Cultura y Deporte, una vez oído el Ayuntamiento que se trate³⁵³. Las visitas, exploraciones espeleológicas y de otras características en cavidades naturales con interés arqueológico deberán contar con un permiso de la Consejería de Cultura y Deporte. Para las restantes cavidades no será necesario dicho permiso.

Cualquier persona física que posea una titulación adecuada universitaria y que acredite profesionalidad o los representantes de una sociedad de investigación arqueológica con solvencia reconocida por la Comisión Técnica, puede solicitar esta autorización, siendo un motivo de negación de la autorización la falta de capacitación profesional adecuada. En el caso de las actuaciones sobre el patrimonio cultural subacuático, los miembros de los grupos que realicen las tareas subacuáticas deben contar con la titulación oficial de buceador correspondiente a la profundidad donde se vaya a actuar.

Si se trata de actuaciones organizadas por la Consejería de Cultura y Deporte, pueden realizarse a través de contratos de obra, de gestión de servicios o de asistencia técnica o de cualquier otra

³⁵³ J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p. 153.

modalidad contractual. Las actuaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con el contenido del TRLCSP, debiéndose utilizar el procedimiento de urgencia cuando se trate de actuaciones cuya finalidad es evitar el deterioro o destrucción del Patrimonio Arqueológico de Cantabria.

A la solicitud de autorización se debe acompañar un proyecto en el que tiene que acreditarse que se cuenta con un equipo suficiente, una memoria económica con las fuentes de financiación públicas o privadas, objetivos y metodología a seguir. En el caso de actuaciones sobre patrimonio cultural subacuático, se requiere además la mención de un laboratorio que asegure el correcto tratamiento y la conservación de los bienes recuperados, siendo un motivo de denegación de la autorización la presentación de un proyecto arqueológico inadecuado para la intervención solicitada.

El centro, institución o empresa de que el director forme parte se responsabilizará de la calidad científica del trabajo y de la protección y conservación de los materiales, de forma civil subsidiaria, hasta que no los entregue en la forma y plazo al Museo Regional que determine la administración responsable.

La LPCC establece también un sistema de prohibiciones, entre las que se encuentran “realizar cualquier tipo de deterioro, colmatación, obra o alteración de las cavidades naturales sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura y Deporte” y así como la

prohibición del “uso de detectores de metales y aparatos de tecnología similar fuera de las actuaciones legalmente autorizadas”³⁵⁴.

Entre las obligaciones que tienen los directores de actuaciones arqueológicas se encuentra la de presentar a la Consejería de Cultura y Deporte un informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trabajo, antes de la publicación de la información encontrada. En el plazo de un año, salvo solicitud razonada a la Comisión Técnica para el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, debe presentarse una memoria científica que puede ser publicada por la Consejería de Cultura y Deporte. La documentación arqueológica inédita es de acceso restringido, pudiendo acceder a la misma los investigadores mediante una petición razonada y avalada por la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Mientras no transcurre el año, el investigador puede utilizar el contenido de la memoria a través de comunicaciones científicas, ponencias, artículos y otras publicaciones, haciendo referencia a la obra realizada y a la subvención recibida por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

La LPCC también establece un régimen excepcional para el desplazamiento de estructuras arqueológicas cuando existan razones de interés público o de utilidad social que obliguen al traslado, porque resulta inviable el mantenimiento en su lugar original o en el mismo

³⁵⁴ ³⁵⁴J. A. SANTOS VELASCO, *Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico*, cit., p. 15.

peligra su conservación. En estos casos se debe documentar de forma científica y detallada los elementos y características, con la finalidad de garantizar su reconstrucción en la localización determinada por la Consejería de Cultura y Deporte. El traslado debe anotarse en el Inventario Arqueológico de que se trate y, en todo caso, en el RGBIC, conteniéndose en la anotación todos los datos acerca de la relación originaria, las características del entono y las posibles estructuras afectadas.

Todos los proyectos de excavación deben tener previsto un presupuesto con la dotación suficiente para que se lleve a cabo una protección oficial del yacimiento del que se trate mientras dure la actuación en el mismo, es decir, desde que se comience hasta que se depositen en el Museo regional arqueológico los materiales, bienes encontrados (útiles, huesos, cerámicas, metales, inscripciones y, en general, todos los materiales arqueológicos, paleontológicos y paleoantropológicos) y documentos. Los documentos deben presentarse en forma de memoria pasados tres meses desde que se finalicen los trabajos. En ella deben aparecer, como mínimo, las recomendaciones para su mejor conservación, así como las posibles nuevas líneas de actuación.

Los bienes que se encuentren en excavaciones arqueológicas u otro tipo de trabajos, ya sea de forma intencionada o casual, tienen la consideración de bienes de dominio público y por tanto deben ser

depositados³⁵⁵. Si por alguna razón las intervenciones arqueológicas se desarrollan en terreno privado, el dueño de las mismas tendrá derecho a ser indemnizado. Como expresa BARCELONA LLOP, la Comunidad de Cantabria se adjudica de manera unilateral la propiedad de los bienes que se encuentren en su territorio, aunque indemnice al descubridor o al dueño de los terrenos³⁵⁶.

Si se producen hallazgos de forma casual con independencia de cuál sea el motivo, este hallazgo debe comunicarse a la mayor brevedad posible, sobre todo en casos en que pueda haber algún tipo de riesgo inminente, siendo el plazo máximo de 48 horas. La comunicación se efectuará a la Consejería de Cultura y Deporte o a la Guardia Civil o Policía Nacional³⁵⁷.

La Administración pública adoptará de inmediato las medidas que considere oportunas para garantizar la conservación de los bienes, pudiendo, entre otras, suspender la obra o actividades. Esta suspensión dura hasta el momento en que se determina de forma cierta que existe o no interés arqueológico, de forma que se continúe la actividad o se inicie algún tipo de intervención arqueológica. El descubridor puede ser recompensado siempre que el hallazgo sea casual, se trate de algún bien mueble, que no se encuentre en una zona declarada o en proceso de

³⁵⁵ J. BARCELONA LLOP, “El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria”, cit., pp. 145-178.

³⁵⁶ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, cit., pp. 133-165.

³⁵⁷ J. BARCELONA LLOP, “El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria”, cit., p. 159.

declararse como BIC u otra categoría, no se deba a una actividad ilícita o no autorizada y no se haya extraído de forma innecesaria de su contexto. BARCELONA LLOP añade al respecto que, dentro de los hallazgos casuales, no entran aquellos realizados mediante la utilización de detectores de metales o instrumentos, puesto que en esta acción ya hay una intencionalidad de descubrir algo ³⁵⁸. También será compensado el propietario del terreno donde se encuentren, de forma que, en el caso de no coincidir propietario y descubridor, las cantidades serán divididas por mitad. La LPCC, a diferencia de otras normas autonómicas, establece una serie de reglas para compensar al descubridor.

El art. 80 de la LPCC establece que tienen prioridad para ser financiados los proyectos de actuación arqueológica que se ajusten a las líneas de investigación fijadas por la Consejería de Cultura y Deporte en el Plan Regional de Arqueología. El actual Plan Regional de Arqueología, aprobado por la Resolución CVE 2010-8510, enumera en diversas ocasiones la falta de contemplación de proyectos en materia de patrimonio cultural subacuático, pese a ser las comarcas litorales de la Marina oriental y occidental donde más se concentran la mayoría de los proyectos realizados o que se plantean realizar.

³⁵⁸ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, cit., p.155; J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p.160.

No obstante, pese a que no se hayan incluido referencias al mismo en la Resolución CVE 2010-8510, esto no quiere decir que el patrimonio cultural subacuático no esté protegido o no pueda protegerse, ya que Cantabria es una CA litoral y con gran número de rías y cambios fluviales, en los que este tipo de patrimonio puede figurar en la actualidad en tierra firme. Como expresa GOMEZ VEGA, “en las excavaciones arqueológicas iniciadas en 1983 en la iglesia baja de aquella y posteriormente en su claustro, se encontraron estructuras romanas. Tales restos parecen confirmar que el primitivo puerto de Santander, y según se desprende el puerto romano que citan las fuentes «*Portus Victoriae Iuliobriguensis*», estaba situado en la citada ría, debajo del cerro donde posteriormente se construyó el conjunto catedralicio”³⁵⁹. Pese a que se puede desvirtuar un poco el sentido del patrimonio cultural subacuático, puede estar protegido bajo otras figuras o bajo el régimen general aplicable a la arqueología.

La Consejería de Cultura y Deporte puede suspender las actuaciones si durante la ejecución de cualquier tipo de obra se encuentran restos u objetos con valor arqueológico, con el fin de que se adopten las medidas adecuadas para la protección de los mismos. En los quince días siguientes desde la comunicación, se deben comprobar los elementos de la misma y determinar el interés y el valor arqueológico de lo encontrado. La suspensión de las obras puede ser

³⁵⁹ B. GOMEZ DE VEGA, “Pasado y presente de la Arqueología Subacuática en Cantabria”, *Arqueología Subacuática. PH Boletín* 33, 2000, p. 173.

objeto de compensación, aplicándose en el caso de las iniciativas privadas las normas de responsabilidad patrimonial de la Administración. En las zonas donde se presume la existencia de estos bienes, la Administración pública o el promotor deberán aportar un estudio del impacto para que se reinicien las obras. Este estudio sobre el impacto arqueológico debe ser realizado por un arqueólogo autorizado para tal efecto. Si la Consejería de Cultura y Deporte estima necesarias actuaciones arqueológicas, éstas deberán ser sufragadas por el propietario o promotor de la obra. Si se trata de particulares, la Administración pública ayudará a financiar la obra si esta supone un valor superior al 2% del presupuesto inicial de la misma. En el caso de ser un concesionario, el coste debe ser asumido completamente por este.

Otra de las formas de protección del patrimonio arqueológico contempladas en la LPCC es la obligación de declarar los objetos arqueológicos que hayan sido fruto de hallazgos o excavaciones desde 1911³⁶⁰ y que pertenezcan al Patrimonio Cultural de Cantabria, ya estén en posesión de personas privadas o entes públicos. Estos deben comunicar que los poseen y deben inventariarse. Aquellos que se consideren como bienes de dominio público deben entregarse en el plazo de dos años³⁶¹, siendo los poseedores responsables de la conservación y seguridad de los objetos arqueológicos mientras que no los entreguen en la forma establecida, de manera que la pérdida,

³⁶⁰ Momento en que se dictó la Ley de la Ley 7 de julio de Excavaciones y Antigüedades.

³⁶¹ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, cit., p.145.

deterioro o sustracción puede dar lugar a una sanción³⁶². Se establece que aquellos que entreguen bienes a las colecciones de los museos poseen el derecho de aparecer en los rótulos. Dado que se busca una mayor difusión de los bienes, no se puede condicionar la exhibición de lo entregado.

Como muy bien indica BARCELONA LLOP, la LPCC pretende atribuir a la Administración la potestad de recuperar de oficio cualesquiera bienes arqueológicos en manos privadas. Desde la promulgación de la Ley de Excavaciones de 1991, está contemplando, en realidad, una privación expropiatoria sin la debida contrapartida indemnizatoria, excepto en los casos de la LPHE.

j) Inventario Arqueológico Regional

La Consejería de Cultura y Deporte confecciona cada dos años un Inventario Arqueológico Regional donde se recogen los yacimientos arqueológicos, las áreas de protección arqueológica y los hallazgos aislados, así como las cavidades, aunque en la práctica lleva desde 2010 sin realizarse. Este inventario sirve como instrumento interno de la Administración para poder planificar una buena gestión, administración y tutela del patrimonio arqueológico o paleontológico, de forma que sirva para potenciar la protección del patrimonio subterráneo.

³⁶² J. M. GARCÍA CALDERON, “Régimen jurídico básico de la arqueología”, cit., pp. 78-108.

El Inventario Arqueológico Regional debe remitirse para un mayor conocimiento de los resultados a la Federación de Municipios de Cantabria. La publicación o divulgación de este inventario debe contar con un informe favorable de la Consejería de Cultura y Deporte, con la finalidad de evitar que se difundan datos que puedan suponer un riesgo para la conservación del patrimonio.

Este Inventario Arqueológico Regional también sirve para que la Consejería de Cultura y Deporte pueda analizar el riesgo de los programas o proyectos, tanto públicos como privados, y de los proyectos o programas que tengan incidencia en el territorio, de forma que puedan someterse los proyectos al impacto ambiental adecuado y autorice la actividad correspondiente, la deniegue o imponga la sanción correspondiente.

De acuerdo con el último inventario, Cantabria estaba dividida en 8 comarcas en las que se distribuyen los puntos arqueológicos (Marina Oriental, Marina Occidental, Pas-Iguña, Asón, Liébana, Campoo, Tudanca-Cabuérniga, Villaverde). En general, la mayoría de los yacimientos se concentran en las dos Marinas. Esto puede ser debido a la importancia que ha tenido el mar en este pueblo, ya que se produjeron cambios derivados de movimientos en los flujos fluviales o de los ataques de enemigos llegados por vía marítima que provocaron desplazamientos hacia al interior.

k) Medidas de fomento

Dado que se busca la protección del patrimonio, esta protección se puede realizar de diversas formas. Una de ellas es a través del fomento de actividades, así como la difusión y educación. Puesto que en muchas ocasiones el patrimonio cultural subacuático se encuentra en manos privadas tras la obtención de los hallazgos, la Comunidad Autónoma otorga, de forma periódica, subvenciones para llevar a cabo la conservación de los bienes para aquellos propietarios que no puedan hacer frente al coste de los mismos, no pudiendo superar estas subvenciones el 50% del valor total de las obras, salvo que sean imperativas para la conservación de las mismas.

El Gobierno de Cantabria concede ayudas para la investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. Se conceden de acuerdo con criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y dentro de las previsiones presupuestarias³⁶³.

Del mismo modo, la LPCC señala que, con la finalidad de fomentar la protección del patrimonio cultural, se establecen beneficios fiscales, ayudas a las inversiones culturales y la posibilidad de realizar pagos de cualquier tipo a la Hacienda Pública con bienes culturales.

Todas estas medidas quedan recogidas en los Planes de Patrimonio Cultural de Cantabria, dado que son los instrumentos

³⁶³ J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, cit., pp. 133-165.

administrativos elaborados cada tres años por las Comisiones asesoras para la evaluación de las necesidades de conservación y asignación racional y equilibrada de los recursos disponibles para la investigación, difusión, promoción, protección, conservación, mejora y acrecentamiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria.

1) Régimen sancionador

La última de las formas de protección del patrimonio cultural subacuático contemplada en la LPCC es el régimen de sanciones administrativas, de forma que existen una serie de infracciones leves, graves y muy graves por el incumplimiento de las obligaciones y contenidos de la LPCC.

Dado que esta ley regula un régimen más amplio del que se aplica al patrimonio cultural subacuático, en este punto sólo nos vamos a ceñir al contenido que sirva para proteger a este de manera punitiva. Siguiendo a BARCELONA LLOP cuando analiza la regulación cántabra, “corresponde a las Comunidades Autónomas litorales y no al Estado el control de las intervenciones arqueológicas que se ejecuten en los espacios marítimos y sancionar las actuaciones ilegales”³⁶⁴.

Entre las infracciones leves encontramos “realizar cualquier intervención en un Bien Inventariado sin la preceptiva comunicación

³⁶⁴ J. BARCELONA LLOP, *El patrimonio arqueológico en la legislación reguladora del patrimonio cultural de Cantabria*, cit., p. 154.

previa a la Consejería competente en materia de Cultura”; “incumplir una orden de ejecución de obras de conservación en BIC, de Interés Local o Inventariados acordada por la Consejería competente en materia de Cultura, cuando no se hayan producido daños en el bien protegido”, entre otras³⁶⁵.

³⁶⁵ “Incumplir una orden de suspensión de obras en Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados acordada por la Consejería competente en materia de Cultura, tenga o no carácter provisional, cuando no se hayan producido daños en el bien protegido”; “incumplir la obligación de comunicar a la Consejería competente en materia de Cultura los traslados que afecten a BIC o de Interés Local, cuando no se hayan producido daños en el bien protegido”; “incumplir la obligación de comunicar a la Consejería competente en materia de Cultura, la transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho real sobre BIC, de Interés Local o Inventariados”; “colocar rótulos, señales, símbolos, cerramientos o rejas en las fachadas o cubiertas de los BIC o de Interés Local, sin contar previamente con la preceptiva autorización administrativa” (en este caso será solamente la colocación de rótulos, señales o símbolos o cerramientos, dejando de lado el apartado de rejas en fachadas o cubiertas, dado que esta disposición está pensada para los bienes inmuebles); “no permitir la visita pública de los bienes culturales en las condiciones previamente establecidas”; “realizar actuaciones arqueológicas o espeleológicas sin la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de Cultura, o contraviniendo los términos en que fue concedida esta, cuando no se hayan producido daños en los bienes protegidos”; “realizar intervenciones en un yacimiento arqueológico sin adoptar las medidas de protección o condicionantes establecidos en la autorización otorgada a tal efecto, cuando no se hayan producido daños en los bienes protegidos”; “incumplir una orden de suspensión de obras adoptada tras el hallazgo de restos u objetos con valor arqueológico, cuando no se hayan producido daños en los mismos”; “incumplir la obligación de comunicar a la autoridad competente los objetos o colecciones de materiales arqueológicos que se posean por cualquier concepto, o la de entregarlos”; “hacer objeto de tráfico los objetos o colecciones de materiales arqueológicos que se posean por cualquier concepto; “obstruir el ejercicio de la potestad de inspección de la Administración sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria” e “impedir u obstruir el acceso de los investigadores a los Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados”.

En cuanto a las infracciones graves que afectan al patrimonio cultural subacuático, la ley señala las siguientes: “otorgar licencias municipales para actuaciones urbanísticas en BIC o de Interés Local, o en su entorno de protección, sin la autorización previa de la Consejería competente en materia de Cultura cuando resulte preceptiva, o contraviniendo los Planes Especiales aprobados para la protección de dichos bienes”, entre otras³⁶⁶. En general este tipo de sanciones se

³⁶⁶ “Realizar cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural o de Interés Local, o en su entorno de protección, sin la autorización previa de la Consejería competente en materia de Cultura, o del Ayuntamiento correspondiente si se hubiera aprobado un Plan Especial para la protección de dichos bienes”; “incumplir una orden de ejecución de obras de conservación en Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados acordada por la Consejería competente en materia de Cultura, cuando se hayan producido daños en el bien protegido que no sean irreparables”; “incumplir una orden de suspensión de obras en Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados acordada por la Consejería competente en materia de Cultura, tenga o no carácter provisional, cuando se hayan producido daños en el bien protegido que no sean irreparables”; “incumplir la obligación de comunicar a la Consejería competente en materia de Cultura los traslados que afecten a Bienes de Interés Cultural o de Interés Local, cuando se hayan producido daños en el bien protegido que no sean irreparables”; “incumplir el deber de protección y conservación de Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados por parte de sus propietarios, titulares de derechos reales o poseedores, cuando se hayan producido daños en el bien protegido que no sean irreparables”; “realizar actuaciones arqueológicas sin la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de Cultura, o contraviniendo los términos en que fue concedida esta, cuando se hayan producido daños en los bienes protegidos que no sean irreparables”; “realizar intervenciones en un yacimiento arqueológico sin adoptar las medidas de protección o condicionantes establecidos en la autorización otorgada a tal efecto, cuando se hayan producido daños en los bienes protegidos que no sean irreparables”; “incumplir una orden de suspensión de obras adoptada tras el hallazgo de restos u objetos con valor arqueológico, cuando se hayan producido daños en los mismos que no sean irreparables”; “incumplir la obligación de comunicar a la autoridad competente los objetos o colecciones de materiales arqueológicos que se posean por cualquier concepto, o la de entregarlos en los casos previstos en esta Ley, cuando se hayan producido daños en los mismos que no sean irreparables”; “utilizar detectores de metales o aparatos de tecnología similar en actuaciones arqueológicas ilícitas”; “incumplir el deber de llevar el libro de registro a

caracterizan por incumplir las obligaciones y causar daños, pero no irreparables.

Las infracciones muy graves serán aquellas acciones u omisiones que conlleven la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de Bienes de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados, sean muebles o inmuebles o que comporten una reincidencia de las acciones consideradas graves.

La respuesta punitiva a estas acciones viene determinada por una sanción económica y, en su caso, por una serie de inhabilitaciones profesionales para poder desarrollar ciertas actividades. Las sanciones en forma de multas se gradúan de acuerdo al grado de malicia y al daño efectivo causado. Asimismo, también se autoriza a la AP para llevar a cabo el decomiso de los materiales y bienes que se hallen en posesión de los infractores, con el objeto de hacer frente a posibles indemnizaciones por daños y perjuicios o reparaciones de los bienes o el entorno.

que están obligados todos los particulares que se dediquen al comercio de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, así como la omisión o inexactitud de datos que deban constar en el mismo”; “la retención ilícita o el depósito indebido de bienes muebles objeto de protección”; “la separación no autorizada de bienes muebles vinculados a Bienes Inmuebles declarados de Interés Cultural o de Interés Local”; “la comisión de la tercera infracción leve en materia de protección del Patrimonio Cultural de Cantabria”.

E) Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco

a) Preliminar

La exposición de motivos de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco establece que, el patrimonio cultural vasco “es la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contribución histórica de este pueblo a la cultura universal”³⁶⁷.

³⁶⁷ J.A. RUBIO-ARDANAZ, “El concepto de patrimonio marítimo y de cultura: gestión museística e iconos públicos en el País Vasco”, *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, 6, 2009, pp. 57-82; RUBIO DE MIGUEL, “Otros aspectos de la arqueología subacuática: la arqueología de los lagos”, *Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología*, nº. 25, 1988, pp. 45-55; A. M. BE Esta norma deroga la Orden de 17 de diciembre de 1987, reguladora de la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta norma establecía el contenido básico sobre las formas en que debían solicitarse las autorizaciones de prospecciones arqueológicas, quien debía autorizarlas, como se entendía el silencio, y que los requisitos a cumplimentar tanto para llevar a cabo la investigación como para después exponer o conservar los resultados de la investigación arqueológica.

Como su sucesora, esta norma no hacía distinción entre zonas arqueológicas situadas en zonas terrestres de las que se encuentran sumergidas. NITO DOMINGUEZ, “La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente”, *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, 1, 1996, pp. 277-310; F. GARCÍA RUBIO, “El papel de los Ayuntamientos en la conservación del patrimonio cultural. Estado de la cuestión” *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 12, 2004, p. 2069; A. M. BENITO DOMINGUEZ, “La arqueología subacuática en Guipuzkoa: panorama actual”, *Arqueología Subacuática. PH Boletín 31*, pp. 151-158; A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 39.

Esta norma deroga la Orden de 17 de diciembre de 1987, reguladora de la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual establecía el contenido básico sobre las formas en que debían solicitarse las autorizaciones de prospecciones arqueológicas, quién debía autorizarlas, cómo se entendía el silencio, y cuáles eran los requisitos a cumplimentar tanto para llevar a cabo la investigación como para después exponer o conservar los resultados de la investigación arqueológica.

El Estatuto de la Autonomía del País Vasco reconoce como competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma la cultura, el patrimonio histórico y los archivos, bibliotecas y museos, salvo los de titularidad estatal. La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en adelante LTH, por su parte, atribuye a las instituciones forales de dichos territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de conservación, restauración, mejora y, en su caso, excavación del patrimonio histórico-artístico, monumental y arqueológico, y competencia exclusiva sobre archivos, bibliotecas y museos de su titularidad.

Los fines principales de la Ley de patrimonio cultural vasco son el diseño de una política tanto para la defensa y protección, difusión y fomento del patrimonio cultural del pueblo vasco, como para el desarrollo de una infraestructura de archivos, bibliotecas y museos, por

ser éstos los principales centros depositarios de patrimonio cultural vasco³⁶⁸. Asimismo, se argumenta que el objetivo de dicha ley es “compatibilizar la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales con la vocación de esparcimiento y disfrute colectivo de estos territorios por parte de la población”³⁶⁹.

A lo largo de la normativa se utiliza de manera constante la expresión “valores culturales del País Vasco”, no habiendo una definición de lo que debe entenderse por tal. El art. 2 regula el concepto más parecido a dicha expresión al decir que “integran el patrimonio cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que por tanto son merecedores de protección y defensa”. La jurisprudencia se ha encargado delimitar este criterio de forma práctica. A modo de ejemplo citamos la STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, nº 181/2012, de 13 de marzo, que en su FJ tercero, establece:

“Tendrán la consideración de bienes culturales calificados aquellos bienes del Patrimonio Cultural Vasco cuya protección es de interés público por su relevancia o singular valor y así sea acordado respectivamente.

³⁶⁸A. M. BENITO DOMINGUEZ, “La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente”, cit., p. 287.

³⁶⁹M. B. URQUIJO ARREGUI, *Escenificaciones de cultura económica y género en el espacio agroturístico vasco. El caso de Tolosaldea (Guipuzkoa)*, Universidad del País Vasco, Donostia, 2011, p. 306.

Por lo tanto, el criterio jurídicamente relevante para la calificación es un interés cultural concretado en un valor singular cuya protección es de interés público. Estamos así ante un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido semántico debe ser satisfecho mediante una adecuada motivación que en el plano fáctico justifique los elementos del bien que lo dotan de singularidad cultural, histórica o artística, que es lo que justifica su inclusión en esta categoría, que no puede ser arbitraria, pues lleva aparejado para los bienes así declarados un concreto régimen jurídico (art. 20 a 72 de la Ley 7/1990)”.

En este mismo artículo se establece una división entre monumento (bien mueble o inmueble que individualmente considerado presenta un interés cultural), conjunto monumental (agrupación de bienes muebles o inmuebles que conforman una unidad cultural) y espacio cultural (lugares, actividades, creaciones, creencias, tradiciones o tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco)³⁷⁰.

b) Arqueología vasca

En cuanto a la arqueología, el Título IV regula el patrimonio arqueológico. Se entiende por zona arqueológica todo lugar donde existan bienes muebles o inmuebles cuyo estudio requiere la aplicación de la metodología arqueológica. Los conjuntos de ruinas y restos

³⁷⁰ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p.39.

arqueológicos sometidos a visita pública tendrán la consideración de parque arqueológico. Hasta el momento, el Gobierno Vasco no ha declarado ninguna zona de protección que englobe yacimientos arqueológicos marítimos³⁷¹, sin perjuicio de que la historia del pueblo vasco está ligada al mar y es una de las zonas donde pueden encontrarse un gran número de pecios hundidos al ser una zona fronteriza y a la bravura de sus aguas³⁷².

Como en otras legislaciones, la normativa vasca no diferencia de las zonas de protección terrestre y subacuática, aplicándose las mismas normas a todas. Por zona arqueológica debe entenderse el lugar donde existen los bienes muebles o inmuebles cuyo estudio requiere la aplicación de la metodología arqueológica. Los conjuntos de ruinas y restos arqueológicos sometidos a visita pública tendrán la consideración de parque arqueológico. Hay que destacar que los bienes muebles que hayan sido reconocidos como inseparables de un inmueble por el decreto de calificación de éste, tendrán la consideración de bienes culturales calificados y estarán sometidos al destino de aquél, a no ser que el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco autorice

³⁷¹ Numerosas son las zonas en las que se han llevado a cabo labores de investigación y que podrían englobar dicha categoría: el fondeadero del cabo de Higer y la desembocadura del Bidasoa, la bahía de Donostia, los barcos de la desembocadura del Oria, la Bahía de Getaria y la nave de Iturritxiki, entre otros.

³⁷² M. BENITO DOMINGUEZ, *La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente*, cit., p. 279 y *La arqueología subacuática en Guipuzkoa: panorama actual*, cit. p. 151.

su separación con carácter excepcional, indicando las razones que lo motivan³⁷³.

Las zonas arqueológicas calificadas deben estar protegidas en los planes de ordenación territorial y urbana, pese a que hasta la fecha no se han dado casos. En un futuro podrían ser de aplicación para la conservación de yacimientos que se encuentren en los entornos urbanos que discurren por rías o puertos³⁷⁴. Por ello, deben inscribirse en el Inventario General de Bienes Culturales en las condiciones que en cada caso establezca el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, cuyo informe favorable respecto de la protección otorgada por los mencionados planes será preceptivo en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental según la legislación vigente irá acompañado del informe arqueológico emitido por la Diputación Foral correspondiente, con el fin de incluir en la declaración las consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe. Dicho informe se entenderá favorable si en el plazo de 15 días no hubiera sido emitido expresamente³⁷⁵.

³⁷³ Art. 37. 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco.

³⁷⁴ “En el programa de prospección se da mayor importancia a las zonas fértiles como puertos donde los dragados son periódicos, rías, ensenadas y abrigos naturales como la bahía de Donostia y la de Txingudi y la zona del cabo de Higer”, VV.AA., “Inventario de elementos de interés arqueológico subacuáticos de la Comunidad Autónoma Vasca”, *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, 6, cit., pp. 83-112.

³⁷⁵ Art. 44. 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco.

La norma establece una serie de técnicas que se pueden llevar a cabo en materia de arqueología, pudiéndose dividir en prospección arqueológica según sea con extracción de tierra (prospección mecánica o prospección con catas) o sin extracción (prospección visual o prospección geofísica); sondeo arqueológico, control arqueológico o excavación arqueológica³⁷⁶. Dichas actuaciones pueden tener carácter de urgencia si la conservación se viese amenazada.

Para la aprobación de la actividad, el promotor deberá presentar el correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación Foral correspondiente para su aprobación previa a la ejecución de aquélla.

La metodología aplicable a la arqueología subacuática es la misma que para la terrestre. No obstante, ambas se diferencian en las técnicas aplicables debido al medio. Para llevar a cabo un trabajo subacuático se requiere una tecnología diferenciada y específica y unos medios que conlleven un mayor coste. El equipo básico contendrá botellas de aire comprimido e instrumentos varios como brújula y manómetro, bomba de succión, detectores de metales y globos ascensionales para subir los materiales a la superficie³⁷⁷. Se requieren embarcaciones de apoyo, junto con un equipo humano con conocimientos en la materia.

³⁷⁶ Art. 45. 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco.

³⁷⁷ M. BENITO DOMINGUEZ, *La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente*, cit., p. 283.

c) Régimen sancionador

La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio cultural vasco establece también en su Título VI un régimen sancionador. Este régimen se aplica siempre que la materia no sea constitutiva de un delito. Dichas sanciones pueden variar desde los diez millones de pesetas (60.101,21 euros) hasta los cien millones de pesetas (601.012,10 euros).

En materia de arqueología subacuática y bienes derivados de la misma, corresponde al Gobierno vasco imponer las sanciones por infringir la legislación en materia de: a) el incumplimiento del deber de información o negativa de acceso a las autoridades, estudio, visita pública respecto a bienes culturales calificados e inventariados y sin justificar las razones de estas negativas en materias de honor o intimidad entre otras; b) la no comunicación de la posesión o propiedad de bienes muebles que reúnan características establecidas en la integración del patrimonio cultural vasco; c) la no comunicación del traslado por parte de los propietarios o poseedores legítimos de bienes muebles calificados e inventariados al Registro de Bienes Culturales Calificados y al Inventario General de Bienes Culturales; d) la no formalización de un libro registro de las transmisiones por aquellos sujetos que se dediquen de manera habitual al comercio de bienes integrantes del patrimonio cultural vasco; e) la falta de concesión de autorización para llevar a cabo actividades arqueológicas, tales como estudios, prospecciones, sondeos, excavaciones, controles y

cualesquiera otras que afectan a los bienes o zonas arqueológicas, y la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de su otorgamiento, siendo como mínimo copia de los informes y memorias preceptivos, así como de los inventarios de los materiales obtenidos, con identificación de la estratigrafía de la que proceden; f) la falta de depósito de bienes hallados como consecuencia de actividades autorizadas en museos territoriales correspondientes o centros designados por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, o el traslado de centro sin la autorización de dicho organismo, así como la falta de cumplimiento de las normas de depósito legal³⁷⁸ o de la presentación de la memoria pasados los dos años desde que se produjeron las actividades autorizadas.

Corresponde a las Diputaciones Forales la imposición de sanciones cuando se haya infringido las normas sobre: a) el deber y obligación de conservar, cuidar y proteger debidamente los bienes culturales calificados e inventariados, para evitar su pérdida, destrucción o deterioro; b) darle un uso inadecuado a los bienes culturales y los inventariados; c) incumplir con la obligación de permitir el estudio a investigadores que han obtenido una autorización previa; d) respecto de los conjuntos monumentales que engloben las zonas en que se sitúan los pecios, no llevar a cabo una conservación adecuada; e) la

³⁷⁸ Art. 47 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Estas normas están reguladas en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, puesto que la Comunidad Autónoma del País Vasco, pese a tener competencias en la materia para poder regular la forma en que debe llevarse el depósito, no ha ejercitado dicha competencia.

no conservación de los bienes muebles de forma íntegra, así como la no comunicación al de la existencia de bienes muebles que reúnan características para poder integrarse en el patrimonio cultural vasco; f) la reparación, restauración o modificación de bienes calificados sin la autorización de la Diputación Foral correspondiente; g) la destrucción de bienes calificados e inventariados y la enajenación de bienes por parte de las Administraciones públicas a particulares o personas jurídicas que no reúnan características de derecho público; h) La falta de autorización para llevar a cabo actividades arqueológicas subacuáticas, salvo que se trate de prospecciones arqueológicas sin extracción de tierra, es decir, prospecciones visuales de exploración de la superficie con reconocimiento del terreno y prospección geofísica a través de un estudio del subsuelo mediante la aplicación de las ciencias físicas; i) la falta de presentación en el momento de la petición de la autorización para llevar a cabo de actividades arqueológicas en materia de arqueología subacuática de un proyecto arqueológico que comprenda la metodología y la prestación de una fianza o asunción de la viabilidad económica del proyecto; j) la realización de actuaciones arqueológicas n la preceptiva autorización, incluso en aquellos casos en que, no teniendo por fin el estudio de interés arqueológico y paleontológico, sino cualquier otro ajeno a estas ciencias, quede afectado el patrimonio arqueológico y se demuestre el conocimiento de la existencia de éste por quien actuó, y las realizadas contraviniendo los términos en que ha sido concedida la autorización; k) la falta de

notificación al Ayuntamiento o Diputación Foral correspondiente de los hallazgos casuales de descubrimiento de objetos y restos materiales poseedores de valores que son propios del patrimonio cultural vasco. También puede imponerse esta última sanción al Ayuntamiento que incumpla este requisito al no notificar a la Diputación Foral de que se trate.

La notificación debe realizarse en un plazo de 48 horas desde que se produce el conocimiento. Dentro de este supuesto también se puede englobar la no paralización de las obras de remoción cuando la administración competente lo indique o la no conservación de los objetos y restos de materiales de interés arqueológico descubiertos en el lugar donde han sido hallados. En cuanto a esto, el art. 48.5 establece que “el incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado, y los objetos quedarán depositados en los centros mencionados en el apartado 2, con independencia de las sanciones que en su caso procedan”.

F) Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán

a) Preliminar

El patrimonio arqueológico catalán se encuentra protegido en la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán, en adelante LPCat. Esta norma tiene como objetivo la protección, la conservación, la investigación y el fomento del patrimonio cultural

catalán. Este está formado por todos los bienes inmateriales, muebles o inmuebles que tengan relación con la historia o cultura catalana y que según el art. 1 de la LPCat merecen una protección especial.

La LPCat establece una serie de clases de bienes que pueden ser clasificados como bienes de interés nacional³⁷⁹. En esta clasificación, el patrimonio cultural subacuático queda englobado dentro de las Zonas Arqueológicas. Esta norma realiza una aclaración con respecto al resto de normativas autonómicas y es que, en el caso de que se pueda aplicar la metodología arqueológica al resto de clases, estas se convierten en zonas arqueológicas³⁸⁰.

³⁷⁹ “a) Monumento histórico, construcción u otra obra material producida por la actividad humana que configura una unidad singular. b) Conjunto histórico, agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, que constituye una unidad coherente y delimitable, con entidad propia, aunque cada uno individualmente no tenga valores relevantes. c) Jardín histórico, espacio delimitado que es fruto de la ordenación por parte del hombre de elementos naturales y que puede incluir estructuras de fábrica. d) Lugar histórico, paraje natural donde se produce una agrupación de bienes inmuebles que forman parte de una unidad coherente por razones históricas y culturales a la que se vinculan acontecimientos o recuerdos del pasado, o que contienen obras del hombre con valores históricos o técnicos. e) Zona de interés etnológico, conjunto de vestigios, que pueden incluir intervenciones en el paisaje natural, edificios e instalaciones, que contienen en su seno elementos constitutivos del patrimonio etnológico de Cataluña. f) Zona arqueológica, lugar donde hay restos de la intervención humana que solamente es susceptible de ser estudiado en profundidad con la metodología arqueológica, tanto si se encuentra en la superficie como si se encuentra en el subsuelo o bajo las aguas. En caso de que los bienes culturales inmuebles definidos por las letras a), b), c), d) y e) tengan en el subsuelo restos que solamente sean susceptibles de ser estudiados arqueológicamente, tendrán también la condición de zona arqueológica. g) Zona paleontológica, lugar donde hay vestigios fosilizados que constituyen una unidad coherente y con entidad propia, aunque cada uno individualmente no tenga valores relevantes”.

³⁸⁰ La metodología de trabajo, como señalan los diferentes autores de *Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip*, está condicionada por los objetivos que se quieren conseguir y por las características del yacimiento, en VV.AA., *Excavacions*

Cataluña, fruto de una gran historia y por ser una región ribereña, cuenta con un gran patrimonio cultural subacuático, siendo pionera en labores de recuperación e investigación submarina y del patrimonio cultural subacuático³⁸¹, dado el número de expolios y de bienes que se buscaban y vendían obtenidos de sus costas. Entre otras instituciones, cuenta con el Centro de Recuperación e Investigación Submarina y el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña³⁸².

En Cataluña existen 820 yacimientos subacuáticos, que están divididos en diferentes tipologías, siendo estas las siguientes: ánforas (33); almadraba (3); aviones (4); bienes relictos (382); fondeaderos (41); general (60); hábitat (11); indeterminados (147); objetos aislados (101); submarinos (4) y puertos (4). Algunos de estos yacimientos se encuentran en aguas interiores como el Lago de Banyoles o el Yacimiento Neolítico de La Draga³⁸³.

arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip, Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, 1998, Girona, p. 33.

³⁸¹ X. RAURICH I SANTALÓ, "El jaciment de Cala Cativa: notes sobre el primer terball d'arqueologia subaquàtica realitzat a Catalunya", *Historia, Annals de l' IEE*, nº 27, Figueres, 1994, pp. 263-273; X. NIETO PRIETO y G. VIVAR LOMBARTE, "Memòria dels treballs d'excavació arqueològica subaquàtica al jaciment del port Romà d'Empúries", *CASC. Museu d'Arqueologia de Catalunya*, 2004, pp. 2-16; X. NIETO PRIETO y A. PALOMO PÉREZ, "Memòria dels treballs arqueològics subaquàtics desenvolupats a Illa Pedrosa (L'Estartit-Torroella de Montgri/ Baix Llobregat)", *CASC. Museu d'Arqueologia de Catalunya*, Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Biblioteca del Patrimoni Cultural, pp. 1-7.

³⁸² X. NIETO PRIETO, "El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)", cit., pp. 206-209.

³⁸³ VV.AA., "Arqueología en aguas interiores. El caso del Lago de Banyoles y el yacimiento neolítico de La Draga (Girona, Catalunya)", *Actas de las Jornadas de*

b) Reglas de protección

La LPCat establece una serie de reglas de protección. Estas reglas afectan tanto a particulares como a las diferentes Administraciones. En múltiples ocasiones, la regulación autonómica hace referencia a la estatal. Esto se debe, entre otros motivos, a que la LPCat se plasma como una norma breve y subsidiaria de la estatal; al menos así fue concebida en inicio fruto de su precocidad como desarrollo de las competencias autonómicas.

Las medidas de protección son diversas e incluyen la difusión y fomento del patrimonio cultural como forma de dar a conocer la importancia del mismo y así evitar que se puedan producir un deterioro de manera inconsciente.

El sistema normativo catalán no establece solamente bienes de interés nacional, sino que, junto a estos, existen los bienes catalogados y los restantes bienes del patrimonio cultural catalán ³⁸⁴. Esta

ARQUA 2011, <https://es.calameo.com/read/000075335bfa5f6cd7b5e> pp. 1-4. (Consultado el 18 de agosto de 2017).

³⁸⁴ Este tipo de bienes son definidos en la LPCat como:

“Artículo 18. Definición.

1. Además de los bienes culturales de interés nacional y los bienes catalogados forman parte también del patrimonio cultural catalán los bienes muebles e inmuebles que, pese a no haber sido objeto de declaración ni de catalogación, reúnen los valores descritos en el artículo 1.

2. En cualquier caso, forman parte del patrimonio cultural catalán los siguientes bienes muebles: a) Las colecciones y los ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía y anatomía y los objetos de interés paleontológico. b) Los bienes que constituyen puntos de referencia importantes de la historia. c) El producto de las intervenciones arqueológicas. d) Los bienes de interés artístico. e) El mobiliario, los instrumentos musicales, las inscripciones, las monedas y los sellos grabados de más

clasificación se otorga después de un procedimiento administrativo. Cada una de estas categorías se otorga en función del grado de relevancia que posea el bien o se le otorgue. Esta distinción conlleva un mayor o menor grado de protección.

De forma general, todos los bienes están afectados por el deber de conservación. Por ello, los titulares y poseedores deben mantenerlos en las mejores condiciones posibles, así como suministrar información de forma periódica sobre el estado y usos de los bienes a las Administraciones públicas.

Todos los bienes que forman parte del patrimonio cultural catalán están afectados por los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones públicas sobre las operaciones de transmisión de la propiedad que sucedan.

Otras reglas que afectan a todos los bienes son la comunicación de las exportaciones o traslado fuera de las fronteras catalanas de los bienes que integran el patrimonio catalán y de la suspensión de las intervenciones que puedan afectar a cualquier tipo de bien poniendo en cuestión los valores culturales, históricos o artísticos inherentes al bien.

Frente a este sistema de derechos y obligaciones, la LPCat establece otro agravado para proteger los bienes catalogados y los de

de cien años de antigüedad. f) El patrimonio etnológico mueble. g) El patrimonio científico, técnico e industrial mueble. h) El patrimonio documental y el patrimonio bibliográfico”.

interés nacional. En su art. 28 dispone que la declaración como tal bien implica que son propiedad de las Administraciones públicas y son imprescriptibles e inalienables, y por tanto se encuentran fuera del comercio, salvo supuestos especiales o que este tipo de operaciones se desarrollen bajo un procedimiento especial. El deber de conservación impone que esos bienes no pueden ser destruidos y el uso al que se destinen debe mantener su valor cultural. Además, el deber de colaboración con las Administraciones públicas se amplía al tener que permitir el acceso a especialistas para que puedan estudiarlos y catalogarlos de manera adecuada.

Por último, los bienes de interés nacional se encuentran aún más protegidos. Este régimen implica que se deben crear unos programas de actuaciones de conservación que se deben presentar al Departamento de Cultura y en los que se incluyan las previsibles actuaciones que se van a realizar para cumplir con el deber especial de conservación.

El deber de difusión del patrimonio cultural supone que los propietarios, poseedores y titulares de éstos deben permitir el examen y estudio por investigadores reconocidos y por instituciones académicas con la previa solicitud razonada y avalada por el Departamento de Cultura, la señalización de su categoría como bien cultural de interés nacional y la visita pública al menos cuatro días al mes.

En el caso de tratarse de bienes inmuebles de interés nacional, el régimen de protección abarca otros elementos como una revisión de

las licencias urbanísticas, la prohibición de derribo, la elaboración de un instrumento urbanístico de protección para adecuar al planeamiento urbanístico las características y entorno del bien de interés nacional, la determinación de supuestos en los que se puede expropiar el bien, la prohibición de traslado y la necesidad de autorización para el cambio de uso del bien, entre otros.

Si se trata de un bien mueble, su protección especial afecta al deber de integridad de las colecciones, de forma que, como expresa el art. 45 de la LPCat, “las colecciones declaradas de interés nacional o catalogadas que sólo siendo consideradas como una unidad reúnan los valores propios de estos bienes no pueden ser disgregadas por sus titulares o poseedores sin autorización del Departamento de Cultura”. Como se puede ver, no quiere decir que no se puedan dividir las colecciones, sino que la división debe autorizada por el Departamento de Cultura. Ello debe comunicarse a los Ayuntamientos afectados.

c) Patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico catalán cuenta con unas normas especiales de protección. Estas protegen a los bienes muebles e inmuebles que posean un carácter histórico para cuyo estudio sea necesario practicar una metodología arqueológica y siempre que hayan sido declarados como bienes culturales nacionales o mediante su catalogación como bienes arqueológicos u de otro tipo. Como otras normas autonómicas, la LPCat incluye dentro del patrimonio

arqueológico no sólo aquellos bienes que se definen como tales, sino también los bienes que poseen elementos geológicos y paleontológicos relacionados con el ser humano y con sus orígenes y antecedentes.

La protección de los bienes arqueológicos tiene especial incidencia en los proyectos de obras, instalaciones o actividades sobre los mismos, dado que se deben someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Para llevar a cabo cualquier tipo de intervención arqueológica³⁸⁵ en el territorio catalán es necesario obtener, de forma previa, una autorización del Departamento de Cultura Catalán. Esta autorización no exime de la obtención de la precisa licencia municipal, según proceda, de acuerdo con la legislación urbanística vigente.

La solicitud de intervención arqueológica debe acompañarse de un proyecto que justifique y permita acreditar la conveniencia e interés científico de la misma³⁸⁶, y que permita avalar la idoneidad técnica y

³⁸⁵ Según el art. 47.2 de la LPCat, se consideran intervenciones arqueológicas: “los estudios directos de arte rupestre y las prospecciones, los sondeos, las excavaciones, los controles y cualquier otra intervención, con remoción de terrenos o sin ella, que tenga por finalidad descubrir, documentar o investigar restos arqueológicos o paleontológicos”.

³⁸⁶ Por ejemplo, en la intervención que se realizó en la Illa Pedrosa (L'Estartit-Torroella de Montgrí/Baix Llobregat) el objetivo era concluir un estudio general del yacimiento y obtener información sobre el tipo de cargamento de ánforas encontradas, X. NIETO PRIETO y A. PALOMO PÉREZ, “Memòria dels treballs arqueològics subaquàtics desenvolupats a Illa Pedrosa (L'Estartit-Torroella de Montgrí/ Baix Llobregat)”, *CASC, Museu d'Arqueologia de Catalunya*, Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Biblioteca del Patrimoni Cultural, p.3.

científica de los Directores y garantice la capacidad económica de los promotores.

Otra de las normas especiales de protección del patrimonio arqueológico catalán es la regulación de los espacios de protección arqueológica, considerándose estos de acuerdo con el art. 49 de la LPCat como “los lugares que no han sido declarados de interés nacional donde, por evidencias materiales, por antecedentes históricos o por otros indicios, se presume la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos”. Para la determinación de los mismos se requiere una resolución del Consejero de Cultura y, de forma previa, se debe notificar a los particulares afectados y al municipio en donde se encuentre el bien. En la actualidad no existe ninguno que proteja al patrimonio cultural subacuático, pese al alto número de yacimientos con los que cuenta Cataluña.

Las Administraciones públicas también pueden llevar a cabo intervenciones arqueológicas de manera directa. Estas deben cumplir con las garantías científicas y técnicas adecuadas y deben ajustarse al principio de mayor economía en los perjuicios que puedan ocasionárseles a los particulares, rigiéndose los daños causados por las normas de compensación establecidas en la LEF.

Los descubrimientos arqueológicos se deben comunicar al Departamento de Cultura o al Ayuntamiento donde se encontraron, como máximo, a las 48 horas. No puede darse conocimiento público sin haber informado a alguna de las Administraciones públicas con

anterioridad. La Administración pública informada deberá comunicar el descubrimiento a la otra, como máximo, en una semana desde que se produjo. El descubridor debe hacer entrega del bien en un plazo de 48 horas, salvo que sea preciso realizar una remoción de tierras.

Si se trata de un hallazgo subacuático debe quedarse en el lugar original. La normativa autonómica catalana, en el resto de elementos, se remite a la LPHE³⁸⁷. Aunque se establece una regla especial sobre la titularidad de los bienes descubiertos, en principio estos son bienes de dominio público, aunque la propiedad de los mismos varía dependiendo de la Administración pública que satisfaga los derechos económicos al descubridor y propietario del lugar donde se encontraron.

Otra de las reglas especiales sobre el régimen de protección de los bienes arqueológicos es la suspensión de las obras. Es decir, se concede al Departamento de Cultura la potestad para suspender las licencias de ejecución de una obra cuando se produzca un descubrimiento. La finalidad de esta suspensión es que se pueda determinar el interés y el valor arqueológico de los hallazgos, en cuyas actividades colaborará el promotor de la obra, con los medios que tenga allí desplazados. El promotor de la obra debe soportar la suspensión de su obra, como máximo, veinte días. Pasados los veinte días, tiene el derecho a ser compensado por los perjuicios generados.

³⁸⁷ También se hace referencia en múltiples ocasiones al Decreto 78/2002, de 5 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cataluña.

G) Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano

a) Preliminar

Como otras regulaciones autonómicas, la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, en adelante LPCV, comienza su preámbulo con la importancia que supone el patrimonio cultural valenciano como una de las principales señas de identidad, tanto para el propio pueblo valenciano como para la cultura universal³⁸⁸. Esta norma ha sido considerada por la doctrina como una norma extensa³⁸⁹.

³⁸⁸ C. SIRVENT BERNABEU, “Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano”, *Recerques del Museu d’Alcoi*, nº. 9, 2000, pp. 11-13; J. L. JIMÉNEZ SALVADOR, “El patrimonio arqueológico de época romana”, *Atlas de los recursos territoriales valencianos*, coord. J. HERMOSILA PLA y F. LLOP I BAYO, 2015, pp. 236-237; F. LLOP I BAYO, “Patrimonio arqueológico y paleontológico en la Comunidad Valenciana”, *Actas de las Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicantino*, 2002, pp. 27-40; E. VENTO MIR, “El patrimonio arqueológico valenciano: Programas de difusión y educación de la Dirección General de Patrimonio Artístico”, *Actas: XXV Congreso Nacional de Arqueología*, Valencia, 1999, pp. 44-48; J. C. CARRERA RUIZ, “La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico”, *Arse: Boletín anual del Centro Arqueológico Saguntino*, nº. 36, 2002, pp. 177-189; B. BELANDO GARÍN, “El alcance de las competencias autonómicas sobre patrimonio arqueológico subacuático (Especial atención a la Comunidad Valenciana)”, *Revista de las Cortes Generales*, nº. 68, 2006, pp. 151-178; C. PAPÍ RODES, “La Sociedad Arqueológica Valenciana: reglamentos socios y actividades”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, Tomo 20, nº. 1-2, 2002, pp. 265-292; C. BARRERO RODRÍGUEZ, “El derecho andaluz del patrimonio histórico en el vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía”, *Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública*, Extra 2 (2), 2003, pp. 337-358; M. E. CASAR FURIO y F. TABERNER PASTOR, “El concepto de entorno y su delimitación en los BIC valencianos”, *Práctica Urbanística*, nº. 99, Sección Perspectivas sectoriales, 2010, p. 51; LÓPEZ RAMÓN, *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017, p 27.

³⁸⁹ C. CARRERA RUIZ, “La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico”, cit., pp. 177-189.

El Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad Valenciana en su art. 31 la competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico y sobre los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito cultural, siempre que no entren en conflicto con las materias estatales. Por ello, en ejercicio de estas competencias, la Comunitat Valenciana, en adelante CV, desarrolla a través de varias normas esta potestad legislativa³⁹⁰, siendo el marco legal a través del cual ejerce la acción pública y privada para dirigir la difusión y fomento del patrimonio cultural, así como el sustento para llevar a cabo la actividad de policía por parte de las Administraciones públicas, para la conservación y recuperación del patrimonio cultural valenciano.

La ley utiliza el término cultural, dado que es un concepto que abarca más elementos que los tradicionales de patrimonio histórico o artístico, estando constituido por bienes muebles o inmuebles que posean valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la CV o que en el caso de encontrarse fuera de él sean especialmente

³⁹⁰ A parte de la LPCV, encontramos Ley núm. 13/2005, de 22 de diciembre, del Misteri d'Elx; Decreto núm. 183/2004, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte; Decreto de 3 de diciembre 1982, por el que se crea la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia; Orden de 21 de febrero 1997, por la que se crea el Centro de Arqueología Subacuática, entre otras.

representativos de la historia y la cultura valenciana, siempre que tenga como objetivo la Generalitat valenciana el retorno de estos bienes.

La definición de patrimonio cultural es más amplia, ya que también incluye los bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, manifestaciones musicales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas o de ocio, prácticas y usos representativos de la vida y tradiciones valencianas, así como las que potencian el uso del valenciano y los festejos taurinos.

Los bienes son divididos en Bienes de Interés Cultural Valenciano, bienes inventariados no declarados de interés cultural y bienes no inventariados del patrimonio cultural. Cada uno de ellos recibe un sistema de protección dependiendo del grado de importancia. Hay que indicar que la CV es una Comunidad autónoma ribereña, pero que no ha establecido una categoría de protección específica para el patrimonio cultural subacuático. No obstante, esto no ha sido óbice para que este tipo de bienes estén protegidos. Por ello, como en otras regulaciones, se irán haciendo referencias concretas a la protección en esta materia que realiza la LPCV.

La LPCV establece, a su vez, un sistema de colaboración tanto entre Administraciones públicas, como entre estas y los particulares que poseen bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano, así como con la Iglesia Católica³⁹¹. Entre los organismos y órganos que realizan

³⁹¹ V. DUART CÍSCAR, y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico

funciones en materia cultural encontramos al Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, las universidades de la CV, el Consejo Asesor de Archivos, el Consejo de Bibliotecas, el Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología, la Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat y cuantas otras sean creadas o reconocidas por el Consell, sin perjuicio del asesoramiento que pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales.

Además de estas entidades que colaboran con el Consell y la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia³⁹², encontramos a la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano, siendo este un órgano asesor, compuesto por ocho vocales, seis de ellos a propuesta de las instituciones mencionadas con anterioridad y las otras dos por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Constituye una novedad frente a otras leyes autonómicas que este órgano aparezca en el contenido dispositivo de la norma que regula la protección del patrimonio, así como las funciones que posee. Las principales funciones son las siguientes:

- Valorar los bienes que la CV quiera adquirir para distribuir entre sus organismos o dependencias.

en la Comunidad Valenciana”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 11, Sección Colaboraciones, 2013, p. 1117.

³⁹² A la fecha de elaboración de este estudio, la Consellería competente en materia de cultura es la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

- Informar sobre los derechos de tanteo y retracto³⁹³.
- Informar sobre las permutas de los bienes que estén incluidos en el IGPCV.
- Opinar acerca de la aceptación de bienes culturales como pago.
- Realizar valoraciones de bienes de carácter cultural que las Administraciones públicas valencianas le soliciten.

b) Normas generales de protección

Como ya se mencionó anteriormente, existen diferentes clasificaciones de bienes. No obstante, la LPCV establece unas normas comunes a los diferentes tipos de bienes culturales. La acción de las Administraciones públicas se dirige a facilitar usos de los activos de acuerdo con su naturaleza, de forma que permita promover el interés social de los mismos y que estos sean mejor conservados.

Para ello, cuenta con la potestad de suspender de forma cautelar cualquier tipo de intervención sobre bienes muebles o inmuebles. La LPCV establece una serie de preceptos y requisitos para poder desarrollar ciertas actividades dependiendo del tipo de bien que se trate. Se establece un régimen de comunicaciones cuando se trate de

³⁹³ V. DUART CÍSCAR, y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, cit., p. 1126.

actuaciones sobre bienes inmuebles o de comercio entre bienes muebles.

Las Administraciones públicas también poseen competencias para inspeccionar y vigilar el patrimonio cultural con el fin de asegurar el contenido dispositivo de la LPCV. Estas labores pueden ser llevadas a cabo por los órganos autonómicos o por los municipales en su territorio. El personal que realice estas acciones tiene la consideración de autoridad y puede recabar toda la información, documentación y material que considere adecuados. Al mismo tiempo, podrá comprobar los actos *in situ*, de forma que aquellos que deban recibir al personal inspector están obligados a colaborar con él. Las actas de inspección gozan de presunción de veracidad y en cada una de las actuaciones se debe extender una copia de la misma para el inspeccionado.

c) Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y régimen de protección de los bienes inventariados

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte es la encargada de controlar el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, en adelante IGPCV, siendo este el instrumento unitario de protección de los bienes inmuebles, muebles e inmateriales. Este debe estar actualizado, de forma que incluya los bienes que estén catalogados en alguna de las categorías de acuerdo con el procedimiento

correspondiente y los informes y actas de la actividad inspectora para conocer de manera detallada el estado y situación del bien³⁹⁴.

La LPCV posee sus propias definiciones sobre lo que se consideran bienes muebles o inmuebles a la hora de inscribirlos y otorgarles un régimen de protección. La LPCV lleva a cabo una definición de bienes inmuebles que parte de la recogida en el art. 334 del CC, pero a la que añade todos los elementos muebles o accesorios del bien inmueble, para de esta forma otorgarles una protección unitaria.

En cuanto a los bienes muebles, se parte también de la definición contenida en el CC. No obstante, estos deben poseer un valor relevante cultural. SIRVENT BERNABEU entiende que no hay problema en cuanto a las reformas de los bienes declarados como BIC, pero sí para el régimen de protección de los bienes que van a ser reformados y que poseen distinto grado de protección, de forma que los requisitos serán

³⁹⁴ J. C. CARRERA RUIZ, *La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico*. cit., p. 178.

En él se deben inscribir los bienes en diferentes secciones, siendo su orden el siguiente:

Sección 1ª: bienes muebles, inmateriales e inmuebles que posean la categoría de BIC.
Sección 2ª: Bienes Inmuebles de Relevancia Local, incluidos en catálogos de Bienes y Espacios protegidos.

Sección 3ª: Bienes de Muebles de Relevancia Patrimonial.

Sección 4ª: bienes de naturaleza documental, bibliográfica y audiovisual de relevancia patrimonial.

Sección 5ª: Bienes Inmateriales de Relevancia Local, cuyo valor y representatividad para los ámbitos comarcales y locales.

Sección 6ª: Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica de Relevancia Patrimonial, que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la CV.

diferentes, así como el grado de protección y relevancia que poseerán después de ser modificados³⁹⁵.

La principal función del IGPCV, aparte de clasificar los bienes en secciones para una mejor búsqueda e identificación, es hacer posibles las medidas de protección y fomento, así como facilitar la investigación y difusión del conocimiento.

El IGPCV tiene carácter público, aunque existen ciertas restricciones y elementos que no son objeto de publicidad. Por ejemplo, se requiere el consentimiento expreso del titular de los bienes para publicar este tipo de datos, así como el valor de los mismos.

En cuanto a las obligaciones que tienen los titulares de bienes inventariados, encontramos la de conservarlos y mantenerlos de forma íntegra. La conservación incide en que este tipo de bienes sólo pueden ser objeto de un uso acorde al bien y siempre que no afecte o deteriore el mismo. Cualquier cambio de uso debe ser comunicado a la Consellería, siendo el silencio administrativo positivo pasado un mes desde la petición del cambio, salvo que se trate de bienes BIC, en los que se requiere autorización expresa. En el caso de ser un uso incompatible y el propietario o usuario abuse del bien, la Generalitat puede expropiarlo.

³⁹⁵ C. SIRVENT BERNABEU, “Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano”, *Recerques del Museu d’Alcoi*, nº. 9, 2000, pp. 11-13.

Dado que una de las principales funciones del IGPCV es contener el estado actualizado de los bienes, se impone a los propietarios, titulares o poseedores la obligación de comunicar de forma periódica a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia y al Ayuntamiento donde radiquen, el estado de conservación de los mismos, el cambio de titularidad, el traslado y otros actos que puedan afectar al bien. Como expresa SIRVENT BERNABEU, “en materia de patrimonio mueble, el inventario exhaustivo del Patrimonio Cultural Valenciano es el objetivo estratégico. El inventario facilita la tarea ordinaria del inspector de patrimonio mueble, al que permite efectuar visitas de inspección para el seguimiento de la conservación de los bienes muebles del Patrimonio Cultural Valenciano. El inventario también permitirá una persecución eficaz del tráfico ilegal de bienes muebles”³⁹⁶.

Los bienes inventariados son protegidos de diversas formas adicionales, destacando, entre otras, la prohibición de demolición de los mismos, salvo autorización expresa.

La inscripción y comunicación también sirve para que se puedan usar los derechos de tanteo y retracto, teniendo la Generalitat dos meses para hacer efectivo la adquisición del bien a través de este derecho o en su defecto el Estado. En el caso de bienes inmuebles se requiere la

³⁹⁶C. SIRVENT BERNABEU, *Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano*, cit., p. 11.

autorización expresa de los cambios de titularidad, para que estos derechos sean inscritos en un registro público.

La inscripción de bienes en el IGPCV conlleva también la posibilidad de que las Administraciones públicas, tras realizar un procedimiento, realicen una permuta entre el bien y otros de idéntico valor.

d) Bienes de Interés Cultural Valenciano

La LPCV regula tres categorías de bienes, siendo los BIC los que poseen una mayor protección³⁹⁷. Estos pueden ser bienes inmuebles, muebles, documentos y obras bibliográficas e inmateriales. De esta clasificación destaca que haga una diferencia entre bienes muebles y documentos y obras bibliográficas. Esta diferencia se basa en que los primeros deben ser declarados de forma individual como tales, o a través de colecciones o fondos museográficos, mientras que los documentos y obras son aquellos que poseen un carácter bibliográfico, cinematográfico, fonográfico o audiovisual declarados como tales de manera individual o como colección de archivos o fondos de museos y de bibliotecas. En general, la distinción se debe analizar de manera detallada, puesto que, conforme a la LPCV, un libro o un poema podría estar englobado perfectamente en ambas categorías.

³⁹⁷ M. E. CASAR FURIÓ, “Las diversas categorías de bienes inmuebles de interés cultural, con especial referencia a la nueva ley de patrimonio cultural valenciano de 2007 (La Ley 864/2007)”, *Práctica Urbanística*, nº. 73, Sección Estudios, 2008, p. 23.

Los bienes inmateriales son aquellas actividades declaradas de interés cultural, comprendiendo de acuerdo con el art. 26.1 d) “creaciones, conocimientos, prácticas, usos y técnicas representativos de la cultura tradicional valenciana, así como aquellas manifestaciones culturales que sean expresión de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, las que mantienen y potencian el uso del valenciano y los festejos taurinos tradicionales”.

En cuanto a los bienes inmuebles, deben pertenecer a alguna de las clases siguientes: “a) Monumento, se declararán como tales las realizaciones arquitectónicas o de ingeniería y las obras de escultura colosal; b) Conjunto Histórico, es la agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, claramente delimitable y con entidad cultural propia e independiente del valor de los elementos singulares que la integran; c) Jardín Histórico, es el espacio delimitado producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, complementado o no con estructuras de fábrica y estimado por razones históricas o por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos; d) Espacio Etnológico, construcción o instalación o conjunto de éstas, vinculadas a formas de vida y actividades tradicionales, que, por su especial significación sea representativa de la cultura valenciana; e) Sitio Histórico, es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico; f) Zona Arqueológica, es el paraje donde existen bienes cuyo estudio

exige la aplicación preferente de métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren en la superficie, como en el subsuelo o bajo las aguas³⁹⁸; g) Zona Paleontológica, es el lugar donde existe un conjunto de fósiles de interés científico o didáctico relevante; h) Parque Cultural, es el espacio que contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos”³⁹⁹.

Por tanto, los bienes objeto del patrimonio cultural subacuático, dado que esta norma no establece una regulación específica, deben estar comprendidos dentro de las categorías “Sitio Histórico”, puesto que el yacimiento puede estar vinculado a alguna batalla, o “Parque cultural”, al contener éste elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos.

Para que un bien sea declarado como BIC, se requiere llevar a cabo un procedimiento. Como dice CASAR FURIÓ, “se puede considerar que para la integración de un bien en el patrimonio valenciano es irrelevante la producción de la declaración de BIC, sin embargo, otra cosa es la atribución de un específico grado de protección

³⁹⁸ J. C. CARRERA RUIZ, *La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico*, cit., p. 178.

³⁹⁹ M. E. CASAR FURIÓ, “Las diversas categorías de bienes inmuebles de interés cultural, con especial referencia a la nueva ley de patrimonio cultural valenciano de 2007 (La Ley 864/2007)”, cit., p. 28.

que, por comparación con el resto de bienes resulte, singular y específico”⁴⁰⁰.

El primer requisito consiste en que el autor de los bienes debe haber fallecido y que, en el caso de tratarse de bienes de particulares, el propietario de los mismos debe consentir de manera expresa que se cataloguen como tales. Para ello debe incoarse un procedimiento de oficio o a instancia de cualquier persona. El procedimiento dura como máximo un año y se compone de varias fases. Hay que destacar que en materia de yacimientos arqueológicos se necesita un estudio complementario y que el plazo de resolución del mismo se amplía hasta los veinte meses. En el caso de que caduque no puede iniciarse un procedimiento análogo hasta haber pasado, como mínimo, tres años salvo que la iniciativa parta de alguna de las instituciones consultivas.

La declaración como BIC debe hacerse mediante decreto en el que se determinen con claridad los valores que justifican dicha declaración y se contenga una descripción detallada del mismo, así como de sus elementos accesorios. Para los bienes que constituyan patrimonio cultural subacuático, como en la mayoría de los casos, se tratará de bienes inmuebles, se requerirá que se especifique en qué clase se incluyen y la delimitación del entorno de protección. Si se trata de zonas arqueológicas, este requisito puede ser excepcionado de forma

⁴⁰⁰ M. E. CASAR FURIÓ y M. T. BROSETA PALANCA, “Nuevas consideraciones del bien inmueble de relevancia local valenciano”, *Práctica Urbanística*, nº. 110, Sección Perspectivas sectoriales, 2011, p. 45.

justificada. El entorno debe contener, como mínimo, el subsuelo y los bienes inmuebles que hayan sido inscritos de forma separada en el inventario como bienes de relevancia local o, en su defecto, se obliga a los Ayuntamientos a inscribirlos como tales en los catálogos correspondientes⁴⁰¹. La declaración también debe contener las normas de protección del bien con arreglo a sus particularidades.

En el caso de bienes privados, los titulares o propietarios de los mismos pueden presentar a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia programas de conservación y mantenimiento.

El Decreto 145/2015, de 18 de septiembre, declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico subacuático del pecio Bou Ferrer, sito en la costa frente al término municipal de Villajoyosa, sirviendo de ejemplo de cómo se cumplen los elementos expuestos con anterioridad. Entre los informes de las entidades consultivas para fundamentar la declaración del bien como BIC, encontramos los informes favorables del Consell Valencià de Cultura y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. El bien queda identificado como “yacimiento arqueológico subacuático del pecio Bou Ferrer, sito en la costa frente al término municipal de Villajoyosa”. En cuanto a los usos que están permitidos en el yacimiento, se encuentran el estudio y documentación bajo

⁴⁰¹ M. E. CASAR FURIO y F. TABERNER PASTOR, “El concepto de entorno y su delimitación en los BIC Valencianos”, *Práctica Urbanística*, nº. 99, Sección Perspectivas sectoriales, 2010, p. 51.

criterios científicos y una serie de actividades. No obstante, para poder llevarlos a cabo, se requiere la autorización expresa de la Consellería de Cultura, Educación, Ciencia o el órgano en que esta delegue. Los usos son los siguientes: el fondeo de embarcaciones, la permanencia de embarcaciones, buceo, introducción de cualquier tipo de aparato subacuático que permita el transporte de personas o la manipulación de la zona, la pesca y cualquier intervención patrimonial o arqueológica.

El decreto que declara bienes como BIC sirve para ordenar la inscripción del mismo en el IGPCV en la Sección 1ª, así como los elementos y accesorios en las secciones que correspondan. Al mismo tiempo, esta categoría de protección debe comunicarse al RGBIC, así como a los Ayuntamientos donde se encuentre el bien y publicarse en los Diarios oficiales.

Una vez declarado un bien como BIC, sólo puede dejar de serlo a través de un nuevo decreto, previa tramitación de un nuevo procedimiento con los mismos requisitos que la declaración (límite de tiempo, caducidad, silencios, informes...). No puede invocarse para dejar sin efecto una declaración como BIC el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de conservación, puesto que este tipo de causas dará lugar a una respuesta punitiva o al inicio del procedimiento expropiatorio.

Por último, la declaración como BIC conlleva la facilitación de visitas públicas, de acuerdo con el objetivo de difusión y conocimiento público. De forma que deben facilitarse al menos durante cuatro días y

tras la difusión adecuada a través de los centros de información turística y cultural.

e) Régimen de protección urbanístico valenciano

La declaración de un inmueble como BIC conlleva también la suspensión del otorgamiento de licencias municipales para parcelar, urbanizar, construir, demoler u otros actos de edificación y uso del suelo que afecten al inmueble y a su entorno de protección, quedando suspendidas las licencias ya otorgadas⁴⁰². Este régimen también es aplicable a los bienes que sean objeto de un procedimiento, al aplicarse esta protección de manera cautelar. Tras la declaración del BIC, la Consellería competente en cultura, y tras la audiencia del Ayuntamiento afectado, debe emitir en el plazo de tres meses un informe vinculante sobre las licencias y los efectos de las actuaciones urbanísticas, así como proponer las modificaciones necesarias para la conservación del bien. En el caso de que no se emita, a los tres meses se reanudan las suspensiones de las licencias. La Generalitat será quien deba hacerse cargo de la anulación o modificación de las licencias.

Los planes de ordenación se deben ajustar a los términos de la declaración⁴⁰³. Estos deben incluir las declaraciones de los bienes

⁴⁰² V. DUART CÍSCAR y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 11, Sección Colaboraciones, 2013, p. 1117.

⁴⁰³ M. E. CASAR FURIÓ, “La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano”, *Actualidad Administrativa*, nº. 18, Sección A Fondo, Quincena del 16 al 31 oct. 2008, pp. 2090-2099.

inmuebles, de los entornos de protección y de los instrumentos de regulación urbanística.

Hasta que no se produzca la aprobación definitiva, los planes de ordenación se deben regir de forma transitoria por las disposiciones y normas de protección contenidas en el decreto de la declaración. En principio, dicha protección solo abarca al bien, que debe estar delimitado de forma correcta, aunque el Ayuntamiento puede extender la protección al entorno del mismo⁴⁰⁴.

Como se señala en la STSJ de Valencia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, nº 1769/2004, de 28 diciembre, en su FJ tercero:

“(…)Acreditada la existencia de restos arqueológicos, hecho probado y admitido por las partes, la actora afirma su hallazgo y comunicación a la Administración, su realidad permite la aprobación de un plan especial de protección sin la previa Declaración, de que se trata, así resulta de una interpretación conjunta y sistemática de los arts. 4.2 de la Ley Autonómica 6/1989, que, al definir sus objetivos, señala, entre otros, la conservación del patrimonio arqueológico, 12.e) de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, que, respecto a los Planes Especiales, indica como cometido propio, también entre otros, la creación o ampliación de las reservas de suelo dotacional y la

⁴⁰⁴ F. GARCÍA RUBIO, “El papel de los Ayuntamientos en la conservación del patrimonio cultural. Estado de la cuestión (1)”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 12, Sección Colaboraciones, 2004, p. 2069.

adopción de medidas para la mejor conservación de los inmuebles de interés cultural o arquitectónico, y del art. 39.4 de la Ley 4/1998, que atribuye a los Planes Especiales de protección la ordenación de las Zonas Arqueológicas, por tanto, habiéndose tramitado el cuestionado Plan Especial conforme a la normativa procedimental aplicable y, habida cuenta de su ámbito u finalidad propias, que exceden de la sola protección de un determinado Bien por su interés cultural, procede desestimar la concurrencia de la causa de nulidad que se analiza”.

Este Plan Especial de Protección de los BIC⁴⁰⁵ debe contener, como mínimo, las normas de protección que desde el punto de vista urbanístico conlleven una mejor respuesta a la finalidad de la declaración, de forma que se regulen con detalle los requisitos de los actos de edificación y uso del suelo, así como las actividades que se pueden realizar en el bien como en su entorno. Todo esto debe figurar en una memoria justificativa⁴⁰⁶.

⁴⁰⁵ M. E. CASAR FURIÓ y M. T. BROSETA PALANCA, *Nuevas consideraciones del bien inmueble de relevancia local valenciano*, cit., p. 46.

⁴⁰⁶ En el momento de elaboración de dicha memoria hay que atender a:

- a) La estructura urbana y arquitectónica del conjunto, el ambiente y la silueta paisajística, estando prohibidas las modificaciones, alineaciones o alteraciones de inmuebles, salvo que contribuyan a una mejor conservación. Para realizar este cambio o cualquier otro se necesita el informe favorable de dos organismos consultivos.
- b) Se puede establecer un perímetro continuo o discontinuo de mayor alcance de la declaración de forma que este se configure como Conjunto Histórico.
- c) Los Planes Especiales articulan las actuaciones y licencias municipales incluidas a remoción o alteración del suelo.
- d) Tiene como función el incentivo de la rehabilitación urbana para actividades tradicionales o uso residencial, de forma que permitan la conservación del mismo. Se deben hacer previsiones sobre zonas que se encuentren en mal estado o que deban ser renovadas en cierto tiempo. Los inmuebles sustitutos deben tomar como referencia las

Cualquier tipo de intervención que se quiera llevar a cabo debe de ajustarse a una serie de criterios, por ejemplo:

- Debe respetar las características y valores esenciales, es decir, las características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de las diferentes épocas. Si se autorizan supresiones de

tipologías arquitectónicas de la zona o área en que se encuentren ubicados, de forma que incluya todos los patrones característicos del conjunto objeto de conservación o rehabilitación.

e) Los Planes Especiales deben contener un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, así como los grados de protección y los tipos de intervenciones posibles en los bienes. El bien que por cualquier razón sea destruido, está sujeto a un régimen de restitución. En los Catálogos debe haber constancia de la denominación correspondiente a los inmuebles que formen parte del Inventario de Patrimonio Cultural Valenciano, así como de sus entornos de protección.

f) El Planeamiento Especial declara fuera de protección a los inmuebles construidos con anterioridad que sean disconforme con las características y patrones protegidos.

g) Los Planes Especiales procurarán la adaptación morfológica de aquellos inmuebles que resulten disonantes respecto de la caracterización propia del conjunto y establecen medidas para conservar las fachadas y cubiertas de los bienes inmuebles.

h) Se pueden regular unos requisitos mínimos de armonización de los edificios para proteger los valores del conjunto.

i) El Plan contendrá criterios relativos al ornato de edificios, espacios libres y viales en su relación con la escena o paisaje urbano, de modo que garantice y acreciente sus valores y la percepción de los mismos.

j) El plan regulará también la publicidad exterior, así como los medios acústicos o de generación de imágenes.

k) Se establece que cualquier instalación urbana sea soterrada.

l) El planeamiento debe priorizar el uso peatonal, el transporte público y la dotación de estacionamiento para residentes.

m) El plan debe establecer la documentación técnica necesaria para determinar la idoneidad de las intervenciones.

n) Deben prever también formas de documentales de llevar a cabo un seguimiento, a través de una comisión mixta formada por el Ayuntamiento y la Consellería.

ñ) Al mismo tiempo se pueden proteger el patrimonio cultural inmaterial.

elementos o partes, debe documentarse de manera adecuada.

- Se debe preservar de forma íntegra e intentar que no se separen los elementos anejos al mismo, ya sea partes accesorias como bienes muebles, siendo separados para su difusión pública y siempre mediante autorización y documentación adecuada.
- Los BICS son inseparables de su entorno⁴⁰⁷, de forma que no se autoriza el desplazamiento de estos sino cuando resulte imprescindible.
- Las reconstrucciones pueden autorizarse siempre que exista algún elemento del bien original y se documenten las características de este.
- Está prohibida la colocación de publicidad y elementos impropios del bien que impidan su apreciación o contemplación, aunque se pueden autorizar carteles de patrocinio de los bienes o actividad.

Para poder llevar a cabo actuaciones en inmuebles protegidos se requiere seguir una serie de reglas contenidas en la LPCV y que se pueden resumir en:

⁴⁰⁷ M. E. CASAR FURIO y F. TABERNER PASTOR, *El concepto de entorno y su delimitación en los BIC valencianos*, cit., p. 51.

- Toda intervención debe estar autorizada por la Conselleria competente en materia de cultura, rigiéndose esta por lo establecido en la declaración.
- Hasta la aprobación definitiva del plan especial de protección o documento asimilable, cualquier actuación de urbanización de los espacios públicos que sobrepasen de su mera conservación y/o requieren autorización.
- Los proyectos de intervención deben contener estudios acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores.
- Dentro del mes siguiente a la conclusión, el promotor de la intervención debe presentar a la Conselleria una memoria descriptiva de la obra realizada y de la metodología de trabajo. Esta obligación sólo afecta a los BIC.
- Todas las autorizaciones se entienden otorgadas en función de las circunstancias del momento, pudiendo ser

modificadas si se producen circunstancias sobrevenidas sobre el bien⁴⁰⁸.

- El plazo de la autorización para llevar las actuaciones es como máximo de dos años, pudiéndose renovar una sola vez por el mismo periodo de tiempo.
- Se deben ajustar en todo lo no establecido de forma expresa a la LPCV.

El régimen de protección urbanístico abarca también el régimen de licencias municipales en inmuebles y ámbitos patrimoniales protegidos, de forma que no pueden dictarse actos que habiliten edificaciones o usos del suelo sin que primero haya obtenido la autorización autonómica, teniendo que acreditar el solicitante el cambio de destino o uso del bien, pudiendo otorgarse esta por silencio positivo trascurridos tres meses. En todo caso, la autorización de la consellería constituye un requisito previo a la concesión de la licencia municipal⁴⁰⁹, teniendo que comunicar el Ayuntamiento a su vez los términos de la autorización.

Con base en lo anterior, se consideran obras ilegales aquellas que no tengan las dos autorizaciones, pudiendo utilizar las

⁴⁰⁸ M. E. CASAR FURIÓ, “Las diversas categorías de bienes inmuebles de interés cultural, con especial referencia a la nueva ley de patrimonio cultural valenciano de 2007 (La Ley 864/2007)”, cit., p. 28.

⁴⁰⁹ V. DUART CÍSCAR y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, cit., p. 1126.

Administraciones públicas las competencias necesarias para conservar y proteger los bienes, por ejemplo, el apercibimiento del cumplimiento de las obligaciones y la restitución del bien a su estado anterior⁴¹⁰.

En cuanto al estado de ruina declarado a través de un expediente por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, se da cuando el coste de reparación supera el 50% del valor de reposición total. Esto no puede servir como causa para dejar sin efecto la declaración de un BIC. Si es imputable al propietario o poseedor se aplican las normas para restitución del bien, pudiéndose expropiar el bien⁴¹¹.

f) Régimen de protección de los bienes muebles de interés cultural

En este grupo pueden entrar los bienes que compongan el patrimonio cultural subacuático y que hayan sido objeto de las diferentes actuaciones arqueológicas. Como expresa el art. 41, los bienes muebles no pueden ser sometidos a cambios o tratamientos que los modifiquen sin la necesaria autorización. Esta se entiende concedida por silencio administrativo positivo pasados tres meses. Si forman parte de colecciones, no pueden ser divididos y los traslados a un lugar diferente del que se encuentra registrado deben comunicarse de forma previa.

⁴¹⁰ ⁴¹⁰ F. GARCÍA RUBIO, “El papel de los Ayuntamientos en la conservación del patrimonio cultural. Estado de la cuestión (1)”, cit., p.2081.

⁴¹¹ V. DUART CÍSCAR y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, cit., p. 1126.

La solicitud para poder realizar estas intervenciones debe acompañarse de una memoria sobre el estado de conservación, el proyecto de intervención y la acreditación de la capacidad técnica y profesional.

Si durante el transcurso de las intervenciones aparecieran signos o elementos desconocidos que pudieran suponer la atribución de una autoría diferente a la establecida, o cambios significativos de la obra original, se debe suspender la actuación y dar cuenta a la Consellería que concedió la autorización, para que suspenda o no esta autorización, y establezca las condiciones de las misma.

La LPCV regula también la forma de depósito y exposición. Este régimen está pensado para las colecciones privadas o para los hallazgos y bienes encontrados en terrenos privados. Por lo general, los hallazgos sobre patrimonio cultural subacuático se van a producir en terrenos de dominio público y, además, la ley ya los cataloga como bienes públicos, por lo que esta regulación tiene poca aplicación práctica. No obstante, en el caso de que algunos propietarios privados quieran, podrán depositar sus bienes en centros de titularidad pública y otorgarle a las Administraciones públicas el derecho a exponer al público estos bienes, salvo motivación justificada.

g) Los demás bienes del Inventario General.

Dentro de este grupo se incluyen una serie de bienes o categorías de bienes protegidos por la LPCV, como los bienes inmateriales. Su

regulación excede de este estudio. En este sentido, se va a realizar un análisis de forma sucinta de los bienes de relevancia local⁴¹².

De acuerdo con el art. 46 de la LPCV, son bienes inmuebles de relevancia local todos aquellos que poseen valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos o etnológicos de interés para incorporarse al patrimonio valenciano pero que no poseen una relevancia especial para ser BIC, pero si tienen una significación propia que merece ser destacada. Estos bienes deben ser incluidos en los catálogos de bienes y espacios protegidos previstos de la legislación urbanística y en la sección 2ª del IGPCV, de forma que su ordenación estructural y regulación formen parte del planeamiento municipal⁴¹³.

La categoría de bienes de relevancia local impone una obligación a los municipios, de forma que la LPCV presupone que como mínimo debe haber un bien de este tipo en cada municipio y por ello obliga a motivar la inexistencia de estos bienes en determinado Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos⁴¹⁴.

⁴¹² M. E. CASAR FURIÓ y M. T. BROSETA PALANCA, “Nuevas consideraciones del bien inmueble de relevancia local valenciano”, cit., p. 44.

⁴¹³ Las categorías que incluyen estos bienes son:

- a) Monumento de Interés Local.
- b) Núcleo Histórico Tradicional.
- c) Jardín Histórico de Interés Local.
- d) Espacio Etnológico de Interés Local.
- e) Sitio Histórico de Interés Local.
- f) Espacio de Protección Arqueológica.
- g) Espacio de Protección Paleontológica.

⁴¹⁴ Art. 46. 3 de la LPCV.

Este Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos está formado por las proposiciones de los Ayuntamientos y debe comunicarse a la Consellería en materia de cultura en el plazo de seis meses desde su inclusión. Al mismo tiempo, esta Consellería puede incluir bienes cuando aprecie la existencia de los mismos a través de un procedimiento. También deben comunicarse las inscripciones en este Catálogo al Registro de la Propiedad.

En general, los bienes de relevancia local poseen un régimen de protección que abarca la adecuada conservación y apreciación de los mismos. Este orden de protección incluye tanto la situación y la descripción como los elementos anejos, la determinación de los valores patrimoniales, el entorno de afección y el régimen de intervención.

Los catálogos sirven como forma de identificación de la calificación correspondiente y de las medidas de protección.

h) Patrimonio arqueológico

La LPCV, después de exponer las diferentes tipos de bienes y cómo están protegidos y agrupados en su Título III, “Del patrimonio

arqueológico y paleontológico”⁴¹⁵, desarrolla un régimen de protección especial para este tipo de bienes. En este punto será objeto de análisis el patrimonio arqueológico solamente y haciendo referencia, mientras sea posible, a la aplicación del régimen de protección al patrimonio cultural subacuático.

Según el art. 58, del patrimonio arqueológico valenciano forman parte “los bienes inmuebles, objetos, vestigios y cualesquiera otras señales de manifestaciones humanas que tengan los valores propios del patrimonio cultural y cuyo conocimiento requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas y hayan sido o no extraídos, así como los elementos arqueológicos, los elementos geológicos relacionados con la historia del ser humano y sus orígenes y antecedentes”.

El Servicio Municipal de Arqueología y Paleontología es el encargado de delimitar las áreas que puedan contener restos arqueológicos. Estos deben entenderse como los departamentos o instituciones municipales, con arqueólogos titulados, encargados de la supervisión y ejecución técnica de intervenciones arqueológicas que se

⁴¹⁵ J. L. JIMÉNEZ SALVADOR, “Algunas reflexiones sobre la gestión del patrimonio arqueológico valenciano en las dos últimas décadas”, *Saitibi*, 54, 2004, pp. 37-61; J. BARCELONA LLOP, “El dominio público arqueológico”, *Revista de Administración Pública*, nº. 151, 2000, pp. 133-67; M. ANGELES QUEROL y B. MARTÍNEZ DÍAZ, “Paso a paso: el tratamiento de los bienes arqueológicos en las leyes de patrimonio de Valencia y Madrid”, *Complutum*, nº. 9, 1999, pp. 279-291; J.C. CARRERA RUIZ, “La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico”, *Arse: Boletín anual del Centro Arqueológico Saguntino*, nº. 36, 2002, pp. 177-189.

lleven a cabo en el término municipal. En su defecto, y de forma subsidiaria, es la Generalitat u otras entidades supramunicipales quienes deben realizar esta delimitación.

Esta delimitación se hará por técnicos competentes en las materias y debe ser la Consellería en materia de cultura quien las apruebe, siendo incluidas en los Catálogos de Bienes y Espacios protegidos del municipio⁴¹⁶ como Áreas de Vigilancia Arqueológica. Estas áreas, si poseen especial relevancia cultural, pueden ser clasificadas como BIC.

La LPCV establece una serie de definiciones sobre lo que debe considerarse por actuaciones arqueológicas, entendiéndose estas de forma extensiva y no ciñéndose a las prospecciones o excavaciones⁴¹⁷.

⁴¹⁶ M. E. CASAR FURIO y M. T. BROSETA PALANCA, “Regulación Valenciana de los Catálogos Municipales”, *Actualidad Administrativa*, nº. 1, Sección A Fondo, 2013, p. 33.

⁴¹⁷ Las más importantes son las siguientes:

- Prospecciones arqueológicas, que son las exploraciones superficiales subterráneas o subacuáticas que no conlleven remoción de terreno y cuya finalidad sea el descubrimiento, estudio e investigación de los restos históricos o los elementos que guarden relación. Se incluyen dentro de este tipo de acciones las técnicas de observación y reconocimiento del subsuelo a través de instrumentos geofísicos, electromagnéticos u otros.
- Las excavaciones, que son remociones realizadas con objetivos exploratorios, de estudios, observación y reconocimiento.
- Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura, siendo aquellos que tienen como finalidad documentar los elementos constructivos que conforman un edificio o conjunto de edificio y su evolución histórica. Este último será difícil de aplicar al patrimonio cultural subacuático, salvo que se trate de la evolución de presas, puertos o canales.
- Actuaciones de estudio que impliquen destrucción o alteración de parte de los elementos para llevar a cabo técnicas analíticas de materiales.

Para llevar a cabo cualquier tipo de actuación arqueológica es necesario una autorización por parte de la Consellería. La solicitud debe contener un plano con precisión de los límites de la zona objeto de actuación, la identificación del propietario del terreno si lo tuviera y su consentimiento, un programa detallado de los trabajos que se quieren realizar, la justificación y motivación de la actuación, identificación del equipo y la cualificación profesional de los mismos. Al mismo tiempo, se debe solicitar de manera expresa que se van a usar detectores de metales u otras herramientas. Se requiere también una autorización para consultar los datos de acceso restringidos sobre la situación de los yacimientos arqueológicos contenidos en el IGPCV.

Para realizar obras o intervenciones que conlleven remociones de tierra en aquellos lugares en los que se conozca o presuma que puede haber restos arqueológicos, será necesario un estudio previo, teniendo que comunicarse este al Ayuntamiento donde se va a desarrollar. Como defiende CARRERA RUÍZ, “por decirlo de algún modo, ha convertido la actuación urbana de urgencia en un trámite administrativo más, por el que ha de pasar el promotor de una obra para obtener la

-
- Actuaciones relativas a la protección, consolidación y restauración arqueológica. Dentro de este tipo de actuaciones se incluyen los cerramientos, vallado, limpieza, actuaciones preventivas, montaje de estructuras.
 - Estudio y documentación de los yacimientos, así como de los materiales que se hallen en museos o instituciones públicas de la CV.

correspondiente licencia municipal, quedando relegado el interés científico de la intervención a un papel secundario”⁴¹⁸.

Tanto la autorización como la denegación de las actuaciones deben ser expresas y motivadas.

Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con la autorización y la metodología aprobada, de forma que se autoriza a la Consellería para llevar a cabo la actividad inspectora de las labores, así como para suspender la autorización en caso de incumplimiento de lo autorizado.

También se establece una protección sobre actuaciones que no tenían en principio una finalidad arqueológica. En estos casos, el promotor o constructor y técnico director de las obras está obligado a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar los hallazgos. La Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, en el plazo de diez días desde que tuviera conocimiento, podrá acordar la intervención, vigilancia y estudio de lo hallado, y suspender las obras durante el tiempo que considere necesario para llevar a cabo la protección del patrimonio arqueológico.

Los bienes encontrados en este tipo intervenciones tendrán la consideración de bienes de dominio público y si son encontrados en la Comunidad Valenciana, se integran en el patrimonio cultural

⁴¹⁸ J.C. CARRERA RUIZ, “La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico”, *Arse: Boletín anual del Centro Arqueológico Saguntino*, nº. 36, 2002, pp. 177-189.

valenciano. Las autorizaciones conllevan la obligatoriedad de comunicar a los treinta días los hallazgos y de entregar los objetos fruto de las actuaciones a los museos o institución que la Consellería señale al efecto.

Los hallazgos casuales son premiados sea cual sea el origen del mismo (azar o excavaciones sin finalidad arqueológica) y siempre que no conste que alguien los posee de forma legítima⁴¹⁹. La ley no define qué debe considerarse como “forma legítima”. No se establece nada sobre si dentro de esta definición pueden encontrarse los bienes que hayan sido robados pero que pertenezcan a alguien que su momento los denunció, o los bienes perdidos durante alguna batalla y que posean inscripciones características que permitan identificar a los poseedores y que de alguna forma deban ser integrados de en el patrimonio personal de una persona por herencia, ya sea, por ejemplo, el escudo de armas de un noble o un arma de la Guerra Civil.

El descubridor debe, en el plazo de 48 horas, comunicar el hallazgo y entregar lo encontrado a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia o al Ayuntamiento en el que se haya hallado el bien, quien lo comunicará a la Consellería. Se exceptúan aquellos casos en los que para la extracción del bien se requiera la remoción de tierras o de los restos subacuáticos, teniendo que quedarse en el lugar del encuentro hasta que la Consellería autorice las actividades

⁴¹⁹ J.C. CARRERA RUIZ, *La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico*, cit., p. 185.

correspondientes. El descubridor no posee ningún derecho a retener los bienes encontrados y está sujeto a las normas de depósito necesario, salvo que entregue el bien al museo que determine la Consellería con base en criterios de especialidad arqueológica, u otros. El descubridor tiene derecho a una recompensa en metálico, que será la mitad del valor del bien, dividiéndose esta entre los diferentes descubridores en igual proporción. Si se incumplen cualquiera de estos requisitos, se extingue el derecho a la recompensa.

Por último, la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia puede establecer en los yacimientos áreas de reserva arqueológica, siendo estas “partes de los yacimientos en que se considere conveniente, de acuerdo a criterios científicos, prohibir las intervenciones actuales a fin de reservar su estudio para épocas futuras”. Estas declaraciones deben de inscribirse en el IGPCV⁴²⁰.

i) Medidas de fomento del patrimonio cultural

La LPCV se basa a lo largo de todo su contenido en una idea principal, que es el fomento y difusión del patrimonio cultural valenciano. Para ello, establece diferentes niveles de protección atendiendo al nivel de relevancia del bien. En este sentido, abarca las medidas de fomento tanto a los bienes materiales como inmateriales, ya sea estos últimos inmuebles o muebles.

⁴²⁰ C. SIRVENT BERNABEU, *Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano*, cit., p. 13.

Esto es debido a que la conservación y promoción del patrimonio es un bien público, entendido de forma extensa, dado que abarca no sólo a las Administraciones públicas, sino también a las personas físicas y jurídicas privadas, de forma que deben colaborar en los objetivos.

Para ello, la Generalitat debe promover políticas culturales y educativas, acompañadas de campañas públicas de divulgación y formación, de manera que en los planes de estudios se incluya el conocimiento del patrimonio cultural valenciano, además de prestar ayuda a los centros que lleven actuaciones de investigación especializada en estas materias.

Al mismo tiempo, la Generalitat valenciana otorga anualmente mediante una orden el título de protector o protectora del patrimonio a aquellas personas físicas o jurídicas que se distingan en actividades de conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano, pudiendo usarlo en todas las manifestaciones de su actividad.

En este sentido, se establecen una serie de fórmulas para ayudar en la colaboración público-privada de la conservación y difusión del patrimonio valenciano. Puede ser a través del derecho preferente de adquisición de estos bienes, ayudas a la conservación, promoción de las visitas públicas, beneficios fiscales, pagos con bienes culturales, entre otras. Dichas disposiciones no se alejan de lo contemplado en la LPHE,

siendo en muchos casos adaptaciones al nivel autonómico del régimen expuesto en la norma nacional.

j) Régimen sancionador

La última de las formas de protección del patrimonio cultural valenciano es a través de un sistema de sanciones⁴²¹. Dependiendo del tipo de la incidencia, la graduación será una u otra.

El régimen sancionador valenciano está dividido en infracciones leves, graves y muy graves. Las leves que pueden afectar al patrimonio cultural subacuático son el incumplimiento del deber de facilitar el examen o inspección de los bienes o actividades o de aportar la información; el no comunicar la asistencia de bienes; el cambio de uso de los bienes incompatible con la condición del mismo sin que sufra daño; incumplir con la orden de interrumpir las actividades autorizadas; la no presentación de las memorias de las actuaciones arqueológicas; el uso de detectores de metales u otros sin licencia; causar daños por un valor de hasta 30.000,00€ a bienes incluidos en el inventario y la infracción de otros deberes y obligaciones contenidas en la ley y que no supongan una infracción grave o muy grave. En este sentido, es destacable la inclusión de un supuesto genérico de daños sobre bienes hasta un valor. También es difícil apreciar la remisión en blanco al resto del contenido normativo de la LPCV, ya que puede afectar al principio

⁴²¹ V. DUART CÍSCAR y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, cit., p. 1126.

de legalidad, al dejarse al arbitrio de la Administración la interpretación sobre el incumplimiento de los deberes y si este debe de ser sancionado o no. Estas infracciones tienen una sanción económica de como máximo 60.000,00€.

En cuanto a las acciones que pueden constituir infracciones graves, encontramos el incumplimiento del deber de conservar y mantener la integridad de los bienes; la negativa a permitir el acceso a los investigadores de los BICS; la no comunicación de subastas de bienes; realizar intervenciones sobre bienes incluidos en el IGPCV; la realización de actuaciones arqueológicas sin los actos administrativos habilitantes; el incumplimiento de las obligaciones de comunicar los descubrimientos y hallazgos aunque sean de forma casual; la no suspensión de manera inmediata de las obras o actuaciones por motivo de descubrimiento; la comercialización de bienes de naturaleza arqueológica sin que estos estén debidamente documentados; el no llevar a cabo un libro-registro de las transacciones; separar bienes integrados en el patrimonio cultural subacuático, la disgregación de las colecciones de patrimonio cultural subacuático, causar daños de entre 30.001,00€ a 60.000,00€ y cometer en un año dos o más faltas leves. En este punto también se suceden una serie de remisiones en blanco al contenido de la ley, por lo que deben justificarse de manera clara los criterios para determinar por qué se ha calificado la infracción dentro de este grupo y no de cualquiera de los otros. Estas acciones son sancionadas con un mínimo de 60.001,00€ y hasta 150.000,00€.

En cuanto a las infracciones muy graves encontramos, entre otras, el derribo total o parcial de los inmuebles incluidos en el IGPV o que se encontraban en proceso de inclusión; causar daños por un valor superior a 60.000,00€ y realizar actuaciones arqueológicas sin licencia y que, como resultado de esas actuaciones arqueológicas, se destruyan los bienes. Estas acciones tienen una sanción económica que va desde los 150.001,005€ a 1.300.000,00€.

Hay que indicar que las sanciones expresadas anteriormente se prevén solamente para los casos en que no se hubieran causado daños económicos. En el caso de que hubiera daños, se impone una multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado y siendo en todo caso el mínimo que establece cada una de las sanciones.

Otros factores de graduación de las sanciones son la gravedad de los hechos, el empleo de medios técnicos en las actuaciones arqueológicas, el perjuicio causado, la reincidencia y el grado de malicia, el caudal que hubiera obtenido o pensaba obtener y cualquiera otra circunstancia que el instructor aprecie en relación con esto. Esta última circunstancia hay que entenderla más como causa de exoneración que de agravante, puesto que, en aplicación de los principios del derecho penal, las causas agravantes deben estar tipificadas y en las atenuantes siempre caben interpretaciones analógicas.

Hay que indicar que en aquellas situaciones objeto de sanciones más graves, la Administración puede llevar a cabo la expropiación del

bien, al haber estado éste en peligro de destrucción o deterioro. Se impone así una interpretación y apreciación caso por caso.

Otra de las medidas accesorias o sanciones que incluye la LPCV es la prohibición de otorgarles nuevas autorizaciones para llevar a cabo actividades arqueológicas a aquellos que, en el plazo de dos años desde el final de la actividad, no presenten una memoria científica de los trabajos desarrollados, así como el comiso de los materiales o utensilios.

Se considera como responsable de todas estas infracciones a quien las realice de forma activa u omisiva. En el caso de las actuaciones arqueológicas no autorizadas, serán responsables quienes de manera directa o indirecta hubieran intervenido, ya sea de forma activa o pasiva. Cuando la infracción consista en la ejecución de obras sin licencia, o no ajustándose a lo autorizado, el responsable es determinado de acuerdo con la legislación urbanística. Es decir, se hace una remisión a Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

Se pueden imponer multas coercitivas hasta el cumplimiento de las obligaciones o la reparación de los daños. En virtud de la autotutela administrativa, puede la AP restituir y después derivar el coste a los infractores⁴²². Como expresa SIRVENT BERNABEU, subyace en estas

⁴²² V. DUART CÍSCAR y J. L. BLANCO VEGA, “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, cit. p. 1126.

multas coercitivas, la “idea del daño que exige la reparación siempre que sea posible”⁴²³.

H) Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares

a) Preliminar

La Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares ⁴²⁴, es la norma encargada de proteger el patrimonio arqueológico en esta CA. Esta norma se enmarca en el cumplimiento adecuado del mandato contenido en el artículo 46 de la Constitución, que exige al Parlamento balear hacer un uso más intenso de la habilitación que le proporcionan los artículos 148.1.16.^a de la Constitución y 10.19 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y, en consecuencia, ordenar globalmente la acción de los poderes públicos

⁴²³ C. SIRVENT BERNABEU, *Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano*, cit. p. 13.

⁴²⁴ J. A. SANTOS VELASCO, “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, *Revista Iberia, Revista de la Antigüedad*, vol. 5, 2002, pp.7-21; B. PÉREZ GALAN “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre patrimonio cultural en España: una lectura antropológica sobre las figuras legales de protección”, *Revista de Antropología Experimental* (11), 2011, pp. 11-30; VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología. Revistas de la Universidad de Oviedo*, nº. 26, pp. 188-203; N. MARTINEZ RENGEL, *Arqueología y gestión del turismo en las Islas Baleares*, Tesis Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2016 y C. I. RAMIS CIRER, “El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación”, *Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad: comunicaciones: XXII Congreso de Geógrafos Españoles*, Universidad de Alicante, 2011 / Vicente Gozálviz Pérez, Juan Antonio Marco Molina (eds.), Madrid, Asociación de Geógrafos Españoles, 2011, pp. 567-580.

y de los ciudadanos de las Islas Baleares en materia de defensa del patrimonio histórico, con firme voluntad de transmitir a las generaciones venideras el testimonio hoy todavía rico de la historia, el arte y la cultura de los pueblos isleños⁴²⁵. La Exposición de Motivos parece indicar que la protección se va a realizar exclusivamente sobre el patrimonio vigente en el momento de aprobarse la norma. En el caso del patrimonio cultural subacuático, son muchos los pecios y fondos encontrados en el archipiélago o en sus alrededores, fruto de su carácter insular.

Esta norma sigue el esquema clásico introducido por la LPHE de división de los bienes en diferentes categorías, dependiendo del grado de protección de los mismos, pero abarca mucho más que el patrimonio histórico. Además, impulsa formas de protección diferentes, como la difusión y conocimiento del patrimonio a través de la publicidad y educación. Protege el mismo a través de limitaciones, obligaciones y derechos a favor de las Administraciones públicas y de la ciudadanía.

⁴²⁵ Esta no es la única regulación que protege el patrimonio, puesto que a lo largo de estos casi veinte años se han dictado las siguientes normas: Decreto núm. 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas de Illes Balears 2011; Ley 19/2006, de 23 de noviembre, de Bibliotecas de Illes Balears; Ley 15/2006, de 17 de octubre, de Archivos y patrimonio documental de Illes Balears; Decreto 107/2001, de 3 de agosto, por el que se crea el Archivo y Museo de Educación de las Illes Balears y se regula su funcionamiento y el Decreto 60/2001, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión de Valoración del Patrimonio Histórico.

Como en otras leyes autonómicas, no existe un apartado específico para los bienes que pueden conformar el patrimonio cultural subacuático, pese a que pueden llegar a tener cierta importancia⁴²⁶. La regulación de los mismos se deriva al patrimonio arqueológico, entre otros. Por este motivo, nos centraremos en el análisis de los BIC y de la regulación del patrimonio arqueológico.

b) Bienes de interés cultural

Los BIC son aquellos bienes que, por su especial relevancia e importancia para el patrimonio balear, son inscritos como tales en el Registro de Bienes de Interés Cultural de las Illes Balears. Son bienes de dominio público y se declaran tras pasar por un procedimiento

⁴²⁶ J. MASCARÓ PASARIUS, “Noticia de algunas piezas arqueológicas rescatadas del fondo del mar en las Islas Baleares”, *Archivo Español de Arqueología*, Madrid, vol. 41, 117, p. 199; A. BELTRAN, “El Curso de Arqueología en el Sudeste y Baleares”, *Archivo Español de Arqueología*, Madrid, vol. 22, Iss. 76 (Jul 1, 1949): p. 249; S. MUNAR LLABRÉS y M. A. SASTRE VANRELL, “Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera. La creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG)”, *Mayurqa* (2009-2010), 33: pp. 263-281; M. FERNÁNDEZ-MIRANDA, “Estado actual de la Arqueología submarina en España: El Pecio de la «Illa del Sec» en la bahía de Palma (Mallorca)”, *Trabajos de Prehistoria*, Madrid, vol. 28, (Jan 1, 1971), p. 273; VV.AA., “Investigación y gestión del Patrimonio Cultural Subacuático en las Islas Baleares: la Carta Arqueológica Subacuática de Formentera y el pecio romano de Porto Cristo”, *RIPARIA 2* (2016), pp. 21-53; C. GÓMEZ BELLARD, “El fondeadero de Es Caná (Santa Eulalia del Río, Ibiza)”, *Saguntum* 17, 1982, pp. 91-112; VV.AA., “El yacimiento submarino de Favartx (Menorca, España)”, *VI Congreso internacional de arqueología submarina (Cartagena 1982)*, Madrid, pp. 175-185; C. CABRERA TEJADA, “Nautical evidences from Byzantium in Seville, Spain”, *Skylis* 11.1, 2011, pp. 25-33; M. HEINRICH HERMANN, “Vestigios altomedievales procedentes de las aguas de Ibiza/Eivissa (Islas Baleares)”, *Archivo Español de Arqueología*, vol. 86 (2013), pp. 251-260; R. AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia en el comercio del Mediterráneo del siglo XI”, *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, 9, 1992/93, pp. 39-52.

específico. En la mayoría de los casos suelen declararse de manera individualizada, aunque se admiten excepciones para conjuntos o colecciones de bienes⁴²⁷. Los BIC inmuebles se clasifican en Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardín Histórico, Lugar Histórico, Lugar de Interés Etnológico, Zona Arqueológica y Zona Paleontológica. En principio, los bienes que puedan conformar el patrimonio cultural subacuático balear pueden incluirse en cualquiera de estas categorías⁴²⁸. No obstante, en la práctica es más probable que se declaren como Zonas Arqueológicas, ya que son “el lugar donde hay restos materiales, muebles y/o inmuebles, fruto de la intervención humana, que es susceptible de ser estudiado con la metodología arqueológica, tanto si se encuentra en la superficie como si se encuentra en el subsuelo o bajo las aguas”. El patrimonio cultural subacuático puede ampararse dentro del Lugar Histórico, al entenderse este como “sitio o paraje natural susceptible de delimitación espacial unitaria que se puede vincular a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones

⁴²⁷ N. MARTINEZ RENGEL, *Arqueología y gestión del turismo en las Islas Baleares*, Tesis Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2016 y C. I. RAMIS CIRER, “El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación”, *Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad: comunicaciones: XXII Congreso de Geógrafos Españoles*, Universidad de Alicante, 2011 / Vicente Gozávez Pérez, Juan Antonio Marco Molina (eds.), Madrid, Asociación de Geógrafos Españoles, 2011, pp. 567-580.

⁴²⁸ El art. 6.6 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares, señala al respecto:

“En el caso de que los bienes culturales inmuebles definidos en los cinco puntos anteriores tengan en el subsuelo restos que solamente sean susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tendrán también la condición de zona arqueológica”.

culturales o de la naturaleza, que tiene un interés destacado desde el punto de vista histórico, artístico, arqueológico, histórico-industrial, paleontológico, etnológico, antropológico, social, científico o técnico”, de forma que se pueden proteger bajo esta denominación los restos de algún acontecimiento bélico o desastre en el que queden restos de embarcaciones u otros.

Para la declaración de bienes que engloban el patrimonio cultural subacuático es necesario delimitar el bien a través de planimetría y documentación gráfica. Para ello se debe delimitar el entorno del bien, las pertenencias o accesorio del mismo, los bienes muebles que estén vinculados, una memoria histórica y un informe detallado del estado de conservación.

Estos bienes se ven afectados por el sistema de protección general de forma que deben ser conservados, mantenidos y custodiados. Los bienes inmuebles están protegidos por un régimen urbanístico especial que afecta a los bienes y al entorno, de forma que, para llevar a cabo modificaciones, será necesario cumplir todos los elementos especiales de las licencias⁴²⁹.

Cualquier intervención que se realice en estos bienes debe conservar los valores que motivaron que fueran declarados como BIC. Se prohíben reconstrucciones totales y parciales sin que se utilicen medios y técnicas originales, y también se prohíbe la eliminación de

⁴²⁹RAMIS CIRER, “El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación”, cit., pp. 567-580.

elementos salvo que no afecten al conjunto. Estas prohibiciones afectan también al entorno de forma que se prohíbe la colocación de publicidad o elementos que afecten al volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo.

c) Régimen de protección del patrimonio arqueológico

Integran el patrimonio arqueológico de las Illes Balears al efecto de esta Ley los bienes muebles e inmuebles en los cuales concurre un interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, histórico-industrial, paleontológico, etnológico, antropológico, bibliográfico, documental, social, científico y técnico para las Illes Balears, cuando para el estudio de los mismos se requiera una metodología arqueológica, con independencia de que hayan sido extraídos del lugar de origen o no⁴³⁰. Asimismo, encontramos los espacios de interés arqueológico o paleontológico, que son “los lugares no declarados, terrestres o subacuáticos, donde, por evidencias materiales, por antecedentes históricos o por otros indicios, se presume la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos”, determinándose por acuerdo del pleno de los consejos insulares a propuesta de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico e incluyéndose como tales en el Catálogo General de las Illes Balears.

Como metodología arqueológica debe entenderse cualquier estudio que resulte de aplicación para interpretar los bienes de forma

⁴³⁰ J. A. SANTOS VELASCO, “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, cit., pp. 7-21.

que se puedan entender los valores que le otorgan cierta importancia. Dentro de esos valores podemos encontrar desde las maquetas que recrean las embarcaciones o pecios hundidos, a las radiografías 3D sobre los fondos y terrenos donde se encuentran los yacimientos, de forma que se pueden construir mapas tridimensionales a partir de múltiples sensores o el diseño de los vehículos que se encuentran en el lecho⁴³¹. Son múltiples los elementos que pueden quedar amparados y protegidos dentro de esta categoría⁴³².

⁴³¹VV.AA., “Integración de técnicas ópticas de reconstrucción 3D para mejorar la planificación de agarres en tareas de manipulación arqueológica subacuática”, *Actas de las XXXVI Jornadas de Automática*, 2 - 4 de septiembre de 2015, Bilbao, pp. 823-830; S. MUNAR LLABRÉS y M. A. SASTRE VANRELL, “Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera. La creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG)”, *Mayurqa* (2009-2010), 33, pp. 263-281; VV.AA., “Investigación y gestión del Patrimonio Cultural Subacuático en las Islas Baleares: la Carta Arqueológica Subacuática de Formentera y el pecio romano de Porto Cristo”, *RIPARIA*, nº. 2, 2016, pp. 21-53 y X. VICEDO I JOVER, “Las maquetas navales. Herramientas para el estudio y la interpretación de los naufragios arqueológicos. El Modelismo Naval al servicio de la Ciencia”, (<https://bit.ly/2OF3uq6> consultado el 18 de noviembre de 2017).

⁴³²A. BELTRAN, “El Curso de Arqueología en el Sudeste y Baleares”. *Archivo Español de Arqueología*, Madrid, vol. 22, 76, (Jul 1, 1949), p. 249; S. MUNAR LLABRÉS y M. A. SASTRE VANRELL, “Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera. La creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG)”, *Mayurqa* (2009-2010), 33, pp. 263-281; M. FERNÁNDEZ-MIRANDA, “Estado actual de la Arqueología submarina en España: El Pecio de la "Illa del Sec" en la bahía de Palma (Mallorca)”, *Trabajos de Prehistoria*, Madrid, vol. 28, p. 273; VV.AA., “Investigación y gestión del Patrimonio Cultural Subacuático en las Islas Baleares: la Carta Arqueológica Subacuática de Formentera y el pecio romano de Porto Cristo”, *RIPARIA*, 2 (2016), pp. 21-53; C. GÓMEZ BELLARD, “El fondeadero de Es Caná (Santa Eulalia del Río, Ibiza)”, *Saguntum* 17, 1982, pp. 91-112; VV.AA., “El yacimiento submarino de Favartx (Menorca, España)”, *VI Congreso internacional de arqueología submarina (Cartagena 1982)*, Madrid, pp. 175-185.; C. CABRERA TEJADA, “Nautical evidences from Byzantium in Seville, Spain”, *Skyllis*, 11.1, 2011,

Sobre los diferentes elementos que pueden quedar protegidos bajo este régimen, se pueden autorizar ciertas intervenciones arqueológicas y paleontológicas como prospecciones, sondeos, excavaciones, entre otras. Según el art. 50.2 de Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares, las excavaciones arqueológicas son “las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los espacios subacuáticos realizadas con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos materiales relacionados estrictamente con la historia de la humanidad, así como también los componentes geológicos y las muestras ecoarqueológicas que estén relacionadas con los mismos y se lleven a cabo a través de metodología científica”.

Como prospecciones arqueológicas la norma entiende “las exploraciones superficiales y sistemáticas, tanto terrestres como subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, la investigación o el examen de cualesquiera de los elementos del patrimonio cultural subacuático”, aunque el Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas de las Islas Baleares, añade algunas más como son las consolidaciones, restauraciones y adecuaciones, los procedimientos analíticos, los controles, las reproducciones y las

pp. 25-33; M. HEINRICH HERMANN, “Vestigios altomedievales procedentes de las aguas de Ibiza/Eivissa (Islas Baleares)”, *Archivo Español de Arqueología*, vol. 86 (2013), pp. 251-260; R. AZUAR RUIZ, “La taifa de Denia en el comercio del Mediterráneo del siglo XI”, *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, 9, 1992/93, pp. 39-52.

intervenciones de arqueología vertical. De estas últimas son destacables las “consolidaciones, restauraciones y adecuaciones”, que son las intervenciones que tienen como objeto el mantenimiento o la adecuación para una visita pública de los yacimientos, deduciéndose a diferencia de las otras una finalidad turística o de difusión que va más allá de la investigadora o protectora del resto de intervenciones.

Estas intervenciones deben ser autorizadas por la Comisión Insular del Patrimonio Histórico y para ello es necesario que se alegue el interés o adecuación de la intervención, la capacidad económica de los promotores y la idoneidad de la misma. Todo lo hallado debe ser documentado y guardado hasta que se deposite en el Museo adecuado. Las intervenciones ilegales serán sancionadas, siendo estas las que no reúnan los requisitos necesarios o incumplan lo estipulado.

Los bienes arqueológicos serán de titularidad pública, ya sean descubiertos de manera intencionada o por azar. Esto no excluye que sean compensados los descubridores o los dueños de los terrenos.

I) Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz

a) Preliminar

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz, en adelante LPHA⁴³³, nace como expresión y ejercicio de las competencias legislativas autonómicas que tanto la CE como el Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad autónoma de Andalucía⁴³⁴. El art. 68.3.1º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En este sentido, la Ley 14/2007 introduce una serie de cambios con respecto a la regulación contemplada en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, como son el Inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, la simplificación de los procedimientos y un mayor detalle de las infracciones, entre otras novedades con respecto a la normativa anterior⁴³⁵.

⁴³³ A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, “La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2007) y el Planteamiento Urbanístico”, *E-RPH. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico*, nº. 3 (2008), pp. 3-28.

⁴³⁴ Originalmente en el art. 12.3 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía y actualmente en art. 10.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

⁴³⁵ M. ORTÍZ SÁNCHEZ, “Las zonas patrimoniales: Una nueva tipología de protección en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 79/2011, enero-abril, pp. 91-134; C. BARRERO RODRÍGUEZ, “Las

El objeto de esta ley es establecer un régimen jurídico aplicable al Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, salvaguarda y difusión, así como promover el enriquecimiento y uso social a través de un desarrollo sostenible que permita el disfrute del mismo por las generaciones futuras⁴³⁶.

El ámbito de aplicación de la LPHA está compuesto por todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, que se encuentren en Andalucía y revelen cierto interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad autónoma. Pese a que la definición del ámbito de aplicación de la norma no contiene de manera expresa referencia directa al patrimonio cultural subacuático, hay que interpretar que este se encuentra dentro del ámbito de protección de la misma al reunir esos requisitos.

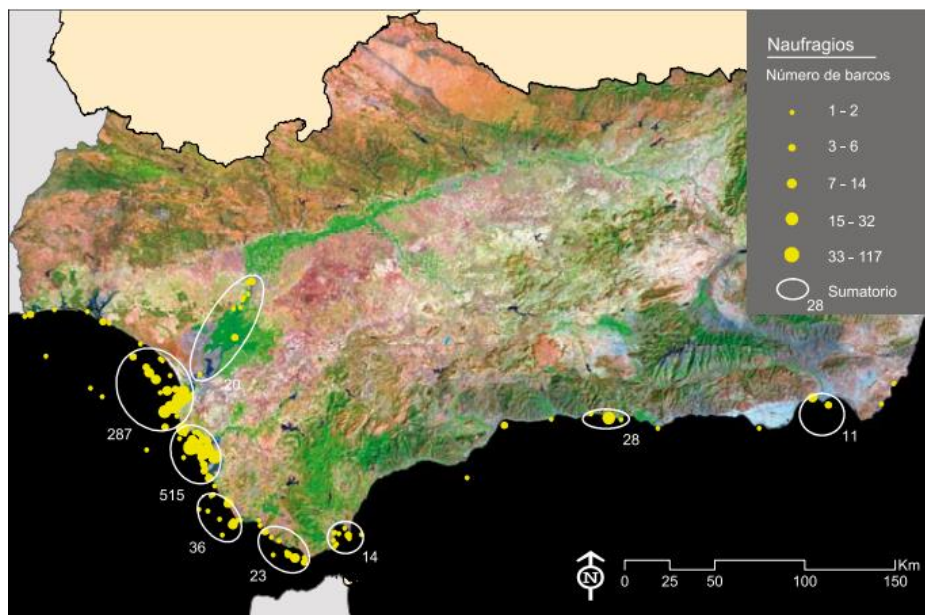
En el mismo sentido, pese a que tampoco se encuentra incluida de manera directa en la LPHA la referencia al Centro de Arqueología Subacuática, entre las instituciones que conforman las Instituciones de Patrimonio Andaluz, se hace referencia al Instituto Andaluz del

innovaciones de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en la ordenación urbanística de los conjuntos históricos”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 68, octubre-noviembre-diciembre, 2007, pp. 73-113 y M. ORTÍZ SÁNCHEZ y M. A. ALBERT MUÑOZ, “La protección del patrimonio arqueológico subacuático, competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Caso Odyssey”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº 79/2011, enero-abril, pp. 157-170.

⁴³⁶ Art. 1 de la LPHA.

Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, indicando que el Centro de Arqueología Subacuática es un órgano dependiente del mismo⁴³⁷.

Número de naufragios a lo largo de las aguas andaluzas.



Fuente: VV.AA., “El conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático desde la perspectiva de las fuentes documentales”. *Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº 73, 2010, p. 121.

A partir de 1997, con la creación del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía⁴³⁸, se impulsaron una serie de proyectos

⁴³⁷ C. A. AMOEDO-SOUTO, “El patrimonio cultural litoral: apuntes para la integración del patrimonio cultural en la gestión del litoral”, *Patrimonio cultural y derecho*, 2009, nº. 13, pp. 55-86.

⁴³⁸ C. ALONSO VILLALOBOS y M. NAVARRO DOMÍNGUEZ, “Un proyecto experimental para la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico subacuático: el Proyecto Tarifa”, *PH Boletín* 30, p. 105.

desde la Consejería de Cultura debido a que la situación de la arqueología subacuática en Andalucía demandaba llevar a cabo una importante labor de investigación preventiva. Partiendo de una situación que se había iniciado con hallazgos casuales importantes, como los de la Ría de Huelva, se reducía a recuperaciones, sin metodología arqueológica, pero que tuvieron la importancia de ir conociendo la existencia de este patrimonio, y contó con el trabajo encomiable de muchos profesionales en unos momentos en los que la arqueología subacuática aún no había desarrollado una metodología adecuada a sus necesidades. A partir de 1970, comienzan a aplicarse nuevas técnicas adaptadas al medio acuático y se empiezan a formar arqueólogos buceadores.

En 1985, Andalucía se benefició del Plan Nacional de Documentación del Litoral Español, impulsado por el Ministerio de Cultura, iniciándose las correspondientes Cartas Arqueológicas, centradas en los litorales de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. También se llevaron a cabo actuaciones de urgencias en dragados de la ría de Huelva en 1994/95 y 1997. En cuanto a Cádiz, se pusieron en marcha el proyecto de prospección y valoración del patrimonio cultural sumergido en el Golfo de Cádiz (1984-1985); el proyecto Galeón (1988-1990) y el Proyecto General de Investigación de la Bahía de Cádiz (1992-1998). También se acometieron numerosas

actuaciones de urgencia en el control del dragado de la bahía de Cádiz⁴³⁹.

b) Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

El Capítulo I del Título I, sobre Protección del Patrimonio Histórico, regula el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Este sirve como un instrumento para la salvaguarda de los bienes que figuran inscritos en él y al mismo tiempo permite su consulta y divulgación de la información⁴⁴⁰.

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en adelante CGPHA, está dividido en BIC, bienes de catalogación general, en adelante BCG, y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. A la hora de inscribir bienes en el CGPHA se puede hacer de manera individual o colectiva. De forma cautelar, se deben realizar anotaciones siempre que se incoe un procedimiento⁴⁴¹.

⁴³⁹ Exposición de motivos de la Orden de 20 de mayo de 2009, por la que resuelve declarar como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz.

⁴⁴⁰ C. BARRERO RODRÍGUEZ, “El derecho andaluz del patrimonio histórico en el vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía”, *Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública*, Extra 2 (2), 2003, pp.337-358; V. CASTILLA PENALVA, “El Patrimonio histórico, incidencia en la disciplina urbanística y en el deber de conservación de las edificaciones. Estudio de la normativa andaluza y normativa básica estatal”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 3, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 27 Feb. 2011, Ref. 303/2011, p. 303.

⁴⁴¹ Art. 7 de la LPHA.

La inscripción en el CGPHA tiene como efectos los siguientes:

- 1) Una singular protección y tutela de acuerdo con el contenido de la LPHA y de las instrucciones particulares, es decir, la forma concreta para la protección de cada bien y su entorno, los derechos y obligaciones del titular de los bienes⁴⁴².
- 2) La aplicación del contenido de la LPHA.
- 3) La aplicación del régimen previsto para el CGPHA.
- 4) La aplicación de las medidas cautelares y accesorias al bien para asegurar que se cumplen los objetivos de la LPHA.

La inscripción se realiza de oficio por la Consejería competente⁴⁴³ en materia de patrimonio histórico, pudiendo cualquier persona física o jurídica solicitar a la misma que inicie dicha incoación. La ley también establece una serie de particularidades para la inscripción de diferentes bienes como BIC o actividades de interés etnológico reguladas en el artículo 10 de la LPHA, produciéndose el silencio negativo pasado los tres meses desde el inicio de la solicitud. La resolución de incoación del procedimiento lleva aparejada la

⁴⁴² V. CASTILLA PENALVA, “El Patrimonio histórico, incidencia en la disciplina urbanística y en el deber de conservación de las edificaciones. Estudio de la normativa andaluza y normativa básica estatal”, cit., p. 307.

⁴⁴³ En la actual legislatura andaluza la Consejería competente es la Consejería de Cultura.

anotación preventiva en el CGPHA, aplicándose una protección cautelar sobre el bien de que se trate y cesando esta cuando se deje sin efecto la incoación del procedimiento por cualquiera de los medios de finalización del mismo⁴⁴⁴.

Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación⁴⁴⁵.

La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. Dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras Administraciones públicas las licencias o autorizaciones que correspondan.

⁴⁴⁴ C. BARRERO RODRÍGUEZ, “El derecho andaluz del patrimonio histórico en el vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía”, cit., p. 341; V. CASTILLA PENALVA, “El Patrimonio histórico, incidencia en la disciplina urbanística y en el deber de conservación de las edificaciones. Estudio de la normativa andaluza y normativa básica estatal”, cit. p. 305.

⁴⁴⁵ Art. 14 de la LPHA.

La LPHA continúa con una serie de preceptos en materias diversas que no afectan directamente a la protección del patrimonio cultural subacuático, pero sí a los bienes que se hayan podido obtener de los pecios. El contenido está dividido en ejecución forzosa, derecho de tanteo y retracto, expropiación y contaminación visual o perceptiva, que no distan del contenido regulado en la LPHE más allá del órgano competente autonómico para ejercer las medidas.

c) Formas de conservación y restauración

El Título II desarrolla los criterios básicos de conservación y restauración. En primer lugar, para la realización de intervenciones sobre bienes inscritos en el CGPHA, indica que se deben hacer conforme a los medios de la ciencia y la técnica de conservación, restauración y rehabilitación.

Las restauraciones deben respetar las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará cuando quede fundamentado que los elementos que son suprimidos suponen una degradación del bien y su eliminación es necesaria para permitir una adecuada conservación y una mejor interpretación histórica y cultural de aquél, debiendo ser documentadas de forma adecuada las partes que sean suprimidas.

Los materiales que se empleen en la conservación, restauración y rehabilitación deben ser compatibles con el bien. En el momento de elegirse se seguirán criterios de reversibilidad, debiendo ofrecer

comportamientos y resultados suficientes y contrastados. Los métodos constructivos que se empleen utilizarán materiales acordes con la tradición del elemento de que se trate.

En la realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el CGPHA, se exige un proyecto, de conservación⁴⁴⁶. Cuando se acabe la intervención, se deberá presentar ante la Consejería competente en materia de patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de esas intervenciones en el plazo y con el contenido que se haya determinado reglamentariamente para el supuesto.

La Consejería competente en materia de patrimonio histórico está facultada para inspeccionar en todo momento el desarrollo de las tareas de conservación, restauración y rehabilitación de los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Andaluz.

En situaciones de emergencia, se puede intervenir sin que sea necesario el proyecto de conservación, siempre que esas tareas resulten necesarias para evitar un riesgo grave para las personas o los bienes

⁴⁴⁶ Este proyecto de conservación debe contener como mínimo lo siguiente:

“1. Los proyectos de conservación, que responderán a criterios multidisciplinares, se ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine, incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.
2. Los proyectos de conservación irán suscritos por personal técnico competente en cada una de las materias”.

inscritos. Esta situación de emergencia⁴⁴⁷ debe acreditarse a través de un informe suscrito por un profesional competente y ponerse en conocimiento de la Consejería competente en la materia de patrimonio histórico, en adelante CCPH, antes de que se inicien estas medidas y, una vez finalizadas, debe presentarse un informe descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de las intervenciones de emergencia realizadas. Estas intervenciones han de ser solamente las estrictamente necesarias, puesto que se deben evitar las de carácter irreversible y hay que reponer los elementos una vez acabadas las mismas. En el caso de que se deba hacer algún tipo de demolición, esta debe realizarse conforme a los artículos 33, 34, 37 y 38 de la LPHA⁴⁴⁸.

d) Patrimonio Arqueológico

El Patrimonio Inmueble puede dividirse dependiendo de su tipología en⁴⁴⁹: Monumentos⁴⁵⁰, Conjuntos Históricos⁴⁵¹, Jardines

⁴⁴⁷ En el caso de que la situación de emergencia se deba a la interrupción de unas obras o intervenciones en bienes, se requerirá al responsable de las mismas para que proceda a tomar las medidas que sean necesarias de forma inmediata. Si el requerimiento no fuera atendido, la CCPH puede proceder a la ejecución subsidiaria en virtud de las competencias propias y utilizando la contratación de emergencia si fuera necesario.

⁴⁴⁸ Art. 24 de la LPHA.

⁴⁴⁹ A. MOURE ROMANILLO, *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cit., p. 39.

⁴⁵⁰ El art. 26 de la LPHA define los “Monumentos” como: “los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen”.

⁴⁵¹ El art. 26 de la LPHA define los “Conjuntos Históricos” como: “las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,

Históricos⁴⁵², Sitios Históricos⁴⁵³, Zonas Arqueológicas⁴⁵⁴, Lugares de Interés Etnológico⁴⁵⁵, Lugares de Interés Industrial⁴⁵⁶ y Zonas patrimoniales⁴⁵⁷. En principio, el patrimonio arqueológico subacuático inscrito como bien de interés en el CGPHA debe ser incluido en alguna de esas categorías, al no existir ninguna específica para él. Por ello, debe estar compuesto por “Monumentos” en el caso de que se trate de estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que

etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación”.

⁴⁵² El art. 26 de la LPHA define “Jardines Históricos” como: “los espacios delimitados producto de la ordenación humana de elementos naturales, a veces complementados con estructuras de fábrica, y estimados de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos”.

⁴⁵³ El art. 26 de la LPHA define “Sitios Históricos” como: “los lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial.”

⁴⁵⁴ El art. 26 de la LPHA define “Zonas Arqueológicas” como: “aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante relacionados con la historia de la humanidad”.

⁴⁵⁵ El art. 26 de la LPHA define “Lugares de Interés Etnológico” como: “aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico”.

⁴⁵⁶ El art. 26 de la LPHA define “Lugares de Interés Industrial” como: “aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico”.

⁴⁵⁷ El art. 26 de la LPHA define “Zonas Patrimoniales” como: “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”.

expresamente se señalen; o como un “Sitio Histórico” si se trata de un lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado que posean un relevante valor histórico o arqueológico⁴⁵⁸, como puede ser alguna de las batallas históricas que se produjeron en las costas andaluzas; en su defecto debe figurar inscrito como “Zona Arqueológica”, al estar formado por espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante relacionados con la historia de la humanidad.

Para la inscripción de este tipo de bienes de interés cultural, debe concretarse el objeto central que ha de protegerse, así como el espacio y entorno⁴⁵⁹. Además, se deben hacer constar tanto los bienes muebles que se encuentran afectados como las actividades de interés etnológico que por su vinculación al bien inmueble puedan realizarse en el mismo. Estos bienes gozan de la protección de BIC⁴⁶⁰.

En el caso de que sean declarados como BIC, su entorno también quedará protegido para evitar la alteración de los valores propios del bien de que se trate, de forma que se pueda contemplar de

⁴⁵⁸ J. R. ROBLES REYES, “Capítulo 10. Ecos del mar, la religión y el poder en las costas bizantinas de Almería”, en J. VIZCAINO SÁNCHEZ, R. RODRÍGUEZ LÓPEZ y J. R. ROBLES REYES, *Navegando en un mar sin orillas: El legado de Roma y Bizancio en el sureste de Hispania*, Universidad de Almería, 2015, pp. 197-207.

⁴⁵⁹ C. BARRERO RODRÍGUEZ, “El derecho andaluz del patrimonio histórico en el vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía”, *Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública*, Extra 2 (2), 2003, pp. 337-358.

⁴⁶⁰ V. CASTILLA PENALVA, *El Patrimonio histórico, incidencia en la disciplina urbanística y en el deber de conservación de las edificaciones. Estudio de la normativa andaluza y normativa básica estatal*, cit., p. 305.

manera completa, apreciarse o estudiarse, pudiendo protegerse tanto los bienes colindantes inmediatos como los no colindantes o alejados. La protección del entorno también conlleva que, para cualquier actuación que se quiera realizar en dicho bien o en el entorno, se requiera autorización, siendo la motivación de este requisito burocrático la evitación de alteraciones no consentidas, así como poner en conocimiento de la Administración los posibles cambios que puedan afectar al bien⁴⁶¹.

Pese a que el patrimonio arqueológico subacuático puede aparecer como un BIC, en la mayoría de los casos aparecerá como Patrimonio Arqueológico, es decir, como bienes muebles o inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. También forman parte del Patrimonio Arqueológico los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes

Además, el art. 49 de la LPHA establece que son bienes de dominio público andaluz todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Andaluz y que sean descubiertos como consecuencia de las excavaciones,

⁴⁶¹ Art.28 de la LPHA.

remociones de tierra, obras o actividades de cualquier índole o por azar, de acuerdo con la legislación estatal.

El personal titular de la CCPH puede declarar una Zona de Servidumbre Arqueológica sobre aquellos espacios claramente determinados en que se presume de manera motivada la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias⁴⁶². La Orden de 20 de mayo de 2009, por la que

⁴⁶² A modo de ejemplo, se muestran los hechos que han producido que se declare como Zona de Servidumbre arqueológica el espacio subacuático “Ensenada de Málaga”. La zona está claramente determinada, puesto que está compuesta por “la localización en torno al puerto de Málaga y a la desembocadura del río Guadalmedina.” La manera motivada por la que se declara esta Zona de Servidumbre es “Por las noticias arqueológicas, el enclave de Málaga ha estado ocupado desde la Antigüedad hasta la actualidad. Su puerto ha tenido una gran actividad comercial y ha sido escenario de diversos episodios navales, constatados a través de las fuentes documentales, incluso desde la protohistoria. Sin embargo, y por el momento los registros arqueológicos de éste se adscriben a época medieval y moderna.

El proceso de colmatación que ha sufrido progresivamente la ciudad de Málaga a lo largo de su historia, debido a los aportes aluviales del río Guadalmedina, han causado un avance paulatino de los cantiles portuarios hacia el mar. Este hecho haría suponer que cualquier vestigio del puerto de época fenicia y romana, ya hubiera estado situado de cara al mar o en la cara interna de la desembocadura del río, se encontraría hoy en el interior de la ciudad.

Por otra parte, son abundantes las referencias sobre naufragios acaecidos en el interior del puerto y en sus proximidades. Desde el punto de vista arqueológico, los escasos datos que se poseen proceden de obras marítimas como el dragado del puerto llevado a cabo en 1874 donde se extrajo un cepo romano. Por otro lado, en el transcurso de las obras de remodelación del Puerto de Málaga llevadas a cabo entre los años 1997 y 1998, se localizaron y extrajeron unas 50 ánforas de época romana. En concreto, los vestigios se localizaron durante la ampliación del Dique Este del Puerto de Málaga (o Dique de Levante) a una profundidad de -12, -18 metros”

Por último, es necesario adoptar estas medidas debido a los múltiples episodios que se han producido a lo largo de su historia de forma que indica lo siguiente:

“El resto de la información hace referencia a distintos episodios marítimos de relevancia histórica y a naufragios acaecidos tanto en el interior del puerto como frente a la ciudad de Málaga. Las fuentes de documentación consultadas han sido tanto bibliográficas como archivísticas. De todas estas noticias destacan: la batalla naval de

resuelve declarar como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz, como su propio título indica enumera 42 casos en que el objeto de protección es el patrimonio subacuático de Andalucía⁴⁶³.

Málaga de 1483-1487; el naufragio de una nave pirata en 1611; el combate naval de Málaga de 1656, con el hundimiento de una nave berberisca en enfrentamiento con una flota genovesa; el bombardeo inglés de Málaga de 1656, en el que se hundieron tres navíos y dos galeras; el encallamiento de tres navíos en playa de San Andrés en 1661; el naufragio de un navío en el Torreón del Obispo de 1683; el bombardeo francés de 1693 que provocó el hundimiento de diez embarcaciones frente a la Puerta del Mar; el hundimiento de tres embarcaciones en batalla naval frente a Málaga entre escuadras francesas y la anglo-holandesa en 1704; el naufragio del navío El Conquistador en 1736; el naufragio del navío Nuestra Señora de la Concepción en 1754; el hundimiento del barco de guerra Castilla en el año 1755; el hundimiento de un navío corsario argelino en 1759; el naufragio por temporal de la balandra Segunda Resolución y del bergantín Triunfo de María en 1785; los naufragios a causa del temporal de la goleta Nueve de Mayo, del bergantín goleta francés Favourite, del laúd Nuestra Señora del Carmen, de las goletas Nicolasa y Tuguidao, del bergantín goleta Hernán Cortés, del laúd San Antonio y de la barca rusa Constanza, todos ellos en 1852; el incendio y posterior hundimiento del buque de suministro Génova en 1859; el naufragio de la goleta conocida con el nombre de ¿Qué dirán? en 1860, a causa del temporal; el naufragio de un vapor mercante en 1874; el naufragio de la balandra Felanich en 1888; la goleta inglesa Charles Napier, que quedó varada en la playa de San Andrés en 1893; el naufragio a causa del temporal del laúd San Antonio en 1901, así como el incendio y posterior hundimiento del vapor correo de África llamado Sagunto, en 1917”.

⁴⁶³ 1. Espacio subacuático Adra. 2 Espacio subacuático Guardias Viejas-Punta de los Baños. 3. Espacio subacuático Los Percheles. 4. Espacio subacuático Laja del Palo. 5. Espacio subacuático Roquetas-Aguadulce. 6. Espacio subacuático Morro Genovés-Cala Higuera. 7. Espacio subacuático Playazo de Rodalquilar. 8. Espacio subacuático Cala e Islote de San Pedro. 9. Espacio subacuático Punta de los Muertos-Punta de la Media Naranja. 10. Espacio subacuático Río Aguas-Mojácar. 11. Espacio subacuático Villaricos. 12. Espacio subacuático Bahía de Cádiz. 13. Espacio subacuático Trafalgar. 14. Espacio subacuático Ensenada de Bolonia. 15 Espacio subacuático Isla de Tarifa. 16. Espacio subacuático Bahía de Algeciras. 17. Espacio subacuático Desembocadura del Río Borondo. 18. Espacio subacuático Punta de Cerro Gordo a Cabo de Sacratif. 19. Espacio subacuático Puerto de la Laja. 20. Espacio subacuático

Esta misma Orden define la Zona de Servidumbre Arqueológica como “espacios definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz, cuya identificación, descripción y delimitación, figuran en el anexo a la presente Orden”.

El procedimiento para la declaración de la Zona de Servidumbre Arqueológica se inicia de oficio, estando cualquier persona física o jurídica autorizada para instar a la CCPH a través de una solicitud motivada que inicie las actuaciones en una zona concreta, y produciéndose el silencio negativo pasados los tres meses desde su presentación sin haberse dictado una resolución expresa y notificado la misma. En el procedimiento de declaración de las Zonas de Servidumbre Arqueológica debe darse audiencia en el plazo de un mes a los municipios afectados, a la Comisión provincial competente en

río Guadiana. 21 Espacio subacuático zonas portuarias-Marismas del Odiel. 22. Zona de servidumbre arqueológica del río Guadalquivir. 23. Espacio subacuático Arenas Gordas-Desembocadura del Guadalquivir. 24. Espacio subacuático Fondeadero del Cristo. 25. Espacio subacuático El Padrón. 26. Espacio subacuático Los Cañones. 27. Espacio subacuático Puerto Banús. 28. Espacio subacuático Laja Bermeja. 29. Espacio subacuático desembocadura río Guadalhorce. 30. Espacio subacuático Ensenada de Málaga. 31. Espacio subacuático desembocadura del río Vélez. 32. Espacio subacuático desembocadura del río Algarrobo. 33. Espacio subacuático Faro de Torrox. 34. Pecio del Delfín. 35. Espacio subacuático Laja de Punta Chullera. 36. Espacio subacuático La Rada de Estepona. 37. Espacio subacuático desembocadura del río Guadalmina. 38. Espacio subacuático El Placer de las Bóvedas. 39. Espacio subacuático Piedras de Marcelino. 40. Espacio subacuático Sohail. 41. Espacio subacuático Torremuelle. 42. Espacio subacuático de la Villa Romana de Benalmádena.

materia de urbanismo⁴⁶⁴ y en su caso a los organismos competentes sobre el dominio público marítimo. Junto a este plazo de un mes de audiencia, también debe abrirse un plazo de información pública. Una vez recogidas las alegaciones pertinentes y pasado el plazo, se publicará la resolución del procedimiento con la declaración de la Zona de Servidumbre Arqueológica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en adelante BOJA⁴⁶⁵).

El Régimen de la Zona de Servidumbre Arqueológica establece que la realización de obras de edificación o de cualquier otra actuación que lleve aparejada la remoción de terrenos se debe notificar a la CCPH con una antelación mínima de 15 días. Una vez recibida la notificación, la CCPH dispone de un plazo de 15 días para ordenar la realización de las catas o prospecciones arqueológicas. En todo momento, la CCPH está facultada para inspeccionar las actuaciones que se realicen en las Zonas de Servidumbre Arqueológica⁴⁶⁶.

Al mismo tiempo, la LPHA establece el régimen de los hallazgos casuales en su art. 50, en el que se establece que, cuando aparezcan objetos o restos materiales de forma casual que posean valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz, se notifiquen a la CCPH o al Ayuntamiento correspondiente para que este lo traslade a la

⁴⁶⁴ A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, “La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2007) y el Planteamiento Urbanístico”, *E-RPH. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico*, nº. 3, 2008, pp. 3-28.

⁴⁶⁵ Art. 48 de la LPHA.

⁴⁶⁶ Art. 49 de la LPHA.

CCPH en el plazo de 24 horas. La dificultad se encuentra en el desconocimiento que puedan tener los ciudadanos acerca de qué se considera Patrimonio Histórico Andaluz.

La LPHA también establece que no se puede proceder a la remoción de los restos o bienes hallados sin la autorización y supervisión previa de la CCPH, debiéndose conservar en el lugar del hallazgo y facilitar la puesta a disposición de la Administración. Cuando existan razones de urgencia, la Alcaldía de los municipios respectivos podrá ordenar la interrupción de los trabajos por un plazo máximo de dos meses. Esta paralización no comporta derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la CCPH podrá prorrogarla por tiempo superior a dos meses, quedando obligada a resarcir los daños efectivos que se causen derivados de la paralización. Esto se debe a que en el primer caso no se cumplen todos los requisitos legales de la responsabilidad patrimonial, al existir un deber de soportarlo por mandato legal hasta los dos meses.

La CCPH puede ordenar la intervención arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras. Los hallazgos casuales deben ser objeto de depósito en el museo o institución que se determine para el caso concreto.

Tanto la persona que descubre como la propietaria del lugar en que se hubiera encontrado tendrán derecho a la mitad del valor que se

le atribuya al bien en tasación legal, de acuerdo al justiprecio⁴⁶⁷, en concepto de premio en metálico. Tratándose de patrimonio subacuático esto no debe tenerse en cuenta, al ser los bienes de dominio público. Si fueran dos o más las personas descubridoras, la cantidad se distribuirá de manera igualitaria entre las partes.

La CCPH puede realizar excavaciones, prospecciones, restauraciones, consolidaciones o actividades de difusión. Las actuaciones que tengan como finalidad evitar el deterioro o destrucción del Patrimonio Arqueológico Andaluz, que deben realizarse sin mayor dilación, tendrán la consideración de obras que se tramitarán a través del trámite de urgencia, de acuerdo al contenido del TRLCSP. Además, se considerará de utilidad pública la ocupación de los inmuebles necesarios para la realización de actuaciones arqueológicas. Cuando se trate de prospecciones arqueológicas⁴⁶⁸ necesarias para la formación del proyecto o el replanteo de una obra pública, será de aplicación el contenido de la LEF.

⁴⁶⁷ Para saber cuál es el valor del justiprecio aplicable en estos casos se debe seguir el procedimiento y las normas reguladas en los artículos del Capítulo III, del Título III sobre los procedimientos especiales de la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa.

⁴⁶⁸ El Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, define en su art.2 b) “prospección arqueológica” como “la exploración superficial y sistemática realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos”. En idéntico sentido es definida en el art. 52.2.b) de la LPHA.

e) Tipos de actividades arqueológicas

Las autorizaciones de actividades arqueológicas serán necesarias para la realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas⁴⁶⁹, el análisis de estructuras emergentes, la reproducción y estudio del arte⁴⁷⁰, las labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas, así como las actuaciones de cerramiento, vallado, cubrición y documentación gráfica y también para el estudio de la metodología arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La responsable de la autorización de los mismos será la CCPH. Si se trata de actividades arqueológicas promovidas por la CCPH, la autorización será sustituida por el visado previo del proyecto, a efectos de comprobar la idoneidad de la técnica a utilizar, así como la metodología aplicable.

El art. 3 de Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, divide las excavaciones en los siguientes tipos: excavación arqueológica

⁴⁶⁹ La LPHA define en su art. 52. 2. a) excavación arqueológica como la excavación “tanto terrestre como subacuática, la remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados con ellos”. De forma idéntica es definida por el art. 2.a) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

⁴⁷⁰ El art. 52.3.c) de la LPHA, define la “reproducción y estudio” como “el conjunto de trabajos de campo orientados a la investigación, documentación gráfica o, excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos figurados”.

extensiva⁴⁷¹, sondeo arqueológico⁴⁷², control arqueológico de movimientos de tierras⁴⁷³ y análisis arqueológico de las estructuras emergentes⁴⁷⁴.

Este mismo Decreto divide las actividades arqueológicas a efectos de autorización en aquellas que estén previstas en un Proyecto General de Investigación y las no incluidas en un Proyecto General de Investigación. Estas últimas se pueden clasificar en puntuales (no están dispuestas por una norma, pero se consideran necesarias por razones de metodología, de interés científico o de protección del patrimonio arqueológico), preventivas y urgentes.

El desarrollo de la actividad arqueológica debe hacerse a cargo del personal directivo, que tiene la obligación de llevar un libro de incidencias y órdenes, llamado libro diario, de acuerdo con el modelo oficial. Terminada la actividad, debe extenderse diligencia de

⁴⁷¹ El art. 3 a) define “excavación arqueológica extensiva” como “aquella en la que predomina la amplitud de la superficie a excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico y la extracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos o paleontológicos”.

⁴⁷² Su art. 3 b) define “sondeo arqueológico” como “la remoción de tierra en la que predomina la profundidad de la superficie a excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la secuencia estratigráfica completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos tendrá la consideración de sondeo arqueológico”.

⁴⁷³ Su art. 3 c) define “control arqueológico de movimientos de tierras” como “el seguimiento de las remociones de terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida de bienes muebles”.

⁴⁷⁴ Su art. 3 d) “análisis arqueológico de estructuras emergentes” como “a actividad dirigida a la documentación de las estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmueble, que se completará mediante el control arqueológico de la ejecución de las obras de conservación, restauración o rehabilitación”.

finalización del libro diario. En ella deberá aparecer el grado de adecuación de los trabajos realizados al proyecto autorizado, la adopción de las medidas necesarias para asegurar la conveniente conservación de los vestigios aparecidos, así como las incidencias que hayan surgido a lo largo del desarrollo de la actividad y que hayan provocado modificaciones en la misma.

Al mismo tiempo, una vez terminada la actividad, la dirección de la misma debe presentar una memoria preliminar sobre la actividad acabada a los treinta días. Los requisitos que debe contener son, como mínimo, las causas que motivaron la actividad, los datos del inmueble, parcelas o área, la evaluación del resultado de la actividad arqueológica, las estructuras registradas, las actuaciones de estudio directo, la documentación gráfica y la propuesta de conservación.

Posteriormente, hay que remitir la Memoria de la actividad arqueológica y la Memoria final del Proyecto General de Investigación a la Delegación Provincial de Cultura correspondiente, pudiendo, posteriormente, otorgarle la Dirección General de Bienes Culturales la autorización para publicar los resultados de la misma.

Una vez acabada la actividad arqueológica, la dirección de la misma debe presentar un inventario detallado de los materiales encontrados, teniendo un plazo de dos meses para entregar tres ejemplares del inventario a la Delegación Provincial de Cultura correspondiente. El contenido mínimo será la composición de las materias primas, contextos, unidades de estratificación, números de

registro y referencias de los embalajes⁴⁷⁵. Cuando se entregan los bienes muebles en depósito, se debe realizar un inventario de los mismos que se integran en el depósito correspondiente.

f) Autorización

Pueden obtener autorización para llevar a cabo actividades arqueológicas:

- a) Las personas físicas, individualmente consideradas o formando equipos de investigación, que cuenten con la titulación o acreditación profesional que normativamente se determine.
- b) Los departamentos de universidades u otras instituciones científicas, españolas o comunitarias, relacionados con la investigación del Patrimonio Arqueológico.
- c) Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de Arqueología.
- d) Los institutos de Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- e) Las Administraciones públicas que pretendan realizar tales actividades directamente y cuenten con el personal debidamente titulado o acreditado para ello.

⁴⁷⁵ Art. 38 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Si se trata de los casos a) o b) y sus componentes son extranjeros no comunitarios, la solicitud debe acompañarse de un informe emitido por otra persona o institución española entre las anteriores, pudiendo la CCPH contrastar la información aportada en cuanto a títulos y experiencia profesional⁴⁷⁶.

El procedimiento de autorización se desarrolla conforme a los trámites establecidos reglamentariamente. La solicitud debe contener los datos del solicitante o del representante legal si es una institución o persona jurídica, las personas que componen la dirección, así como la titulación académica y *curriculum* del equipo de investigación, debiendo ser suscrita por un arqueólogo titulado, que será el encargado de la dirección de los trabajos.

Además de la propuesta de actividad o actividades arqueológicas, en el caso de las prospecciones debe especificar si se recogerá material o no, una memoria con los objetivos de la investigación, especificación por fases de la actividad, delimitación del área, desarrollo de la metodología a poner en práctica, informe de las medidas de protección físicas y conservación y aquellas que se consideren oportunas como medidas de extracción, almacenamiento in situ, traslado y depósito definitivo, estudio detallado de la actividad y las medidas posteriores de conservación incluyendo un plan de costes

⁴⁷⁶ A. CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, “Los informes preceptivos en su tramitación y la planificación territorial y urbanística andaluza: la espiral de complejidad”, *Práctica Urbanística*, n.º. 140, Sección Estudios, pp. 11-13.

en el que se acrediten las fuentes de financiación y un documento de seguridad y salud laboral así como el personal designado al efecto. Dependiendo del tipo de actividad arqueológica que se quiera desarrollar, se exigirá un mayor o menor número de documentos.

En la resolución por la que se conceda la autorización se deben indicar las condiciones especiales a las que deben sujetarse los trabajos, así como el museo o centro en el que se depositarán los hallazgos. La CCPH es quien establece las condiciones técnicas para el ingreso de los materiales arqueológicos en los museos o centros⁴⁷⁷.

Junto a la solicitud de autorización debe acompañarse una declaración responsable en la que se contenga el compromiso de obtener el resto de autorizaciones y licencias exigibles, siendo responsable el director de la actividad arqueológica o la promotora de la misma. Entre las solicitudes especiales que aparecen en la LPHA, se encuentra la autorización del uso de detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permiten localizar los restos arqueológicos sin ser esta su finalidad.

La CCPH puede autorizar mediante un procedimiento simplificado la realización de actividades arqueológicas de urgencia cuando considere que existe peligro de pérdida o destrucción del

⁴⁷⁷ En las excavaciones terrestres figura un requisito adicional, el de obtener los permisos de la propiedad de los terrenos una vez otorgada la autorización arqueológica.

Patrimonio Arqueológico, limitándose estas actuaciones a las medidas necesarias para superar la situación de urgencia⁴⁷⁸.

Las autorizaciones pueden ser revocadas por disconformidad con los trabajos ejecutados o con el proyecto o actividad autorizada, por el cambio no autorizado en la dirección de la actividad o por incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización o por incumplir cualquier otra de las obligaciones que establece la LPHA. La revocación de la autorización no exonera a la persona autorizada del deber de conservar el yacimiento o los vestigios hallados y de entregar la documentación que se haya producido mientras durase la actividad arqueológica sobre los distintos elementos y actividades⁴⁷⁹.

La dirección de la actividad puede renunciar a la misma, pero debe presentar ante la Delegación Provincial correspondiente una comunicación motivada por escrito en un plazo mínimo de quince días. En tres días la Delegación remitirá a la Dirección General de Bienes Culturales para que resuelva. Si se trata de actividades preventivas, el promotor de la actividad propondrá una nueva dirección de conformidad con el órgano autorizante. En el caso de que las actividades sean urgentes, corresponde a la Delegación Provincial un nuevo nombramiento de esta dirección.

Entre las obligaciones que tienen los responsables de la actividad arqueológica se encuentra la de permitir y facilitar las labores

⁴⁷⁸ Art. 58 de la LPHA.

⁴⁷⁹ Art. 55 de la LPHA.

del personal inspector de la Administración, pudiendo este permanecer en el yacimiento y controlar la correcta ejecución del proyecto que haya sido autorizado. También puede analizar los descubrimientos realizados, el inventario correspondiente y la metodología aplicable. A su vez, estos inspectores deberán informar a la CCPH⁴⁸⁰.

g) Proyectos Generales de Investigación

Los Proyectos Generales de Investigación no vienen definidos en la LPHA, sino en el Título II del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, siendo definidos en su art. 14 como “los documentos de carácter básico donde se explicitan los objetivos de investigación histórica, conservación y puesta en valor en un ámbito territorial determinado.” En ellos deben establecerse los criterios y la metodología que rigen las

⁴⁸⁰ Las obligaciones que tiene el órgano director de la actividad arqueológica de acuerdo con el art. 57 de la LPHA, son las siguientes:

Que la dirección de los trabajos se ejerza de manera personal por el responsable de la misma, no pudiéndose ausentar del lugar de la actividad arqueológica sin causa justificada debiendo quedar reflejada en el libro diario de la actividad y delegarse esta responsabilidad en una persona que reúna los requisitos de titulación, especialización y conocimientos de la problemática del yacimiento.

Comunicar fehacientemente, con una antelación de cuarenta y ocho horas, a los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico el día en que vayan a comenzar los trabajos, y el día de su terminación, haciéndolo constar en el libro diario.

Llevar un libro diario en el que se anotarán las incidencias y órdenes que se produzcan. Depositar los materiales encontrados en el museo o centro que se señale en la autorización de la actividad.

Presentar, de la manera en que reglamentariamente se determine, la memoria científica en sus distintas modalidades con los resultados obtenidos, un inventario detallado de los materiales encontrados y el acta de entrega de los citados materiales al museo o centro correspondiente.

actividades arqueológicas, los estudios complementarios o las actuaciones sobre los bienes que pertenecen al patrimonio arqueológico que los desarrollen. Los yacimientos, zonas arqueológicas, áreas geográficas o conjuntos históricos donde se desarrolle la actividad arqueológica subacuática deben tener uno o varios en función del tipo concreto⁴⁸¹.

La Consejería de Cultura es el órgano encargado de promover la redacción de los Proyectos Generales de Investigación científica o de valoración en los ámbitos territoriales concretos. Las condiciones para obtener la autorización y dirigir un Proyecto General de Investigación se corresponden con las que se exigen para la solicitud de una autorización para llevar a cabo actividades arqueológicas, teniendo como límite que sólo se puede ser responsable de un Proyecto de Investigación al mismo tiempo.

La duración del Proyecto será de un máximo de seis años, ampliables por otros seis, siendo imprescindible para optar a esta ampliación haber presentado toda la documentación administrativa y científica que haga referencia al Proyecto.

En la solicitud del Proyecto de Investigación se deben cumplir los mismos requisitos que para la autorización de la actividad arqueológica y así no realizar una exposición reiterativa. Los elementos

⁴⁸¹ VV.AA., “El conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático desde la perspectiva de las fuentes documentales”, *Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 73, 2010, p. 115.

del procedimiento de solicitud del Proyecto de Investigación se recogen en los arts. 17 a 19 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

h) Inspección del Patrimonio Histórico

La potestad de inspección en las materias reguladas en la LPHA y sus normas de desarrollo debe ser ejercida por la CCPH a través de los centros directivos y unidades orgánicas determinadas por reglamento. Esta potestad se ejerce en materia de instituciones del Patrimonio Histórico, Patrimonio Documental y Bibliográfico⁴⁸². El personal inspector tendrá la condición de agente de autoridad, con las facultades y protección que le confiere el art. 56 de la LPHA. El personal inspector debe estar provisto de acreditación e identificación para poder desarrollar las competencias y facultades asignadas en el lugar donde se produce la actividad arqueológica.

Las Administraciones públicas de Andalucía y las personas que estén obligadas al cumplimiento de la LPHA deben prestar toda la colaboración que sea requerida por el personal inspector, con la finalidad de permitir las inspecciones y comprobaciones de la forma más adecuada posible. Las facultades del personal inspector están enumeradas en varios artículos de la LPHA (arts. 56 y 104), siendo estas:

⁴⁸² Art. 103 de la LPHA.

a) La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de patrimonio histórico, especialmente la persecución de las actividades ilegales. Para ello, podrá requerir la subsanación de las deficiencias apreciadas, proponer las medidas cautelares oportunas y, en su caso, el inicio de los procedimientos sancionadores que procedan.

b) Requerir en el ejercicio de sus funciones el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) Aquellas otras que, en función de su naturaleza, le encomiende la CCPH.

Las actuaciones inspectoras deben quedar plasmadas en documentos públicos formalizados por la Administración, observándose en ellos los principios de igualdad, contradicción y defensa. Estos tendrán valor probatorio de los hechos que figuren en los mismos siempre que hayan sido constatados de forma personal por los agentes habilitados. La presunción de veracidad de los mismos admite prueba en contrario.

i) Régimen sancionador

La LPHA prevé un régimen sancionador aplicable en determinados casos⁴⁸³, siempre que dichas acciones no constituyan un

⁴⁸³ M. ORTÍZ SÁNCHEZ y M. A. ALBERT MUÑOZ, “La protección del patrimonio arqueológico subacuático, competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Caso Odyssey”, cit., pp. 157-170 y M. A. ALBERT MUÑOZ y M. ORTÍZ SÁNCHEZ, “Odyssey la protección del patrimonio arqueológico por las

ilícito penal. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio y está regulado en los arts. 117 y 118.

Dado que el régimen aplicable puede contener múltiples ilícitos, se van analizar solamente aquellos que de una forma u otra puedan ser aplicables al patrimonio arqueológico subacuático. No está demás traer a colación el pronunciamiento del TC en su STC 38/2002 de 14 febrero, en la que clarifica que la competencia de la Junta de Andalucía en materia de competencia arqueología subacuática se limita a la zona marítimo-terrestre y no al mar territorial⁴⁸⁴.

El art. 106 recoge el concepto de lo que debe entenderse como infracciones. En este sentido, “son infracciones administrativas en materia de protección del Patrimonio Histórico Andalúz las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y las que lleven aparejado daño en los bienes del Patrimonio Histórico”, siendo tipificadas a lo largo del Título XIII de la LPHA. Las infracciones contra el PHA se clasifican en muy graves, graves y leves.

Las infracciones graves que pueden afectar al patrimonio arqueológico subacuático están del art. 109 de la LPHA⁴⁸⁵.

comunidades autónomas”. *Revista PH Instituto Andalúz del Patrimonio Histórico*, nº. 82, 2012, pp. 46-49.

⁴⁸⁴ M. A. ALBERT MUÑOZ y M. ORTÍZ SÁNCHEZ, “Odyssey la protección del patrimonio arqueológico por las comunidades autónomas”, cit. p.48.

⁴⁸⁵ a) el incumplimiento de las órdenes de ejecución adoptadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico; b) la realización de cualquier obra o intervención que contravenga los criterios de conservación; c) la realización de

Entre las muy graves se encuentran el desplazamiento o remoción de un inmueble inscrito en el CGPHA, la destrucción de restos arqueológicos y paleontológicos inscritos en el CGPHA, así como la destrucción de los yacimientos inscritos en el mismo que suponga una pérdida de información irreparable. En general, dentro de esta categoría se encuentran todas aquellas acciones que lleven aparejada la pérdida o desaparición o que produzcan daños irreparables en los bienes inscritos en el CGPHA.

Las infracciones leves serán aquellas que supongan incumplimientos de la normativa establecida en la LPHA, pero que no supongan infracciones graves o muy graves.

intervenciones sin contar con el proyecto de conservación requerido; d) la realización de actuaciones de emergencias sin estar estas debidamente acreditadas o sin cumplir con los requisitos del informe profesional competente y puesta en conocimiento de la CCPH así como el informe preceptivo posterior, o que dichas actuaciones no se hayan limitado a las actuaciones que resulten necesarias; e) la inobservancia del requerimiento motivado por la interrupción de obras o intervenciones; f) remoción o desplazamiento de un bien inmueble inscrito en el CGPHA o como BCG; g) incumplimiento de las prohibiciones (...); n) la destrucción de restos arqueológicos o paleontológicos que no se hallen inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como la destrucción de los yacimientos que no se hallen inscritos en el mismo que suponga una pérdida de información irreparable; ñ) la realización de obras en Zonas de Servidumbre Arqueológica sin efectuar la notificación preceptiva; o) el incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones previstas en relación con los hallazgos casuales; p) la realización de actuaciones arqueológicas sin cumplir los requisitos previstos; q) el uso no autorizado o realizado sin cumplir los requisitos establecidos en la autorización concedida de aparatos detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos arqueológicos, en Zonas Arqueológicas y bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o en sus entornos, en Zonas de Servidumbre Arqueológica o en cualquier otro lugar en los que haya constancia de la existencia de un yacimiento o de restos arqueológicos; r) el incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de detectores de metales, entre otras.

El Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, contempla un régimen sancionador específico aplicable a las actividades arqueológicas. Hay que indicar en este sentido que esta norma se concibe como una norma de desarrollo de la antigua Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, que es derogada por la LPHA. Los reglamentos que desarrollaban esa norma siguen vigentes siempre y cuando no contradigan dicha norma. Dado que suponen una contradicción entre las diferentes calificaciones (muy graves, graves y leves de la LPHA frente a graves y menos graves), el contenido de dicha disposición no debe ser aplicable y entenderse por tanto derogado.

Los responsables de las infracciones son los autores materiales o las entidades o empresas de las que estos dependan, así como las personas técnicas o profesionales autores de los proyectos que ejerzan la dirección de las obras o proyectos. Todas las infracciones pueden ser agravadas o atenuadas dependiendo de los hechos y circunstancias personales⁴⁸⁶.

Las sanciones consisten en multas y sanciones accesorias dependiendo de infracción cometida. Entre las sanciones accesorias está la obligación de reparación y restitución de las cosas a su estado original. La CCPH está facultada para actuar de manera subsidiaria y realizar las acciones pertinentes a cargo del infractor. Otras de las

⁴⁸⁶ Art. 112 de la LPHA.

sanciones accesorias son, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante 5 años o el decomiso de los aparatos o herramientas.

Las multas en materia de Patrimonio Histórico Andaluz se sancionan con infracción para las muy graves de 250.001€ a 1.000.000€, las graves de 100.001€ a 250.000€ y las leves de 100€ a 1.000€. La cuantía nunca podrá ser inferior al doble del beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción. El destino de las multas será la conservación y restauración de los bienes que integran el Patrimonio Histórico de Andalucía o que esta gestione.

El órgano sancionador es diferente dependiendo de la multa a imponer, siendo la persona titular de la Delegación Provincial de la CCPH para sancionar las multas de hasta 100.000€, la persona titular de la Dirección General de la CCPH para aquellas que son desde 250.001€ hasta 500.000€ y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde los 500.001€ hasta 1.000.000€.

J) Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia

a) Preliminar

El patrimonio cultural murciano está protegido y regulado en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, en adelante LPCRM. Está constituido por bienes muebles,

inmuebles e inmateriales, instituciones, actividades, prácticas, usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y manifestaciones propias de la vida tradicional que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de Murcia (en adelante RM) que, independientemente de su titularidad pública o privada, o de cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, técnico o industrial o de cualquier otra naturaleza cultural⁴⁸⁷.

Esta norma establece diferentes grados de protección de los bienes culturales que se corresponden con las categorías de BIC, bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes inventariados. Los BIC pueden dividirse a su vez en monumento, conjunto histórico, jardín

⁴⁸⁷ M. MILAGROSA ROS-SALA, “Nuevos datos en torno a la presencia fenicia en la bahía de Mazarrón (Sureste ibérico)”, en F. PRADOS MARTÍNEZ y F. SALA SELLÉS, *El Oriente de Occidente: Fenicios y púnicos en el área ibérica*, Universidad de Alicante, Alicante, 2017, pp. 79-98; G. A BALLESTEROS PELEGRÍN, “Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar, Murcia”, *Ge-conservación*. 2016, nº. 9, pp. 71-83; E. RUIZ VALDERAS, “Capítulo 3. Simulacra romae. Carthago Nova, paradigma de romanización en el sureste”, en J. VIZCAINO SÁNCHEZ, R. RODRÍGUEZ LÓPEZ y J. R. ROBLES REYES, *Navegando en un mar sin orillas: El legado de Roma y Bizancio en el sureste de Hispania*, Universidad de Almería, 2015, pp. 47-66; A QUEVEDO SANCHÉZ y S. BOMBICO, “Lusitanian Amphorae in Carthago Nova (Cartagena, Spain): Distribution and Research Questions”, en I. VAZ PINTO, R. DE ALMEIDA y A. MARTIN (Eds), *Lusitanian Amphorae: Production and Distribution, Roman and Late Antique Mediterranean Pottery* 10, Archaeopress Publishing Ltd, pp. 311-322.

histórico, sitio histórico, zona arqueológica, zona paleontológica y lugar de interés etnográfico.

Dado que la LPCRM tiene por objeto la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la RM, se establece un deber de colaboración entre las diferentes Administraciones públicas y entre estas con los particulares y la Iglesia Católica.

La Ley se divide en seis títulos. El primero regula los procedimientos de declaración de los diferentes tipos de bienes. En el segundo se contemplan los regímenes de protección. El tercero establece un régimen específico sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico. El cuarto, se dedica a la planificación cultural a través de los planes de ordenación del patrimonio cultural. El quinto señala la protección del patrimonio etnográfico de la RM y el sexto y último, establece un régimen sancionador para proteger el patrimonio cultural.

Como la mayoría del ordenamiento sectorial español en materia de protección de bienes culturales, no se diferencia entre patrimonio cultural subacuático y patrimonio arqueológico terrestre. Por ello, la protección sobre estos bienes debe hacerse de manera análoga y especificando los requisitos aplicables a estos.

b) Normas generales de protección del patrimonio cultural en la Región de Murcia

Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre BIC; bienes catalogados y bienes inventariados, deben cumplir una serie de obligaciones, entre las que se encuentran las siguientes:

- Conservarlos, custodiarlos y protegerlos de forma íntegra. Se debe comunicar el uso que se le da y la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural (en adelante DGCMP), debe velar por el cumplimiento adecuado de los usos.
- Permitir el estudio cuando lo considere la DGCMP.
- Permitir la vista pública al menos cuatro días al mes, salvo que afecte al deber de conservación. Esta obligación sólo recae sobre los bienes BIC.
- Notificar a la DGCMP los traspasos y circunstancias de la venta y los traslados.
- Cumplir las órdenes de ejecución. Este deber sólo afecta a los bienes catalogados y a los BIC.

La DGCMP puede ordenar la suspensión de licencias o autorizaciones que puedan afectar al patrimonio cultural. La ley contempla ciertas medidas para garantizar la conservación e identidad,

como la restauración, la rehabilitación, la demolición y otras. En el caso de incumplimiento grave de los deberes, la LPCRM faculta a la RM para expropiar los bienes objeto del incumplimiento del deber de conservación. También posee los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes que sean o vayan a ser traspasados.

c) Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia

En el Registro General del Patrimonio Cultural de la RM se incluyen los bienes integrantes del patrimonio cultural, es decir, está formado por el Registro de Bienes de Interés cultural de la RM, por el Catálogo del Patrimonio Cultural de la RM y por el Inventario de Bienes Culturales de la RM. En cada uno de estos tres registros se incluirán los diferentes tipos de bienes. Para ello deberán pasar por un procedimiento para su declaración y cuyos efectos y declaración serán diferentes, aunque parecidos.

El Registro General del Patrimonio Cultural de la RM funciona como un registro de carácter general y cuya gestión corresponde a la DGCMPC.

d) Bienes de Interés cultural

Los BIC⁴⁸⁸ son aquellos bienes culturales que gozan de un mayor grado de protección⁴⁸⁹ después de ser declarados mediante decreto y tras haber seguido el procedimiento contemplado en el art. 13 y siguientes de la LPCRM.

⁴⁸⁸ Pueden clasificarse en diferentes tipos:

a) “Monumento: la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, científico, industrial, técnico o social, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad singular.

b) Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia.

c) Jardín histórico: el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

d) Sitio histórico: el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que posean valores históricos, técnicos o industriales.

e) Zona arqueológica: el lugar o paraje natural en el cual existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encontrasen en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas.

f) Zona paleontológica: el lugar o paraje natural en el cual existen fósiles que constituyen una unidad coherente y con entidad propia, aunque individualmente considerados carezcan de valor relevante, tanto si se encontrasen en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas.

g) Lugar de interés etnográfico: aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades propias de la RM”.

⁴⁸⁹ El régimen de protección de los bienes inventariados o catalogados se plasma solamente en el régimen de autorizaciones, no siendo necesario informes de la DGCMP, y en el régimen de comunicación de traslados y traspasos.

Este régimen de protección especial se manifiesta en la prohibición de separar los BIC de su entorno, de forma que no pueden ser objeto de desplazamiento, salvo que se considere imprescindible por interés social o fuerza mayor. Para llevar a cabo este tipo de acciones se requiere una solicitud expresa y el informe favorable de dos instituciones consultivas.

En la práctica, el patrimonio cultural subacuático, dado que no posee una categoría propia, estará protegido como zona arqueológica⁴⁹⁰. Esto es así porque estamos ante un lugar o paraje natural en el cual existen bienes muebles o inmuebles que deben ser estudiados a través de la metodología arqueológica⁴⁹¹. También podemos encontrar bienes que podrían ser susceptibles de inclusión en el patrimonio cultural subacuático en sitios históricos, como en el Parque Regional de las Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar, que entre sus elementos característicos incluye diversos pecios romanos⁴⁹².

El régimen de protección de este tipo de bienes se muestra en una serie de características que afectan al urbanismo. En el caso de

⁴⁹⁰ VV.AA., “El Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena (España)”, *Akros: Revista de Patrimonio*, nº. 7, 2008, pp. 5-8.

⁴⁹¹ La Región de Murcia posee múltiples pecios hundidos a lo largo de toda su costa que pertenecen a diversas épocas, como pueden ser las embarcaciones S/S Alavi en el Cabo de Palos; Autolycus en el Cabo de Palos; Conmay en el Cabo de Palos; Cordova en las Islas de las Hormigas; S/S Despina G. Michalinos entre las Islas Grosa y Hormigas, entre otras.

⁴⁹² G. A BALLESTEROS PELEGRÍN, “Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar, Murcia”, *Ge-conservación*, 2016, nº. 9, pp. 71-83.

declarase como ruina, estos pueden ser expropiados, y que los regímenes de protección derivados de la declaración de un BIC prevalecen sobre el planeamiento vigente.

En los BIC se prohíbe la instalación de publicidad de cualquier clase, excepto aquella autorizada de forma excepcional y que no impida o menoscabe la apreciación del bien o su integridad o identidad del mismo.

Otro de los aspectos en que se manifiesta la especial protección que reciben los BIC es que cualquier intervención que se pretenda realizar sobre ellos requiere autorización de la DGCMPC de forma previa a la concesión de licencias y autorizaciones. Además, debe justificarse dicha intervención a través de una memoria elaborada por un equipo técnico competente sobre su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Para el otorgamiento de estas licencias se establece un procedimiento especial regulado en el art. 40 de la LPCRM. Para conceder autorizaciones se deben respetar las características constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de que se pueda autorizar el uso de los elementos técnicos y materiales actuales. Al mismo tiempo, deben conservarse las características volumétricas y especiales que definen al inmueble, así como las diferentes aportaciones que se hayan realizado a lo largo de diferentes épocas.

En las intervenciones debe evitarse la reconstrucción total o parcial del bien, salvo que se utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad. Se puede realizar la reconstrucción parcial o total de parte del conjunto del bien inmueble de forma que permita apreciar cómo era el contenido original del resto de aquél. Siempre están permitidas las reconstrucciones para corregir los efectos provocados por el vandalismo o por las catástrofes naturales, del incumplimiento de los deberes de conservación o de las obras ilegales. Hay que recordar que diferentes Administraciones públicas poseen competencias en materia de inspección sobre las actividades que se estén desarrollando, siendo este un deber inexcusable de los poseedores o propietarios de los bienes, o personas que están prestando servicios o labores en los mismos.

Por último, se impone el deber de comunicar la finalización de las intervenciones a través de una memoria donde se plasme la metodología con las obras realizadas.

e) Régimen especial de los conjuntos históricos, zonas arqueológicas y sitios históricos

La LPCRM, en los arts. 43 y siguientes de la Subsección 2ª del Capítulo I del Título II, establece un régimen especial para los BIC que incluye los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas,

zonas paleontológicas y lugares de interés etnográfico⁴⁹³. Los bienes integrantes del patrimonio cultural subacuático, como ya se ha indicado con anterioridad, en la mayoría de los casos se incluirán dentro de las zonas arqueológicas, pero como no existe una definición específica y como la práctica ha demostrado que estos pueden integrar diferentes manifestaciones⁴⁹⁴, se va a hacer un análisis general y en algunos puntos entraremos al detalle específico.

En este régimen especial se especifica que, en estos bienes, no se puede fijar publicidad a través de vallas, ni instalar cables, antenas o aquellos elementos que impidan o menoscaben la apreciación de los mismos. Se exceptúan aquellos carteles que sirvan de indicadores didácticos para explicar el bien o aquellos rótulos de establecimientos existentes que informen de la actividad y usos que se desarrollan y que sean armónicos con la conservación y protección del bien.

La declaración como BIC obliga al municipio a redactar un plan especial u otro tipo de instrumento de planeamiento de protección. El contenido de estos planes debe incluir los valores a preservar y todos los bienes encuadrados dentro del mismo, las medidas de conservación de los mismos, los usos y las posibles propuestas de intervención. Además, debe declarar fuera de ordenación aquellas construcciones e

⁴⁹³ M. A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “Marco teórico-referencial para la protección, gestión y ordenación del paisaje. El caso de la Región de Murcia”, *Espacio, tiempo y forma*, nº. 10, 2017, pp. 257-280.

⁴⁹⁴ G. A BALLESTEROS PELEGRÍN, *Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar*, Murcia, cit., p. 76.

instalaciones que resulten incompatibles con el régimen de protección, pero que estuvieran ejecutadas con anterioridad a la elaboración del plan. De forma excepcional, se pueden permitir remodelaciones urbanas, siempre que impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial urbano o que sirvan para evitar usos degradantes.

f) Régimen arqueológico

El Título III de la LPCRM abarca el patrimonio arqueológico y paleontológico, pese a que este título contiene dos regímenes de protección. En este punto nos vamos a ceñir solamente al patrimonio arqueológico, siendo integrantes del mismo, según el art. 54 de la LPCRM, “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, fuesen o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas”. Como se puede ver, la definición recoge un concepto amplio, de forma que se protege el patrimonio cultural subacuático⁴⁹⁵.

Los bienes integrantes del patrimonio arqueológico son bienes de dominio público, siempre que posean los valores propios del patrimonio cultural y que sean descubiertos como consecuencia de actuaciones arqueológicas, ya sea por azar o como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier tipo realizadas

⁴⁹⁵ G. A. BALLESTEROS PELEGRÍN, *Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar*, Murcia, cit., pp. 71-83.

en lugares donde no pudiera presumirse la existencia de objetos, restos o vestigios históricos⁴⁹⁶.

Dependiendo de la motivación que dé origen a las actuaciones, estas pueden clasificarse en diferentes categorías⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ Las intervenciones en materia arqueológica pueden dividirse en:

- Excavaciones: son aquellas actividades de documentación, en su caso con extracción de restos arqueológicos con remoción de tierras, orientadas a la investigación y reconstrucción del pasado.
- Sondeos: son las excavaciones en que predomina la profundidad a excavar, en vez de la extensión, y que tienen la finalidad de documentar la extracción de los restos arqueológicos, incluyen remoción de tierras y están orientadas a la investigación y reconstrucción del pasado.
- Supervisiones: son las tareas de seguimiento, así como de coordinación, de obras o trabajos que puedan afectar a los restos arqueológicos.
- Prospecciones: son actividades de exploración superficial, subterráneas o subacuáticas, y que tienen como finalidad el registro de los elementos integrantes del patrimonio arqueológico. Pueden dividirse en prospecciones sin extracción de tierra, en las que se analiza el terreno, pero no el subsuelo y aquellas que se realizan con extracción de tierras que pueden consistir en la realización de sondeos manuales o en la extracción de testigos a través de sondeos mecánicos, con la finalidad de evidenciar la existencia de restos arqueológicos.
- Estudios: son los orientados a la investigación y documentación de las pinturas o petroglifos en su entorno arqueológico y paisaje inmediato. Difícilmente se aplicarán al patrimonio cultural subacuático.
- Análisis: se trata de actividades encaminadas al análisis documental de las estructuras emergentes que forman o han formado parte de un inmueble, que se completa a través del control arqueológico de la ejecución de las obras de conservación, restauración o rehabilitación.

⁴⁹⁷ a) Programadas: las actuaciones que se realicen con una finalidad investigadora; b) Preventivas: aquellas actuaciones derivadas de proyectos de urbanización, construcción, remodelación, ordenación, ejecución de infraestructuras, roturación o explotación del territorio que afecten al patrimonio arqueológico y c) De emergencias: aquellas actuaciones que deriven del hallazgo imprevisible y casual de elementos del patrimonio arqueológico en el transcurso de obras de construcción o remoción de tierras, así como aquellas que se realicen sobre bienes integrantes del patrimonio arqueológico y cuya conservación se encuentre amenazada como consecuencia de razones de fuerza mayor o por la intervención de un tercero.

Para llevar a cabo cualquier tipo de estas actuaciones arqueológicas se requiere una autorización de la DGCMPC. La solicitud de la autorización debe acompañarse de un proyecto detallado de la actuación que se vaya a realizar y del motivo o fundamento para llevarla a cabo.

El procedimiento para obtener la autorización de la intervención en materia arqueológica varía, dependiendo del tipo de intervención que se vaya a realizar. Por ello, las autorizaciones de emergencia deben resolverse y notificarse en el plazo máximo de un mes. Para las programadas el plazo será de seis meses y para las preventivas de tres meses, siendo el silencio negativo.

La autorización de cualquier tipo de una actuación arqueológica implica la obligación de comunicar los descubrimientos a la DGCMPC en el plazo de 48 horas y de entregarlos en el plazo de tres meses.

La obligación de comunicación y entrega también afecta a los hallazgos producidos por azar. Quien descubra objetos, vestigios o restos materiales que posean los valores propios del patrimonio cultural, ya sea por azar o como consecuencia de excavaciones, remociones de tierras, obras o cualquier otra circunstancia, debe comunicar el hallazgo y entregar los objetos y restos hallados a la DGCMPC en el plazo máximo de 48 horas. Por ejemplo, en el yacimiento de San Ferrol se

encontraron más de 200 fragmentos de cerámica, por lo que se considera de elevado interés arqueológico⁴⁹⁸.

En el caso del patrimonio cultural subacuático, sólo se impone el deber de comunicación del hallazgo, teniendo que comunicar dónde se encuentren los restos y quedarse en el lugar del hallazgo hasta que la DGCMPC tome algún tipo de decisión al respecto.

Las actuaciones arqueológicas serán sufragadas por el promotor de las mismas, aunque la DGCMPC puede subvencionarlas de forma total o parcial. Financiará las que sean de emergencia cuando se trate de garantizar la conservación del patrimonio.

La DGCMPC puede planificar áreas en las que concurren valores arqueológicos, paleontológicos o paisajístico-culturales para la conservación de los mismos a través de planes de ordenación del patrimonio cultural. Estos pueden dividirse en parques arqueológicos, paleontológicos y culturales. Hasta la fecha no se ha constituido ningún parque arqueológico que abarque patrimonio cultural subacuático, a pesar de entenderse estos como un área en la que se conozca la “existencia de uno o más yacimientos arqueológicos que por sus especiales características e integración con los recursos naturales o culturales merezca una planificación especial”.

⁴⁹⁸ G. A. BALLESTEROS PELEGRÍN, *Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar*, Murcia, cit., 80.

Estos planes de ordenación del patrimonio cultural deben contener como mínimo la definición de su ámbito territorial, la descripción de los caracteres y valores culturales del área con indicación de su estado de conservación, las limitaciones del uso, las figuras de protección, los sistemas de uso y gestión, los órganos que constituyen el área de protección y los criterios de orientación sobre las políticas aplicables. Son instrumentos de ordenación territorial obligatorios y ejecutivos, para cualquier instrumento de ordenación territorial, física o urbanística

Estos planes deben ser incoados por la DGCMPC e incluir trámites de audiencia e información pública e informe de la consejería con competencias en materia de ordenación del territorio. Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar estos planes mediante Decreto, en el plazo de dos años desde su incoación. Durante ese plazo de tiempo se impide realizar actuaciones que impliquen una transformación de forma sensible que pueda dificultar la aprobación del plan de ordenación del patrimonio cultural.

Una vez aprobado este plan de ordenación del patrimonio cultural, pueden establecerse, si no lo estaban ya, parque arqueológicos y paleontológicos.

Dado que los bienes que conforman el patrimonio cultural subacuático son de dominio público, y la protección de los mismos afecta al urbanismo, se concede de manera expresa a la ciudadanía acción pública para actuar en defensa de los bienes que lo integran.

g) Régimen sancionador

La LPCRM termina con un régimen sancionador en el que se establecen una serie de infracciones y sanciones. También se establece un procedimiento especial basado en el procedimiento general y una distribución competencial para resolver e instruir a las diferentes Administraciones públicas.

Los sujetos responsables de las mismas son las personas jurídicas y físicas, privadas o públicas, que incumplan sus obligaciones y todos aquellos que directa o indirectamente hubieran participado en obras o actividades que se realicen incumpliendo las condiciones y que conforme al CP serían considerados como autores y cómplices.



Las infracciones se clasifican según sean leves⁴⁹⁹, graves⁵⁰⁰ o muy graves⁵⁰¹.

⁴⁹⁹ a) “El incumplimiento del deber conservación, custodia y protección del patrimonio cultural de la RM, siempre que del mismo no se deriven daños graves para los bienes protegidos; b) El incumplimiento del deber de permitir el estudio de los investigadores o la visita pública de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la RM, en los términos establecidos en la presente Ley; c) El cambio de uso de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la RM sin la comunicación o notificación correspondiente; d) La realización de intervenciones sobre bienes catalogados por su relevancia cultural o inventariados sin la preceptiva autorización o incumpliendo sus condiciones, siempre que no se causen daños graves para los bienes protegidos; e) La falta de notificación a la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural de los traslados que afecten a los bienes inventariados; f) El incumplimiento de la prohibición de colocar publicidad, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación de los bienes declarados de interés cultural, siempre que no se causen daños graves para los bienes protegidos”. Serán castigadas con multas de 300€ a 100.000€.

⁵⁰⁰ “a) El incumplimiento del deber de conservación, custodia y protección del patrimonio cultural de la RM, siempre que del mismo se deriven daños graves para los bienes protegidos. b) El derribo, la destrucción total o parcial y la realización de intervenciones sobre bienes catalogados por su relevancia cultural o inventariados careciendo de la preceptiva autorización o incumpliendo sus condiciones, siempre que se causen daños graves para los bienes protegidos. c) La realización de intervenciones sobre bienes de interés cultural sin la preceptiva autorización o incumpliendo sus condiciones, siempre que no se causen daños graves para los bienes protegidos. d) No poner en conocimiento de la DGCMPC la transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho real sobre bienes declarados de interés cultural. e) La obstrucción a la facultad de inspeccionar que tiene la Administración sobre los BIC. f) La separación no autorizada de bienes muebles vinculados a bienes inmuebles declarados BIC. g) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación del hallazgo de restos arqueológicos y de la entrega de los bienes hallados. h) El incumplimiento de la suspensión de obras con motivo del descubrimiento de restos arqueológicos y de la suspensión de obras acordada por la DGCMPC. i) El otorgamiento de licencias y autorizaciones sin la previa autorización o el previo informe preceptivo de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural para la realización de intervenciones en bienes de interés cultural cuando no exista plan especial de protección o contraviniendo lo especificado en el Plan Especial de protección o en el Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural. j) La realización de actuaciones arqueológicas que afecten al patrimonio cultural de la RM sin la preceptiva autorización. k) La realización de intervenciones que contravengan los términos de la

Todas las sanciones contienen una regla general que establece que en el caso de que el daño causado pueda ser cuantificado económicamente, la sanción impuesta será multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.

Como medidas cautelares, la Administración puede adoptar todas las medidas que considere suficientes para evitar la continuación o agravamiento del daño causado.

Como medidas de reposición de la legalidad, habrá que atender a la facultad de autotutela que posee la administración para poder llevar a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por incumplimiento de deberes o por realizar acciones tipificadas entre las anteriores, que puede dar lugar a la expropiación del bien o a la realización de las obras necesarias y después la derivación al sancionado de los costes de aquéllas.

autorización, cuando se deriven daños graves al patrimonio cultural de la RM, salvo que se trate de BIC. l) El incumplimiento de la prohibición de colocar publicidad, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación de los BIC dentro de su entorno, siempre que se causen daños graves para los bienes protegidos. m) El traslado de un bien de interés cultural o catalogado sin autorización o sin cumplir con la obligación de previa comunicación a la DGCMPC. n) La reiteración de dos o más infracciones leves”, siendo castigados con una multa de 100.001€ a 200.000€.

⁵⁰¹ En cuanto a las infracciones muy graves se encuentra el derribo, la destrucción total o parcial, cualquier intervención sobre BIC sin la previa autorización, o el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización de intervenciones cuando se deriven daños graves, siendo castigadas con multa de 200.001€ a 1.000.000€.

Aunque no suponen sanciones, las Administraciones públicas también poseen la potestad de imponer multas coercitivas para hacer cumplir los deberes derivados de la LPCRM.

K) Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias

a) Preliminar

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, es la norma básica que protege el patrimonio histórico en el Archipiélago Canario ⁵⁰². Aunque se centra en la protección del patrimonio histórico por influencia de la LPHE, realmente protege el patrimonio cultural de forma general ⁵⁰³. La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias sirve como base para proteger el patrimonio cultural subacuático. Esta norma en su Exposición de Motivos señala que “el patrimonio histórico canario constituye no sólo el depósito sino el soporte de esa identidad atlántica e isleña, en la que se afianza la condición cosmopolita y la vocación universal de la

⁵⁰² M. MORENO BENÍTEZ, “Patrimonio cultural. Puesta en valor y uso. Una reflexión”, *Vector Plus*, Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Universitaria, 2002, nº. 20, pp.41-50 y VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología. Revistas de la Universidad de Oviedo*, nº. 26, pp. 188-203.

⁵⁰³ Esta no es la única norma que regula y protege el patrimonio de las Islas Canarias. Encontramos también el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervenciones arqueológicas en Canarias, y el Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento de Declaración de los Bienes de Interés Cultural de Canarias.

nacionalidad canaria. Un legado que demuestra la sabiduría y el arte de los canarios que nos precedieron y que ofrece las claves para entender el camino que nos condujo, a través de los tiempos, a nuestra realidad actual, a lo que somos hoy”.

La norma nos muestra como en la identidad canaria el océano es una parte importantísima, de forma que dichos valores deben estar amparados y reconocidos. Esta norma protege su patrimonio a través de diferentes figuras como son los BIC, Inventario de Bienes Muebles, Catálogos arquitectónicos municipales, Cartas arqueológicas municipales, Cartas etnográficas municipales y Cartas paleontológicas.

El patrimonio histórico canario es unitario con independencia del lugar en el que se encuentre, pudiendo ser los bienes de titularidad pública o privada. Dichos bienes están afectados por un régimen de conservación, protección y difusión que afecta tanto a las Administraciones públicas como a la ciudadanía que los posea o deba protegerlos. Estos derechos y obligaciones se recogen a través de una regulación que afecta a los descubrimientos y hallazgos, al régimen urbanístico, y a las autorizaciones y licencias que puedan afectar a los bienes, entre otros. Como en otras leyes autonómicas, no se prevé un apartado específico para los bienes que pueden conformar el patrimonio cultural subacuático, pese a que pueden llegar a tener cierta importancia.

b) Patrimonio Cultural Canario

El patrimonio cultural canario protege con más intensidad los bienes declarados como BIC. Estos deben ser declarados como tales tras pasar por un procedimiento especial para ello. Los bienes inmuebles pueden englobarse en diferentes categorías, como son los Monumentos, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Zona Arqueológica, Zona Paleontológica y Sitio Etnológico⁵⁰⁴.

La Ley realiza unas declaraciones genéricas sobre lo que debe considerarse como BIC en la categoría de zona arqueológica. En este caso serán los lugares, sitios, cuevas, abrigos o soportes que contengan manifestaciones rupestres. En la categoría de bien mueble, serán todas las momias, fardos y mortajas funerarias de poblaciones prehispánicas, así como las colecciones de cerámicas, ídolos y pintadas, utensilios líticos, objetos de piel y madera. En general, esta ley protege con especial relevancia el patrimonio vinculado al pasado prehispánico o guanche de las islas.

Las medidas de protección de estos bienes afectan tanto a los bienes vinculados a los mismos como al entorno y a los bienes

⁵⁰⁴ E. J. DA SILVA TOMÉ MARQUES, “Serviço Social Azul: contributo para um desenvolvimento comunitário ecológico de base local. O trabalho artístico social e ambiental de Jason de Caires Taylor”, *Espacios Transnacionales* 3/6 enero-junio 2016, pp. 132-140; V. BENÍTEZ CABRERA, “El buceo como recurso turístico de protección del Patrimonio Cultural Sumergido”, *Marine Scientist and Historian PO Box 2069*, pp. 4-10; J. FLORES MAMANI y R. L. PORTUGAL POMA, “Cronología: Archivos, Bibliotecas y Museos diciembre 2016 - enero y febrero 2016”, *Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional*, vol. 11, n°. 48, 2017, pp. 108-119.

vinculados, de forma que tendrán que estar debidamente señalizados y referenciados en los planes urbanísticos.

El régimen de los museos de Canarias completa el contenido de esta Ley. Se distingue en razón de su diferente regulación los de titularidad pública y privada, y se introduce la figura mixta del museo concertado y se regula su ámbito, insular o inferior, su carácter, general o temático, y la materia objeto del museo. En cuanto a los museos insulares, diseñados como instituciones con preferente vocación investigadora, se ha optado por reservarles en exclusiva la materia arqueológica, evitando así la dispersión de materiales y laboratorios en pequeños museos municipales.

Para todos los museos se imponen especiales deberes respecto del control de los fondos, cuyos datos informatizados, junto con los demás registros, inventarios, cartas y catálogos, constituyen el Centro de Documentación del Patrimonio Histórico canario.

En cuanto a los museos, hay que destacar el Museo Atlántico de la Isla de Lanzarote. Este museo fue creado por deCaires Taylor y está compuesto por más de 400 esculturas que recrean la vida cotidiana de los habitantes de Lanzarote. Estas esculturas se encuentran bajo el mar y son la muestra más representativa de patrimonio cultural subacuático de la Isla y posiblemente del archipiélago.⁵⁰⁵ Este proyecto está

⁵⁰⁵ E. J. DA SILVA TOMÉ MARQUES, “Serviço Social Azul: contributo para um desenvolvimento comunitário ecológico de base local. O trabalho artístico social e ambiental de Jason de Caires Taylor”, cit., pp. 132-140.

concebido para aumentar la biomasa marina y para ampliar una zona de reproducción de especies locales en un área declarada como reserva de la biosfera. Pese a que tiene una importancia más paisajística y ecológica, los elementos que lo componen perfectamente podrían integrarse en un concepto amplio de patrimonio cultural subacuático⁵⁰⁶.

A través de este proyecto se busca potenciar varios propósitos y objetivos. Por un lado, se busca cambiar la percepción que se tiene de los museos y, por otro, se quiere potenciar las actividades culturales favoreciendo el turismo y actividades locales. Por último, se quiere fomentar el disfrute del patrimonio cultural a través de otros modos para, con posterioridad, trasladar los resultados a otros bienes de patrimonio cultural subacuático de las Islas.

c) Régimen Arqueológico

El patrimonio arqueológico canario está formado por “los bienes inmuebles y muebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en el mar territorial. Forman parte, asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de Canarias, sus orígenes y antecedentes”⁵⁰⁷. Llama la atención que la propia norma

⁵⁰⁶ E. J. DA SILVA TOMÉ MARQUES, *Serviço Social Azul: contributo para um desenvolvimento comunitario ecológico de base local. O trabalho artístico social e ambiental de Jason de Caires Taylor*, cit., p.134.

⁵⁰⁷ V. ABAD SOTO, “Arqueología subacuática”, *Ingeniería Naval*, nº. 924. 2014, pp. 44-45; A. MEREDEROS MARTÍN y G. ESCRIBANO COBO, “Una etapa en la ruta

ya establezca un área de actuación y no exprese de forma general sus competencias sobre el resto del mar.

Dentro del patrimonio arqueológico se protegen también los parques arqueológicos, entendiéndose estos como “los sitios y zonas en los que, por la existencia de yacimientos arqueológicos previamente declarados de interés cultural con la categoría de Zona Arqueológica, y por su integración en el entorno natural y territorial, se declaran como tales al objeto de facilitar su comprensión y disfrute en compatibilidad con la preservación de sus valores históricos”. Hasta la fecha no se ha declarado ninguno que abarque patrimonio cultural subacuático.

Los yacimientos arqueológicos de Canarias deben ser identificados, localizados e incluidos en una carta arqueológica de ámbito municipal. Esta debe ser coordinada con la Administración competente para elaborar la Carta Arqueológica Submarina de Canarias, en la que se documenten los pecios que se encuentren en las aguas del archipiélago. Pese al mandato directo que efectúa la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, y que han transcurrido dieciocho años desde su aprobación, hasta la fecha no se ha cumplido dicho mandato de proteger el patrimonio cultural subacuático a través de la elaboración de una Carta Arqueológica Submarina de Canarias. Han sido varios autores privados los que han elaborado cartas

Mogador-Canarias. Cerámica romana en Lanzarote y su relación con los hallazgos submarinos”, *Spal*, 6, pp. 221-242 y J. F. NAVARRO MEDEROS, “Arqueología de las islas Canarias”, *Espacio, tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología* (10), 1997, pp. 447-478.

de este tipo para proteger los bienes, como la elaborada por OLMO CANALES, MARRERO QUEVEDO y BARROSO CRUZ ⁵⁰⁸.

Los yacimientos se pueden proteger de forma cautelar siempre que un promotor de obras vaya a realizar actuaciones que puedan afectar a bienes arqueológicos. En especial, las Administraciones públicas poseen competencias para suspender, paralizar o intervenir en las obras y remociones que afecten a los bienes o a su entorno. También pueden solicitar fianzas para evitar el impacto ambiental de estas actuaciones.

Toda intervención arqueológica, ya sea excavación, sondeo, prospección, reproducción o estudio de materiales arqueológicos, debe ser previamente autorizada, con la finalidad de garantizar su carácter técnico y evitar pérdidas o deterioros innecesarios. La concesión debe realizarse a través de un procedimiento especial, en el que se documentarán las tareas y actividades que se realicen. Los hallazgos casuales serán premiados y se impone el deber de conservación a los que identifiquen bienes que reúnen valores suficientes como para integrarse en el patrimonio cultural canario.

⁵⁰⁸ S. OLMO CANALES, C. MARRERO QUEVEDO Y V. BARROSO CRUZ, “El Inventario del Patrimonio Arqueológico Subacuático del Litoral Norte de Gran Canaria”, *Vegueta*, nº. 11, 2009-2011, *Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, Universidad de Las Palmas, pp. 23-30.

De forma excepcional, por razones de interés público o utilidad social, se trasladarán estructuras y elementos arqueológicos, por lo que prima la protección *in situ*.

Comunidades Autónomas sin costa

L) Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra

a) Preliminar

La Comunidad Foral de Navarra posee un importante y variado Patrimonio Cultural derivado de su larga historia y de la evolución y aportes de los distintos pueblos que han vivido en dicho territorio. La Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra, en adelante LFPCN,⁵⁰⁹ tiene su origen en una serie de normas e instituciones que hunden sus raíces en 1844 con la creación de la Comisión de Monumentos de Navarra⁵¹⁰, teniendo los precedentes normativos e institucionales diferentes objetivos y formas, pero

⁵⁰⁹ M. A. QUEROL FERNÁNDEZ, “La gestión del patrimonio arqueológico: un futuro abierto para Navarra”, *Cuadernos de Arqueología*, nº. 8, 2000, pp. 207-236 e I. ROLDÁN VERGARAECHEA, “Arqueología de las Guerras Carlistas”, *DAMA. Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico*, 2016, 1, pp. 109-123.

⁵¹⁰ Aunque no es la única ley actual que regula el patrimonio cultural navarro, sí que es la que engloba más materias. Componen el resto de la legislación sectorial cultural navarra: Ley Foral núm. 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales de Navarra; Ley Foral núm. 10/2009, de 2 de julio, del Museo de Navarra; Ley Foral núm. 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos de Navarra; Decreto Foral núm. 36/2014, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra.

pudiendo ser encuadrados todos en labores de conservación, protección, acrecentamiento y divulgación del patrimonio cultural y teniendo como objetivo legarlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

La LFPCN enumera las normas básicas de protección del Patrimonio Cultural Navarro, que está formado por los bienes que poseen “valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, industrial, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en Navarra o que, estando fuera de su territorio, tengan especial relevancia cultural para la Comunidad Foral de Navarra”.

Pese al pasado histórico que reivindica la Comunidad Autónoma de Navarra y que posiblemente pueda asimilarse al pasado de otras Comunidades Autónomas históricas, el patrimonio cultural se circunscribe a los ámbitos territoriales actuales. Dicha afirmación no quiere decir que la propia Comunidad Autónoma de Navarra se enmarque como objetivo el retorno de los bienes que integran el patrimonio cultural que se encuentren fuera del territorio.

La protección que realiza la LFPCN no distingue entre el patrimonio cultural subacuático y el patrimonio arqueológico terrestre. Esto puede ser debido a que Navarra en la actualidad es una Comunidad Autónoma de interior sin salida al mar, aunque en el pasado el Reino de Navarra lo tuviera. Lo más parecido a protección del patrimonio subacuático que puede establecer sería un régimen de protección para

las poblaciones que se encuentran bajo el lecho de los pantanos y embalses de las tierras navarras.

Por ello, el análisis del patrimonio cultural subacuático navarro se va a realizar desde el punto de vista de la protección que realiza la LFPCN del patrimonio arqueológico.

b) Protección cultural y distribución competencial

Las Administraciones públicas dentro de sus competencias deben proteger el patrimonio cultural navarro, en adelante PCN, bajo las siguientes líneas: a) carácter general de la protección; b) colaboración institucional; c) colaboración con los titulares de los bienes; d) fomento de la conservación y acrecentamiento del PCN; e) acceso a los ciudadanos; f) divulgación y g) valoración de los bienes.

De forma concreta, la Comunidad Foral de Navarra debe conservar y proteger los bienes del PCN sin perjuicio de las competencias que tenga reconocidas el Estado; gestionar el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra, en adelante RBPCN; adoptar las medidas cautelares y el resto de funciones de autotutela administrativa para la defensa de los bienes, el fomento y la divulgación del PCN, la inspección y control y el posterior régimen sancionador.

El Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural de Navarra⁵¹¹, en adelante DCPCN, será el competente para ejercer dichas atribuciones en la mayoría de los casos. Este tendrá adscritos el Consejo Navarro de Cultura, la Junta de Valoración de Bienes de Patrimonio Cultural de Navarra y la Comisión de Evaluación Documental⁵¹². El DCPCN siempre podrá acudir a otros organismos oficiales como universidades e instituciones científicas, para consultar o asesorarse sobre cómo debe resolver o actuar.

Por su parte, las entidades locales poseen competencias en relación con la conservación y protección de los bienes inmuebles que se encuentren en su término municipal, la redacción y gestión de los Catálogos urbanísticos de protección y su conexión con el RBPCN, la redacción y protección de los Bienes de Relevancia Local, la redacción y aplicación de los Planes Especiales de Protección y cuantas otras atribuyan las leyes.

Las diferentes Administraciones públicas están obligadas a colaborar entre ellas y con los organismos que dependan de las mismas, bajo los principios de eficacia, coordinación, cooperación e información mutua. Las Administraciones públicas también deberán

⁵¹¹ En el momento de la elaboración de esta investigación era el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

⁵¹² Dicho órgano se encuentra regulado en el Decreto Foral núm. 36/2014, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra.

colaborar con particulares y la Iglesia Católica para llevar a cabo una mayor protección, conservación y difusión del PCN.

c) Clasificación de los bienes del Patrimonio Cultural de Navarra

Los bienes culturales navarros están divididos en BIC, Bienes inventariados y Bienes de Relevancia Local. Llama la atención que la propia LFPCN contenga una cláusula de cierre sobre los tres tipos de bienes que la mayoría de legislaciones autonómicas han establecido al haber tomado como referencia la normativa nacional. Esta cláusula de cierre sólo afecta los bienes que no se encuentran dentro del catálogo y que son bienes inmateriales relativos a la cultura de Navarra, como la cultura popular y tradicional y sus respectivas peculiaridades lingüísticas.

Las clases que la LFPCN considera como bienes muebles, inmuebles e inmateriales, no se corresponde con la definición que realiza la normativa foral de los mismos⁵¹³. Los bienes inmuebles son aquellos elementos que “puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de ellos o de su exorno, o lo hubiesen formado

⁵¹³ La Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, establece:

“LEY 347. Inmuebles y muebles.

Son bienes inmuebles las fincas y los derechos sobre las mismas, así como, salvo prueba en contrario, todo lo que a ellas se halla inseparablemente unido y los accesorios que se destinan a su servicio. Todas las otras cosas son bienes muebles. Los frutos se consideran bienes muebles desde que sean aparentes conforme a la Ley 354”.

en otro tiempo”; los bienes muebles son el resto de bienes que poseen un carácter y valor histórico, artístico, etnológico, arqueológico, bibliográfico o documental, susceptibles de ser transportados con independencia del material; por último, los bienes inmateriales son “lenguas, conocimientos, técnicas, usos y actividades que representan a la cultura de Navarra”.

Los Bienes Inventariados son aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales del PCN que no reúnen las condiciones para ser declarados como BIC, pero poseen una relevancia. Los Bienes de Relevancia Local son bienes del PCN que no reúnen las cualidades necesarias para ser declarados como BIC o como Bienes Inventariados pero que poseen una notable relevancia en el ámbito local.

Los BIC son aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales del PCN que poseen mayor relevancia y que han sido declarados como tales por un procedimiento especial. Este procedimiento se encuentra regulado en los arts. 19 a 23 de la LFPCN. Para la declaración de los mismos, entre otras cosas, se requiere el consentimiento expreso del autor o que sean adquiridos por la Administración pública. Están divididos en diferentes categorías⁵¹⁴.

⁵¹⁴ De acuerdo con el art. 15 de la LFPCN son las siguientes:

- a) Monumentos: bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, etnológico, artístico, científico o social.
- b) Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física

Se puede llegar a interpretar que el patrimonio cultural subacuático, de ser un BIC, se catalogaría como “Zona Arqueológica”, dado que son bienes que deben ser estudiados bajo una metodología arqueológica y se encuentran bajo las aguas.

Aunque sea la única clasificación que haga distinción por categorías, eso no quiere decir que el resto de las clases de bienes no puedan contener bienes considerados patrimonio cultural subacuático. En general, la única distinción para clasificar los bienes se basa en su grado de relevancia e importancia como bien perteneciente al PCN. Muchas veces dicha clasificación se basará en criterios subjetivos o políticos más que en criterios realmente de importancia cultural.

representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.

c) Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico.

d) Zona Arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas.

e) Paisaje Cultural: paraje natural, lugar de interés etnológico, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo navarro.

f) Vía Histórica: vía de comunicación de significada relevancia cultural, histórica, etnológica o técnica.

g) Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

d) Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra

El RBPCN se crea para documentar y difundir los BIC, los Bienes de Relevancia Local y los Bienes Inventariados. Este registro es único para todas las categorías de bienes. Tiene carácter público, siendo sus datos accesibles, salvo aquellos que posean un carácter restringido por protección de datos ya sea del bien o del titular. La elaboración y actualización corresponde al Departamento competente en materia de cultura, teniendo que colaborar el resto de Administraciones públicas en la actualización y notificación de los hechos que afecten a los bienes inscritos en este.

El contenido mínimo del Registro debe encontrarse en su propio folio o ficha, en el que conste la declaración del bien, ya sea como BIC o Bien Inventariado, así como los actos administrativos. Cada bien debe tener una descripción identificativa mínima, en la que figuren los traslados, transmisiones e intervenciones, así como las resoluciones judiciales que puedan afectar a los BIC.

e) Régimen de protección de los bienes que forman el patrimonio cultural navarro

De forma general, todos los titulares de bienes que forman parte del PCN deben conservar, proteger y mantener los bienes, utilizarlos de un modo que no sea incompatible con los valores inherentes a dicho bien, evitar su pérdida, destrucción y deterioro y facilitar a las

Administraciones públicas los datos sobre estos de manera periódica o cuando estas se lo requieran.

La LFPCN establece un régimen de protección para los diferentes bienes y detalla ciertas normas por cada tipo de bien según sus características y clasificación. Si seguimos el orden que sigue el Título IV, el primer orden de protección especial abarca a los bienes muebles e inmuebles que se encuentren inscritos en el RBPCN. Este régimen de protección establece una serie de deberes y obligaciones para los propietarios como son comunicar a las Administraciones públicas todas las transmisiones o actuaciones que se realicen con este tipo de bienes; permitir la visita pública de visitantes e investigadores; prestar los bienes muebles para exposiciones temporales y cuantos otros establezcan las leyes. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones o a la ejecución subsidiaria de las mismas por parte de la Administración pública que se trate, pudiendo llegar a ser expropiado el bien en los casos de mayor gravedad.

El régimen de protección impone a los propietarios el deber de conservación de los bienes inmuebles, de forma que la Comunidad Foral de Navarra está facultada para impedir el derribo y suspender cualquier tipo de intervención que pueda poner en peligro la integridad del bien. La LFPCN concede a la Comunidad Foral de Navarra una serie de competencias para la protección del PCN. Las medidas cautelares pueden durar, como máximo, dos meses. Después debe iniciarse un procedimiento. Dichas medidas abarcan desde instrumentos de

ordenación territorial y planeamiento urbanístico, derecho de tanteo y retracto sobre las transmisiones de bienes, y otras.

Los BIC inmuebles poseen un régimen específico de protección que afecta sobre todo al urbanismo. Como las áreas arqueológicas son una de las clases de este tipo de bienes, y dadas sus características, la mayoría de las acciones de protección afectan al régimen urbanístico, de forma que las determinaciones contenidas en la declaración como BIC prevalecen sobre los planes urbanístico y éstas ajustarse en su elaboración o modificación a lo expuesto en la declaración como BIC. Por ello, cualquier intervención que se quiera realizar sobre un BIC o su entorno ⁵¹⁵ requiere la previa autorización del Departamento competente en materia de cultura.

Una vez obtenida, debe presentarse a la entidad local que corresponda, junto con la petición de licencia de obras y debe ser resuelta en el plazo de dos meses, entendiéndose el silencio como negativo. La petición para llevar a cabo actuaciones requiere unos requisitos más exigentes que los comunes para una licencia de obra, como la acreditación técnica del profesional o de las personas que vayan

⁵¹⁵ La definición que utiliza la LFPCN sobre entorno es la siguiente:

“1. Se entiende por entorno de un Bien inmueble de Interés Cultural tanto el espacio como el terreno y edificaciones a él inmediatos o mediatos que, sin formar parte integrante del bien, incidan o afecten a su significación como tal.

2. La Administración de la Comunidad Foral podrá acordar, de oficio o a instancia de las entidades locales interesadas, la expropiación forzosa por causa de interés social de los inmuebles que impidan o perturben la utilización o la contemplación de los Bienes de Interés Cultural, atenten contra su armonía ambiental o supongan un riesgo para su conservación”.

a intervenir o acreditar una determinada solvencia. La única excepción es que la Comunidad Foral de Navarra ya haya desarrollado un planeamiento específico sobre las Zonas Arqueológicas y contenga de manera previsible la forma en que queden afectados los inmuebles que no sean monumentos o su entorno.

Los planes especiales de protección para los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas que desarrollan el plan general municipal de acuerdo con la legislación urbanística condicionan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las ya otorgadas, de forma que el Departamento competente en materia de cultura deberá otorgar una declaración expresa y favorable sobre las mismas.

El plan especial de protección afecta a las intervenciones que se vayan a realizar, de forma que en principio no se van a otorgar nuevas alineaciones, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. Además, las actuaciones deben regirse por una serie de principios generales de intervención, como son el de conservación y mejora de su comprensión histórica, búsqueda de la recuperación del valor significativo y arquitectónico de los aspectos formales y constructivos, procurar y mejorar su adecuación funcional. No se permite la eliminación de partes, salvo que sea necesario para cumplir con la preservación del resto de los elementos y permita una mejor interpretación histórica o la eliminación no suponga una degradación del bien.

Los Bienes inmuebles Inventariados y los Bienes de Relevancia Local también se encuentran protegidos por las disposiciones urbanísticas y los planes especiales. En estos casos los requisitos para llevar a cabo intervenciones o actuaciones vienen determinados por la propia declaración y por la legislación urbanística donde se encuentren. La principal diferencia es que se requieren menos requisitos para obtener la licencia de obra o de la actuación que se quiera llevar a cabo, de forma que no se requiere la autorización previa de la Comunidad Foral de Navarra o una memoria justificativa de las actuaciones que se vayan a realizar, salvo que la declaración o la normativa urbanística aplicable establezca lo contrario.

f) Patrimonio Arqueológico

Conforme al art. 55 de la LFPCN, el Patrimonio Arqueológico de Navarra está formado por “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico conforme al valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, industrial, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en Navarra o que, estando fuera de su territorio, tengan especial relevancia cultural para la Comunidad Foral de Navarra, que resulten susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas”.

La LFPCN realiza una definición amplia, al no centrarse solamente en los bienes inmuebles. La propia norma incluye dentro del Patrimonio Arqueológico a los bienes que constituyan elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre, sus orígenes y antecedentes, pero que puedan ser estudiados a través de la metodología arqueológica, siendo este el rasgo unificador de lo que debe entenderse como Patrimonio Arqueológico. El régimen del Patrimonio Arqueológico incluye los bienes descubiertos ya sea de manera casual como intencionada.

Otro de los rasgos definitorios del Patrimonio Arqueológicos es que deben entenderse como bienes integrantes del PCN los bienes que se encuentren fuera de Navarra y que forman parte del PCN siempre que se obtengan de una intervención que haya requerido metodología arqueológica en el territorio foral, teniendo especial importancia los documentos originales del registro arqueológico.

La LFPCN establece el mandato de crear un Inventario Arqueológico de Navarra, siendo el Departamento competente el encargado de mantenerlo actualizado. En él se deben documentar todos los yacimientos y hallazgos aislados que integran el Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Foral de Navarra. Se debe individualizar su extensión territorial y definirlo de acuerdo con una metodología apropiada.

El régimen sobre el Patrimonio Arqueológico establece una serie de obligaciones para los propietarios de los terrenos como, por ejemplo, la prohibición de colocar publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes, salvo que estén vinculados y guarden armonía con el bien, así como el deber general de colaborar con las Administraciones públicas.

La LFPCN también regula el modo en que deben hacerse las intervenciones arqueológicas, ya sean prospecciones, sondeos, seguimientos, excavaciones, labores de conservación y restauración, documentación de arte rupestre, trabajos de divulgación y cualesquiera otras que tengan por finalidad descubrir, documentar, investigar, difundir o proteger bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y que impliquen la intervención sobre ellos o en su entorno. Estas pueden dividirse en programadas o de urgencia, siendo las primeras aquellas motivadas por el descubrimiento, documentación, investigación o divulgación y teniendo las de urgencia como principal motivo la protección del Patrimonio Arqueológico o prevención de efectos negativos sobre él.

El régimen de protección del Patrimonio Arqueológico abarca también una serie de medidas cautelares sobre las ejecuciones de obras. Este régimen se aplica a cualquier terreno público o privado de Navarra en el que se hallen bienes que posean valor arqueológico de forma casual. En estos casos, el promotor de la obra o la dirección del mismo, debe paralizar las actuaciones que se estén llevando a cabo para evitar

daños. También tiene la obligación de comunicar el descubrimiento al Departamento competente en materia de cultura y a la autoridad local de donde se haya producido el hallazgo. El Departamento debe llevar a cabo las actuaciones de comprobación necesarias para establecer el valor de lo encontrado y en dos meses, como máximo, comunicar el reinicio de las actuaciones que se venían llevando a cabo de forma previa al descubrimiento o inscribiendo el bien en el RBPCN y determinando un plazo de suspensión que se prolongará hasta que se complete la intervención arqueológica. Dicho departamento también debe completar la documentación necesaria sobre los restos y sobre las medidas pertinentes de conservación.

La LFPCN también establece el régimen de protección de las Áreas Arqueológicas de Cautela, que son “aquellos espacios claramente delimitados, solares o parcelas, en los que por evidencias materiales, documentación histórica o tradiciones orales se presume fundadamente la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico de Navarra”. Estas áreas son delimitadas por el Departamento competente en materia de cultura, previa audiencia de los interesados y de las entidades locales afectadas y se publican en el Boletín Oficial de Navarra.

En estas áreas los propietarios o promotores de una obra deberán acompañar a la solicitud de licencia de obra un estudio sobre el valor arqueológico del solar o parcela, redactado por personal técnico en Arqueología, en el que se haga constar la incidencia del proyecto

sobre el Patrimonio Arqueológico y la forma de aplicación de las medidas de protección a desarrollar. El municipio del lugar donde se sitúe debe remitir el expediente al Departamento competente en materia de cultura en el plazo de dos meses para que emita un informe vinculante sobre la autorización de la licencia de obra, siendo en este trámite el silencio positivo.

Asimismo, el régimen de protección de Patrimonio Arqueológico establece una serie de directrices sobre el desmontado y desplazamiento de estructuras arqueológicas. La norma parte de la base de que los BIC y los Bienes Inventariados son inseparables de su entorno y, de forma excepcional, cuando exista justa causa de fuerza mayor o de un interés social puede autorizarse el desmontado o desplazamiento, pero siempre con el informe favorable del Departamento competente en materia de cultura. Este informe se debe emitir, como máximo, en dos meses desde la finalización de la intervención arqueológica en la que se haya descubierto, entendiéndose el silencio como negativo.

Para el desmontado o desplazamiento de bienes que formen parte del PCN también se requiere el informe favorable del Departamento con competencias en cultura y debe presentarse un estudio sobre las posibles alternativas. El Departamento deberá pronunciarse sobre la intervención como máximo a los dos meses. Pasado este plazo de tiempo se entiende el silencio como positivo.

Con independencia del tipo de bien del que se trate, cuando se vaya a realizar algún desmontado o desplazamiento se deben documentar de manera científica los elementos que formaban parte del bien y sus características. La función que tiene esta documentación es para garantizar una reproducción, localización y eventual reconstrucción en el lugar donde autorice el Departamento en materia de cultura.

En cuanto a los descubrimientos de bienes arqueológicos, ya sea de manera casual o por azar o derivados de una intervención, todos deben ser comunicados en el menor plazo de tiempo posible (máximo 48 horas) a la Administración pública más cercana o a la autoridad pública. Hasta que la información se ponga en conocimiento del Departamento competente de cultura y este intervenga determinando su destino, los bienes deben mantenerse en el lugar en donde fueron descubiertos, siendo la única excepción que exista un peligro grave de desaparición o deterioro, y teniendo que extraerse y entregarse al municipio del lugar en donde se encontraron. Si fuera necesario llevar a cabo remociones de tierra y si se trata de un hallazgo subacuático, el Departamento competente determinará el lugar del depósito definitivo de los restos arqueológicos hallados, de acuerdo con los criterios de mayor proximidad al lugar del hallazgo y de idoneidad de las condiciones de conservación y seguridad de los bienes, sin perjuicio de la aplicación de otros criterios derivados de las necesidades de la ordenación museística general.

Por último, el régimen de protección del Patrimonio Arqueológico Navarro establece un régimen de gratificaciones para los descubridores y los dueños del terreno en los que se encuentren los bienes. Tienen derecho a recibir, en partes iguales, una cantidad en metálico igual a la mitad del valor de lo hallado, según lo que se establezca en una tasación legal. En el caso de ser varios los descubridores, dicha cantidad se divide entre ellos también a partes iguales. La LFPCN establece que aquel que descubre o sea el dueño del terreno no posee derecho alguno a retener los bienes descubiertos. Si el descubrimiento no fuera comunicado de manera adecuada o se incumpliera cualquier otro precepto normativo, no se tendrá derecho al premio y se podrá iniciar un régimen sancionador adecuado para el caso concreto. Tampoco se entregará premio cuando el descubrimiento sea una parte arquitectónica de un bien inmueble incluido en el RBPCN, el descubridor sea una persona autorizada por el Departamento competente para realizar actividades arqueológicas, sea producto de actuaciones ilícitas, se produzca en un Área de Cautela declarada o en proceso declaración o se descubra debido a obras de las Administraciones públicas.

g) Fomento y divulgación del Patrimonio Cultural

El régimen de protección del patrimonio cultural se concibe desde múltiples ángulos, siendo el fomento y la divulgación del mismo una de las principales funciones de la Administración Pública de Navarra. Estas funciones son una forma de protección preventiva, dado

que se pone en conocimiento de la ciudadanía los bienes integrantes del PCN. Por ello, el Departamento competente en materia de cultura es el encargado de fomentar la investigación, la documentación, la conservación, la recuperación, la restauración y divulgación, llevando a cabo dichas acciones a través de subvenciones y otras medidas económicas de fomento.

La divulgación debe hacerse en condiciones adecuadas de conservación, conocimiento y difusión de los bienes. El Departamento competente en materia de cultura debe fomentar el uso y disfrute del PCN, al ser este un recurso de dinamización social y turística.

La documentación, informatización y divulgación supone una puesta al servicio para conseguir un mayor número de investigaciones sobre los bienes que componen el PCN. A través de estos medios se consigue una mayor difusión que permita aumentar las exposiciones, los servicios de información turística, los intercambios culturales y la colaboración con los medios de comunicación social.

Al mismo tiempo, la Comunidad Foral de Navarra debe desarrollar una política educativa que permita garantizar el conocimiento y la estimación de los valores propios del PCN, a través de una enseñanza especializada y de una formación específica para los funcionarios.

h) Régimen sancionador navarro

El régimen sancionador navarro está formado por una serie de supuestos que componen las infracciones que se pueden cometer por incumplir el régimen de protección. Hay que indicar que a lo largo de todo el contenido de la LFPCN se incluyen preceptos sobre actuaciones que se consideran ilícitas como el contenido del art. 60:

“Artículo 60. Actuaciones ilícitas en el Patrimonio Arqueológico.

Son ilícitas las siguientes actuaciones:

a) Las intervenciones arqueológicas practicadas sin la preceptiva autorización o que contravengan gravemente los términos en que ésta fuera concedida.

b) La realización de remociones de terreno y de exploraciones superficiales, con objeto de descubrir restos arqueológicos sin contar con la debida autorización.

c) Las remociones de tierra, demoliciones y cualesquiera otras actuaciones que pudieran destruir, dañar o poner en peligro el Patrimonio Arqueológico realizadas tras haberse producido un hallazgo en las condiciones descritas en el artículo 59.1 de la presente Ley Foral y que incumplan los deberes de comunicación y suspensión de obras”.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves⁵¹⁶.

⁵¹⁶ En cuanto a las leves encontramos: “a) el incumplimiento de las obligaciones de facilitar información a la Administración sobre el estado de los bienes que forman parte del PCN, de facilitar su inspección y de petición de las autorizaciones obligadas por la presente Ley Foral, cuando no se derive perjuicio alguno para la conservación de dichos bienes. b) el traslado fuera de Navarra, sin la correspondiente comunicación previa, de bienes que formen parte del PCN; c) la realización de obras o intervenciones no autorizadas sobre los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de Navarra, o sobre su entorno, siempre que no supongan destrucción de sus valores culturales y sean autorizables; d) la simple utilización sin autorización de sistemas, técnicas y métodos de detección de bienes integrantes del PCN; e) el incumplimiento de los deberes establecidos sobre acceso a los bienes integrantes del PCN; f) el incumplimiento del deber de conservación siempre que no se deriven daños graves o destrucción de los bienes protegidos; g) el incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como resultado de actividades arqueológicas; h) la dejación de funciones por parte de los directores de actividades arqueológicas; i) el incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro y la retención ilícita o depósito indebido de documentos que formen parte del PDN por quienes los tengan a su cargo y no los entreguen al cesar en sus funciones a quien les sustituya en ellas o no los remitan al archivo que corresponda”. Estas acciones son sancionadas con un máximo de 6.000,00€.

Por otro lado, entre las acciones que pueden constituir infracciones graves encontramos: “a) La destrucción de bienes inventariados; b) la realización de obras o intervenciones no autorizadas, de cualquier naturaleza, que supongan la destrucción, grave riesgo o pérdida de los valores culturales de bienes inscritos en el RBPCN; c) el incumplimiento del deber de conservación cuando suponga destrucción o daños graves para bienes inscritos en el RBPCN; d) el traslado fuera de Navarra, sin la correspondiente comunicación previa, de bienes inscritos en el RBPCN; e) la presentación, de forma maliciosa, de información incompleta o inexacta en los informes técnicos que acompañen a las peticiones de licencias o autorizaciones para obras o intervenciones sobre bienes inscritos en el RBPCN; f) la presentación, de forma maliciosa, de información incompleta o no veraz en las comunicaciones referentes al traslado fuera de Navarra de bienes inscritos en el RBPCN; g) el incumplimiento de la suspensión de obras u otras intervenciones ordenada por la autoridad competente, infracción que se producirá cuantas veces sea reiterado e incumplido el requerimiento; h) el incumplimiento de la obligación de comunicar los descubrimientos casuales de restos o bienes que formen parte del Patrimonio Arqueológico de Navarra. i) La realización de actividades arqueológicas no autorizadas y el empleo de detectores de metales u otros instrumentos de detección para la búsqueda o recuperación sin autorización de materiales arqueológicos”. Estos hechos son sancionados con un máximo de 150.000,00€

Las sanciones anteriores para cada uno de los hechos se establecen en defecto de que los daños no sean cuantificables, dado que, como mínimo, el causante deberá ser sancionado con dicha cantidad, al no poder ser inferior al beneficio económico que haya podido obtener gracias a la misma.

Como medidas accesorias se establece el decomiso de los materiales y bienes utilizados. En el caso de ser profesionales los que han cometido las acciones, se les puede inhabilitar o impedirle realizar su actividad. Dependiendo del tipo de infracción, la inhabilitación será de hasta dos años para las leves, hasta cinco para las graves y hasta diez para las muy graves.

El régimen sancionador también establece una serie de reglas para la graduación de las sanciones, así como una serie de supuestos agravantes o atenuantes de la responsabilidad.

M) Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés

a) Preliminar

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, en adelante LPCA, es la norma fundamental que regula el

Por último, entre las infracciones muy graves encontramos la destrucción, desplazamiento o remoción ilegal de BIC o la destrucción de yacimientos y restos arqueológicos declarados Bienes Inventariados cuando exista intencionalidad o el incumplimiento de las medidas. Estas acciones son sancionadas con un máximo de 600.000,00€.

patrimonio cultural en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta norma tiene como objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, difusión y fomento del patrimonio cultural aragonés, así como de los bienes que lo integran⁵¹⁷.

Establece una serie de preceptos para recuperar el patrimonio cultural aragonés diseminado o en manos privadas, así como un deber de colaboración en la conservación de este que afecta tanto a las personas físicas o jurídicas privadas como a las Administraciones públicas. Por último, concede para protegerlo el derecho de ejercitar la acción pública a cualquier persona.

El patrimonio cultural aragonés es definido por los bienes que lo integran, los cuales son bienes materiales e inmateriales que estén relacionados con la historia y la cultura de Aragón, que presenten cierto interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas. Como se desprende de esta definición, la norma expresa un criterio amplio e

⁵¹⁷J. BARCELONA LLOP, “Patrimonios especiales: patrimonio paleontológico y arqueológico; patrimonio etnográfico e industrial”, en L. A. POMED SÁNCHEZ, *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2001, pp. 155-196; G. GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, “Potestad sancionadora y patrimonio cultural”, en L. A. POMED SÁNCHEZ, *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*, 2001, pp. 273-309.

incluso menciona el patrimonio cultural subacuático. Esto puede deberse a que, pese a que Aragón no es una Comunidad costera, se trata de una Comunidad histórica y cuyo pasado medieval y patrimonio puede encontrarse en múltiples y recónditos lugares fuera de las fronteras actuales. Además, la mención a los bienes que se encuentren bajo la superficie de sus aguas puede deberse al pasado reciente de múltiples poblaciones que han sido sumergidas bajo el lecho de pantanos, como pueden ser Mediano Viejo o Fayón⁵¹⁸, ejemplos claros de restos de poblaciones anegadas por las aguas de pantanos y cuyos elementos en ocasiones son visibles.

b) Bienes que integran el patrimonio cultural aragonés

Como ya se ha indicado con anterioridad, el patrimonio cultural aragonés se manifiesta en múltiples formas. No obstante, siguiendo la tónica de la LPHE, la LPCA establece diferentes grados de protección, siendo sus categorías BIC, bienes catalogados y bienes inventariados.

Los BIC son aquellos bienes más relevantes, pudiendo ser materiales o inmateriales, y deben inscribirse en el Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural, en adelante RABIC, que está a cargo del Departamento responsable del Patrimonio Cultural, en adelante DRPC. Los inmuebles BIC pueden dividirse en bienes inmuebles, bienes y

⁵¹⁸ J. R. MARCUELLO CALVÍN, *Fayón: la historia sumergida*, Editorial Cremallo, Zaragoza, 2005, p. 5.

bienes inmateriales. Los bienes inmuebles presentan dos categorías: monumento y conjunto de interés cultural⁵¹⁹.

Las declaraciones como BIC requieren un procedimiento detallado en donde se justifiquen ciertos elementos del mismo. Se puede declarar de forma genérica toda una categoría de bienes a propuesta del Consejero del DRPC, teniendo que contar con un informe favorable del Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural, de la respectiva Comisión Provincial del Patrimonio Cultural y de al menos tres instituciones consultivas.

⁵¹⁹ El conjunto de interés cultural comprende las siguientes figuras:

- “a) Conjunto histórico, que es la agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o de su historia, que se constituye en una unidad coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada elemento por separado no posea valores relevantes.
- b) Jardín histórico, que es el espacio delimitado que resulta de la intervención del ser humano sobre los elementos naturales, ordenándolos, a veces complementándolos con arquitectura y escultura u otras manufacturas, siempre que posea un origen, pasado histórico, valores estéticos, botánicos o pedagógicos dignos de salvaguarda y conservación.
- c) Sitio histórico, que es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos, recuerdos del pasado, creaciones humanas o de la naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural.
- d) Zona paleontológica, que es el lugar en que hay vestigios, fosilizados o no, que constituyan una unidad coherente y con entidad representativa propia.
- e) Zona arqueológica, que es lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no, tanto si se encuentra en la superficie, en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.
- f) Lugar de interés etnográfico, que es aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios”.

Se establecen una serie de procedimientos para establecer y proteger los bienes catalogados y los bienes inventariados. Los procedimientos que regulan su inclusión y declaración parten del procedimiento de los BIC, pero su regulación es menos exigente en cuanto a requisitos. Los órganos que intervienen suelen ser locales en la mayoría de los casos, al tener menor relevancia cultural los bienes incluidos en estas categorías.

En el caso de que se llegase a proteger el patrimonio cultural subacuático aragonés que se encuentran bajo los pantanos⁵²⁰, este seguramente recibiría la protección de zona arqueológica, dado que es la definición que mejor se adapta a las características. Como no existe una definición unánime de lo que debe entenderse por patrimonio cultural subacuático, también podría protegerse como sitio histórico, al ser el lugar donde se encontraba una comunidad humana.

Son múltiples los núcleos poblacionales bajo las aguas y ninguno de ellos superaba los 800 habitantes⁵²¹. Las técnicas para la eliminación de estos asentamientos fueron diversas. En algunos casos se eliminó cualquier elemento que indicase que hubo presencia humana.

⁵²⁰ A. HERRANZ LOCÁN, “La construcción de pantanos y su impacto sobre la economía y población del pirineo aragonés”, en V. J. PINILLA NAVARRO y J. L. ACÍN FANLO, *Pueblos abandonados: ¿un mundo perdido?*, Astral, Zaragoza, 1995, pp. 79-101.

⁵²¹ Los pueblos afectados por los pantanos y que han desaparecido son: La Peña, Barasona, Cáncer, Tiermas, Ruesta, Escó, Fet, Finestras, Monfalco, Mediano, Coscojuela, Gerbe, Morillo de Tou, Arasanz, Puy de Cinca, Clamosa, Caneto, Liguere de Cinca, Lapenilla, Mipanas, Bupal, Saques, Pueyo de Jaca, Lanuza, Jánovas, Lacort y Lavelilla.

De esta forma, solo serían apreciables los sillares u otros elementos arquitectónicos tras una exploración y trabajo de remoción de tierras. En otros, en cambio, se mantuvieron las casas y elementos que los propios habitantes no se llevaron antes de la inundación, conservándose bajo las aguas todos los elementos arquitectónicos de los mismos. A su vez, puede haber múltiples elementos y restos que sirvan como vía de interpretación de los modos de vida tradicionales o históricos, a lo largo de diferentes épocas desde que el pueblo se fundó.

La única referencia que encontramos, y de manera indirecta, a este tipo de protección es en la disposición adicional tercera, que habla sobre los pueblos deshabitados, siendo una parte importante de las raíces culturales y de los modos de vida tradicionales aragoneses. En los mismos se prohíbe la retirada de materiales y la realización de obras sin autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Al mismo tiempo, se recoge el mandato de impulsar un inventario de los bienes que constituyen los bienes de los pueblos deshabitados y recuperar paulatinamente los mismos. Este mandato legal no ha sido llevado a la práctica, de forma que hasta el momento no se han tomado en cuenta como pueblos desaparecidos a los que se encuentran bajo el lecho de algún pantano o embalse, sino solo aquellos que por diversas circunstancias han perdido su población.

c) Protección del patrimonio arqueológico aragonés

El patrimonio arqueológico aragonés es definido en el art. 65.2 de la LPCA como “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, estuviesen o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas. Forman parte asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia humana, sus orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio”. Como se desprende de este concepto, la norma amplía el concepto lingüístico al incluir a los elementos geológicos y paleontológicos dentro de esta definición⁵²².

Los espacios en donde existan bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados a través de una metodología arqueológica se declaran como zonas de protección arqueológica conforme al régimen de declaración de los conjuntos históricos.

Los espacios en donde, presuntamente, se pueda inferir la existencia de restos arqueológicos y que requieran de medidas precautorias pueden ser declarados como zonas de protección arqueológicas por el Consejero del DRPC, previa información pública

⁵²² J. BARCELONA LLOP, “Patrimonios especiales: patrimonio paleontológico y arqueológico; patrimonio etnográfico e industrial”, en L. A. POMED SÁNCHEZ, *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*, cit., pp. 155-196.

del municipio afectado y publicándose la declaración en el Boletín Oficial de Aragón.

Para poder llevar a cabo cualquier actuación en estas zonas que conlleve la remoción de tierras, será necesaria la preceptiva y previa autorización del Director General responsable de patrimonio cultural. Esta autorización debe atenerse a una serie de reglas, siendo las más importantes las siguientes:

- La solicitud ha de presentar un estudio de la incidencia de la obra o actuación y debe ser elaborado por un arqueólogo.
- El Director General puede exigir la realización científica, por cuenta del propietario de cualquier intervención arqueológica que sea necesaria.

Todos los bienes que se encuentren en el subsuelo son de dominio público de la Comunidad, siempre que posean los valores propios del patrimonio cultural aragonés. El régimen del art. 351 del CC no es aplicable a este tipo de bienes, ya sean encontrados por azar o mediante la realización de trabajos.

Las actividades arqueológicas que se pueden realizar mediante autorización son:

- Prospección, entendiéndose como la explotación superficial y sistemática, sin remoción tanto terrestre como subacuática y que está dirigida al estudio o investigación de restos históricos, así como los

componentes geológicos y ambientales relacionados con estos. Se incluye en la prospección la mera observación o reconocimiento de la superficie y también la aplicación de metodologías que la arqueología reconozca como válidas.

- Sondeo, entendiéndose como la remoción de tierras, complementarias o no de la prospección, y que tiene como finalidad comprobar la existencia de un yacimiento arqueológico o reconocer su estratigrafía. La toma de muestras se considera dentro de la definición de sondeos.
- Excavación, que es la remoción en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se destina a descubrir e investigar toda clase de restos.
- Labores de protección, consolidación y restauración, que son intervenciones que permiten la conservación y tienen como resultado el disfrute y facilitar la difusión de los bienes.

Estas actuaciones pueden ser consideradas de urgencia siempre que exista riesgo de pérdida o destrucción inmediata del yacimiento. El DRPC puede ordenar o autorizar la realización de las intervenciones que considere necesarias, siempre que se pueda evitar su desaparición o afectación.

Siempre que se produzca un hallazgo, ya sea por azar o por cualquier otra causa, este debe ser comunicado al DRPC en el plazo máximo de 30 días. Llama la atención la amplitud de plazo que concede la legislación aragonesa, comparada con otras regulaciones autonómicas. Quizás pueda deberse a que está pensada para evitar sanciones por cometer error de prohibición o de las obligaciones en los hallazgos casuales.

La norma continúa indicando que, hasta que no sean entregados los bienes muebles, el descubridor será el responsable a través de las normas de depósito. El descubridor y el propietario del lugar tienen derecho a un premio en metálico correspondiente a la mitad del valor de tasación del bien. En caso de no coincidir ambos, se dividirá la recompensa entre ellos. En el caso de no cumplir con dichas obligaciones, se exime a la Administración pública de la recompensa, pudiendo incluso imponer una sanción, dependiendo del caso.

La LPCA también establece que se requiere una autorización específica para el uso de detectores de metales o instrumentos o técnicas que permitan localizar los restos arqueológicos, aunque no sea esta su finalidad original. El interesado debe presentar una solicitud en la que indique el ámbito territorial para el que quiere que se le conceda el permiso, así como la fecha o plazo en que hará uso del mismo. En todo caso, se requiere la autorización del propietario de los terrenos.

El art. 69. 5. de la LPCA establece que cuando se detecte presencia de restos arqueológicos de cualquier índole, el autorizado debe suspender de inmediato el uso de la actividad autorizada y abstenerse de la remoción de tierras. Al mismo tiempo debe poner en conocimiento de la DGCMPA o de las dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como máximo en las 24 horas siguientes desde que se produce el hallazgo.

d) Régimen sancionador

El régimen sancionador aragonés está dividido en infracciones leves, graves y muy graves. A estas se les impondrán una serie sanciones económicas que se establecen todavía en pesetas, de forma que deben de ser adaptados a euros. Estas cantidades son sólo para las acciones que no sean valorables económicamente. En este sentido, se diferencia entre las Administraciones públicas que tienen competencia para ejercer este derecho sancionador dependiendo en cada caso de la acción cometida y del bien que se trate⁵²³.

Las acciones que están tipificadas como infracciones leves y que pueden afectar al patrimonio arqueológico subacuático las encontramos en el art.102 y son las siguientes: “a) La producción de daños por imprudencia simple; b) El incumplimiento parcial de las órdenes de ejecución e intervención y de las condiciones de las autorizaciones

⁵²³ G. GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, “Potestad sancionadora y patrimonio cultural”, en L. A. POMED SÁNCHEZ, *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*. 2001, pp. 273-309.

culturales; c) La obstrucción simple de las inspecciones administrativas; d) La falta de notificación de actos o traslados; e) El incumplimiento del deber de permitir el acceso de los investigadores y la visita al público y f) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley”.

Por otro lado, las acciones que comprenden infracciones graves son agrupadas dependiendo el tipo de bien que se trate. Por ello, nos vamos a centrar solamente en aquellas que puedan afectar al patrimonio cultural subacuático, de forma que encontramos los supuestos generales que afectan a todos los bienes con independencia de su tipo y aquellas específicas respecto de los bienes arqueológicos.

Las acciones que constituyen infracciones graves y que afectan a todos los bienes del patrimonio cultural son el “incumplimiento de las órdenes de ejecución o de intervención cuando cause simples perjuicios a los mismos; la obstrucción absoluta de las inspecciones administrativas; la dedicación del bien a usos incompatibles con su destino cultural, cuando haya existido expresa autorización o advertencia de los usos permitidos; la inobservancia de las medidas cautelares sobre comercio, comunicación de enajenaciones y suspensión de intervenciones, así como la práctica de éstas sin la pertinente autorización administrativa o incumpliendo gravemente sus condiciones”.

En cuanto a aquellas que afectan a los bienes arqueológicos encontramos las “obras realizadas con posterioridad al hallazgo casual de restos sin haberlo comunicado a la Administración; la utilización clandestina de sistemas, técnicas y métodos de detección; el incumplimiento de las obligaciones de comunicación, entrega y depósito cuando los restos no tuvieran gran trascendencia científica; la realización de labores arqueológicas sin autorización o sin respetar de forma significativa las condiciones impuestas en la autorización, y la obstaculización a la práctica de las labores arqueológicas que produzca perjuicios graves a las mismas”.

Con las infracciones muy graves, la norma vuelve a hacer una distinción entre los diferentes tipos de bienes, de forma que enumera una serie de acciones que constituyen infracciones graves y que pueden afectar a todo tipo de bienes, siendo estas “el incumplimiento absoluto de las órdenes de ejecución o de intervención cuando sea determinante de su deterioro significativo; la falta de diligencia en la protección de los mismos contra el expolio y la omisión del deber de conservación y la enajenación sin previa comunicación a la Administración.” El resto de acciones sólo caben si el bien lesionado o afectado es un BIC aragonés, siendo estas la “realización sin la pertinente autorización administrativa de desplazamientos o remociones de su entorno, de construcciones que alteren su carácter o perturben su contemplación y de separaciones de partes integrantes o de bienes muebles incluidos en la declaración, así como todas aquellas actuaciones que supongan una

pérdida o desaparición o produzcan daños irreparables”. En la práctica estas acciones no podrán darse sobre patrimonio cultural subacuático, dado que aún no existe este grado de protección sobre dichos bienes. Llama la atención que el ordenamiento aragonés proteja con mayor intensidad a los BIC aragoneses, dada su importancia cultural. Aunque dicha protección sea beneficiosa, nos parece un error el no castigar de manera idéntica las acciones que incluyan la pérdida, desaparición o produzcan daños irreparables en bienes distintos de los BIC o catalogados.

El régimen sancionador aragonés establece una serie de circunstancias agravantes y atenuantes, incidiendo estas sobre la sanción económica que se le imponga al infractor, de forma que las agravantes aumentarán la sanción al máximo y las atenuantes las disminuirán al mínimo.

Entre las primeras encontramos la reincidencia en la comisión de infracciones y la especial preparación técnica y profesional en materias culturales para infringir o saber identificar los daños.

En cuanto a las atenuantes, se incluye la intención probada de que no se quería causar el resultado producido y la ignorancia técnica y profesional en materias culturales en relación con la infracción causada.

N) Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja

a) Preliminar

El patrimonio riojano cultural y artístico se encuentra protegido por la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, en adelante LPCHALR⁵²⁴. A través de la misma se pretende proteger, conservar, revitalizar, mejorar y fomentar el conocimiento, la investigación y la difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de la Rioja. Este es definido en su art. 2 por los bienes que lo constituyen, es decir, por los bienes muebles o inmuebles, relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad Autónoma, que presenten un interés o valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, etnográfico, arquitectónico, urbanístico, natural, científico, técnico, industrial, documental, bibliográfico o audiovisual de naturaleza cultural, así como los bienes inmateriales relativos a actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales, manifestaciones folklóricas, conmemoraciones

⁵²⁴ J. CASTILLO RUIZ, “La “Bictitis” o la alergia social (¿o es sólo política?) a la protección de los bienes culturales de carácter territorial. Reflexiones y propuestas a partir del caso de la Vega de Granada”, *Proceedings of the II Internacional Conference on Best Practices in World Heritage: People and Communities*, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2015, pp. 407-438; B. PÉREZ GALAN, “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre patrimonio cultural en España: una lectura antropológica sobre las figuras legales de protección”, *Revista de Antropología Experimental* (11), 2011, pp. 11-30 y R. J. SANTAMARIA ARINAS, “Derecho y políticas ambientales en la Rioja”, *Revista Catalana de Dret Ambiental*, Crónica, vol. 2, 2014, pp. 1-13.

populares, toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas del castellano. Pese al extensísimo número de elementos que se incluyen en el patrimonio cultural riojano, la LPCHALR no hace ninguna referencia al patrimonio cultural subacuático. Esto puede ser debido a que La Rioja es una Comunidad autónoma de interior. De protegerse o encontrarse bienes que puedan identificarse como patrimonio cultural subacuático, deberán protegerse a través otras categorías de protección genéricas, como pueden ser las zonas arqueológicas.

La LPCHALR establece un mandato general a las Administraciones públicas para que garanticen el derecho social a la cultura a través de diferentes medidas de difusión y protección del mismo. Establece que en dicha Comunidad autónoma será responsable sobre el patrimonio cultural riojano la Consejería competente en materia de cultura, siendo en la actual legislatura la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Esta norma divide diferentes materias competenciales entre el Consejo de Gobierno, la Consejería competente en materia de cultura, el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de

La Rioja⁵²⁵ y las entidades locales de La Rioja, además de establecer como órganos consultivos de estos los Museos Integrados en el Sistema de Museos de La Rioja, los Colegios Profesionales en ámbitos relacionados y el Instituto de Estudios Riojanos. Todos deben colaborar en el marco de sus respectivas competencias y, al mismo tiempo, con el Estado y la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

La LPCHALR concede a cualquier persona física o jurídica la posibilidad de defensa del patrimonio cultural y artístico riojano, ejerciendo la acción pública. Con este reconocimiento legal, se autoriza a la ciudadanía a denunciar los hechos y abusos que puedan darse.

b) Tipos de bienes protegidos y protección del patrimonio cultural subacuático

La LPCHALR establece diferentes grados de protección de los bienes que componen el patrimonio cultural y artístico riojano, de forma

⁵²⁵ El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja tiene como finalidades generales:

- a) Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas de las Administraciones Públicas riojanas en esta materia.
- b) Facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación, información y difusión entre las mismas.
- c) Asesorar a las Administraciones Públicas riojanas en materia de patrimonio cultural, histórico y artístico, en especial, a las de ámbito local.
- d) Específicamente, informará cuando sea requerido para ello por su presidente, de los actos de edificación y uso del suelo y subsuelo que afecten a los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 30 de la presente ley.
- e) Examinar e informar la declaración o la revocación de la declaración de Bienes de Interés Cultural y de Bienes Culturales de Interés Regional, así como su posible cambio de uso o alteración de su categoría de protección.
- f) Las demás que se establezcan en vía reglamentaria.

que se establecen diferentes categorías. Los BIC son aquellos bienes muebles, inmuebles o inmateriales que tienen mayor relevancia como bienes del patrimonio cultural, histórico y artístico riojano y que son inscritos como tales en Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, después de haber pasado por un procedimiento regulado y especial. En segundo lugar, se encuentran los Bienes Culturales de Interés Regional, que son aquellos que no poseen un valor excepcional, pero que reúnen suficientes elementos como para formar parte del patrimonio cultural e histórico riojano. Estos bienes, para ser declarados como tales, deben pasar por un procedimiento específico semejante al que se establece para la Declaración como BIC. Pese a que no existe ningún tipo de regla para diferenciar los BIC de los Bienes Culturales de Interés Regional, se puede interpretar que sólo podrán ser catalogados como BIC aquellos que reúnan las condiciones para ser declarados como BIC de acuerdo con la LPHE o como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hay que destacar que, aunque sean normas vagas, ya sientan una base de interpretación.

Por último, se encuentran los Bienes Culturales Inventariables, entendiéndose por tales aquellos bienes que no reúnen valores excepcionales o especiales, pero que deben ser protegidos y conservados al reunir ciertos valores para considerarse como patrimonio cultural, histórico y artístico riojano. Estos bienes son aprobados de manera automática a través de una resolución de la

Dirección General del Gobierno de La Rioja que tenga asumidas la materia de cultura.

Los BIC se clasifican en diferentes categorías. En el caso de los bienes inmuebles son las siguientes: Conjuntos Históricos y Lugares Culturales. Estos últimos, a su vez, se dividen en Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Zonas Paleontológicas, Lugares de Interés Etnográfico, Vías Culturales y Paisajes Culturales⁵²⁶.

El patrimonio cultural subacuático podría estar protegido como un Lugar Cultural dentro de las categorías de “Sitio Histórico: Emplazamiento vinculado a eventos pretéritos o a creaciones culturales o naturales dignas de memoria, así como a tradiciones populares, que posean singulares valores históricos, antropológicos, sociales, naturales, científicos o técnicos” o también como “C) Zona Arqueológica: Lugar o paraje natural donde existan bienes muebles, inmuebles o restos de la intervención humana, susceptibles de ser estudiados preferentemente con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o en un medio subacuático”.

Hay que indicar que el patrimonio cultural subacuático para ser declarado como BIC debe seguir las normas establecidas en los arts. 13

⁵²⁶ El art. 55.2 de la LPCHALR establece que “los bienes arqueológicos o paleontológicos más relevantes podrán ser declarados como Bienes de Interés Cultural y clasificarse como Zona Arqueológica, Zona Paleontológica, Parque Arqueológico o cualquier otra prevista en esta Ley”.

y 14 de LPCHALR. De forma específica deberá reunir una serie de particularidades para su aprobación y conclusión, ya que, al ser un bien inmueble, se requiere un informe preceptivo y no vinculante de la de la Consejería del Gobierno de La Rioja competente en materia de urbanismo y de la entidad local donde radique el bien objeto del expediente⁵²⁷.

Como es un bien que se encuentra sumergido inicialmente, se considera como un bien público y como tal puede ser de titularidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por lo que requerirá un informe de las Consejería de Cultura y un informe preceptivo y no vinculante de la Consejería competente en materia de medio ambiente, aparte de cualquier otro informe de carácter consultivo y no vinculante que se estime o se quiera aportar para fundamentar su excepcionalidad y justificar la declaración como BIC.

En caso de tratarse de un bien integrante del patrimonio cultural subacuático, la resolución del acuerdo debe contener los siguientes extremos:

⁵²⁷ A diferencia de las Comunidades Autónomas ribereñas en que el patrimonio cultural subacuático puede estar situado más o menos cerca de la costa y por tanto puede haber problemas competenciales sobre la titularidad y protección de los bienes, en estos casos, al tratarse de una región de interior, en principio todo el territorio está dividido entre diferentes municipios, de forma que, si se pretende catalogar algún bien como BIC, este estará situado dentro del territorio de alguno de los municipios. Esto no quiere decir que no vayan a producirse conflictos competenciales sobre la titularidad del mismo entre Estado, Comunidad Autónoma y municipio, pero la fundamentación será más fácil al estar las reglas competenciales más definidas.

- a) La descripción específica de forma clara, precisa y exhaustiva del bien que se trata, de forma que se pueda identificar de manera clara tanto al inmueble como a las partes integrantes del mismo.
- b) Se debe delimitar las relaciones con el área territorial a la que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y elementos que conforman su entorno. Estos deben quedar expresamente delimitados de forma clara y precisa para una mejor adecuación y establecimiento de las medidas necesarias para conservarlo, así como para autorizar los diferentes usos que se le puedan dar al bien. Este requisito, en el que se definen y delimitan no solo el entorno, sino también las relaciones de protección con los diferentes accidentes, revela una evolución respecto de las normas clásicas de protección.
- c) La delimitación definitiva del entorno de protección y su régimen específico.
- d) Los usos compatibles con una adecuada conservación del bien.
- e) La categoría en la que se incluye al patrimonio cultural subacuático.

c) Régimen de protección general

El régimen de protección general abarca a todos los bienes que forman parte del patrimonio de La Rioja. La norma establece una serie de reglas para evitar el deterioro de los bienes, aumentar el patrimonio que forma parte de dicha Comunidad autónoma y la difusión del conocimiento como una forma de protección. La estructura de dicha normativa se asimila a la seguida por la LPHE, aunque se divide por secciones dependiendo del bien que se trate (mueble, inmueble o incorporal), para luego pasarse a reglas generales aplicables a todos los bienes.

Se regulan las facultades expropiatorias de la Administraciones públicas y los casos en que pueden actuar, las facultades de las Administraciones públicas para poder intervenir en los bienes ya sea como facultada a través de los derechos de tanteo y retracto o de la imposición de límites al uso de determinados bienes, ya sea a través del deber de conservación, notificación de los traslados o el de visita pública.

d) Régimen de protección del patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico es definido y englobado junto con el patrimonio paleontológico. Dentro de este grupo se encuentran todos los bienes muebles e inmuebles poseedores de alguno de los valores suficientes para formar parte del patrimonio histórico, cultural y

artístico de La Rioja y cuyo estudio requiera la aplicación de una metodología arqueológica.

La LPCHALR no define lo que debe entenderse por metodología arqueológica, por lo que se puede interpretar que es un concepto amplio, de forma que dentro de la misma cabe el patrimonio cultural subacuático. Aun así, la LPCHALR establece una serie de elementos básicos para interpretar que debe entenderse por patrimonio arqueológico, como son que se encuentren en la superficie, en el subsuelo, en un medio subacuático o hayan sido ya extraídos de su contexto original. También lo integran el territorio o paisaje que pueda integrarse en el patrimonio cultural, histórico o artístico de la Rioja y estuviese habitado por el ser humano en época histórica y prehistórica, los objetos y muestras de interés paleontológico que hayan sido separados de su entorno natural o deban ser conservados fuera de él y los elementos geológicos y paleontológicos de interés por su relación con la historia del hombre, sus orígenes y antecedentes.

El patrimonio arqueológico abarca tanto los bienes muebles como los inmuebles que hayan sido encontrados a través de una metodología arqueológica. Dado el carácter de interior de La Rioja, este patrimonio arqueológico tendrá un carácter mayoritariamente terrestre. No obstante puede llegar a considerarse como patrimonio cultural

subacuático los bienes que se encuentran en el lecho del pantano de Masilla⁵²⁸.

Se consideran como actuaciones arqueológicas las que tenga como objetivo descubrir, documentar, investigar o proteger restos arqueológicos en sentido amplio. Existen actuaciones con carácter preventivo y de investigación. Las que poseen un carácter preventivo son la realización de inventarios de yacimientos si requieren prospección en el terreno. Estos son la relación y catálogo de yacimientos, hallazgos aislados y áreas de protección arqueológica, con expresa indicación de su tipología, cronología y localización geográfica. También se incluyen dentro de los mismos los controles y seguimientos arqueológicos y la protección, consolidación y restauración arqueológica. Por otro lado, como actuaciones arqueológicas de investigación, la LPCHALR entiende las prospecciones arqueológicas⁵²⁹, las excavaciones arqueológicas y el sondeo arqueológico. Existen a su vez también las intervenciones de urgencia que son aquellas que tienen la finalidad de salvaguardar el

⁵²⁸ VV.AA., “La reintegración en materiales paleontológicos. Criterios utilizados. Justificación y propuestas de intervención en el Museo Geominero (IGME, Madrid)”, (https://ge-iic.com/files/IVcongreso/20_eleuterio_baeza3.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2017).

⁵²⁹ En el caso de que se practiquen prospecciones arqueológicas cuyo objeto afecte al patrimonio cultural subacuático, las actuaciones que se lleven a cabo sólo podrán realizarse desplazamientos moderados de arena sin extracción ni remoción de material arqueológico alguno, siempre que se haga constar expresamente en el permiso administrativo.

patrimonio de un peligro inmediato de pérdida, destrucción, deterioro o expolio.

Para llevar a cabo cualquier tipo de actuación al respecto, se requiere contar con una autorización previa emitida por la Consejería competente en materia de cultura, además de cualquier otra que fuera necesaria. Las actuaciones pueden ser iniciadas de oficio por la Consejería competente en materia de cultura. Al mismo tiempo cualquier persona física puede solicitar que se lleven a cabo actuaciones o autorización de la Administración pública para poder desarrollarlas en su nombre.

En sentido contrario, se castigan las actuaciones que no estén autorizadas o que hayan contravenido los términos de la autorización, generando la correspondiente responsabilidad civil y administrativa, que dependerá de los daños y circunstancias.

En las excavaciones y prospecciones en las que se encuentren o hallen restos arqueológicos, paleontológicos o componentes geológicos que tengan relación con los bienes, la Consejería del Gobierno de La Rioja competente en materia de cultura podrá llevar a cabo una serie de medidas entre las que se encuentran: suspender obras, modificar proyectos y autorizaciones, incoar el procedimiento para la declaración o inclusión de los bienes encontrados en algunas de las categorías o cambiar los usos del lugar donde se encontraron, entre otras.

El patrimonio cultural subacuático, en la mayoría de los casos, va a estar catalogado dentro alguna de las figuras arqueológicas. En principio corresponde a la Consejería competente en materia de cultura, de oficio o a instancia de parte ordenar la ejecución de prospecciones o de excavaciones arqueológicas en cualquier punto de La Rioja en el que haya indicios de existir patrimonio arqueológico, con independencia de quien sea la titularidad del terreno, su extensión o cualquier otra circunstancia. En este sentido, parece que la LPCHALR se excede al autoatribuirse una potestad absoluta y sin límites, siempre y cuando se indemnice según los baremos y reglas de la LEF.

Las reglas expresadas en la LEF se aplican en estos casos de la siguiente forma. En primer lugar, las edificaciones o construcciones que impidan o trastornen la visualización de los bienes inmuebles o que puedan ocasionar o provocar situaciones de riesgo a estos, pueden ser expropiados por causa justa basada en este interés social. Otra de las causas para llevar a cabo la expropiación de bienes será el interés social para mejorar el acceso a los bienes inmuebles, la dignificación de su entorno, la mejora de las condiciones de su disfrute público, así como las necesidades de suelo para la realización de obras destinadas a la conservación de aquellos bienes y de los destinados a la creación, ampliación y mejora de museos.

En cuanto a la potestad para expropiar, le corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja o cualquier otra Administración pública de dicha región, teniendo prioridad la Comunidad Autónoma a

la hora de practicar la expropiación, previa notificación de la entidad local.

La LPCHALR establece las formas en que deben entenderse los hallazgos casuales de patrimonio cultural subacuático. Esta norma se basa en las reglas generales de protección de la LPHE, de forma que establece una formulación similar a la que prevé dicha norma.

Como muestra del interés por la protección del patrimonio arqueológico, la Consejería competente en materia de Cultura elaborará y mantendrá periódicamente actualizada la Carta Arqueológica y Paleontológica de La Rioja, aunque hasta la fecha no se ha incluido en la misma ningún bien que tenga el carácter de patrimonio cultural subacuático.

Ñ) Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León

a) Preliminar

Castilla y León es una Comunidad Autónoma de interior sin acceso al mar por lo que el patrimonio cultural subacuático no tiene una importancia como sí lo tiene en otras Comunidades Autónomas. Pese a ello, dicha Comunidad Autónoma está formada por comunidades históricas con gran pasado y cuyos elementos son los orígenes de los actuales Estados de España y Portugal, lo que hace que puedan extender

los elementos identificativos del patrimonio cultural más allá de las fronteras de Castilla y León si consiguen justificarlo⁵³⁰.

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León⁵³¹, en adelante Ley 12/2002, se encarga de establecer los elementos básicos para proteger los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico que componen el Patrimonio Cultural de Castilla y León. Esta norma establece las formas en que debe protegerse y respetarse el patrimonio cultural de Castilla y León, afectando tanto a las Administraciones públicas como a la sociedad civil en múltiples y variadas formas de protección, ya sea de forma activa o pasiva.

Como en otras Comunidades Autónomas, el patrimonio cultural subacuático no está regulado de forma expresa, sino que se engloba en el patrimonio arqueológico bajo diferentes formas de regulación. Así sucede con el concepto de Zona Arqueológica, cuando se define como “el lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el

⁵³⁰ VV.AA., “El patrimonio arqueológico subacuático”, *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, año nº. 19, nº. 80, 2011, pp. 40-45.

⁵³¹ B. PÉREZ GALAN, “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre patrimonio cultural en España: una lectura antropológica sobre las figuras legales de protección”, *Revista de Antropología Experimental* (11), 2011, pp. 11-30 y VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología. Revistas de la Universidad de Oviedo*, nº. 26, pp. 188-203.

subsuelo o bajo las aguas”. Para obtener dicha categoría debe ser catalogado como un BIC. Esto debe hacerse a través de unas normas y procedimiento específico.

b) Bienes de interés cultural

Los BIC representan la máxima categoría de protección del patrimonio cultural castellanoleonés. Dicha categoría se les otorga a los bienes que pueden ser bienes muebles o inmuebles, después de pasar por un procedimiento especial, y siempre que reúnan de forma especial, relevante y singularmente elementos artísticos, históricos, arquitectónicos, paleontológicos, arqueológicos, etnológicos, científicos o técnicos dentro del patrimonio cultural castellanoleonés⁵³².

⁵³² La norma establece diferentes categorías entre las que se encuentran:

“Monumento, la construcción u obra producto de actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se señalen como parte integrante de él, y que por sí solos constituyan una unidad singular”.

“Jardín histórico, el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos”.

“Conjunto histórico, la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”.

“Sitio histórico, el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, tradiciones populares, creaciones culturales o literarias, y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”.

Los BIC se ven afectados de forma plena por los deberes de conservación, de acceso al Patrimonio Cultural tanto para el público como para investigadores, y los derechos de tanteo y retracto a favor de diferentes Administraciones públicas, limitaciones al comercio y cambios de titularidad, una serie de reglas en caso de expropiación forzosa y normas que regulan los instrumentos de ordenación del territorio y evaluación del impacto ambiental, en caso de tratarse de bienes inmuebles.

Esta norma reconduce el patrimonio cultural subacuático, a diferencia de otras normativas autonómicas, casi necesariamente a la categoría de zona arqueológica, dado que es la única que engloba elementos de este tipo. Dentro de dicha definición podrían catalogarse en un futuro las ruinas de la Muedra (Soria) en el embalse de la Cuerda del Pozo⁵³³, en el que al bajar las aguas del mismo se muestran los restos de una antigua herrería.

“Zona arqueológica, el lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas”.

“Conjunto etnológico, paraje o territorio transformado por la acción humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculados a formas de vida tradicional”.

“Vía histórica, en el caso de vías de comunicación de reconocido valor histórico o cultural, cualquiera que sea su naturaleza”.

⁵³³ O. PUCHE RIART, “Algunos datos para la historia de la minería en la provincia de Soria”, *Revista de Soria*, (nº. 90); pp. 3-26 y J. R. MORALA RODRÍGUEZ, “Los ríos y los paisajes del Duero en la toponimia”, *Congreso homenaje al Douro/Duero y sus ríos: memoria, cultura y porvenir*, Escuela Universitaria de Magisterio (Universidad de Salamanca), 2006.

Haciendo una interpretación extensiva de los criterios a tener en cuenta, podría decirse que también puede haber bienes integrantes del patrimonio cultural subacuático que formen parte de un “conjunto histórico” o de un “sitio histórico”. Dentro de esta última categoría, podrían incluirse los bienes anegados del antiguo pueblo de Ribadelago (Zamora), que se encuentra dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria⁵³⁴, aunque este se protege a través de otra normativa referida al valor paisajístico, es decir, por la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León. El contenido y elementos que regula y protege son asimilables a elementos que pueden ser integrados en el patrimonio cultural subacuático. Este lago está protegido de forma reciente por la Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), que modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y establece su régimen de protección, uso y gestión, aunque ya lo estaba por Decreto

(<http://www.unizar.es/fnca/duero/docu/p306.pdf> Consultado el 23 de noviembre de 2017).

⁵³⁴ J.M. ALONSO GONZÁLEZ, “Arquitectura popular en el parque natural del lago de Sanabria”, *Bibliographie d'Histoire de l'Art. Etnografía española*, 1992, 8, p. 82; E. BLASCO HEDO, “Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, nº. 68, 2017, pp. 41-41 y VV.AA., *Recuperación de construcciones tradicionales e interpretación del patrimonio en el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores*, Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006, pp. 4-120.

con anterioridad⁵³⁵. La categoría de sitio histórico podría haberla obtenido también, puesto que dicha zona es un paraje natural vinculado a acontecimientos históricos, como puede ser la rotura de la presa que anegó el núcleo de Ribadelago⁵³⁶. Al mismo tiempo, como establece la propia ley que regula el Parque Natural del Lago de Sanabria, “además de su alto valor medioambiental, esta zona ofrece valiosos recursos históricos, artísticos y culturales. Destacan las numerosas muestras de arquitectura popular distribuidas en los pueblos de la zona, la iglesia románica y los restos del monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda, la riqueza de su patrimonio inmaterial (tradiciones, leyendas, mascaradas...), así como la diversidad y riqueza lingüística de sus poblaciones”. Quizás, fruto de que sea una ley que regula el patrimonio natural la que protege este bien, se entiende que se omitan referencias directas a Ribadelago, “al Puobro Viello”, como se le conoce en la zona, aunque las ruinas bajo las aguas sean uno de los elementos destacados en las visitas del parque⁵³⁷.

⁵³⁵ Estos Decretos son el Decreto 121/1990, de 5 de julio, por el que se modifican los límites y se adecuan la regulación y la organización del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, y el Decreto 62/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora).

⁵³⁶ E. BLASCO HEDO, “Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, n.º. 68, 2017, pp. 41-41.

⁵³⁷ Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión, cit. p.41.

c) Patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico de la Comunidad de Castilla y León está integrado por “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre”. La propia ley usa un concepto amplio para entender qué debe incluirse dentro de las normas especiales de protección, siendo el criterio unificador del mismo el que para localizarlos, conservarlos u obtenerlos se utilicen técnicas arqueológicas.

La norma no especifica qué debe entenderse por técnicas arqueológicas. No obstante, lo que sí define son las actividades arqueológicas, de forma que se puede hacer una cierta asimilación entre técnicas arqueológicas y actividades arqueológicas. Dentro de estas se incluyen las siguientes:

- a) Prospecciones, que son “las observaciones y reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo”.

- b) Excavaciones, que son “las remociones de terreno efectuadas con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo”.
- c) Controles arqueológicos, que son “las supervisiones de las remociones de terrenos que se realicen, en lugares en los que se presume la existencia de bienes del patrimonio arqueológico, pero no esté suficientemente comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen”.
- d) Estudios, que son “la reproducción mediante calco o por cualquier otro sistema, dirigidas a la documentación e investigación”.

Cualquier hallazgo de bienes arqueológicos que se encuentre ya sea de forma casual o intencionada forma parte del patrimonio público, aunque los descubridores y dueños de los terrenos de los hallazgos casuales pueden ser recompensados. Este premio como máximo será la mitad del valor del bien.

El art. 42 de la Ley 12/2002 establece una serie de reglas especiales para proteger los conjuntos históricos, sitios históricos y las zonas arqueológicas. Se considera una excepción la sustitución de inmuebles, de forma que solo pueden hacerse cuando contribuya a la conservación unitaria del conjunto, dado que la conservación de los

mismos implica el mantenimiento de valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la protección de bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales.

Donde existan o puedan existir este tipo de bienes no se admiten alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto. En los casos en que deban autorizarse, deben contribuir a la conservación del bien. Para las zonas arqueológicas y sitios históricos, el grado de protección es mayor, ya que solo se admite la colocación de publicidad, de cables, antenas y conducciones o servidumbres aparentes de cualquier clase en suelo urbano.

El planeamiento urbanístico en estos bienes debe protegerse por todas las Administraciones públicas y deben figurar las formas de protección y los usos autorizados en la ordenación urbanística. La autorización de obras en los sitios históricos y zonas arqueológicas requerirá en el momento de iniciarse el procedimiento de una declaración, así como las órdenes de ejecución correspondientes de informes favorables de la Consejería competente de en materia de cultura⁵³⁸.

Se pueden suspender las autorizaciones en caso de incumplimientos, además de ser sancionado dependiendo los hechos y

⁵³⁸ En el momento de la elaboración de estas líneas dicha competencia correspondía a la Consejería de Cultura y Turismo.

circunstancias del caso concreto, siendo esto un modo de protección del patrimonio punitivo y restaurativo de los bienes al estado más parecido que tenían con anterioridad a las acciones.

O) Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Especial referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014, de 17 de julio sobre la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

La comunidad de Madrid es una Comunidad Autónoma plenamente de interior y una de las más urbanizadas, por lo que la protección del patrimonio cultural subacuático es meramente testimonial en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid⁵³⁹. La única referencia al mismo la

⁵³⁹ Esta norma no es la primera que regula dichas competencias autonómicas, sino que viene a derogar la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Pese a derogarla, mantiene en vigor varios reglamentos, como el Decreto 79/2002, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de composición, organización y funcionamiento del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; el Decreto 51/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid; el Decreto 52/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid; el Decreto 53/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento que regula la composición, organización y funcionamiento de las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; el Decreto 121/2005, de 17 de noviembre, por el que se crea la Comisión Regional para la Aplicación del Uno por Ciento Cultural de la Comunidad de Madrid.

encontramos cuando se habla de las “zonas de interés arqueológico y/o paleontológico”⁵⁴⁰, al definir estos como “el lugar o paraje en donde existan bienes o restos de la intervención humana o restos fosilizados, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica y/o paleontológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran en el subsuelo, bajo las aguas o en construcciones emergentes”. Esta inserción dentro del art. 3, que regula los diferentes tipos de BIC, se basa en una traslación de la normativa nacional a la autonómica, de forma que se quiere englobar todos los supuestos posibles para una protección hipotética sin verdaderos fines aplicativos por los motivos anteriormente expuestos.

Esta normativa basada en las reglas de protección del patrimonio de la LPHE y en la antigua Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, contempla una normativa en la que se protegen a los bienes que forman parte del

⁵⁴⁰ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, “La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural”, *Revista PH* 84 (2013), pp. 22-25; J. I MUÑOZ LLINÁS, “La nueva Ley de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid”. *Apuntes de Arqueología en el Boletín del CDL*, nº XXVIII, febrero de 2014, pp. 20-24; M. A. QUEROL FERNÁNDEZ y B. MARTÍNEZ DÍAZ, “Paso a paso: el tratamiento de los bienes arqueológicos en las leyes de patrimonio de Valencia y Madrid”, *Complutum*, nº. 9, 1999, pp.279-291; VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología. Revistas de la Universidad de Oviedo*, nº. 26, pp. 188-203; A. YÁÑEZ VEGA, “Claroscuros normativos. Reflexiones a propósito de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, nº. 17, diciembre, 2013, pp. 89-110 y D. DÍAZ DEL POZO, A. TORIJA LÓPEZ y E. ZARCO MARTINEZ, “6. Una nueva ley de patrimonio histórico para la CAM. Reflexiones en torno a un camino accidentado”, *Revista PH* 85 (abril 2014), pp. 6-11.

patrimonio de la Comunidad autónoma de Madrid, a través de una serie de obligaciones y limitaciones sobre los usos del bien. Entre estos encontramos limitaciones al comercio y cambios de titularidad, una serie de reglas en caso de expropiación forzosa y normas que regulan los instrumentos de ordenación del territorio y evaluación del impacto ambiental, en caso de tratarse de bienes inmuebles.

La doctrina ha expresado al respecto que esta norma reduce los niveles de protección de la norma anterior al utilizar menos elementos expresos y más implícitos “abriendo las amenazadoras puertas de la filtración entre el articulado”⁵⁴¹. Diferentes autores han analizado la misma y han determinado que se mantienen los defectos anteriores y se añaden elementos deficitarios con respecto a otras normativas autonómicas de protección del patrimonio cultural como pueden ser la “desigualdad de los bienes genéricos objeto de protección; limitación de los bienes protegidos, reducción de visitas públicas a monumentos, los silencios positivos en materias de urbanismo, la eliminación de informes previos, la exclusión de bienes inmuebles de la consideración de dominio público, la ausencia de una arqueología preventiva, catálogos precipitados de bienes y espacios protegidos”⁵⁴².

⁵⁴¹ D. DÍAZ DEL POZO, A. TORIJA LÓPEZ y E. ZARCO MARTINEZ, “Una nueva ley de patrimonio histórico para la CAM. Reflexiones en torno a un camino accidentado”, *Revista PH* 85 (abril 2014), p. 6 y A. YAÑEZ VEGA, “Claroscuros normativos. Reflexiones a propósito de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid”, cit., pp. 89-110.

⁵⁴² D. DÍAZ DEL POZO, A. TORIJA LÓPEZ y E. ZARCO MARTINEZ, *Una nueva ley de patrimonio histórico para la CAM. Reflexiones en torno a un camino accidentado*, cit, p. 7.

Prueba de que todavía, a día de hoy, sigue existiendo un claro conflicto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico y cultural es la sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014, de 17 de julio de 2014, sobre la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, sentencia de vital importancia que, nuevamente, deja sentadas las bases para entender las competencias que tiene el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia.

Con esta resolución, se pone de manifiesto que el problema competencial todavía no está claro y que el máximo intérprete de la Constitución Española tiene que seguir pronunciándose para esclarecer cuáles son las competencias de cada uno. No obstante, hay que traer a colación que el Tribunal Constitucional sigue firme en su línea y rescata varios pronunciamientos que ya manifestó en otra sentencia pionera en la materia, la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, a la que nos referimos en páginas anteriores.

Centrándonos en el análisis de la sentencia que nos corresponde, hay que señalar que el origen de la misma se encuentra en la aprobación de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Tras la aprobación, cincuenta y siete Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y

Mixto deciden interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a varios artículos⁵⁴³.

Los recurrentes consideran que “los preceptos impugnados rebajan el nivel de protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico respecto a lo que establece la Ley estatal”⁵⁴⁴. En su recurso de inconstitucionalidad, invocan diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente la 17/1991, de 31 de enero, en la que se señala que “la Ley de patrimonio histórico español, lo que pretendía era establecer «aquellos principios institucionales que reclaman una definición unitaria, puesto que se trata del patrimonio histórico español en general», correspondiendo al Estado las «competencias para fijar, con carácter general, algún régimen jurídico sobre la materia»”.

En consonancia con lo anterior, los recurrentes fundamentan su recurso de inconstitucionalidad alegando que la categoría de bien de interés cultural que se contempla en la Ley de patrimonio histórico español “constituye la piedra angular de los tratamientos generales necesarios para la preservación del patrimonio cultural común a que se

⁵⁴³ Los artículos que se impugnan son los siguientes: artículo 2 apartado segundo en relación al adjetivo “excepcional”; artículo 4 apartado segundo cuando contempla la expresión “los yacimientos arqueológicos y paleontológicos cuya existencia esté debidamente documentada por la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico”; artículo 8 apartado quinto, nuevamente por la expresión “excepcional”; artículo 19 apartado segundo; artículo 23 apartado primero; artículo 23 apartado segundo; artículo 24 en su apartado segundo a) in fine cuando señala: “salvo casos excepcionales y previa autorización expresa de la consejería competente en materia de patrimonio histórico”; artículo 24 en su apartado quinto; artículo 26 en su apartado primero en su primer inciso y por último, el artículo 27.

⁵⁴⁴ Entiéndase por ella la LPHE.

refieren los artículos 139.1.28, primer inciso, y 149.2 CE [...]” y además, alegan que “la competencia exclusiva del Estado en la defensa de los bienes del patrimonio histórico contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28 CE) se desarrolla así, entre otros instrumentos y actuaciones administrativas, a través de la declaración de bien de interés cultural, cuyo régimen jurídico se establece en la Ley de patrimonio histórico español”.

Traen, una vez más, a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, cuando afirman que “si la calificación formal como bien de interés cultural constituye un requisito para la defensa de esos bienes contra la exportación y expoliación, cabe entender que, al menos a tales efectos, es sólo el Estado el que ha de establecer los estándares mínimos necesarios para proteger dicho bien de interés cultural, especialmente contra la expoliación. Las Comunidades Autónomas no pueden reducir los estándares de protección que comporta el régimen de los bienes de interés cultural regulado por el Estado mediante su Ley de patrimonio histórico, y por ello diversas razones. En primer lugar, de tipo competencial, pues al carecer de competencias sobre esta materia, las Comunidades Autónomas no pueden entrar en este campo mermando los estándares que el Estado ha considerado necesarios establecer; en segundo lugar, de tipo sustantivo, ya que, para preservarlos de la expoliación, estos bienes han de ser tratados conforme a los estándares materiales y técnicos generales que fija el Estado; y en tercer lugar, de tipo

instrumental, en la medida en que la categoría del bien de interés cultural perfecciona su eficacia mediante el registro general que crea el artículo 12 LPHE y, como apuntó la STC 71/1983, de 29 de julio (FJ 3), aunque se trate de un registro administrativo que no encaja en la competencia exclusiva del Estado prevista en el art. 149.1.8 CE, la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas aconseja la transmisión de la información al registro de competencia estatal”.

Con estas afirmaciones, los recurrentes ponen de manifiesto que con la nueva ley aprobada por la Asamblea de Madrid, además de vulnerarse las competencias del Estado, se pondría en peligro la protección de los diferentes bienes históricos y culturales en relación con la exportación y la expoliación.

Para entender el razonamiento que hace el máximo intérprete de la Constitución, deben exponerse, primero, las alegaciones de los recurrentes para dilucidar luego la línea del Tribunal Constitucional en esta línea.

Como se ha señalado anteriormente, el primer precepto recurrido fue el artículo 2 en su apartado segundo⁵⁴⁵ en relación al adjetivo “excepcional” que también aparece en el segundo artículo

⁵⁴⁵ El artículo 2.2 recurrido dispone lo siguiente: “Serán Bienes de Interés Cultural los bienes que, formando parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, tengan un valor excepcional y así se declaren expresamente. En todo caso, serán Bienes de Interés Cultural los bienes muebles que integran los fondos de museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid”.

recurrido, el 8 en su apartado quinto⁵⁴⁶. Para los recurrentes, este adjetivo provoca una menor protección con relación al artículo 1.3 de la LPHE, cuando dispone que “los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”. Además, consideran éstos que cuando en el artículo 8.5 se emplea el adjetivo “excepcional” por el que se deja sin efecto la declaración de bien de interés cultural, se facilita la pérdida de los valores que motivaron dicha declaración y, con ello, la protección del bien. En definitiva, lo que trata de discutirse es la diferencia entre “excepcional” y “relevantes”, en cuanto ambas expresiones no son sinónimas y emplear la primera en sustitución de la segunda provocaría una menor protección de los bienes.

Ante esta disyuntiva, el Tribunal Constitucional opta por declarar inconstitucional este artículo basándose en que “al Estado le está atribuida la definición genérica y esencial de las notas que determinan que un bien sea declarado de interés cultural por la Administración competente, pues de este modo se garantiza un tratamiento general en toda España art. 149.2 CE y se evita que los bienes que lo merezcan sean excluidos de la protección máxima que esta categoría supone (art. 149.1.28 CE)”. El Tribunal Constitucional es laxo con lo demás en el sentido de que “una ulterior precisión de

⁵⁴⁶ El artículo 8.5 recurrido indica que la declaración de Bien de Interés Cultural únicamente podrá dejarse sin efecto, en todo o en parte, siguiendo los mismos trámites establecidos para tal declaración y solo si se justifica la pérdida irreparable o la inexistencia del valor excepcional en virtud del cual fue protegido”.

estas notas caracterizadoras ya no forma parte de esos limitados títulos competenciales, pudiendo abordarla cada Comunidad Autónoma en virtud de su competencia general en materia de patrimonio histórico”. El problema estriba en que, cuando la Comunidad de Madrid se refiere a los bienes “que tengan un valor excepcional”, el Tribunal Constitucional apunta que “no están precisando o concretando para la Comunidad de Madrid la caracterización estatal de los bienes de interés cultural como «los más relevantes», sino que, por el contrario, se mueven en un nivel de principio que interfiere claramente en un ámbito que [...] está reservado al Estado”. Hecho que motiva, claramente, su inconstitucionalidad y que devenga nulo. En definitiva, es una competencia que la Comunidad de Madrid no puede asumir, ya que corresponde al Estado la definición genérica para declarar que un bien sea de interés cultural.

Declarados inconstitucionales los artículos 2.2 y 8.5 de la Ley de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid de 2013, procede ahora analizar los motivos que llevaron a los recurrentes a impugnar el artículo 4.2 de dicha ley, sin que el Tribunal Constitucional admitiese dicha argumentación.

La impugnación del artículo 4 en su apartado segundo se centra en la expresión “los yacimientos arqueológicos y paleontológicos cuya existencia esté debidamente documentada por la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico”. Interpretan los recurrentes que con esa expresión solamente se protegería el patrimonio

que estuviese “documentado”, dejando de lado otras opciones, como, por ejemplo, según señalan en el recurso, “los hallazgos casuales o aquel del que se tiene constancia por informaciones que no se han podido documentar”.

Como era de esperar y de manera muy acertada a nuestro juicio, el Tribunal Constitucional no entró a valorar si sólo se protegía el patrimonio “documentado” o los “hallazgos casuales”, por ejemplo, sino que se limitó a comprobar que el precepto recurrido se ajustaba o no a lo dispuesto en la Constitución Española, única tarea que le es encomendada en este caso.

Así las cosas, el máximo intérprete de la Constitución, haciendo alusión a la STC 17/1991, de 31 de enero⁵⁴⁷, determinó que el contenido de ese artículo se ajustaba perfectamente a la Constitución Española, y que “la previsión de instrumentos autonómicos de gestión del patrimonio histórico [...] no es un segmento material que se integre en las competencias exclusivas estatales que derivan del 149.1.28 CE o del artículo 149.2 CE porque [...] su función no es delimitar qué inmuebles gozan de la condición de bienes de interés cultural [...]”.

Como se ha anunciado al inicio de este apartado, también se recurrió el artículo 19.2 de la misma ley autonómica. En el apartado primero del artículo 19 se alude a que las intervenciones en los bienes

⁵⁴⁷ Fundamento Jurídico 12.

muebles e inmuebles de Interés Cultural deben ser autorizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

Lo que se cuestiona es el apartado segundo cuando exige de autorización administrativa expresa determinadas intervenciones en los bienes muebles e inmuebles de interés cultural en sus apartados a), b) y c). En este sentido, aluden a que se estaría interfiriendo en la competencia estatal recogida en el artículo 149.1.28 CE, sobre defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español frente a la expoliación. Traen a colación el artículo 19 de la LPHE, que establece que “en los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esa Ley”. El Tribunal Constitucional entiende, en este caso, que de una lectura conjunta tanto del artículo 19 de la LPHE y del 19.2 de la ley autonómica, “se desprende con claridad que regulan supuestos distintos”. No obstante, aclara el Tribunal que “esto no excluye la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes, pues [...], la competencia estatal invocada no aparece configurada en la Constitución como competencia básica, por lo que corresponde a este Tribunal, interpretando directamente el enunciado del texto constitucional, delimitar qué submaterias comprende, atendiendo a su sentido y funcionalidad propios”. El propio Tribunal Constitucional vuelve a hacer referencia a la STC 17/1991, de 31 de enero, de la que rescata la

que va a ser la argumentación para declarar inconstitucional este artículo, debido a que está en juego la defensa contra la expoliación. El razonamiento empleado por el Tribunal se fundamenta en que el “concepto de defensa contra la expoliación ha de entenderse como un «un plus de protección respecto de unos bienes dotados de características especiales», que se concreta en un «conjunto de medidas de defensa que a más de referirse a su deterioro o destrucción tratan de extenderse a la privación arbitraria o irracional del cumplimiento normal de aquello que constituye el propio fin del bien según su naturaleza»”.

No cabe la menor duda, de que, al tratarse de bienes que poseen unas características especiales y siendo la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación una competencia exclusiva del Estado de acuerdo con el artículo 149.1.28, estamos ante una competencia que, como bien apunta el Tribunal, no es “constitucionalmente legítimo que la legislación autonómica se proyecte sobre ella”.

El argumento final esgrimido para declarar inconstitucional y, por tanto, nulo este artículo es el siguiente: “Dado que el precepto impugnado se refiere a inmuebles de la mayor relevancia, pues los tres apartados del art. 19.2 de la Ley autonómica aluden a categorías de inmuebles declarados de interés cultural, que es la figura que otorga un mayor nivel de protección en atención a la especial importancia de los valores que atesoran, y teniendo en cuenta que las disposiciones

impugnadas no especifican que las obras a que se refieren se limiten a intervenciones mínimas ni ello se puede deducir de la naturaleza de las obras permitidas, debemos concluir que tales preceptos autonómicos, en la medida en que las eximen de la necesidad de recabar autorización previa, invaden la competencia estatal en materia de defensa del patrimonio histórico contra la expoliación ex art. 149.1.28 CE y, por ello, sin necesidad de abordar el segundo motivo de impugnación, debemos declarar su inconstitucionalidad y nulidad”.

Lo mismo ocurre con el artículo 23.1⁵⁴⁸ de la ley, en el sentido de que, una vez más, la Comunidad de Madrid abarca más de lo que le compete. En este caso, los recurrentes argumentan su impugnación en que se permite que los bienes inmuebles pueden desplazarse y también removerse previa autorización administrativa, si ésta es otorgada por “causas debidamente justificadas”, sin sujetarse a unas garantías procedimentales específicas. Esto llevaría a un campo de discrecionalidad mucho más amplio que el que se establece en el artículo 18 de la LPHE⁵⁴⁹ y sería, como señalan los recurrentes, una operación potencialmente expoliadora.

⁵⁴⁸ “Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural son inseparables de su emplazamiento. No obstante, se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cuando concurran causas debidamente justificadas”.

⁵⁴⁹ “Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 9º, párrafo 2º, de esta Ley”.

Entramos, por tanto, una vez más, en conflicto con el artículo 149.1.28ª CE, según el cual la competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio en cuestión frente a la expoliación le compete al Estado. Así se pronuncia nuevamente el Tribunal Constitucional y lo hace aludiendo a la STC 17/1991, de 31 de enero, en la que señaló, en relación con el artículo 18 de la LPHE, lo siguiente: “el cambio de emplazamiento de un inmueble o su remoción implica riesgos para la propia existencia o también para la función social, cultural e histórica a la que aparece vinculado y no sólo esto, sino que la situación de un inmueble confiere de ordinario a su entorno un carácter derivado de aquél, de tal manera que, no ya el bien singular, sino el paraje, quedan de hecho calificados al calificarse el primero. Por ello es preciso someter el desplazamiento a autorización previa por parte de la Administración del Estado, como garante de la preservación de tales bienes en cuanto se den las citadas circunstancias y como consecuencia de la evidente relación que existe entre la remoción del bien y la privación o lesión de su propio destino”.

Puede llevarnos a confusión este argumento sobre el desplazamiento y la remoción de un inmueble Bien de Interés Cultural, en el sentido de que tenga que autorizarlo la Administración del Estado, con la declaración de un Bien de Interés Cultural que, *contrario sensu*, compete a las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 9.2 en relación con el artículo 6 de la LPHE. No olvidemos que, según el artículo 9.2 de la LPHE, la declaración de un Bien de Interés Cultural

requiere una previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6 de la LPHE, que es quien determina que será competente para la ejecución de esa declaración: “a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico; y b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español”. En el caso que nos ocupa, frente a la exportación ilícita o la expoliación, no corresponde a las Comunidades Autónomas, sino al Estado.

Con todo ello, entiende el Tribunal Constitucional que “la remoción o desplazamiento de un bien de interés cultural regulada en el art. 18 LPHE es una de las submaterias que abarca la competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.28 CE, por lo que es claro que el art. 23.1 de la Ley del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, al disciplinar la misma, se extralimita de la competencia autonómica en materia de patrimonio histórico e invade la competencia estatal indicada con lo que [...] procede declarar su inconstitucionalidad y nulidad”.

El artículo 23.2 de la ley autonómica sigue la misma línea que el anterior, aunque en este caso se trata de que se permite que “los monumentos y jardines históricos puedan, en determinadas circunstancias, ser objeto de segregación parcelaria”, encontrándonos nuevamente con un potencial caso de expoliación de estos bienes que

se resuelve con arreglo al artículo 18 de la LPHE, según el cual un bien inmueble que sea declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. Así lo manifiesta el Tribunal Constitucional invocando el argumento anterior, al no tratarse de una competencia básica⁵⁵⁰.

En lo que atañe al artículo 24.2 de la ley impugnada, los recurrentes sólo centran su recurso en el último inciso del apartado a) del mismo, es decir, “salvo casos excepcionales y previa autorización expresa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”. Entienden que este artículo infringe lo que dispone el artículo 21.3 de la LPHE, al establecer excepciones apreciables por la autoridad administrativa en la aplicación de los criterios referentes a las citadas obras y que, una vez más, está en juego la expoliación de los bienes en cuestión.

Analizada la cuestión por el Tribunal Constitucional, éste determina que dichos artículos no regulan la misma materia. Por un lado, el artículo 24.2 impugnado “regula los criterios conforme a los cuales habrán de realizarse esas obras de conservación, restauración o rehabilitación en los monumentos y jardines históricos”; y, por otro lado, el artículo 21.3 de la LPHE “tiene por objeto los conjuntos históricos, esto es, una categoría distinta dentro de los bienes de interés

⁵⁵⁰ Debemos entender que la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación no es una competencia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas en la que el Estado dicte una legislación básica y la Comunidad Autónoma la desarrolla y la ejecuta. En este caso, dicha competencia es exclusiva del Estado, no pudiendo interferir la Comunidad Autónoma.

cultural, a la vista de las respectivas definiciones contenidas en el art. 3.1 de la norma autonómica que en su letra a) define el «monumento» como «la construcción u obra producto de la actividad humana de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico o artístico»; en su letra d) el «jardín histórico» como «el espacio delimitado, producto de la ordenación humana de elementos naturales, estimado de interés histórico, estético o botánico»; y en su letra b) el «conjunto histórico» como «la agrupación de bienes inmuebles que configuran una unidad coherente con valor histórico y cultural, aunque individualmente no tengan una especial relevancia»”.

No obstante, el Tribunal vuelve a hacer alusión a lo señalado en la STC 17/1991, de 31 de enero, y con base en el fundamento jurídico 8 de la misma, declara que el artículo es inconstitucional argumentando que “ante el ante el riesgo de incidir en la funcionalidad de los bienes del patrimonio histórico, la disciplina de las obras que afecten a los inmuebles que sean portadores de los valores histórico-artísticos más relevantes, salvo cuando se trate de intervenciones mínimas, es una de las submateria estrechamente ligadas a la defensa del patrimonio histórico contra la expoliación, de modo que está reservada al Estado, no siendo constitucionalmente legítimo que la legislación autonómica se proyecte sobre ella. El precepto impugnado se refiere a monumentos y jardines históricos, esto es, dos categorías de inmuebles declarados de interés cultural, que es la figura que dispensa el más alto nivel de

protección en atención a la especial importancia de los valores que atesoran”.

También se impugna el artículo 24.5⁵⁵¹. Los recurrentes argumentan que vulnera el artículo 19.3⁵⁵² de la LPHE e indican que la redacción del artículo 24.5 “incide en el espacio normativo reservado por el artículo 149.1.28 CE al Estado, lo cual lo convierte, por invadir la competencia estatal indicada, en inconstitucional y nulo”.

Basta con observar la redacción de los dos artículos para entender que se establece una clara contradicción. Mientras el artículo de la LPHE es tajante con la prohibición de la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones en los Jardines Históricos, en el artículo impugnado se deja la puerta abierta a que esa colocación puede ser autorizada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

⁵⁵¹ “Deberá evitarse la colocación de publicidad comercial, cables, antenas y conducciones visibles en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos. En todo caso, su colocación deberá ser autorizada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. En aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades culturales se podrán colocar rótulos indicadores de su horario de visitas, historia, patrocinio, o difusión de las actividades que se celebren en el bien, previa comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”.

⁵⁵² “Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación”.

El penúltimo artículo impugnado es el 26.1⁵⁵³, entendiendo los recurrentes que vulnera el artículo 20.1⁵⁵⁴ de la LPHE, debido a que “no establezca la obligatoriedad de aprobar planes especiales de protección de los inmuebles declarados como bien de interés cultural, ni que se deje a la disponibilidad facultativa del Ayuntamiento respectivo con la consiguiente reducción de la protección contra la expoliación”. No obstante, creemos que el argumento que aportan los recurrentes no es del todo cierto. De la lectura del artículo 20.1 de la LPHE no se desprende literalmente que los municipios tengan la “obligación” de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada cuando se declare un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, porque el mismo artículo 20.1 de la LPHE continúa añadiendo que, además del Plan Especial de Protección, pueden redactar “otro instrumento de planeamiento de los previstos en

⁵⁵³ “Los Municipios en que se encuentren Bienes de Interés Cultural declarados en las categorías a que se refieren las letras b), c), e) o g) del artículo 3.1 podrán redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración o incluir en su planeamiento general determinaciones de protección suficientes a los efectos de esta ley. La aprobación de estos instrumentos urbanísticos requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”.

⁵⁵⁴ “La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de, otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la existencia previa de planeamiento general”.

la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas”.

Así lo considera el Tribunal Constitucional y fundamenta su decisión de que dicho precepto no invade la competencia exclusiva del 149.1.28 CE en que “lo que está reservado al Estado en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.28 CE es prever normativamente que las áreas declaradas conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica han de recibir una atención particular y adecuada en los planes urbanísticos. La precisión de esta determinación normativa, siempre que no la contradiga o menoscabe de otra manera, al quedar fuera de esa competencia, puede ser abordada por las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias en materia de patrimonio histórico, como es el caso de la Comunidad de Madrid en el art. 26.1.19 EAM”.

Por último, llegamos al final de los preceptos impugnados y lo hacemos con el artículo 27⁵⁵⁵ que, a juicio de los recurrentes, “produce la plena derogación del principio de difusión de los bienes de interés cultural de titularidad privada” y, además, “dicho precepto modifica el instituto de la visita pública de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, pues solo la permite en los de titularidad pública, pero

⁵⁵⁵ “Los titulares o poseedores de bienes inmuebles de titularidad pública declarados de Interés Cultural deberán permitir la visita pública al menos una vez al mes. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá dispensar de dicha obligación cuando concurra causa justificada”.

sin decir nada respecto de los bienes inmuebles de titularidad privada ni de los bienes muebles. De esta manera, al impedirse el acceso de los ciudadanos al disfrute de dichos bienes, se viene a afectar a la función social de los mismos, lo que determina la vulneración del art. 46 CE – en cuanto a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico– así como de la competencia estatal de defensa de tales bienes contra la expoliación prevista en el art. 149.1.28 CE, ejercitada por el Estado en el art. 13.2 LPHE, que dispone que «los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados».

El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, apela a la existencia de una “función social última de los bienes que son portadores de valores singulares de carácter histórico, artístico o cultural, y en especial de los que por ser los más relevantes de entre ellos son declarados formalmente bienes de interés cultural” y señala que esa función social última tiene que “asegurar que dichos valores puedan ser conocidos y disfrutados por todas las personas, en particular por las que integran ese grupo social cuyo esfuerzo colectivo está reflejado en tales bienes, siendo este fin último el que por otra parte justifica las medidas que se adopten para impedir su destrucción o

deterioro”⁵⁵⁶. El quid de la cuestión estriba en que, en el artículo impugnado, tal y como argumentaban los recurrentes, nada se decía sobre los bienes muebles y los bienes inmuebles de titularidad privada. Por si no fuese suficiente, el propio artículo 27 incumple también los plazos mínimos fijados por el artículo 13.2 de la LPHE.

Como señalábamos anteriormente, la ley estatal fija que, como mínimo, las visitas –además de gratuitas– deberán ser “al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”, dato especialmente llamativo, cuando en el artículo 27 impugnado sólo se contempla la visita pública, al menos, un día al mes.

En conclusión, tanto la no contemplación de los bienes muebles y los bienes inmuebles de titularidad privada como la discrepancia con la ley estatal sobre los plazos mínimos de las visitas públicas, fueron factor determinante para que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional y, por tanto, nulo este precepto y entendiese que tales bienes “no pueden sustraerse por completo al goce de todos aquellos que no sean sus titulares”.

Con esto ponemos fin al análisis de esta sentencia que vuelve a fijar, una vez más, las bases competenciales sobre la materia, rescatando parte de la argumentación empleada en la STC 17/1991, de 31 de enero, y que, más de dos décadas después, todavía sigue siendo fuente de

⁵⁵⁶ Fundamento Jurídico 7 de la STS 17/1991, de 30 de enero y Fundamento Jurídico 3 de la STC 20/2013, de 31 de enero.

conflicto entre Estado y Comunidades Autónomas. Sin duda, y coincidiendo con la opinión de ALEGRE ÁVILA⁵⁵⁷, ambas sentencias son vitales para entender cómo se distribuyen las atribuciones tanto entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia.

P) Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

a) Preliminar

La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en adelante LPHCE⁵⁵⁸, es la norma encargada de proteger de manera general el patrimonio cultural en Extremadura⁵⁵⁹.

⁵⁵⁷ “La sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014, de 17 de julio y la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, nº. 18, 2014, pp. 469-501.

⁵⁵⁸ Aunque no es la única norma en la materia, puesto que existen normativas menores que también regulan ciertos aspectos en materia de patrimonio cultural en Extremadura como el Decreto 127/2001, de 25 de julio, por el que se regula el porcentaje cultural destinado a obras de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura o el Decreto 125/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y Cultural.

⁵⁵⁹ VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología*, Revista de la Universidad de Oviedo, nº. 26, pp. 188-203 y B. PÉREZ GALAN, “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre patrimonio cultural en España: una lectura antropológica sobre las figuras legales de protección”, *Revista de Antropología Experimental*, nº. 11, 2011, pp. 11-30.

En este sentido, la LPHCE establece que el patrimonio histórico y cultural de la Comunidad autónoma de Extremadura lo forman “todos los bienes tanto materiales como intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa especiales. También forman parte de mismo los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial, así como la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura”. La expresión “sean de interés para Extremadura” debe entenderse en el sentido de que se descubran o ubiquen en dicho territorio o tengan algún grado de vinculación con la región, de forma que corresponde tanto a las Administraciones públicas como a los ciudadanos defender el patrimonio extremeño.

La LPHCE establece varias categorías para proteger los bienes culturales: BIC, bienes inventariados y otros o los restantes bienes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura. Cada una de estas tres categorías posee un grado de protección de mayor o menor restricción y todas ellas deben inventariarse tras pasar un procedimiento de catalogación.

Hay que indicar que la norma establece un régimen de protección, conservación y mejora sobre los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura, de forma que se establecen deberes y garantías para proteger de manera general y constante estos bienes. De manera particular, se establecen limitaciones y requerimientos que pueden dar lugar a una ejecución forzosa, limitaciones sobre los traspasos, desplazamientos, régimen de licencias e intervenciones, tanto de los propios bienes como en el entorno si se trata de bienes inmuebles. También existe un régimen sancionador que afecta tanto a los propietarios o encargados de la protección de los bienes, como a los autorizados a llevar a cabo actividades, así como a cualquiera que produzca un daño a estos bienes.

b) Bienes de interés cultural

Los BIC son aquellos bienes que reciben una mayor protección comparados con el resto de categorías de protección. Los BIC pueden declararse de forma individual o en conjunto. En el caso de que se trate bienes muebles junto con inmuebles, se entiende que los primeros están asociados a los últimos de manera indisoluble. Estos bienes BIC pueden clasificarse en varias categorías⁵⁶⁰

⁵⁶⁰ Monumentos, el edificio y estructura de relevante interés histórico, artístico, etnológico, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen.

Llama la atención la diferenciación entre lugares y categorías etnológicas, paleontológicas y arqueológicas, ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas han optado por criterios interpretativos extensivos de lo que se considera una zona arqueológica, de forma que han incluido dentro de dicho régimen de protección bienes con dichas características⁵⁶¹.

Otro rasgo destacado es el gran número de categorías que contienen referencias a la palabra arqueología. El patrimonio cultural

Conjuntos Históricos, la agrupación homogénea de construcciones urbanas o rurales que destaque por su interés histórico, artístico, científico, social o técnico que constituyan unidades claramente delimitables por elementos tales como sus calles, plazas, rincones o barrios.

Jardín Histórico, el espacio delimitado que sea fruto de la ordenación por el hombre de elementos naturales que pueden incluir estructuras de fábrica y que destacan por sus valores históricos, estéticos, sensoriales o botánicos.

Sitios Históricos, el lugar o paraje natural donde se produce una agrupación de bienes inmuebles que forman parte de una unidad coherente por razones históricas, culturales o de la naturaleza vinculadas a acontecimientos, recuerdos del pasado o manifestaciones populares de las raíces culturales de una comunidad que posean valores históricos o técnicos.

Zonas Arqueológicas, lugar donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran en el subsuelo o bajo las aguas que discurran dentro del territorio de la Comunidad.

Zonas Paleontológicas, lugar donde hay vestigios fosilizados o no que constituyan una unidad coherente y con entidad propia.

Lugares de Interés Etnológicos, los espacios naturales, construcciones o instalaciones industriales vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo extremeño, tales como antiguos almacenes, fábricas, elementos distintivos como chimeneas, silos, puentes, molinos.

Parques Arqueológicos, Restos Arqueológicos sometidos a visitas públicas.

Espacios de Protección Arqueológicas, donde se presume la existencia de restos arqueológicos.

⁵⁶¹ Aunque en el art. 49 de la LPHCE se extiende el régimen de protección del patrimonio arqueológico, a los bienes que posean elementos geológicos y paleontológicos relacionados con el ser humano y con sus orígenes y antecedentes.

subacuático puede quedar amparado en las categorías de parques arqueológicos, si ya están declarados como tales y reciben visitas públicas; espacios de protección arqueológica, lugares en los que se presume que existen estos elementos; como zonas arqueológicas si existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, a los que habrá que añadir, dadas las definiciones del art. 6, los sitios históricos como el lugar o paraje natural donde exista una agrupación de bienes inmuebles con razones históricas, culturales o de la naturaleza vinculadas a acontecimientos, como pueden ser los restos de las poblaciones que se encuentran bajo los lechos de embalses y pantanos. En este sentido, también se puede hacer mención a los lugares de interés etnológico sobre las construcciones o instalaciones que estén vinculadas a formas de vida, cultura y actividades como pueden ser puentes que se encuentren bajo las aguas de los pantanos y embalses, siempre que hagamos una interpretación extensiva de dicho precepto e incluyamos los antiguos puentes sepultados bajo las aguas como bienes de este tipo.

c) Patrimonio arqueológico

Como patrimonio arqueológico, se protegen aquellos bienes muebles o inmuebles que se pueden estudiar bajo una metodología arqueológica.

Como se ha dicho con anterioridad, en Extremadura existen diferentes categorías dentro de su patrimonio arqueológico. Su legislación representa un caso único de protección del patrimonio. En

este sentido, se ha conseguido que playas de interior gocen de la máxima protección y distinción y puede aplicarse lo mismo al patrimonio oculto bajo sus aguas⁵⁶². Las aguas embalsadas de Extremadura cuentan con importantes vestigios bajo sus aguas, como puede ser Granadilla (Cáceres) en el embalse de Gabriel y Galán, que ya ha sido declarado como Conjunto histórico-artístico⁵⁶³, Talavera la Vieja o el municipio romano de Augustóbriga, bajo el embalse de Valdecañas (Cáceres)⁵⁶⁴. Pese a que antes de que dicho patrimonio fuera sepultado por las aguas fue trasladado, eso no quiere decir que dicha zona no sea susceptible de ser declarada como Espacios de Protección Arqueológica, al ser posible que en el lecho del Pantano de Valdecañas se encuentren restos que puedan ser protegidos, como son la calzada romana que comunicaba Caesarobriga (Talavera de la Reina) y Emerita Augusta (Mérida), el asentamiento neolítico de la Cañadillas, los dólmenes de Garrovillas o el poblado visigodo de Berrocalejo⁵⁶⁵.

⁵⁶² J. SANCHEZ GONZÁLEZ, J. A. FOLGADO FERNÁNDEZ y J. M. HERNÁNDEZ MOGOLLON, “El caso de la red de hospederías de Extremadura: Turismo cultural desde la gestión pública”, *Turydes. Revista de investigación en turismo y desarrollo local*, vol. 5, n.º. 12, junio 2012, pp. 6-42.

⁵⁶³ M. M. LOZANO BARTOLOZZI y V. MÉNDEZ HERNÁN, “Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo”, *Quintana*, n.º. 12, 2014, pp. 404-407.

⁵⁶⁴ B. M. AGUILAR-TABLADA MARCOS y M. D. SÁNCHEZ DE PRADO, “Evidencias de un taller de vidrio en la ciudad romana de Augustobriga (Talavera la Vieja, Cáceres)”, *Lucentum*. XXV, 2006, pp. 177-193.

⁵⁶⁵ J. MALDONADO ESCRIBANO, “Patrimonio vernáculo en su paisaje: Campo Arañuelo, en la cuenca del Tajo”, VV.AA., *Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería*, Editora Regional de Extremadura, Extremadura, 2012, pp. 337-353.

Para ello se deben incluir en el Inventario General de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Una vez inscritos o iniciados los proyectos, se deben delimitar las zonas de protección y de impacto ambiental.

Las actividades arqueológicas se deben aprobar tanto por la Comunidad autónoma como por el municipio en donde se encuentren. En general, la ley cataloga las autorizaciones y licencias en diferentes tipos: prospecciones arqueológicas; controles y seguimientos arqueológicos; excavaciones arqueológicas; estudios de lugares y muebles; labores de protección, consolidación y restauración; manipulación con técnicas analíticas, estudio de materiales depositados en museos, instituciones u otros centros públicos y trabajos de documentación gráfica. Este listado finaliza con “cualquier otra actividad que implique manipulación directa sobre el bien de naturaleza arqueológica”. Esta cláusula de cierre puede ser interpretada para autorizar actividades de diferentes tipos que pueden no tener finalidad exclusiva de protección intacta de los bienes arqueológicos, sino el disfrute y difusión de los mismos a través de otros usos alternativos o diferentes.

Las intervenciones arqueológicas se pueden catalogar en intervenciones de proyectos de investigación, intervenciones arqueológicas de carácter preventivo o las de urgencia. Pese a que cada una de ellas puede tener diferentes finalidades o motivaciones, todas ellas cumplen con los objetivos de la propia LPHCE. Estas

autorizaciones tienen un carácter temporal y están limitadas a los elementos y requerimientos de las Administraciones públicas. Entre los deberes y obligaciones que tienen los promotores y directores de las intervenciones arqueológicas, se encuentran comunicar cualquier descubrimiento o incidencia que se produzca como fruto de esta actividad, contribuir al mantenimiento o conservación de los bienes, facilitar las labores de inspección, solicitar autorización sobre los descubrimientos y cualquier otra que se pudiera establecer reglamentariamente.

La LPHCH establece qué deberes tiene el director o promotor de las actividades. Estas obligaciones son: asumir la dirección de los trabajos del proyecto; comunicar las fechas de inicio y finalización; realizar un inventario, un registro y documentación de la intervención; depositar los materiales en el museo que se haya señalado; presentar el informe preliminar y la memoria final que se establezcan.

Hay que indicar que esta norma menciona de forma abstracta la antigua Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la LEF.

En caso de encontrarse cualquier bien que sea susceptible de ser integrado en el patrimonio cultural de Extremadura, debe custodiarse en cumplimiento de las reglas de depósito. El descubridor debe comunicar en 48 horas dicho descubrimiento, y en caso contrario podrá ser sancionado. El descubridor de los bienes y el dueño del terreno, en

caso de ser privado, es recompensado de acuerdo con la LPHE. No obstante, se especifica que, si se trata de bienes inmuebles, estos no dan lugar a premio. Esta novedad es distintiva con respecto al ordenamiento autonómico, que siempre ha entendido los bienes en sentido general, es decir, tanto bienes muebles como inmuebles, siempre que estuvieran en terrenos de titularidad privada y los hallazgos fueran casuales y no intencionados. Se debe entender que si se encuentran bienes inmuebles deben aplicarse las reglas de la LEF, ya que estos se encuentran bajo terrenos de dominio privado y sobre el cual se deberán producir modificaciones que afectarán tanto a la superficie como al entorno de dicho terreno.

Q) Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha

a) Preliminar

En Castilla La Mancha el patrimonio cultural está protegido a través de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha⁵⁶⁶. La demora en la elaboración de una normativa propia para proteger el patrimonio cultural en Castilla- La Mancha se debe a que hasta el momento se protegía por la Orden de 20 de febrero

⁵⁶⁶ VV.AA., “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología. Revistas de la Universidad de Oviedo*, nº. 26, pp. 188-203; VV.AA., “El Código Ético de la Arqueología y el Patrimonio en Castilla-La Mancha”, *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, 51, 2012, pp. 11-28 y L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, “La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural”, cit., pp. 22-25.

de 1989 y por la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha⁵⁶⁷, de forma que se entendía el patrimonio cultural como algo restrictivo y vinculado al patrimonio histórico. Una vez superados estos criterios clásicos sobre lo que se consideraba patrimonio cultural, ha sido necesaria una nueva norma que contenga todos los posibles elementos conforme lo estaban haciendo otras Comunidades Autónomas. El objeto de esta ley es “la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, entendiéndose este como los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. Esta norma cuenta con diversas medidas para proteger y difundir el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, como son una regulación de la actividad inspectora del patrimonio cultural, un sistema sancionador, una serie de medidas para proteger la conservación y unidad del patrimonio y evitar su deterioro o traslado fuera de la Comunidad autónoma. Tal y como defiende BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, “la nueva Ley 4/2013 multiplica los instrumentos jurídicos con que se dota a la Administración competente en la conservación del Patrimonio Cultural, y supone el complemento

⁵⁶⁷ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, “La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural”, cit., pp. 22-25.

normativo necesario al innovador Código Deontológico de la Arqueología y Patrimonio de Castilla-La Mancha”⁵⁶⁸.

Dado que Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma de interior, el patrimonio cultural subacuático tiene una aplicación práctica menor. Las únicas referencias al mismo las encontremos cuando se habla de los BIC y del patrimonio arqueológico, por lo que el objeto del análisis de este apartado se basará en el análisis de estos puntos.

b) Bienes de interés cultural

Los BIC son una de las tres categorías de bienes protegidos que reviste mayor protección. Estas tres categorías son las siguientes: BIC, Bienes de Interés Patrimonial y Elementos de Interés Patrimonial. El que el objeto del análisis se haga sólo desde los BIC no quiere decir que no se proteja o abarque el patrimonio cultural subacuático desde las otras categorías, sino que se utiliza esta como punto de partida y desarrollo para crear un régimen de protección y obligaciones más estricto y que puede extrapolarse al resto⁵⁶⁹.

Los BIC, como indica la propia definición del art. 8 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, son “los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La

⁵⁶⁸ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, *La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural*, cit. p. 25.

⁵⁶⁹ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, *La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural*, cit. pp. 22-25.

Mancha que reúnan singular y sobresaliente alguno de estos valores histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico”. Para que un bien obtenga dicha categoría y protección ya debe de formar parte del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. Excede del objeto de nuestra tesis analizar el procedimiento para que sea catalogado y declarado como tal. No obstante, sí que podemos indicar que cada bien se inscribirá de forma genérica o bajo una categoría. Entre las categorías de los bienes inmuebles destacan aquellas que pueden afectar al patrimonio cultural subacuático, como son la “Zona Arqueológica: lugar en el que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas” o la “Zona Paleontológica: lugar en el que existen vestigios fosilizados o no que son manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en la tierra, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas”. Esta norma no define el patrimonio cultural subacuático, pero debemos entender que se encuentra protegido de manera expresa al contener la mención “bajo las aguas”.

Por otro lado, existen dos categorías en las que, haciendo interpretaciones extensivas de los términos que las definen, cabría entender que también protegen al patrimonio subacuático. Estas son el

“Sitio Histórico” y el “Conjunto Histórico”⁵⁷⁰. En primer lugar, debe entenderse por Sitio Histórico el “lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico, o antropológico”. Dentro de esta categoría pueden englobarse aquellos acontecimientos de cultura popular o no que hayan sucedido cerca o dentro de un espacio acuático, como puede ser la muerte de un general cartaginés ahogado mientras cruzaba un río⁵⁷¹ o cualquier otro acontecimiento significativo para la historia europea, nacional, autonómica o local. Encontramos también el Conjunto Histórico como la “agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución que ha tenido una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o porque constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es

⁵⁷⁰ Como se ha dicho con anterioridad, los bienes de interés patrimonial también protegen al patrimonio cultural subacuático, de forma que existen varias categorías de protección como son, dentro de los bienes inmuebles

“2º Yacimiento arqueológico de Interés Patrimonial: Lugar en el que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, y se les reconozca un relevante valor patrimonial” o “3º Yacimiento paleontológico de Interés Patrimonial: Lugar en el que existen vestigios fosilizados o no que son manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en la tierra, hayan sido o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, y se les reconozca un relevante valor patrimonial”. Y dentro de los muebles encontramos: “b) Bienes muebles, individualmente o como conjunto”.

⁵⁷¹ R. LÓPEZ DOMENCH, “Sobre reyes, reyezuelos y caudillos militares en la protohistoria hispana”, *Studia Historica. Historia Antigua*, 1986-1987, Vol. 4-5, pp. 19-23.

conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población y que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”. Si atenemos a las dos definiciones anteriores que contemplan espacios y elementos que pueden ser protegidos, que se encuentren bajo las aguas y que reúnan elementos arqueológicos o paleontológico, el patrimonio cultural subacuático puede abarcar la categoría como agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento. De esta forma, puede incluirse la protección de bienes que se encuentran bajo otros o junto a ellos y que, como evolución del espacio físico o de la comunidad humana, se encuentran bajo las aguas de embalses o ríos.

Los bienes muebles que se encuentren o se extraigan de trabajos o actividades arqueológicas pueden ser catalogados como BIC en diferentes categorías. Estas categorías son unitario, conjunto o colección. La diferencia entre estas dos últimas categorías se basa en la forma en la que se declaran, es decir, si se engloban todos los bienes muebles de manera inicial o posterior.

El régimen de protección se basa en el deber de conservación y uso, de forma que los propietarios de los bienes están obligados a cuidarlos y protegerlos de manera adecuada para asegurar su integridad y pérdida, deterioro o destrucción. Al mismo tiempo, se establecen una serie de deberes y obligaciones, tanto para permitir el acceso a los mismos y la difusión y puesta en conocimiento, como para evitar que este patrimonio se desplace fuera del territorio o deteriore.

Además de los deberes anteriores, los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio de Castilla-La Mancha se encuentran protegidos bajo una ordenación territorial y urbanística especial que afecta a la evaluación del impacto ambiental y al régimen de autorización de intervenciones en bienes inmuebles. Para poder llevar a cabo cualquier intervención en los mismos se requerirán diferentes permisos especiales concedidos por las Administraciones públicas competentes⁵⁷².

Dado que lo que prima es mantener los bienes de forma íntegra y como se encuentren en la actualidad, se establecen unos criterios de intervención que son: intervención mínima; utilización de materiales tradicionales, métodos históricos y características de construcción; conservación de las características volumétricas, estéticas, ornamentales y espaciales; y en el caso de llevar a cabo

⁵⁷² La solicitud del permiso deberá contener como mínimo:

“a) Justificación de la intervención.

b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de conservación del mismo, estableciendo las causas que inciden en su deterioro.

c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su desarrollo histórico.

d) Propuesta técnica de la actuación con indicación de metodología, productos y materiales. Se tratará de una propuesta de actuación integral y de carácter multidisciplinar, de acuerdo con los criterios de un equipo técnico cuya composición estará determinada por las características del inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo.

e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes muebles con valor cultural que puedan estar contenidos en el mismo.

f) Programa de mantenimiento y conservación”.

reconstrucciones integrales, conservación de alguno de los elementos originales para poder diferenciar el original de lo reconstruido⁵⁷³.

c) Patrimonio arqueológico

La conservación de los Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas Paleontológicas comporta el mantenimiento de los valores propios definidos en la declaración de BIC, así como la protección de los bienes afectados. En el Capítulo II del Título III de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, sobre documentación e inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se define lo que se entiende por patrimonio arqueológico. Según el art. 49, viene a ser “el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo, o en una zona subacuática. Forman parte, así mismo, de este patrimonio el contexto y espacios asociados a estos bienes”, mientras que lo que debe entenderse por patrimonio paleontológico, según el art. 49. 2, es “el conjunto de yacimientos y restos fósiles, manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en la

⁵⁷³ Para la autorización se requiere:

“a) Justificación de la intervención.

b) Análisis interdisciplinar relativo a los valores patrimoniales del bien, estado de conservación del mismo y razones de su deterioro.

c) Propuesta técnica de la intervención con indicación de metodología, productos y materiales.

d) Lugar de realización de la intervención”.

tierra, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo, o en una zona subacuática. Así mismo forman parte de este patrimonio, los espacios asociados a ellos”. Dado que ambos artículos contienen en su definición la expresión “bajo las aguas”, debemos entender que es aquí donde se regula el patrimonio cultural subacuático⁵⁷⁴. En la actualidad no hay en Castilla-La Mancha ningún tipo de bien que pueda definirse o entenderse como patrimonio cultural subacuático, aunque existen varios que perfectamente podrían entrar; por ejemplo, bajo el embalse de Buendía se encuentra el Real Sitio de la Isabella (Guadalajara), construido por Fernando VII, y el yacimiento romano de Ercávica⁵⁷⁵.

Hay que indicar que la Ley 4/2013, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, es de las pocas normas que establece de forma exhaustiva las intervenciones que se pueden realizar en los bienes catalogados como patrimonio arqueológico o paleontológico⁵⁷⁶

⁵⁷⁴ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, *La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural*, cit., pp. 22-25.

⁵⁷⁵ J. FERNANDEZ ORTEA, “Gestión privada del patrimonio cultural: los casos del monasterio de Monsalud y la ciudad romana de Ercavica”, *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, vol.15. n.º.1, 2017, pp. 121-137 y S. VALIENTE CÁNOVAS, “Fragmento de cuenco campaniforme aparecido en Buendía (Cuenca)”, pp. 113-119. (<http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1016> consultado el 28 de noviembre de 2017).

⁵⁷⁶ “a) Acondicionamiento previo y limpieza; b) Prospección del territorio, incluida la que se realice mediante aparatos de detección estratigráfica o mineral, así como fotografía aérea y teledetección; c) Sondeos de carácter estratigráfico; d) Obtención de muestras y recogida de material; e) Excavación arqueológica o paleontológica; f)

La competencia para permitir realizar estas actividades corresponde a la CA y al municipio en donde se encuentre el bien, dependiendo de la categoría que tenga el bien arqueológico o paleontológico. Se establecen normas sobre hallazgos casuales, permisos, documentación y depósito, que son una traslación de la normativa estatal a la autonómica.

En otro orden de cosas, llama la atención que la Ley 4/2013, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, indique que se evitarán los intentos de reconstrucción en edificios de interés histórico, permitiéndose sólo aquellos indispensables para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, pues lo que se quiere es proteger los bienes en el estado actual en que se encuentra⁵⁷⁷, siguiendo el principio del art. 23 de conservación de manera íntegra.

En cuanto a la protección punitiva cuando se han producido acciones que han afectado al patrimonio cultural subacuático, la doctrina considera que dicho régimen sancionador es bastante completo. No obstante, falta una verdadera apreciación y

Control y seguimiento de movimiento de tierras; g) Análisis estructural constructivo de inmuebles; h) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto de trabajos de campo orientados a la investigación y documentación gráfica, incluida cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos figurados; i) Cualquier otra intervención que tenga por finalidad descubrir, documentar, investigar o proteger los bienes”.

⁵⁷⁷ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, *La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural*, cit. p. 24.

responsabilidad para las propias Administraciones públicas en casos de inactividad administrativa o falta de ejercicio de sus competencias⁵⁷⁸.

Por último, el art. 55 define lo que debe entenderse por Parque Arqueológico: “espacios físicos que comprendan uno o varios Bienes de Interés Cultural declarados con categoría de zona arqueológica y tengan unas condiciones medioambientales adecuadas para la contemplación, disfrute y comprensión públicos, se podrán declarar Parque Arqueológico de acuerdo con la normativa al efecto”. Hasta la fecha ninguno de los Parques arqueológicos declarados contempla elementos de patrimonio cultural subacuático.

⁵⁷⁸ L. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, *La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural*, cit. p. 24.

CAPÍTULO V

V. CASOS INTERNACIONALES

1. Preliminar

En este apartado se van a analizar diversos procedimientos internacionales de recuperación de patrimonio cultural subacuático por parte de España y otros Estados. La mayoría de procedimientos se enfrentan a empresas norteamericanas, puesto que se enfrentan dos concepciones sobre la titularidad de los bienes.

Desde el punto de vista español estos casos suponen una estrategia comenzada en 1997 desde el Ministerio de Cultura para proteger los pecios españoles ante el saqueo de los *cazatesoros*. Esta estrategia supuso una novedad, ya que a hasta la fecha la protección del patrimonio cultural subacuático sólo se había ejercitado en las aguas territoriales de un determinado Estado y en ningún momento se había acudido a tribunales de otros países para defender el patrimonio cultural nacional.

2. Casos destacados

A. Nuestra Señora de Atocha

El galeón “Nuestra Señora de Atocha” es considerado el tesoro más importante rescatado del mar y ha sido fruto de múltiples procedimientos judiciales que fueron resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su *Sentencia Florida Dept. of State vs Treasure Salvors Inc.* Este caso puede ser el punto de atención que puso a España en conocimiento de la importancia que tiene el patrimonio cultural subacuático, dado que, al estimar y documentar el valor de los bienes obtenidos, fue el punto de partida para que otras empresas se lanzasen a la búsqueda de tesoros por todo el mundo.

“Nuestra Señora de Atocha” fue un buque español hundido en el siglo XVII en la costa de Florida. Después de que la Empresa Treasure Salvors, formada por la empresa Treasure Salvors Inc y Armada Research Coro, localizase los restos de la embarcación, el Estado de Florida reclamó los restos, ya que entre ambos mediaba un contrato en el que la empresa se quedaría con el 25% del valor de lo encontrado. Mientras tanto, en procedimientos no relacionados con las operaciones de rescate, se llevó a cabo el procedimiento Estados Unidos v. Florida, 420 US 531, en el que los Estados Unidos tenían derecho a las tierras, minerales y otros recursos naturales en el área en la que se habían encontrado los restos del galeón.

A lo largo del procedimiento subsiguiente, en el que intervinieron los Estados Unidos y en el que tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la reclamación de los Estados Unidos sobre la propiedad del galeón, Estados Unidos afirmó un derecho de propiedad bajo varios estatutos federales y la doctrina de Derecho común de "prerrogativa soberana". La defensa del Estado de Florida fue la siguiente: "A contract was entered into between Armada Research Corporation and the State of Florida on December 3, 1974 and was for a good and valid consideration. The contract alone determined the rights and obligations of the contracting parties and was in no way affected by [the decision of this Court in] *United States v. Florida*. This contract was fully executed and performed prior to the *United States v. Florida* [sic]." *Id.*, at 44. In response to the State's assertion that the contracts determined the rights of the contracting parties, Treasure Salvors filed a supplemental complaint in federal court. Record 369. The complaint sought a declaratory judgment that the contracts between Treasure Salvors and the State were void".

El tribunal explicó que "los principios generales del Derecho marítimo e internacional dictan que un abandono constituye un repudio de la propiedad, y que una parte que toma posesión en una operación de salvamento puede considerarse un buscador bajo la doctrina de «animus revertendi», es decir, que el propietario no tiene intención de

devolverlo. La propiedad en el buque recaería en el buscador por ministerio de la ley"⁵⁷⁹.

El tribunal resuelve aplicando la jurisprudencia del caso “Estados Unidos contra Lee”. En este caso los demandantes argumentaron que eran los dueños legítimos del terreno y el Derecho de los Estados Unidos reconoce el derecho a la propiedad de los bienes que se descubran en el mismo, con la posibilidad de indemnizar al descubridor. El Tribunal sostuvo que la demanda era una acción inadmisibile contra los Estados Unidos, y declaró que “while not expressly overruling *United States v. Lee*, supra, the Court in *Larson* limited that decision in such a way as to make it inapplicable to the case before us. Pointing out that at the time of the *Lee* decision there was no remedy by which the plaintiff could have recovered compensation for the taking of his land”. Es decir, se establece que las tierras forman parte del Estado de Florida y, por tanto, es a él a quien debe compensarse, no recibiendo ningún tipo de compensación el Gobierno Federal.

⁵⁷⁹ La versión original expresa:

“General principles of maritime and international law dictate that an abandonment constitutes a repudiation of ownership, and that a party taking possession under salvage operations may be considered a finder under the doctrine of ‘animus revertendi,’ i. e., the owner has no intention of returning. Ownership in the vessel would then vest in the finder by operation of law.” 408 F. Supp., at 909 (citation omitted)”.

B. La “Juno” y la “Galga”

La “Juno” y la “Galga de Andalucía” fueron dos fragatas comisionadas de la Armada Española que, tras separarse de sus flotas en un viaje a la Península, se hundieron frente a las costas del Estado actual de Virginia en 1750 y 1802⁵⁸⁰. Tras aprobarse la Abandoned Shipwreck Act de 1987, en adelante ASA, se concedieron por la Virginia Marine Resources Commission permisos a la empresa norteamericana Sea Hunt Inc en 1998 para llevar a cabo la recuperación de estas fragatas, personándose en primer lugar el Gobierno de Estados Unidos en nombre del Reino de España, como *amicus brief*. Tras rechazar la competencia del Gobierno estadounidense y sugerirle el propio tribunal que lo hiciera, se personó España. El asunto fue resuelto en varias instancias dándole la razón a España y sentando un precedente internacional sobre la posibilidad de que se lleven a cabo de nuevo este tipo de iniciativas.

La *District Court* de Norfolk aplicó, de forma errónea, la doctrina sobre el abandono basada en la jurisprudencia estadounidense

⁵⁸⁰ M. J. AZNAR GÓMEZ, “1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisas”, *AFDUAM* 19, 2015, pp. 47-78 y M. J. AZNAR GÓMEZ, “La reclamación española sobre los galeones hundidos frente a las costas de los Estados Unidos de América: el caso de «la Galga» y «La Juno»”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, nº. 1 (enero-junio 2000), pp. 247-253.

“Columbus-América”, pero sólo en referencia a “la Galga”⁵⁸¹. El Estado de Virginia afirmó su propiedad sobre la “Galga” y “Juno” de conformidad con la ASA⁵⁸².

En apelación, la Court of Appeals of the Fourth Circuit rechazó dichos argumentos basándose en que eran buques españoles. Es difícil que alguien renuncie de forma tácita a un bien y luego se presente para defenderlo ante los tribunales. Las pautas de interpretación del Departamento de Interior sobre la ASA establecen que un buque soberano que parece haber sido abandonado *"sigue siendo propiedad de la nación a la que pertenecía en el momento del hundimiento, a menos que esa nación haya tomado medidas formales para abandonarlo o transferir el título a otra parte"*⁵⁸³.

⁵⁸¹ M. J. AZNAR GÓMEZ, “1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisas”, cit., pp. 47-78.

⁵⁸² La versión original expresa:

“The Commonwealth of Virginia has asserted ownership over LA GALGA and JUNO pursuant to the Abandoned Shipwreck Act of 1987(ASA), 43 U.S.C. §§ 2101-06 (1994). The ASA gives states title to shipwrecks that are abandoned and are embedded in the submerged lands of a state. See id. § 2105(a) & (c). Sea Hunt is a maritime salvage company based in the Eastern Shore of Virginia. The Virginia Marine Resources Commission granted Sea Hunt permits to explore for shipwrecks off the Virginia coast and conduct salvage operations. Sea Hunt began to explore for shipwrecks within its permit areas and has spent about a million dollars in conducting remote sensing, survey, diving, and identification operations. Sea Hunt claims that its efforts have resulted in finding the remains of LA GALGA and JUNO”.

⁵⁸³ La versión original señala lo siguiente:

“Applying the express abandonment standard to sovereign vessels also respects the legitimate interests of the executive branch. While the ASA confers title to abandoned shipwrecks to the states, it does not vitiate important national interests or undermine the well-established prerogatives of sovereign nations. Department of Interior advisory guidelines on the ASA state that a sovereign vessel that appears to have been

Como buques soberanos de España, estas fragatas están cubiertas por el Tratado de Amistad y Relaciones Generales de 1902 entre los Estados Unidos y España, así como por las reglas generales de cortesía internacional. En él se contemplan las inmunidades recíprocas, estableciéndose que es esencial para proteger los naufragios y las tumbas militares de los Estados Unidos. Bajo los términos de este tratado, los buques españoles, como los que pertenecen a los Estados Unidos, solo pueden ser abandonados por actos expresos. “Sea Hunt” no pudo demostrar con pruebas claras y convincentes que el Reino de España haya abandonado expresamente estos buques en el Tratado de 1763 o en el Tratado de Amistad, Liquidación y Límites de 1819, que puso fin a la Guerra de 1812.

C. Caso “Odyssey” o fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”

La fragata “Nuestra Señora de las Mercedes” o el también conocido “caso Odyssey” ha sido el gran caso de recuperación de patrimonio cultural subacuático en los tribunales de España, después de las bases sentadas por las resoluciones de la “Galga” y “Juno”⁵⁸⁴. Este

abandoned “remains the property of the nation to which it belonged at the time of sinking unless that nation has taken formal action to abandon it or to transfer title to another party.” 55 Fed.Reg. 50116, 50121 (1990)”.

⁵⁸⁴ C. MARCOS ALONSO, “Crónica de la jornada de clausura de la exposición «El último viaje de la fragata Mercedes»: Chronicle of the closing day of the exhibition «The last trip of the frigate Mercedes»”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, n.º. 34, 2016, pp. 475-492; J.L. GOÑI ETCHEVERS y V. FUENTES CAMACHO, “Otro punto de vista sobre el caso Odyssey”, *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, n.º. 28, 2014, p. 12; C. TERREROS ANDRÉU, “El expolio

procedimiento fue resuelto por la sentencia “Odyssey Marine Exploration Inc vs The Unidentified Shipwrecked vessel Kingdom of Spain, Republic of Peru, Gonzalo de Aliaga Agustin de Aliaga, Gonzalo Alvarez del Villar”, del Tribunal Federal de Atlanta de 21 de septiembre de 2011⁵⁸⁵.

de Patrimonio Cultural: problemas de conceptualización jurídica”, *E-RPH*, nº. 14, junio 2014, pp. 60-97; J. PRIETO DE PEDRO, “Los bienes arqueológicos subacuáticos como bienes culturales” *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012, pp. 17-25; E. M. ÁLVAREZ GONZALEZ, “Disfuncionalidades de la protección jurídica del Patrimonio cultural subacuático en España. Especial referencia al caso Odyssey”, *Revista de Administración Pública*, nº. 175, 2008, p. 39; J. A. GOOD y E. DE CABO, “España gana el caso Nuestra Señora de las Mercedes: un éxito jurídico, histórico y cultural”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012, pp. 25-35; S. GARCÍA RAMÍREZ, “El último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012, pp. 35-52; M. J. AZNAR GÓMEZ, “1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisas”, *AFDUAM* 19, 2015, pp. 47-78; M. A. ALBERT MUÑOZ y M. ORTÍZ SÁNCHEZ, “Odyssey la protección del patrimonio arqueológico por las comunidades autónomas”, *Revista PH*, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº. 82, 2012, pp. 157-170 y X. NIETO PRIETO, “Arqueólogos y cazadores de tesoros subacuáticos”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012, pp. 497-507.

⁵⁸⁵ En total se ha tratado de cinco resoluciones judiciales, que son las siguientes:

- El 3 de junio de 2009, el Report & Recommendation dictado por el «Magistrate Judge» Mark A. Pizzo.
- El 22 de diciembre de 2009, la sentencia de la Corte de Distrito dictada por el juez Steven D. Merryday.
- El 21 de septiembre de 2011, la sentencia de la Corte de Apelación del 11.º Circuito de los Estados Unidos.
- El 29 de septiembre de 2011, la misma Corte de Apelación rechazó el recurso en Banc presentado por Odyssey.

En 2007, “Odyssey Marine Exploration Inc”, en adelante “Odyssey”, descubrió los restos de un buque español en aguas internacionales al oeste del Estrecho de Gibraltar dentro del Proyecto Amsterdam ⁵⁸⁶ . “Odyssey” recuperó aproximadamente 594.000 monedas y varios otros restos pequeños.

Entonces “Odyssey” realizó una declaración jurada (*verified claim*) sobre el pecio y su cargamento ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida y solicitó una orden de embargo del pecio. La posición de España se basaba en que la *res nullius* reclamada era un buque español y, por tanto, el tribunal carecía de competencias para conocer y resolver el litigio, al ser inmune en virtud de la *Foreign Sovereign Immunities Act*⁵⁸⁷. El resto de actores lo hicieron una vez España declaró que se trataba de dicha nave.

- El 24 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó el recurso In Certiorari presentado por “Odyssey”, Perú y los supuestos herederos.

⁵⁸⁶ En 2006, “Odyssey” comenzó lo que llamó el “Proyecto de Ámsterdam”, investigando barcos que se hundieron en una zona muy transitada, que incluía un área frente a la costa de Gibraltar. “Odyssey” elaboró una lista de buques objetivo a buscar, uno de los cuales era la “Nuestra Señora de las Mercedes”, un barco español que se hundió en 1804.

⁵⁸⁷ El título de estos preceptos contenidos en el 28 U.S. Code Chapter 97 - JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES se corresponde con lo siguiente:

“§ 1602 - Findings and declaration of purpose

§ 1603 - Definitions

§ 1604 - Immunity of a foreign state from jurisdiction

§ 1605 - General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state

§ 1605A - Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state

§ 1605B - Responsibility of foreign states for international terrorism against the United States

§ 1606 - Extent of liability

España presentó una moción para una declaración más definida y para la divulgación de otra información que identificase el buque y su contenido. En la alternativa, España solicitó una orden de desestimación de la denuncia, anulando el embargo y solicitando que “Odyssey” dejase de ser el custodio sustituto.

“Odyssey” respondió de forma vaga a estas alegaciones, expresando que no se habían encontrado elementos determinantes. Tras la práctica de la prueba, España determinó que, por el lugar donde se habían encontrado los restos, posiblemente se tratase de las embarcaciones “Mercedes” y las “Ánimas”. El 3 de junio de 2009, el magistrado emitió un informe y una recomendación que determinó que la *res* era la “Mercedes” y que era propiedad de España⁵⁸⁸ en base a la FSIA. El magistrado recomendó que el juez de distrito tuviese en cuenta la moción de España y así desestimase que “Odyssey”, fuese el custodio sustituto y que, por tanto, devolviese la *res* a España.

“Odyssey”, Perú y los demandantes descendientes se opusieron al informe del juez⁵⁸⁹. Los Estados Unidos presentaron una declaración

§ 1607 - Counterclaims

§ 1608 - Service; time to answer; default

§ 1609 - Immunity from attachment and execution of property of a foreign state

§ 1610 - Exceptions to the immunity from attachment or execution

§ 1611 - Certain types of property immune from execution”.

⁵⁸⁸ M. J. AZNAR GÓMEZ, *1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisas*, cit., p. 61.

⁵⁸⁹ M. J. AZNAR GÓMEZ, *1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisas*, cit., p.51.

de interés como *amicus curiae* en apoyo del Reino de España. En ella se argumentaba que los Estados Unidos tenían la obligación convencional de otorgar a los buques de guerra españoles hundidos las mismas protecciones e inmunidades contra el abandono, así como el acceso y rescate sin oposición que un barco de guerra hundido de los Estados Unidos recibiría en los tribunales de los Estados Unidos.

El 22 de diciembre de 2009 el tribunal de distrito adoptó el informe y la recomendación del magistrado. El tribunal de distrito desestimó la demanda modificada de “Odyssey” por falta de jurisdicción y ordenó a “Odyssey” que devolviese la res a España. La orden de devolver la res se suspendió mientras estaba pendiente esta apelación.

En apelación, “Odyssey”, Perú, y los veinticinco demandantes individuales sostuvieron que el tribunal de distrito cometió un error, que podía resumirse en las reglas de interpretación entre la distinción de la propiedad del buque y del contenido del mismo⁵⁹⁰.

Las pruebas sobre los elementos y documentación que había aportado “Odyssey” fueron argumentos en su contra, puesto que, en el contexto

⁵⁹⁰ El contenido original se expresa que:

“On appeal, Odyssey, Peru, and the twenty-five individual claimants contend the district court erred by: (1) failing to use a Rule 56 summary judgment standard when analyzing Spain's Rule 12(b)(1) motion to dismiss; (2) failing to conduct an oral evidentiary hearing before ruling on the motion to dismiss; (3) finding the res is the Spanish warship the Mercedes and holding the FSIA grants it sovereign immunity; (4) failing to distinguish between the Mercedes and the private cargo aboard; and (5) ordering the recovered res returned to Spain's custody”.

histórico de las monedas encontradas, “the entirety of the record evidence supports the district court's conclusion that the res is the Mercedes. The res was found within the zone *1174 Spain had plotted as the likeliest area of the Mercedes' demise, and no other naval vessels matching the Mercedes' type sank within that zone during the same time period. The site, essentially a scattered debris field, is consistent with a vessel that exploded at the surface. Moreover, the composition of the examined sampling of coins found on the res matches that of the 900,000 mostly silver coins aboard the Mercedes: almost all the coins are silver; they were all minted in the late 18th and early 19th Centuries and none were minted later than 1804; and they were almost exclusively minted in Lima and Bolivia. The 17 cannons found at the site, consisting of 6- and 12-pounder cannons, match the type the Mercedes would have carried. The site contains at least one bronze culverin, matching the distinctive cannons the Mercedes was carrying to be recycled. The site also includes large quantities of copper and tin ingots, matching the large quantity carried by the Mercedes, and contains copper plates like those used to sheath the hull of the Mercedes”, de forma que la metodología de la arqueología submarina ejerció un papel clave para identificar los bienes.

Para que pudiera aplicarse o no la FSI primero debía determinarse si los bienes corresponden a un Estado extranjero o no, algo que “Odyssey” ni se plantea, ya que mintió sobre las ubicaciones iniciales, para intentar confundir los hechos y que se tratase de aguas internacionales, argumentando que la embarcación era una embarcación privada, algo que no es así, pues la fragata se hundió en un contexto de acciones bélicas de ataque y defensa.

En cuanto a las alegaciones que realiza Perú y los herederos sobre la carga del barco, se argumenta que estos bienes y elementos no son inmunes a la aplicación de la FSIA, pero no alegan ningún tipo de prueba y tampoco aportan jurisprudencia que fundamente su petición. Es decir, las partes interpretan que la carga y el buque no están conectados, aunque la carga se entiende como parte del pecio en virtud del Tratado de Amistad y Relaciones Generales entre los Estados Unidos de América y España (X.33 Stat 2105)⁵⁹¹.

⁵⁹¹ El documento original expresa lo siguiente:

“In 1902, the United States and Spain signed a treaty mandating “[i]n cases of shipwreck . each party shall afford to the vessels of the other, whether belonging to the state or to individuals, the same assistance and protection and the same immunities which would have been granted to its own vessels in similar cases.” 1902 Treaty of Friendship and General Relations Between the United States of America and Spain, art. X, July 3, 1902, 33 Stat. 2105. Under this treaty, the United States must afford the Mercedes, as a shipwrecked Spanish warship, the same protection it would give a shipwrecked United States military vessel.

The United States considers the cargo of a shipwrecked U.S. military vessel part of the shipwreck and gives it the same immunities as the shipwreck. Under the SMCA, the rights, title and interest of the United States in any sunken military craft are protected absent an “express divestiture of title.” § 1401, 118 Stat. at 2094. The definition of a “sunken military craft” includes a sunken warship or other military

Esta sentencia sienta las bases para interpretar lo que debe entenderse como pecio o sitio arqueológico, de forma que los restos de un buque esparcidos sobre el fondo marino son un pecio, aunque no parezcan un buque intacto⁵⁹², dado que el pecio deriva del naufragio de una embarcación y son múltiples las condiciones que pueden derivar o producir el hundimiento, de forma que lo secundario o accesorio sigue a lo principal y corre su misma suerte.

D. “España vs San Vicente y las Granadinas”

El caso “Louisa” fue presentado por San Vicente y las Granadinas contra España, resolviendo el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el 28 de mayo de 2013, otorgándole la razón a España.

vessel, as well as “all or any portion of . the associated contents of a craft.” § 1408(3)(C), 118 Stat. at 2098. “Associated contents” are defined as “the equipment, cargo, and contents of a sunken military craft that are within its debris field . [and] the remains and personal effects of the crew and passengers of a sunken military craft that are within its debris field.” § 1408(1), 118 Stat. at 2097 (emphasis added). Thus, under the 1902 treaty, the Mercedes and its cargo are entitled to the same immunities provided by the SMCA”.

⁵⁹² FN15. In addition, a site where the remains of a vessel are strewn on the ocean floor is still a shipwreck even if an intact vessel no longer remains. Our conclusion is based on the plain meaning of “shipwreck,” which is defined as “a ship's wreckage.” See Black's Law Dictionary 1504 (9th ed.2009) (citing 4 James Kent, Commentaries on American Law at 323 n. (b) (George Comstock ed., 11th ed. 1866) (stating a shipwreck includes a vessel which “is dashed to pieces”)). Under its plain definition, a shipwreck covers not only a sunken intact vessel, but also a vessel that was “dashed to pieces” or exploded at the surface and then sank to the ocean floor. Our plain-meaning interpretation of “shipwreck” is supported by statutory definitions. Furthermore, Odyssey filed both its original complaint against and a motion seeking the arrest of “The Unidentified Shipwrecked Vessel, its apparel, tackle, appurtenances and cargo.” The district court, at Odyssey's request, issued a warrant for the arrest of “The Unidentified Shipwrecked Vessel, its apparel, tackle, appurtenances and cargo”.

La motivación del mismo se basa en la acusación de abordar de forma ilegal al buque “Louisa”, con la bandera de San Vicente y las Granadinas, por parte de las autoridades españolas. El 1 de febrero de 2006, cuando la embarcación se encontraba en el Puerto de Santa María (España), se produjo la detención y abordaje. Dicha detención del “Louisa” buscaba interceptar varias piezas arqueológicas que se encontraban en su interior, siendo acusados por las autoridades españolas de expolio del patrimonio cultural subacuático⁵⁹³.

Como recoge el pronunciamiento, entre el 20 de agosto y el 29 de octubre de 2004, el buque habría realizado prospecciones del fondo marino en las aguas interiores y el mar territorial de España, con el fin de localizar depósitos de petróleo y gas, sobre la base de un permiso emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

Atracado de forma voluntaria en el puerto de El Puerto de Santa María (Cádiz) desde el 29 de octubre de 2004, el “Louisa” fue abordado, registrado y detenido por las autoridades españolas el 1 de febrero de 2006. Durante la búsqueda se encontraron diversas piezas de origen arqueológico submarino, así como cinco fusiles de asalto, considerados armas de guerra, y una pistola. El “Louisa” era el instrumento utilizado para llevar a cabo el delito de posesión y depósito de armas de guerra y el delito continuado de dañar el patrimonio histórico español. Se incautó

⁵⁹³ M. J. AZNAR GÓMEZ, “1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisa”, *AFDUAM* 19, 2015, pp. 47-78.

sobre la base de una acusación emitida por el Juzgado de Instrucción nº. 4 de Cádiz y se arrestaron a cuatro personas. El mismo día, las autoridades españolas detuvieron otro buque, el “Géminis III”, con base en indicios encontrados en la investigación.

El 23 de noviembre de 2010, San Vicente y las Granadinas presentó ante el Tribunal de Derechos del Mar una solicitud de interposición de un recurso contra España y una solicitud de medidas provisionales en virtud del art. 290.1 del CNUDM, en la que se pidió al Tribunal, entre otras cosas, que ordenara a España liberar el “Louisa” y devolver las propiedades confiscadas. En su Resolución de 23 de diciembre de 2010, el Tribunal consideró que las circunstancias no justificaban la prescripción de medidas provisionales, pero sostuvo que tenía competencia *prima facie* sobre la controversia.

En primer lugar, el Tribunal tuvo que interpretar la declaración unilateral hecha por San Vicente y las Granadinas de conformidad con el art. 287 del CNUDM. Teniendo en cuenta la intención de San Vicente y las Granadinas, el Tribunal consideró que la declaración abarcaba todas las reclamaciones relacionadas con el arresto o la detención de sus buques. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que carecía de jurisdicción con respecto al “Géminis III”, y aunque este barco sirvió al “Louisa” por un período de tiempo, no ondeó la bandera de San Vicente y las Granadinas y continuó trabajando de forma independiente del “Louisa”. Por lo tanto, tenía su propia identidad y no podía estar sujeta al alcance de la declaración.

Además, San Vicente y las Granadinas había dado argumentos sobre la competencia que España tenía para llevar a cabo estas actuaciones. El Tribunal sostuvo que la cuestión de la jurisdicción para tratar el fondo del caso podría decidirse únicamente después de la consideración de los procedimientos escritos y orales y no sobre la base de la decisión que tomó sobre la competencia *prima facie* en relación con la solicitud de prescripción de medidas provisionales.

La parte principal de la sentencia abordó la existencia de una disputa relacionada con la interpretación o aplicación del CNUDM. El Tribunal observó que el caso que se le había presentado tenía dos aspectos. El primero estaría relacionado con la detención del buque y las personas relacionadas con él, presentado por el solicitante en sus comunicaciones escritas sobre la base de los artículos 73, 87, 226, 227 y 245⁵⁹⁴ y el segundo se referiría a que el caso se relaciona con el tratamiento de las personas detenidas por las autoridades españolas y el presunto abuso de sus derechos en virtud del artículo 300 (buena fe y abuso de derechos).

El buque no fue detenido por infracciones de las leyes y normas españolas relativas a los recursos vivos en la zona económica exclusiva, ni por la violación de las leyes y reglamentos aplicables o las normas y

⁵⁹⁴ De forma sucinta se expresa el contenido de estos artículos: art. 73 (Aplicación de las leyes del Estado ribereño), art. 87 (Libertad de alta mar), art. 226 (Investigación de buques extranjeros), art. 227 (No discriminación con respecto a buques extranjeros) y art. 245 (Investigación científica marina en el mar territorial).

estándares internacionales para la protección y preservación del medio marino. Por el contrario, fue detenido en el contexto de procesos penales relacionados con el saqueo de los fondos marinos.

En cuanto al art.87 de libertad de alta mar no contempla el entrar y abandonar puertos libremente. Respecto al art. 300 sobre el supuesto abuso de los derechos de las personas detenidas por las autoridades españolas, el Tribunal observó que este argumento fue presentado por primera vez por el solicitante durante el proceso oral. El Tribunal sostuvo que "es un requisito legal que cualquier nueva demanda sea admitida debe surgir directamente de la solicitud o estar implícita en ella" y que "la disputa presentada ante el Tribunal por una solicitud no puede transformarse en otra disputa que es diferente en carácter". El art. 300 no puede invocarse por sí solo en caso de abuso de derechos, incluido los de propiedad, sino solo cuando "los derechos, la jurisdicción y las libertades reconocidos".

CONCLUSÕES

I.

A pesar de que a doutrina tem oferecido muitos conceitos sobre o que devemos entender como património cultural subaquático, foi a Convenção sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático de 2001 a que fixou o que é e que não é património cultural subaquático.

II

Na hora de definir o que é património cultural subaquático, consideramos que deve-se ter em conta não apenas os sítios submersos e os navios, se não qualquer objecto submerso que reúna um valor cultural que mereça ser considerado como património.

III

Segundo o conceito fixado pela Convenção de 2001, somente será considerado como património cultural subaquático aqueles “vestígios da existência do homem de carácter cultural, histórico ou arqueológico que se encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, submersos há, pelo menos, 100 anos”, critério com o qual não concordamos e assim se manifestou nesta tese. A nosso parecer, estabelecer um critério temporal tão elevado prejudicará gravemente o património cultural, já que até que não transcorra esse período de tempo, o bem em questão não reunirá os requisitos e não

será considerado como património cultural, pelo que estará sem protecção.

IV

A solução que se oferece será a de revisar o critério temporal e fixar-se no interesse do bem que se quer proteger. Carece de sentido valorar o património cultural pela sua antiguidade, pois o que hoje pode não ser património cultural, em um futuro sim pode o ser. Assim aconteceu com o *Titanic* que, afundado no ano 1912, não foi considerado como património cultural subaquático até que passaram 100 anos.

V

Consagrar de maneira obrigatória a protecção *in situ* como uma das questões principais da Convenção de 2001, não foi o mais acertado, pois isso supõe que o património cultural subaquático não pode-se extrair e o proteger e o conservar fóra da água. Não só não se pode extrair um navio senão que também não se pode extrair seu cargamento, questão que, ao nosso parecer, prejudica a protecção, pois o vigiar não é singelo e o proteger, ainda menos.

VI

A tarefa principal da Convenção de 2001 foi proteger o património cultural submerso nos diferentes espaços marinhos: águas interiores, arquipelágicas, mar territorial, zona contígua, zona

económica exclusiva, plataforma continental e a zona de fundos marinhos e oceánicos.

VII

A Convenção de 2001 é um texto que apresenta algumas deficiências e que deveriam revisar-se. Carece de uma regulação positiva completa, pois não se estabelecem os tempos previstos para o desenvolvimento das acções que nela se contemplam. Também não menciona-se o prazo do que dispõem os Estados parte para notificar o interesse que possam ter sobre um vestígio encontrado, a duração do tempo de consultas ou o prazo durante o que o Estado costeiro pode realizar accções sobre um vestígio encontrado na Zona Económica Exclusiva. Questões como estas dificultam a protecção do património cultural subacuático, pois podem produzir danos.

VIII

A importância do direito comparado é fundamental para poder comparar as diferentes regulações sobre a matéria, conquanto, a casuística varia e encontramos-nos com Estados que têm uma regulação específica sobre património cultural subacuático e outros que o incluíram dentro de uma legislação geral.

IX

Itália é, sem lugar a dúvidas, o país europeu mais avançado em matéria de protecção do património cultural, em especial, o

subacuático. É por isso que a grande parte da doutrina considera a Itália como “Estado da cultura”, quiçá por sua influência ao longo da história.

X

A Constituição Italiana do 1947 recolhe no art. 9 que “a República salvaguarda o património histórico e artístico da Nação” e no art. 117 outorga ao Estado italiano “a faculdade exclusiva sobre a protecção dos bens culturais”.

XI

Itália aprovou em 2009 a Lei 157 de 23 de outubro que ratifica e dá plena vigencia à Convenção de 2001. Sua entrada em vigor produz-se o 8 de abril de 2010 e vem a regular as lagoas da mesma a nível estatal.

XII

No caso da França, o património cultural subaquático aparece regulado na Lei de 24 de novembro de 1961 e, ademais, existem outras normas específicas sobre este tipo de património, tais como a Lei 90-874, de 1 de dezembro de 1989, “*Loi n°. 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques*”, que revogou a Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Neste sentido, constituem navio as

embarcações e aeronaves no mar em estado de inavegabilidade e seus cargamentos. Se reputa navio tanto a embarcação como os seus restos.

XIII

Portugal é outro dos países de Europa que, junto a Itália, avançaram intensamente na protecção do património cultural subaquático, concretamente, no caso português, se começou a proteger o património arqueológico náutico e subaquático desde mediados do século passado. A actual norma em vigor é a Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e o regime de protecção e posta em valor do património cultural. Nela se estabelece que os bens que integram o património arqueológico serão os que se encontram submergidos no mar territorial e na plataforma continental.

XIV

A cooperação portuguesa com outros Estados com os que mantém maiores vínculos culturais ou territoriais é constante ao longo das últimas décadas. Prova disso se encontram os casos “Ocean” e “San Pedro de Alcántara” naufragados em mar territorial português e os casos “Santíssimo Sacramento” em Brasil ou “San Antonio” em Kenia.

XV

Na legislação portuguesa há certos conteúdos que diferem do expressado na Convenção de 2001. Chama a atenção que Portugal, sendo um dos países europeus que mais património cultural subaquático

possui ao ser uma das potências colonizadora, exploradora e comercial, renúncia de maneira expressa ao reclamar.

XVI

O caso do Reino Unido é diferente ao resto de países europeus analisados, pois não aprovou nem ratificou a Convenção de 2001. O motivo primordial desta negativa é a definição que estabelece a Convenção sobre o âmbito de protecção, já que se requerem mais de 100 anos desde que se produziu o incidente que contém os restos. Isto se deve a que durante o século XX se produziram vários confrontos militares mundiais e outros conflitos menores nos que o Império Britânico estendia seu território ao longo de todo mundo. Isso implicaria que se deixassem fóra muitos dos possíveis sítios ou pecios que poderiam ser objecto da arqueologia subacuática inglesa.

XVII

A legislação inglesa, a diferença da espanhola, considera como um todo unitario tanto a nave como o ónus de um navio e permitem a exploração privada e comércio dos bens. Não em vão, isso deu lugar a diferentes litígios com outros países, pois se o objectivo é a protecção do património cultural subacuático para o preservar em benefício da humanidade, não podemos apoiar sua comercialización.

XVIII

Na mesma linha, e ao ser um país que faz parte do Common Law, Estados Unidos segue uma linha similar à do Reino Unido. Não

obstante, se diferencia em que a legislação sobre a protecção do património cultural subaquático norte-americana teve uma evolução para uma maior protecção deste património, convergiendo assim com o direito comparado internacional.

XIX

Entre os países latinoamericanos, o país que requer especial atenção é Colômbia, pois é um país que não aprovou nem ratificou a Convenção de 2001 e existiu uma falta de consciência real a respeito da importância deste tipo de património até faz não muito, o que teve como consequência que não tenha tido nenhum tipo de controle sobre estes lugares, permitindo-se a perda, saque, actividades de dragado e destruição de qualquer resto de património histórico ou cultural que se encontrasse submergido nas águas colombianas.

O facto principal que levou a Colômbia a aprovar um regulamento sobre património cultural subacuático foi o aparecimento dos restos do “Galeão São José”. A lei criada *ad hoc* para apropriar-se do galeão foi a Lei 1675 de 2013, de 30 de julho dedicada ao património cultural submergido, norma que foi amplamente criticada tanto no plano interno como internacional, pois se lhe atribui um enfoque contrário ao sustentado pela Convenção da 2001.

A postura de Espanha frente ao conflicto com a Colômbia pelo Galeão São José passa por utilizar os mesmos argumentos que se usaram para ganhar o caso “Odyssey”. Está-se ante um navio de

Estado e, segundo as normas internacionais, goza de imunidade soberana, pelo que pertence a Espanha.

XX

Brasil, devido a sua má gestão política, perdeu grande parte de seu património cultural subacuático. Conquanto é verdadeiro, a Constituição da República Federal de Brasil, ainda que não contempla o património cultural subaquático como tal, sim reconhece como bens da União as grutas naturais subterrâneas e também os lugares arqueológicos. Ainda que não assinou a Convenção de 2001, seu património cultural subacuático está protegido pela Lei nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000.

XXI

Em Espanha ocorre o mesmo que na maioria dos Estados, pois não existe uma norma expressa sobre a matéria no ordenamento jurídico espanhol. Ademais, o facto de não ter uma lei que regule a protecção do património cultural subacuático em concreto, dificulta sua protecção, pois não há nenhum texto nem norma que defina que é o património cultural subaquático.

A sua vez, o problema territorial também dificulta a protecção do património cultural subaquático, pois as competências na matéria podem ser autonómicas ou estatais. A Constituição regula nos artigos 148.1.16 e 149.1.28 as competências sobre a matéria que possuem

Comunidades Autónomas e o Estado respectivamente. Por uma parte, as primeiras podem assumir competências em matéria de património monumental de interesse da Comunidade Autónoma e, por outra parte, o Estado tem competência exclusiva sobre a defesa do património cultural, artístico e monumental espanhol contra a exportação e a expoliación.

XXII

O Tribunal Constitucional defende que existe uma competência concorrente do Estado e das Comunidades Autónomas em matéria de cultura e por tanto o Estado tem potestade para legislar nuns supostos determinados e no restante, serão as Comunidades Autónomas quem ostentem a competência segundo seus Estatutos de Autonomia.

XXIII

As Comunidades Autónomas não só terão competências executivas ou de gestão sobre o património cultural “comum”, senão também competências próprias -isto é, legislativas e executivas-, sobre o património cultural autonómico. Ademais, o Tribunal Constitucional assinala que as mesmas podem exercer competências sobre o mar territorial que bordea seu litoral desde que sejam assumidas em seus Estatutos de Autonomia.

XXIV

Ainda que os municípios possam adoptar determinados regulamentos, não quer dizer que se lhe dote da competência exclusiva e plena sobre o património cultural subaquático, senão de mera execução normativa. A competência, em base ao princípio de territorialidade recai sobre a Comunidade Autónoma. Não obstante, há que entender que os municípios seguem tendo a obrigação de colaborar na protecção do património cultural que se ache em seu território.

XXV

Não todas as leis autonómicas sobre património cultural fazem referência ao termo património cultural subaquático. Não obstante, com as reformas actuais, sim está a começar-se a incluir este tipo de património.

Chama a atenção o caso da Comunidade Autónoma de Galícia, pois modificou sua lei sobre património histórico e, pela primeira vez, inclui na nova lei um capítulo específico dividido em três secções sobre o património cultural subaquático. A nova lei galega segue sem ter em conta a jurisprudencia do Tribunal Constitucional no que se refere ao mar territorial, pois em sua redacção se estabelece que o património cultural galego que se encontre no mar territorial que bordea a Comunidade autónoma, será da Galícia. Existe numerosa jurisprudencia ao respecto, e assim se deixou patente nesta tese, na que

se assinala que o mar territorial não faz parte do território das Comunidades Autónomas e sim do Estado.

XXVI

Espanha voltou-se imersa em vários processos judiciais nos que reclamou diferente património cultural subacuático. Entre estes casos podem-se destacar “Nossa Senhora de Atocha”, a “Juno” e a “Galga”, o caso “Odyssey”, também conhecido como “Nossa Senhora das Mercedes” e o caso de “Espanha vs. San Vicente e as Granadinas”. Todos eles supõem uma estratégia por parte do Ministério da Cultura para proteger todo o património cultural subacuático e assim o proteger, pois se trata de um tipo de património de incalculável valor económico.

XXVII

Que a Lei espanhola qualifique em seu artigo quarenta e quatro bens de domínio público a “todos os objectos e restos materiais que possuam os valores que são próprios do Património Histórico Espanhol”, é algo muito importante, pois os converte em alienáveis e imprescriptíveis.

Não se duvida da importância de conservar e preservar todo o património cultural em benefício da humanidade, mas seria muito interessante que o Estado abrisse a oportunidade à actividade privada, sempre controlada pelo Estado, e que parte dos tesouros encontrados se

pudessem vender e obter assim recursos económicos para empregar em serviços públicos, como por exemplo a educação ou a previdência.



BIBLIOGRAFÍA

ABAD LICERAS, J.M.: “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales, *Revista española de derecho constitucional*, nº. 55, año 1999, pp. 133-184.

ABAD SOTO, V.: “Arqueología subacuática”, *Ingeniería Naval*, nº. 924, 2014, pp. 44-45.

AGUILAR-TABLADA MARCOS, B. M. y SÁNCHEZ DE PRADO, M. D.: “Evidencias de un taller de vidrio en la ciudad romana de Augustobriga (Talavera la Vieja, Cáceres)”, *Lucentum*. XXV (2006), pp. 177-193.

ALBERT MUÑOZ M. A. y ORTÍZ SÁNCHEZ M.: “Odyssey la protección del patrimonio arqueológico por las comunidades autónomas”, *Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 82, 2012, pp. 157-170.

ALCOCEBA GALLEGO, M.A.: “Algunas consideraciones sobre los aspectos competenciales del caso Odyssey y el régimen de protección del Patrimonio Subacuático Español”, *“La protección jurídico internacional del*

patrimonio cultural: especial referencia a España",
Fernández Liesa, C.R.; Prieto de Pedro, J. (Dirs.), Colex,
Madrid, 2009.

ALEGRE ÁVILA, J.M.: "La sentencia del Tribunal
Constitucional 122/2014, de 17 de julio y la Ley de la
Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid",
Patrimonio Cultural y Derecho, nº. 18, 2014, pp. 469-
502.

ALEGRE ÁVILA, J.M.: *Evolución y régimen jurídico del
patrimonio histórico*, tomos I y II, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1994.

ALONSO GONZÁLEZ J.M. "Arquitectura popular en el
parque natural del lago de Sanabria", *Bibliographie
d'Histoire de l'Art. Etnografía española*, 1992, 8, p. 82.

ALONSO IBÁÑEZ, M.R.: *El patrimonio Histórico. Destino
público y valor cultural*, Civitas, Madrid, 1992.

ALONSO VILLALOBOS C.: "Una nueva Convención de la
Unesco para la protección del patrimonio cultural
subacuático", *PH Boletín del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico*, nº. 38, pp. 116-129.

ALONSO VILLALOBOS C. y NAVARRO DOMÍNGUEZ M.:

“Un proyecto experimental para la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico subacuático: el Proyecto Tarifa”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 30, p. 105.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J.L.: *Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español*, Civitas, Madrid, 1989.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J.L.: *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, Espasa Calpe, Madrid, 1992.

ÁLVAREZ GONZALEZ, E. M.: “Disfuncionalidades de la protección jurídica del Patrimonio cultural subacuático en España. Espacial referencia al caso Odyssey”, *Revista de Administración Pública*, nº. 175, 2008, p. 39.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E.M.: *La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, F.: “Patrimonio histórico arquitectónico: elementos iusambientales e iusmunicipales”, *Revista de Ciencias Jurídicas*, nº. 24, 2011, pp. 13-44.

ALVES, F, J, S.: “Portugal’s Declaration During the Negotiation of the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: International Protection and Cooperation versus Possession”, *Nautical and Underwater Archaeology*, Faculty of Social and Human Sciences, Lisbon New University, nº. 5, 2010, pp. 159–162

ALZAGA VILLAAMIL, O.: *Comentario Sistemático a la Constitución Española*, Ediciones del Foro, Madrid, 1978.

AMOEDO-SOUTO C. A.: “El patrimonio cultural litoral: apuntes para la integración del patrimonio cultural en la gestión del litoral”, *Patrimonio cultural y derecho*, 2009, nº. 13, pp. 55-86.

AMOROSINO S.: *I beni culturali sunùbacquei: profili giuridici*, Roma TreE-Press, Roma, 1995.

ANGELES QUEROL, M y MARTÍNEZ DÍAZ, B.: “Paso a paso: el tratamiento de los bienes arqueológicos en las leyes de patrimonio de Valencia y Madrid”, *Complutum*, nº. 9, 1999, pp. 207-236.

ARANA SALAZAR, M. G.: *El Rescate de un Patrimonio y Cultural, el Galeón San José*, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2013.

AZNAR GÓMEZ, M.J.: “España y el patrimonio cultural subacuático: algunos problemas jurídicos”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, nº. 10, 2007, pp. 203-238.

AZNAR GÓMEZ M. J.: “1. Internalización de la protección de los bienes culturales. Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de La Mercedes y del Louisa”, *AFDUAM*, nº. 19, 2015, pp. 47-78.

AZNAR GÓMEZ, M.J.: “La definición del patrimonio cultural subacuático en la Convención UNESCO de 2001”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 67, 2008, p. 102.

AZNAR GÓMEZ M. J.: “La reclamación española sobre los galeones hundidos frente a las costas de los Estados Unidos de América: el caso de “La Galga” y “La Juno”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 52, nº. 1, 2000, pp. 247-253.

AZNAR GÓMEZ, M.J.: “Protección en el espacio iberoamericano del patrimonio subacuático y convenios de la UNESCO”, *La UNESCO y la protección internacional de la cultura en el espacio iberoamericano* Dirs. C. M. Díaz Barrado y C. R. Fernández Liesa, Thomson Reuters, Madrid, 2011.

AZNAR GÓMEZ, M.J.: *La protección Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático con especial referencia al caso de España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

AZUAR RUIZ, R.: "La taifa de Denia en el comercio del Mediterráneo del siglo XI", *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval* nº. 9, 1992/93, pp. 39-52.

BALLESTEROS PELEGRÍN, G. A.: “Bienes Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro del Pinatar, Murcia”, *Ge-conservación*, 2016, nº. 9, pp. 71-83.

BARBARÁ GÓMEZ P.: “Protejamos nuestros galeones”: hacia una política de protección del patrimonio subacuático español en el exterior”, *ARI. Real Instituto Elcano*, Área Europa 148/2011, p. 2011.

BARCELONA LLOP, J. “Patrimonio cultural submarino: dominio público, titularidad y competencias de las comunidades autónomas”, *Revista Vasca de Administración Pública*, nº. 99-100, 2014, pp. 493-512.

BARCELONA LLOP, J.: “Patrimonios especiales: patrimonio paleontológico y arqueológico; patrimonio etnográfico e industrial”, en POMED SÁNCHEZ, L. A., *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2001.

BARCELONA LLOP, J.: “El dominio público arqueológico”, *Revista de Administración Pública*, nº. 151, 2000, pp. 133-166.

BARCELONA LLOP, J.: “Notas sobre el régimen internacional de las intervenciones arqueológicas submarinas”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, nº. 6, 2002, p. 47.

BARCELONA LLOP, J.: “Recensión Bibliográfica: AZNAR GÓMEZ, M.J., La protección internacional del patrimonio cultural subacuático. Con especial referencia al caso de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 431”, *Revista de Administración Pública*, nº. 170, 2006.

BARCELOS DE FREITAS G.: “Arqueologia Subaquática: as legislações brasileira e portuguesa a luz da Convenção sobre a proteção do Patrimônio Cultural subaquático de 2001”.

(<http://www.webartigos.com/artigos/arqueologia-subaquatica-as-legislacoes-brasileira-e-portuguesa-a-luz-da-convencao-sobre-a-protecao-do-patrimonio-cultural-subaquatico-de-2001/92877>).

BARRERO RODRÍGUEZ, C.: “El derecho andaluz del patrimonio histórico en el vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía”, *Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública*, Extra 2, 2003, p. 51.

BARRERO RODRÍGUEZ, C.: “Las innovaciones de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en la ordenación urbanística de los conjuntos históricos”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 68, octubre-noviembre-diciembre, 2007, pp. 73-113.

BARRERO RODRÍGUEZ, C.: *La ordenación jurídica del patrimonio histórico*, Civitas, Madrid, 1990.

BASSOLS COMA, M.: “El patrimonio histórico español: aspectos de su régimen jurídico”, *Revista de Administración Pública*, nº. 114, 1987, pp. 93-126.

BELANDO GARÍN B.: “El alcance de las competencias autonómicas sobre patrimonio arqueológico subacuático (Especial atención a la Comunidad Valenciana)”, *Revista de las Cortes Generales*, nº. 68, 2006, pp. 151-178.

BENDECK OLIVELLA, J.: *El Galeón Perdido. ¿Dónde está el San José?*, Villegas Editores, Bogotá, Colombia, 2003.

BENÍTEZ CABRERA. V.: “El buceo como recurso turístico de protección del Patrimonio Cultural Sumergido”, *Marine Scientist and Historian PO Box 2069*, pp. 4-10.

BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L.: “La protección del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha. Reflexiones sobre la Ley 4/2013 de patrimonio cultural”, *Revista PH*, 84, 2013, pp. 22-25.

BENITO DOMÍNGUEZ A. M.: “La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente”, *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, 1, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia San Sebastián, 1996.

BENITO DOMINGUEZ A. M.: “La arqueología subacuática en Guipuzkoa: panorama actual” *Arqueología Subacuática. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico* 31, pp. 151-158.

BLASCO HEDO E. “Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, nº. 68 (Mayo), 2017, pp. 41-41.

BOU FRANCH, V.: “La Convención de la UNESCO sobre la protección cultural subacuática”, *La protección jurídico internacional del patrimonio cultural. Especial referencia a España*, dirigido por FERNÁNDEZ LIESA C. R y PRIETO DE PEDRO J., Colex, Madrid, 2009.

CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, A.: “Los informes preceptivos en su tramitación y la planificación territorial y urbanística andaluza: la espiral de complejidad”, *Práctica Urbanística*, nº. 140, Sección Estudios, pp. 11-13.

CABRERA TEJADA, C.: "Nautical evidences from Byzantium in Seville, Spain", *Skyllis*, 11.1, 2011, pp. 25-33.

CAMARDA, G.: “La normativa nazionale ed internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Considerazioni introduttive ad un recente convegno”, *Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente*, 2003/1. (http://www.giureta.unipa.it/archeologia_Camarda.htm)

G. CAMARDA, “Legislazioni nazionali , diritto comunitario e problematiche di «adattamento» in tema di protezione del patrimonio culturale sommerso”, *Nuove autonomie*, 2001.

CARDUCCI, G.: “The expanding protection of the underwater cultural heritage: The new UNESCO Convention versus existing international law”, *The protection of the Underwater Cultural Heritage*, Giuffré, Milán, 2002.

CARDUCCI, G.: “Beni culturali. Diritto internazionale pubblico e privato”, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. 3, 1999.

CARRANCHO HERRERO, M^a. T.: *La circulación de bienes culturales muebles*, Dykinson, 2001.

CARRERA HERNÁNDEZ, F. J.: *Protección internacional del patrimonio cultural submarino*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005.

CARRERA RUIZ J. C.: “La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: Del patrimonio arqueológico”, *Arse: Boletín anual del Centro Arqueológico Saguntino*, n°. 36, 2002, pp. 177-189.

CASAR FURIÓ. M. E.: “La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano”. *Actualidad Administrativa*, n°. 18, 2008, pp. 2090-2099.

CASAR FURIÓ. M. E.: “Las diversas categorías de bienes inmuebles de interés cultural, con especial referencia a la nueva ley de patrimonio cultural valenciano de 2007 (La Ley 864/2007)”, *Práctica Urbanística*, nº. 73, 2008, pp. 23-34.

CASAR FURIÓ M. E. y BROSETA PALANCA. M. T.: “Nuevas consideraciones del bien inmueble de relevancia local valenciano”, *Práctica Urbanística*, nº. 110, Sección Perspectivas sectoriales, 2011, p.23.

CASAR FURIO M. E. y TABERNER PASTOR. F.: “El concepto de entorno y su delimitación en los BIC valencianos”, *Práctica Urbanística*, nº. 99, Sección Perspectivas sectoriales, 2010, p. 51.

CASAR FURIO M. E. y BROSETA PALANCA. M. T.: “Regulación Valenciana de los Catálogos Municipales”, *Actualidad Administrativa*, nº. 1, Sección A Fondo, 2013.

CASTILLA PENALVA, V.: “El Patrimonio histórico, incidencia en la disciplina urbanística y en el deber de conservación de las edificaciones. Estudio de la normativa andaluza y normativa básica estatal”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 3, Sección

Colaboraciones, Quincena del 15 al 27 Feb. 2011, Ref. 303/2011, p. 303.

CASTILLO BELINCHÓN, R.: “El patrimonio cultural subacuático”, *ARQVA, Museo Nacional de Arqueología Subacuática: catálogo*, Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica, Madrid, 2008.

CASTILLO RUIZ, J.: “La “Bictitis” o la alergia social (¿O es sólo política?) a la protección de los bienes culturales de carácter territorial. Reflexiones y propuestas a partir del caso de la Vega de Granada”, *Proceedings of the II Internacional Conference on Best Practices in World Heritage: People and Communities*, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2015, pp. 407-438.

CASTRO F.V.: “Caçadores de tesouros: proposta de uma taxomia”, *Revista Eletrônica História e-História*, 2004, pp.51-53.

CASTRO LÓPEZ, M.P.: “Reseña Bibliográfica: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E.M., *La protección jurídica del Patrimonio Cultural Subacuático en España*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012”. *Revista sobre Patrimonio*

Cultural: Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial, n°. 2, 2013, pp. 189 -197.

CERULLI IRELLI, V.: “Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica”, *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 135-177.

CIARLO. N.C.: *La arqueología subacuática en Argentina. Reseña histórica de los antecedentes, desarrollo de la especialidad y estado actual de las investigaciones*, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Argentina, pp. 43-69.

CIARLO N.C.: “Una revisión de la arqueología subacuática en Argentina”, *La Zaranda de Ideas: Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología*, n°. 5, 2009, p. 23.

CONTE DE LOS RIOS, A.: “El rescate del San José y la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014)”, *Revista General de Marina*, n°. 270, 2016, pp. 218-222.

DA SILVA TOMÉ MARQUES. E. J.: “Serviço Social Azul: contributo para um desenvolvimento comunitario ecológico de base local. O trabalho artístico social e ambiental de Jason de Caires Taylor”, *Espacios Transnacionales* 3/6, 2016, pp. 132-140.

DE MIGUEL RIERA. L.: “Estrategias actuales en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. El papel del Ministerio de Cultura”, *Patrimonio Cultural de España. El Patrimonio Mundial en España: una visión crítica*, n°. 2, 2009, p. 133.

DELGADILLO-GARZÓN. O y ZAPATA-RAMÍREZ. P.: “Contexto natural del patrimonio cultural subacuático en la bahía de Cartagena: perspectivas de estudios interdisciplinarios y potencial de utilización”, *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, n°. 7, 2007, pp. 60-75.

DÍAZ DEL POZO D., TORIJA LÓPEZ A. y ZARCO MARTINEZ E.: “6. Una nueva ley de patrimonio histórico para la CAM. Reflexiones en torno a un camino accidentado”, *Revista PH*, n°. 85, 2014, pp. 6-11.

DIEZ DE VELASCO, M.: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 2013, 18ª edición.

DROMGOOLE, S. *The Protection of The Underwater Cultural Heritage. National Perspectives in light of the Unesco Convention 2001*, Publications on Ocean Development, Brill Academic, Leiden, 2007.

DUART CÍSCAR, V y BLANCO VEGA, J. L.: “La protección de los bienes del patrimonio cultural a través del urbanismo. Especial referencia al Régimen Jurídico en la Comunidad Valenciana”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 11, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 jun. 2013, p. 1117.

EUGÊNIA AMARANTE C. y BAVA DE CAMARGO P. F.: “Arqueologia Subaquática Brasileira: por que o país aproveita mal sua capacidade científica? ”, *Cadernos do Lepaarq*, Vol. XIV, nº. 27, 2017, pp. 252-279.

FERNANDEZ ORTEA, J.: “Gestion privada del patrimonio cultural: los casos del monasterio de Monsalud y la ciudad romana de Ercavica”, *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, Vol.15, nº. 1, 2017, pp. 121-137.

FERNÁNDEZ-MIRANDA M.: “Estado actual de la Arqueología submarina en España: El Pecio de la "Illa del Sec" en la bahía de Palma (Mallorca)”, *Trabajos de Prehistoria*, Madrid, Vol. 28, 1971, p.273.

FLORES MAMANI J. y PORTUGAL POMA R. L.: “Cronología: Archivos, Bibliotecas y Museos diciembre 2016 - enero y febrero 2016”, *Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea*

Legislativa Plurinacional, Vol. 11, n°. 48, 2017, pp. 108-119.

FORREST, C.: “A New International Regime for the Protection of Underwater Cultural Heritage”, *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 51, 2002.

FUENTES CAMACHO, V.: *El tráfico ilícito internacional de bienes culturales*, Beramar, Madrid, 1993.

GARCÍA, C.: *El mapa arqueológico e histórico de la bahía de Cartagena: Una propuesta metodológica para la gestión del patrimonio cultural subacuático. Monografía de pregrado para antropología*, Universidad Nacional, Bogotá, 2003.

GARCÍA CALDERON J. M.: “Régimen jurídico básico de la arqueología”, *La Defensa Penal del Patrimonio Arqueológico*, Madrid, Dykinson, 2016.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural”, *Revista Española de Administración*, n°. 39, 1983, pp. 575-594.

GARCÍA RAMIREZ. S.: “El último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012 pp. 35-52.

GARCÍA RUBIO. F.: “El papel de los Ayuntamientos en la conservación del patrimonio cultural. Estado de la cuestión”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, nº. 12. Quincena de 14 julio de 2004, p. 2069.

GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA G.: “Potestad sancionadora y patrimonio cultural”, en POMED SÁNCHEZ L. A.: *Estudio sistemático de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés: Ley 3/1999, de 10 de marzo*, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2001.

GÓMEZ BELLARD C.: “El fondeadero de Es Caná (Santa Eulalia del Río, Ibiza)”, *Saguntum*, nº. 17, 1982, pp. 91-112.

GOMEZ DE VEGA, B.: “Pasado y presente de la Arqueología Subacuática en Cantabria”, *Arqueología Subacuática. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº 33, 2000, pp. 173-176.

GOÑI ETCHEVERS. J.L. y FUENTES CAMACHO V.: “Otro punto de vista sobre el caso Odyssey”, *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, nº. 28, 2014, pp. 1-16.

GOOD J. A. y DE CABO. E.: “España gana el caso Nuestra Señora de las Mercedes: un éxito jurídico, histórico y cultural”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012. pp. 25-35.

HEINRICH HERMANNS M.: “Vestigios altomedievales procedentes de las aguas de Ibiza/Eivissa (Islas Baleares)”, *Archivo Español de Arqueología*, Vol. 86 (2013), pp. 251-260.

HERRANZ LOCÁN. A.: “La construcción de pantanos y su impacto sobre la economía y población del pirineo aragonés”, en PINILLA V. J. NAVARRO y. ACÍN FANLO J. L, *Pueblos abandonados: ¿un mundo perdido?*, Astral, Zaragoza, 1995.

INFANTINI DA ROSA, L.: *Arqueologia e património subaquático: as relações entre ciência, Estado e sociedade em Portugal*, Dissertação para a Obtenção do

Grau de Mestre en Aqueologia, Universidades do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e sociais.

JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Régimen jurídico de los espacios marinos (I): aguas interiores, mar territorial y zona contigua”, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Dir. M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 2013.

JIMÉNEZ SALVADOR J. L.: “El patrimonio arqueológico de época romana”. *Atlas de los recursos territoriales valencianos*, coord. HERMOSILA J. PLA y LLOP I BAYO F. 2015, pp. 236-237.

JUSTE RUIZ, J.: “La protección internacional de los hallazgos marítimos de interés histórico y cultural”, *Anuario de Derecho Marítimo*, Vol. XX, 2003, pp. 63-99.

LAFUENTE BATANERO, L.: “Líneas de actuación para una eficaz protección del patrimonio arqueológico subacuático”, *Monte Buciero*, nº. 9, 2003, pp. 63-82.

LEÑERO BOHÓRQUEZ, M. R.: “El patrimonio cultural subacuático de la gestión en espacios marítimos bajo jurisdicción española”, *Estudios jurídicos sobre el*

litoral, NUÑEZ LOZANO M, D, C. (dir), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

LÓPEZ DOMENCH. R.: “Sobre reyes, reyezuelos y caudillos militares en la protohistoria hispana”, *Studia Historica. Historia Antigua*, 1986-1987, Vol. 4-5, pp. 19-23.

LÓPEZ RAMÓN, F.: *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017.

LOZANO BARTOLOZZI M. M. y MÉNDEZ HERNÁN V.: “Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo”, *Quintana*, nº. 12, 2014, pp. 404-407.

LUNA ERREGUERENA, P.: “A importância do anexo da convenção do patrimônio cultural subaquático”, *Patrimônio Cultural e Ambiental. Questões legais e conceituais*, Annablume, São Paulo, 2009.

LLOP I BAYO F.: “Patrimonio arqueológico y paleontológico en la Comunidad Valenciana”, *Actas de las Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicantino*. 2002, pp. 27-40.

MAGÁN PERALES, J.M.A.: “El patrimonio arqueológico subacuático: situación legislativa española e internacional”, *Patrimonio cultural y Derecho*, 6/2002, pp. 73-96.

MALDONADO ESCRIBANO, J.: “Patrimonio vernáculo en su paisaje: Campo Arañuelo, en la cuenca del Tajo”, en VV.AA., *Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería*, Editora Regional de Extremadura, Extremadura, 2012, pp. 337-353.

MANSI, A.: *La tutela dei beni culturali*, Padova, Cedam, 1998.

MARCHESINI, M.: “Strumenti per la protezione e la valorizzazione turística del patrimonio culturale marino nel mediterraneo”, *Trasporti-diritto, economia, politica*, nº. 84, 2001, pp. 215-230

MARCOS ALONSO, C.: “Crónica de la jornada de clausura de la exposición «El último viaje de la fragata Mercedes»: Chronicle of the closing day of the exhibition «The last trip of the frigate Mercedes»”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, nº. 34, 2016, pp. 475-492.

MARCUELLO CALVÍN, J. R.: *Fayón: la historia sumergida*, Cremallo, Zaragoza, 2005.

MARINI, F. S.: “Profili costituzionali della tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano”, *Manuale dei beni culturali*, Padova, Cedam, 2000, pp. 43-90.

MÁRQUEZ CARMONA L.: “Fuentes de información existentes en Internet sobre el patrimonio cultural marítimo de Portugal”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 38, 2002, pp. 105-116.

MARTÍN BUENO, M.: “Patrimonio Cultural Sumergido: Investigar y conservar para el futuro”, *Monte Buciero*, nº. 9, 2003, pp. 21-62.

MARTÍN LÓPEZ A.: “Defensa de las naves de Estado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Las definiciones históricas de buque de guerra”, *Saldvie, Estudios de prehistoria y arqueología*, nº. 6, 2006, pp. 271-287.

MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A. I.: “La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2007) y el Planteamiento Urbanístico”, *E-RPH. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico*, nº. 3 (2008), pp. 3-28.

MARTINEZ RENGEL, N.: *Arqueología y gestión del turismo en las Islas Baleares*. Tesis Universidad Nacional de

Educación a Distancia (España), Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Prehistoria y Arqueología. 2016.

MARTINS GUSMÃO D.: *Patrimônio cultural subaquático: preservação por meio da conscientização*, IV Seminario de Preservação de Patrimônio Arqueológico. http://site.mast.br/hotsite_anais_ivsppa/pdf/01/05%20PCS_Daniel%20Gusmao.pdf

MASCARÓ PASARIUS J.: “Noticia de algunas piezas arqueológicas rescatadas del fondo del mar en las Islas Baleares”, *Archivo Español de Arqueología*, Madrid, Vol. 41, Iss. 117, 1968, p.199.

MATEUS-RUGELES. A. y RODRÍGUEZ VALENZUELA. I.: “Pecios españoles en aguas colombianas entre el patrimonio cultural subacuático y la inmunidad jurisdiccional de los estados”, *Revista de Derecho Valdivia*, Vol. 29, nº. 29, 2016.

MENÉNDEZ GARCÍA, P. y ARJONES GIRÁLDEZ, D.: “La protección del patrimonio cultural subacuático en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras”, *El camino de Santiago y otros itinerarios. Cultura, historia, patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

MENÉNDEZ REXACH, A.: “El dominio público como institución jurídica: configuración histórica y significado actual en el derecho público español”, *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, nº. 10, 2004, pp. 209-226.

MENÉNDEZ REXACH, A.: “Principios generales de utilización del dominio público marítimo terrestre: uso común, usos especiales (con previa autorización; con previa concesión); adscripción; reserva”, *El derecho de costas en España*, coord. por SÁNCHEZ GOYANES E., La Ley, Madrid, 2010.

MEREDEROS MARTÍN A. y ESCRIBANO COBO G.: “Una etapa en la ruta Mogador-Canarias. Cerámica romana en Lanzarote y su relación con los hallazgos submarinos”, *Spal*, nº. 6, pp. 221-242.

MILAGROSA ROS-SALA M.: “Nuevos datos en torno a la presencia fenicia en la bahía de Mazarrón (Sureste ibérico)”, en PRADOS MARTÍNEZ F. y. SALA SELLÉS. F.: *El Oriente de Occidente: Fenicios y púnicos en el área ibérica*, Universidad de Alicante, Alicante, 2017, pp. 79-98.

MIRANDA GONÇALVES R.: “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001”, *Derecho Público Iberoamericano*, nº. 9, octubre de 2016.

MORALA RODRÍGUEZ J. R.: “Los ríos y los paisajes del Duero en la toponimia”, *Congreso homenaje al Douro/Duero y sus ríos: memoria, cultura y porvenir*, Escuela Universitaria de Magisterio, Universidad de Salamanca, 2006, <http://www.unizar.es/fnca/duero/docu/p306.pdf>

MORENO BENÍTEZ “Patrimonio cultural. Puesta en valor y uso. Una reflexión”, *Vector Plus*, Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Universitaria, 2002, nº. 20, pp. 41-50.

MOURE ROMANILLO A.: “Prehistoria de Cantabria. Historia de las investigaciones y problemática actual”, *Prehistoria de Cantabria*, Universidad de Santander, Santander, 1985.

MOURE ROMANILLO A.: *Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro*, cátedra Cantabria, Cantabria, 2003.

MUNAR LLABRÉS, S y SASTRE VANRELL, M. A.: “Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera. La creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG)”, *Mayurqa*, 2009-2010, nº 33, pp. 263-281.

MUÑOZ LLINÁS J. I.: “La nueva Ley de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid”, *Apuntes de Arqueología en el Boletín del CDL*, nº. XXVIII, febrero de 2014, pp. 20-24.

MUÑOZ MACHADO, S.: *Derecho Público de las Comunidades Autónomas*, Vol. 1, 2ª, Iustel, Madrid, 2007.

NAVARRO MEDEROS J. F.: “Arqueología de las islas Canarias”, *Espacio, tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología* (10), 1997, pp. 447-478.

NIETO PIETRO X.: “Arqueólogos y cazadores de tesoros subacuáticos”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012. pp. 497-507.

NIETO PRIETO X.: “El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)”, *Monte Buciero* nº. 9, pp. 206-209.

NIETO PRIETO, X.: “La Convención 2001 de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural subacuático y el supuesto hallazgo en Haití de la nao Santa María de Cristóbal Colón”, *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 88, pp. 24-25.

NIETO PRIETO X. y PALOMO PÉREZ. A.: “Memòria dels treballs arqueològics subaquàtics desenvolupats a Illa Pedrosa (L’Estartit-Torroella de Montgri/ Baix Llobregat)”, *CASC, Museu d’Arqueologia de Catalunya*, Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Biblioteca del Patrimoni Cultural, pp. 1-7.

NIETO PRIETO X. y RAURICH I SANTALÓ. X.: “La carta arqueològica subaquàtica de Catalunya”, *Tribuna d'arqueologia*, n°. 1995-1996, 1997, pp. 21-38.

NIETO PRIETO X. y VIVAR LOMBARTE. G.: “Memòria dels treballs d'excavació arqueològica subaquàtica al jaciment del port Romà d'Empúries”, *CASC. Museu d'Arqueologia de Catalunya*, 2004, pp. 2-16.

NOVAK, F.: “La protección del patrimonio cultural subacuático en la Convención de la UNESCO de 2001”, *Organization of American States*, p. 398.
<http://www.oas.org/dil/esp/13%20-%20novak.391-424.pdf>.

NUNES C. H. y ROEDER. F.: “Tourism and Algarve's Underwater Heritage Valorisation. A Case Study”, *Journal of Maritime Research*, Vol XI, n°. 1, 2014, pp. 35-44.

OLMO CANALES S., MARRERO QUEVEDO C. Y BARROSO CRUZ V.: “El Inventario del Patrimonio Arqueológico Subacuático del Litoral Norte de Gran Canaria”, *Vegueta*, n°. 11, 2009-2011, *Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, Universidad de Las Palmas, pp. 23-30.

ORTÍZ SÁNCHEZ M.: “Las zonas patrimoniales: Una nueva tipología de protección en la Ley 14/2017, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 79, pp. 91-134.

ORTÍZ SÁNCHEZ. M. y ALBERT MUÑOZ. M. A.: “La protección del patrimonio arqueológico subacuático, competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Caso Odyssey”, *Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública*, nº. 79, Enero-abril, pp. 157-170.

PAPANICOLOPULI. I.: “La zona contigua archeologica e la sua delimitazione”, *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, Giuffrè editore, 2004.

PAPÍ RODES C.: “La Sociedad Arqueológica Valenciana: reglamentos socios y actividades”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, Tomo 20, nº. 1-2, 2002, pp.265-292.

PASTOR RIDRUEJO, J. A.: *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 15ª edición

PATEMAN. M.: “Fundación ARGOS, Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia”, en LACAYO PARAJÓN F. J.: *Patrimonio Cultural Subacuático. América Latina y el Caribe. Underwater Cultural Heritage*, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe.

PÉREZ GALAN B.: “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre patrimonio cultural en España: una lectura antropológica sobre las figuras legales de protección”, *Revista de Antropología Experimental*, nº. 11, 2011, pp. 11-30.

PÉREZ LUÑO, A.: *Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978*, en VV.AA, Edersa, Madrid, 1984.

PIMENTAL FONSECA. C.: “A Terra Sigillata do Fundeadouro de Tróia” *Revista portuguesa de arqueologia*, Vol. 7, nº. 1, 2004, pp. 421-450.

PORTELA VÁZQUEZ E.: “La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Subacuático.

Principios generales”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, (octubre 2011), Vol. 3, nº. 2, pp. 317-337.

PREDIERI, A. y GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (Dir.): *La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático*, Civitas, Madrid, 1980.

PRIETO DE PEDRO, J.: “Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la Constitución”, *Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría*, tomo II, Civitas, Madrid, 1991.

PRIETO DE PEDRO, J.: “Los bienes arqueológicos subacuáticos como bienes culturales”, *El último viaje de la Fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un tesoro cultural recuperado*, Museo Naval. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2012. pp. 17-25.

PUCHE RIART O.: “Algunos datos para la historia de la minería en la provincia de Soria”, *Revista de Soria*, nº. 90, pp. 3-26.

- PUEYO LOSA, J. A.: “La libertad de navegación por la zona económica exclusiva”, *Revista Española de Derecho Internacional*, nº. 2-3, vol. XXX, 1977, pp. 265-288.
- QUEROL FERNÁNDEZ. M. A.: “La gestión del patrimonio arqueológico: un futuro abierto para Navarra”, *Cuadernos de Arqueología*, nº. 8, 2000, pp. 207-236.
- RAMBELLI G, y MARTINS GUSMÃO D.: “Estratégias para produção de um inventario nacional do patrimonio cultural subaquático”, *Revista Navigator*, nº. 20, 2014.
- RAMBELLI, G, y A FUNARI P. P.: “Patrimonio cultural subacuático en Brasil: pensamientos varios”, *Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueológica desde el Caribe*, año 4, nº. 7, Barranquilla.
- RAMBELLI, G.: “A arqueologia subaquática no Brasil”, *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Anais da 1 Semana de Arqueologia, Suplemento 8*, 2009.
- RAMIS CIRER, C. I.: “El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación”, *Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad: comunicaciones: XXII Congreso de Geógrafos Españoles*, Universidad de Alicante, 2011 /

Vicente Gozávez Pérez, Juan Antonio Marco Molina (eds.), Madrid, Asociación de Geógrafos Españoles, 2011, pp. 567-580.

RAU, M.: “The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage and the International Law of the Sea”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 6, Max Planck Foundation, Netherlands, 2002.

RAURICH I SANTALÓ X.: “El jaciment de Cala Cativa: notes sobre el primer terball d’arqueologia subaquàtica realitzat a Catalunya”, *Historia, Annals de l’ IEE*, nº. 27, Figueres, 1994, pp. 263-273.

ROBLES REYES. J. R.: “Capítulo 10. Ecos del mar, la religión y el poder en las costas bizantinas de Almería”, en VIZCAINO SÁNCHEZ J., RODRÍGUEZ LÓPEZ R. y ROBLES REYES. J. R.: *Navegando en un mar sin orillas: El legado de Roma y Bizancio en el sureste de Hispania*, Universidad de Almería, 2015.

RODRIGO DE LARRUCEA. J.: “La protección jurídica del patrimonio subacuático: de la Convención de la Unesco 2001 a la reforma del Derecho Marítimo Español”, *Diario La Ley*, nº. 6964, *Sección Tribuna*, 10 de junio de 2008, Año XXIX, Editorial LA LEY.

RODRÍGUEZ AGUILA I. J.: “¿Especies náufragas: patrimonio cultural y factor de desarrollo económico y social?”, *Memorias: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano*, nº. 12, 2010, pp. 223-245.

RODRIGUEZ ASECIO. J. A.: “Prospecciones de arqueología subacuática en Asturias”, *Excavaciones arqueológicas en Asturias: 1991-1994*, Gobierno del Principado de Asturias, 1995, pp. 153-161.

ROLDÁN VERGARAECHEA I.: “Arqueología de las Guerras Carlistas”, *DAMA. Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico*, 2016, 1, pp.109-123.

RUBIO-ARDANAZ. J.A.: “El concepto de patrimonio marítimo y de cultura: gestión museística e iconos públicos en el País Vasco”, *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, nº. 6, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2009, pp. 57-82.

RUBIO DE MIGUEL, I.: “Otros aspectos de la arqueología subacuática: la arqueología de los lagos”, *Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología*, nº. 25, 1988, pp. 45-55.

RUIZ MANTECA, R.: *El régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático. Aspectos de derecho interno y de derecho internacional, público y privado*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.

RUIZ MANTECA. R.: “La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático frente al expolio”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, nº. 25, 2015.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ. M. A.: “Marco teórico-referencial para la protección, gestión y ordenación del paisaje. El caso de la Región de Murcia”, *Espacio, tiempo y forma*, nº. 10, 2017.

SANTAMARIA ARINAS, R. J.: “Derecho y políticas ambientales en la Rioja”. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, Crónica, Vol, nº. 2, 2014, pp. 1-13

SANTOS VELASCO J. A.: “Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico”, *Revista Iberia, Revista de la Antigüedad*, Vol. 5, 2002.

SARMIENTO DUEÑAS, L.: “Tesoros Sumergidos”, *Ars Medica. Revista de Humanidades*, 2007, Vol. 6, nº. 2, pp. 185-198.

SILVEIRA MARTINS, A. A.: *Fontes para o Estudo da Arqueologia Naval em Portugal. Do século XII a meados do século XVI*, Academia Marinha. 1996, Lisboa.

SIRVENT BERNABEU, C., “Luces y sombras de la nueva Ley del Patrimonio cultural valenciano”, *Recerques del Museu d’Alcoi*, nº. 9, 2000, pp. 11-13.

STRATI, A.: *The protection of the Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objecting of the Contemporary Law of the Sea*, Kluwer Law International, La Haya, 1995.

TERREROS ANDRÉU C.: “El expolio de Patrimonio Cultural: problemas de conceptualización jurídica”, *E-rph*, nº. 14, junio 2014, pp.60-97.

UREÑA ÁLVAREZ, R.: “La protección del patrimonio cultural en tiempo de guerra y de paz”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, 2004, nº. 14, pp. 245-260.

VALIENTE CÁNOVAS, S.: “Fragmento de cuenco campaniforme aparecido en Buendía (Cuenca)”. pp.113-119.

(<http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1016>)

VAQUER CABALLERÍA, M.: *Estado y cultura: La función cultural de los poderes públicos en la Constitución Española*, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1998.

VARMER O.: “United States of America”, *The protection of the underwater cultural heritage*, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, 2006.

VÉLEZ OCHOA, R.: *Las especies náufragas*, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2003.

VENTO MIR E.: “El patrimonio arqueológico valenciano: Programas de difusión y educación de la Dirección General de Patrimonio Artístico”, *Actas: XXV Congreso Nacional de Arqueología*, Valencia, 1999, pp. 44-48.

VERDUGO SANTOS, J.: “La formación del concepto de tutela del Patrimonio Histórico en la Antigüedad. Monumento y objeto arqueológico en el Derecho Romano”, *Revista General de Derecho Romano*, nº. 25. diciembre de 2015, pp. 45-53.

VICEDO I JOVER X.: “Las maquetas navales. Herramientas para el estudio y la interpretación de los naufragios arqueológicos. El Modelismo Naval al servicio de la Ciencia”, <https://bit.ly/2OF3uq6>. Consultado el 18 de noviembre de 2017

VV.AA. “Arqueología en aguas interiores. El caso del Lago de Banyoles y el yacimiento neolítico de La Draga (Girona, Catalunya)”, *Actas de las Jornadas de ARQUA 2011*, <https://bit.ly/2vzLiFV> pp. 1-4 consultado el 18 de agosto de 2017).

VV.AA. “Capítulo 5. El Plan Estratégico de desarrollo turístico integrado local (PEDTI) de Elche de la Sierra y Molinicos (Albacete). Diagnostico socioterritorial y posibilidades turísticas sostenibles”. pp.99-123. <https://bit.ly/2nhAOCx>. Consultado el 28 de noviembre de 2017).

VV.AA. “El Código Ético de la Arqueología y el Patrimonio en Castilla-La Mancha”, *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, nº. 51, 2012, pp. 11-28.

VV.AA.: “El conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático desde la perspectiva de las fuentes

documentales”, *Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, nº. 73, febrero 2010, p. 115.

VV.AA. “El Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena (España)”, *Akros: Revista de Patrimonio*, nº. 7, 2008, pp. 5-8.

VV.AA.: “El naufragio del Hoorn -1615- Prospecciones costeras y subacuáticas en la ría Deseado”, en MORELIO F, MARINIC M., PRIETO A. y BAHAMONDE G. *Arqueología de Fuego-Patagonia: levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos*, CEQUA, Punta Arenas, Chile, Universidad Nacional de Mar del Plata.

VV.AA.: “El patrimonio arqueológico subacuático”. *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, año nº. 19, nº. 80, 2011, pp. 40-45.

VV.AA: “El yacimiento submarino de Favartix (Menorca, España”, *VI Congreso internacional de arqueología submarina (Cartagena 1982)*, Madrid, pp.175-185.

VV.AA. “Estado actual de la legislación para la Geoconservación en España”, *Trabajos de Geología*.

Revistas de la Universidad de Oviedo, nº. 26, pp. 188-203.

VV.AA.: *Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip*, Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, Girona, 1998, p. 33.

VV.AA. “Integración de técnicas ópticas de reconstrucción 3D para mejorar la planificación de agarres en tareas de manipulación arqueológica subacuática”, *Actas de las XXXVI Jornadas de Automática*, 2 - 4 de septiembre de 2015, Bilbao, pp.823-830.

VV.AA. “Investigación y gestión del Patrimonio Cultural Subacuático en las Islas Baleares: la Carta Arqueológica Subacuática de Formentera y el pecio romano de Porto Cristo”, *RIPARIA* nº. 2, 2016, pp. 21-53.

VV.AA.: “La reintegración en materiales paleontológicos. Criterios utilizados. Justificación y propuestas de intervención en el Museo Geominero (IGME, Madrid)”,

(https://ge-iic.com/files/IVcongreso/20_eleuterio_baeza3.pdf consultado el 15 de noviembre de 2017).

VV.AA.: “Le patrimoine maritime culturel: de l’inventaire à l’action (exemple des espaces côtiers bretons)”, *Le littoral: subir, dire, agir*, Jan 2008, UNIV-BREST Lille, France. Thème 2: Identités et Représentations.

VV.AA. *Recuperación de construcciones tradicionales e interpretación del patrimonio en el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores* Víctor Casas, José Luis Gutiérrez y Jesús Palacios, Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006.

YAÑEZ VEGA A.: “Claroscuros normativos. Reflexiones a propósito de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, nº. 17, 2013, pp. 89-110.